Los nuevos rostros de la derecha en América Latina

Desafíos conceptuales y estudios de caso



Andrea Bolcatto · Gastón Souroujon
compiladores

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL



Los nuevos rostros de la derecha en América Latina

Desafíos conceptuales y estudios de caso

Andrea Bolcatto • Gastón Souroujon
(Compiladores)

Mariana Berdondini • Andrea Bolcatto • Esteban Iglesias • Esteban Kaipl • Bruno Könder Comparato • Cecilia Lesgart • Sacha Lione • Juan Bautista Lucca • Marina Martínez • Sergio Daniel Morresi • Alejandro Pelfini • Gastón Souroujon • Christiane Vieira Laidler



COLECCIÓN
CIENCIA Y TECNOLOGÍA



. . . .
Bolcatto Andrea; Souroujon Gastón
Los nuevos rostros de la derecha
en América Latina: desafíos conceptuales
y estudios de caso / Andrea Bolcatto...
[et al.] ; compilado por Andrea Bolcatto;
Gastón Souroujon. - 1a ed. - Santa Fe:
Ediciones UNL, 2020.
Libro digital, PDF - (Ciencia y tecnología)

Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-749-269-9

1. Política. 2. Política Latinoamericana.
3. Partidos Políticos. I. Bolcatto, Andrea, comp.
II. Souroujon, Gastón, comp.
CDD 320.0980
. . . .

Directora Ediciones UNL
Ivana Tosti
Coordinación editorial
María Alejandra Sedrán
Coordinación diseño
Alina Hill
Diagramación de interior
Gustavo Caraballo
Diagramación de Tapa
Gustavo Caraballo

—
editorial@unl.edu.ar
www.unl.edu.ar/editorial



Índice

Prólogo

Hugo Quiroga[1]

Nos encontramos frente a un libro pleno de riqueza que refiere a los problemas centrales que la ciencia política, la teoría política, en particular, y las ciencias sociales, en general, buscan afrontar, en un tiempo cargado de incertidumbre, en una era de volatilidad que genera procesos disruptivos en las formas democráticas y en los sistemas políticos. Con el siglo XXI ha nacido una época con señales inquietantes, que resulta a veces difícil de comprender y explicar. Este libro se empeña por pensar la especificidad de la experiencia contemporánea, analizando la política, la acción, las pasiones, los desafíos feministas, el riesgo, las fuerzas armadas contradiciendo al Estado de derecho, las tradiciones de pensamiento. Ante la complejidad de los problemas de la sociedad contemporánea, lo mejor que se puede hacer —y el libro tiene ese designio— es compartir con otros los desafíos de la renovación teórico–política y descubrir lo que encierra las nuevas realidades. Quizá sea el signo de un nuevo despertar.

Esta obra es el resultado de la iniciativa de sus compiladores, Andrea Bolcatto y Gastón Souroujon, a partir de un trabajo iniciado en 2018 y que ha incorporado la producción de docentes–investigadores de Latinoamérica junto a la de profesores de la FHUC–UNL, y de la UNR. Muchas de las preguntas y desarrollos del texto se inscriben en el CAI+D de la UNL titulado «Problemas y desafíos contemporáneos para la política». La calidad de los estudios revela la valía y capacidad de cada uno de los autores. Dejo librado al lector el juicio sobre cada uno de los artículos; cada cual sacará sus conclusiones, yo expresaré mi pensamiento sobre la temática de manera global.

El eje central del libro es el surgimiento de los nuevos rostros de la derecha en América Latina. Aludir a una nueva derecha es remitirse a los rasgos de una nueva clase dominante, para decirlo en términos más antiguos, o a una nueva élite política. Los autores afrontan el desafío de examinar este fenómeno desde sus propias perspectivas, ya sean de naturaleza teórico conceptual, a través del análisis comparativo, o de las condiciones sociales, políticas y económicas que le dan origen. Desde registros diferentes, que muestra matices, y con un claro pluralismo, los autores mantienen una línea comunicante que refleja coherencia y resalta que el libro ha sido pensado como una obra sistemática. No se trata, pues, de una mera yuxtaposición de artículos, sino de un encuentro congruente entre la producción científica y la acción política.

1 Hugo Quiroga. Doctor en Filosofía. UNL–CIUNR.

En línea con lo señalado, me propongo ingresar, brevemente, en el mundo teórico y en el razonamiento sobre la acción política, acometido por los autores, y desde allí discutir ciertas cuestiones generales. Todo ello enmarcado en una cascada de acontecimientos políticos de los años transcurridos en el presente siglo.

En un contexto de acentuadas mutaciones, la democracia liberal has sido interrogada, puesta en cuestión. El ascenso del populismo, los avances del radicalismo de derecha, el resurgimiento del nacionalismo extremo, la xenofobia, la islamofobia, aparecen justamente en los déficits de la democracia liberal. A medida que ésta decepciona, crece el antiliberalismo. Además, el riesgo es un componente de las democracias representativas, que abre paso a las derechas radicales.

Este *cambio de* época nos obliga a volver comprensible el movimiento de la historia, a interpretar el rumbo de la sociedad, a conocer las modulaciones de la conciencia de una época. La incesante revolución tecnológica modifica el régimen de interrogantes en contextos de incertidumbre y desconcierto, que nos llevan a repensar el presente. Esos interrogantes giran en torno a lo social, a la globalización financiera, al cambio climático, a la emancipación feminista y transfeminista, a la violencia urbana, al cambio de actores políticos y a la revolución comunicacional.

La democracia como fenómeno global prevalece en todo occidente, con sus propias singularidades, pero con signos inquietantes que revelan una fatiga democrática, con degradaciones institucionales y mutaciones en el sistema político. A ello se suma el hecho de que las grandes democracias están produciendo líderes grotescos. Una cuestión central es que las *filosofías del antiliberalismo*, tanto en su doctrina como en su acción política, se han reinstalado con fuerza en esta época histórica. El antiliberalismo político y económico se encuentra hoy representado por un vasto conglomerado de derecha e izquierda, que combate con ideologías fluctuantes a la democracia liberal. Ese conglomerado existe como fuerza política y como clima cultural.

En la actualidad, el auge en Europa de la extrema derecha puso en discusión la caracterización de la misma y el uso del concepto «fascista», que responde a un momento histórico específico. Precisamente por esa especificidad histórica, algunos autores prefieren hablar ahora de «posfascismo», o «neofascismo», que más allá de sus puntos en común, exhiben también muchas diferencias. Por ejemplo, en Italia, Francia, Austria, Polonia, Hungría, Grecia, Ucrania.

Theodor Adorno en una conferencia pronunciada en 1967 en Austria[2] con el título «Rasgos del nuevo radicalismo de derecha», contrasta el viejo fascismo con el radicalismo de derecha de su época, veinte años después de finalizar

2 Recientemente conocida gracias a su grabación.

la guerra. El potencial del radicalismo de derecha (aunque haya fracasado) se explica por el hecho de que en todo momento siguieron vivas las condiciones sociales que determinan al fascismo. En su opinión, a finales de los sesenta se produce un cambio generacional, que marca el paso de una vieja derecha a una nueva derecha, la que deja a un lado su carácter «abiertamente antidemocrático». Se presenta a sí misma como democrática y trata a los demás como antidemocráticos. Para subsistir el radicalismo de derecha no necesitaba de un partido. El valor actual del pensamiento de Adorno revela cómo «los movimientos fascistas son los estigmas, las *cicatrices de una democracia* que hasta ahora no ha conseguido entender debidamente del todo su verdadero sentido»,[3] así como remarca que en los movimientos de extrema derecha la «propaganda» constituye de por sí la sustancia de toda la política.

En América Latina luego, del ciclo de centro–izquierda, encabezado por Hugo Chávez con el «socialismo del siglo XXI» en Venezuela, y Rafael Correa con la «revolución ciudadana» en Ecuador, los analistas políticos y algunos estudiosos de la región hablan hoy de un fin de ciclo. ¿Un *fin de ciclo populista* cuando el populismo resurge en Europa y Estados Unidos? Lo cierto es que del llamado progresismo latinoamericano no queda nada en pie. La experiencia venezolana de Chávez concluyó en la dictadura de Maduro. El último representante fue Evo Morales en Bolivia, desalojado del poder por un golpe de Estado no convencional; Morales fue criticado por Lula debido a su aspiración de un cuarto mandato. En principio, el populismo es una fuerza minoritaria, en términos electorales, a partir del alejamiento del poder de Dilma Rousseff en Brasil, con Lula en prisión; Tabaré Vázquez en Uruguay; Michelle Bachelet en Chile.

Los sectores progresistas caracterizan al actual proceso latinoamericano como el retroceso de la izquierda y el avance de una nueva derecha. El cambio de tendencia se inicia cuando Mauricio Macri ganó las elecciones en la Argentina a fines de 2015, y se reafirma con el triunfo de Sebastián Piñera en Chile, en diciembre de 2017. Sin olvidar el acceso de Pedro Kuczynski al palacio presidencial de Perú; en Brasil Michel Tomer ocupa el lugar del desplazado partido de los trabajadores (PT); y en Ecuador Lenin Moreno se alejó de las orientaciones políticas acordadas con Correa. La tendencia a la derecha parece consolidarse en la región si tenemos en cuenta que Brasil, Colombia y México reúnen el 70 % del electorado latinoamericano. Los que conquistaron el poder fueron Jair Bolsonaro, Iván Luque y Manuel López Obrador. Este último es muy criticado por haberse alejado de sus proclamas progresistas por la militarización del país, por su política de seguridad frente al crimen

3 El subrayado me pertenece.

organizado, el aumento de desapariciones, y por la simbólica pregunta, que el Presidente no puede responder, a pesar de su compromiso: ¿dónde están los «cuarenta y tres»? (estudiantes asesinados en 2014).

En la controvertida democracia representativa podríamos preguntarnos: ¿quién es el pueblo?, ¿cómo pensar el asiento popular del poder en las democracias del siglo XXI? El pueblo es un concepto asociado a la representación política y al mecanismo electoral. En este sentido, solo hay gobierno representativo cuando existe una organización electoral que distribuye el poder político. La noción de representación crea una organización electoral que permite al Estado otorgar una investidura institucional a los representantes. De este modo, el fenómeno de la representación, aún con todas las críticas que sobrelleva, es un factor esencial en la organización de la vida colectiva, en la instauración de la comunidad política. El pueblo reviste un poder que no puede ejercer por sí mismo. Aquí es donde se conectan pueblo y representación, porque solo gracias al pueblo es posible la representación. Pero la representación solo tiene lugar en el espacio público, y únicamente se puede representar a un *ausente*. El pueblo al no *estar presente* en el ámbito gubernamental debe ser representado. La representación política es del pueblo sin ser el pueblo, porque para él solo representa quien decide. El representante da vida a quien no tiene una existencia independiente.

El espacio público se ha ampliado y ya no se reduce a los canales tradicionales de participación ciudadana: parlamento, partidos, comicios. No se agota con el sistema de votación. La construcción de un espacio público común, ampliado, es la condición de realización de la democracia. En otras palabras, la democracia es un proceso de ampliación de la esfera pública. La noción de *pueblo y populismo* se ha revitalizado y expandido con mucha ductilidad en el mundo entero, con sus diferentes manifestaciones históricas y geográficas. El populismo tiene muchas variantes, pero no cualquier gobierno puede ser calificado de populista. Más allá del origen tan antiguo del término populismo, y de los extensos y profundos debates sobre su concepto (podríamos hablar de los «populismos», de izquierda, de derecha), queremos, sin embargo, remarcar su palpitante permanencia y su carácter complejo, que resulta amenazante para la democracia liberal contemporánea. En la retórica populista, el pueblo es invocado como una línea de fractura en el espacio público–político, en la que emerge siempre el antagonismo: pueblo/antipueblo, pueblo *versus* elite. El populismo aflora como una voz peyorativa (en cualquiera de sus versiones). En cambio, es apreciada la idea de soberanía del pueblo, por ser el principio de legitimidad de la democracia, a pesar de la vigencia del mandato libre. En términos generales, el populismo considera al pueblo como una voz unida, encarnada en la figura de su líder, un líder carismático. En la realidad polí-

tica, el pueblo, por el contrario, tiene muchos modos de expresión. Hoy nos topamos con un sentir político diferente más irreflexivo y emocional. Es verdad, el populismo se ha convertido en un concepto clave para comprender los desafíos políticos que enfrentan las democracias liberales contemporáneas.

En la dificultad de los temas a debatir, y ante el auge del nacionalismo extremo, parece necesario volver sobre la línea de demarcación entre patriotismo y nacionalismo. El republicanismo que ha despertado interés en los últimos años (una especie de renacimiento de una tradición política olvidada por haber perdido el combate frente al liberalismo) con un peso considerable en la teoría política de la modernidad, se define entre tantas otras cosas por el «amor a la patria», como fuerte pertenencia a la comunidad política (que no coincide con territorio). Los romanos utilizaban dos términos distintos, *patria* y *natio*. El primero, se refiere a la *res publica*, la constitución política, en cambio, el segundo señala el lugar de nacimiento y todo lo que ello vincula, etnia, lengua. En opinión de Viroli hay un lenguaje de patriotismo que se define como libertad común, que es sustancialmente diferente del lenguaje nacionalista de singularidad y homogeneidad. Más aún cree que el lenguaje del patriotismo republicano puede servir de antídoto frente al nacionalismo. Aun frente a los peligros del nacionalismo extremo, el nacionalismo es un sentimiento político natural de los Estados modernos, sin dejar de tener en cuenta que el nacionalismo fue un sentimiento poderoso frente a la dominación colonial.

Pensar el presente es una tarea que tenemos por delante. En las democracias electivas son cada vez más evidentes las desigualdades persistentes y múltiples, y más notoriamente asimétricas las formas en que el poder se ejerce y distribuye. Los conceptos políticos (democracia, representación, legitimación, poder, república, populismo, nacionalismo, entre otros) son siempre polisémicos y tienen pretensiones de generalidad. Las preguntas a esos conceptos no han sido invariablemente las mismas, cambian con el tiempo histórico. De ahí, ese nexo decisivo entre política e historia; con la ayuda de la experiencia se podría ampliar la visión que nos concede nuestro propio horizonte de sentido. En otras palabras, acentuar el diálogo entre teoría política y evidencia histórica. Las culturas políticas están marcadas por desacuerdos profundos y se enfrentan a conflictos que alejan la idea de valores compartidos, más allá de los intereses coyunturales e inmediatos. Intentemos comprender y explicar lo espinoso de la *nueva disposición* de los escenarios políticos en la discordancia de un mundo tan oscilante.

Esta obra es una invitación a los estudiosos de la ciencia política y las ciencias sociales a continuar y profundizar por este derrotero intelectual, en la búsqueda de nuevas interpretaciones en los albores del siglo XXI. Bienvenido este libro y el mundo teórico–político al que nos reintroduce.

Referencias bibliográficas

Adorno, Theodor (2002). *Rasgos del nuevo radicalismo de derecha.* Taurus.

Dunn, John (1996). *La agonía del pensamiento político occidental.* Cambridge University Press.

Traverso, Enzo (2018). *Las nuevas caras de la derecha.* Siglo XXI.

Viroli, Maurizio (2019). *Por amor a la patria. Un ensayo sobre las diferencias entre patriotismo y nacionalismo.* Deusto.

Skinner, Quentin (1990). La idea de libertad negativa: perspectivas filosóficas e históricas. En Rorty, Richard, Schneewind, Jerome y Skinner, Quentin *La filosofía en la historia.* Paidós.

Prefacio

Andrea Bolcatto y Gastón Souroujon

Il Sorpasso de las derechas latinoamericanas en el siglo XXI

La *marea rosa* con la que la izquierda latinoamericana tiñó los inicios del siglo xxi parecía marcar un contrapunto regional con la creciente preocupación europea ante la progresión de las fuerzas de la derecha radical. En efecto, los tiempos políticos del giro a la izquierda latinoamericano contrastaban con la radicalización de la derecha y el aumento de su popularidad en Europa; no obstante los claroscuros (en algunos casos más oscuros que claros) que el giro a la izquierda desarrollaría. Muchos intelectuales saludaban la compostura política más inclusiva que desde el sur se proponía, alejada del nativismo y autoritarismo europeo, más aún cuando algunos discursos, símbolos y gestos que se esgrimían en el espacio público europeo, poseían cierta familiaridad con aquella derecha de entre guerra que se viralizó por el viejo continente. Preocupación que el Brexit y el triunfo de Trump en Estados Unidos no hizo más que recrudecer.

Sin embargo, por distintos caminos, algunos más respetuosos del juego democrático que otros, la marea rosa latinoamericana se fue destiñendo, y se produjo un verdadero *sorpasso* por el cual disímiles fuerzas de derecha tomaron el gobierno. En pocos años América Latina pasó de ser el lugar donde aún podían oírse acordes similares a los de *La Internacional* a ser el espacio donde las distintas tradiciones de la derecha se encarnaban en el poder, desde las tradicionales fuerzas liberales conservadoras, hasta las versiones vernáculas de la derecha radical. Lo anterior no supuso una mera réplica descolorida de los procesos que se sucedían en el primer mundo, sino un fenómeno totalmente novedoso atravesado por variables globales pero también por lógicas locales. Fenómeno en el cual se destaca fundamentalmente la gran cantidad de partidos de derecha que llegaron mediante la vía democrática al poder, la derecha en América Latina se lanzó a seducir a la ciudadanía y se mostró exitosa.

Ante esta nueva fisonomía que adquiere la realidad latinoamericana, los cientistas sociales se encuentran frente al desafío en primer lugar, de tratar de componer un conjunto de preguntas que, ajenas a premisas dogmáticas y echando mano a una cuota de imaginación, acierten con los problemas más relevantes. En segundo lugar, ensayar las respuestas a estas preguntas, adentrarse en los laberintos anárquicos de la realidad política para despejar su opacidad, dotar de un foco de inteligibilidad a aquello que se nos presenta caótico. El conjunto de escritos que conforman este volumen deben ser vislumbrados

bajo este doble desafío, en donde el lector podrá encontrar una pluralidad de voces que desde múltiples registros tratan de hallar las preguntas y respuestas más adecuadas, escritos que en su conjunto forma una obra en la cual las discusiones teóricas en torno a las categorías y tradiciones políticas más pertinentes para el análisis, se combinan con las lecturas más puntuales sobre algunas experiencias específicas. Lo que genera un producto final que no teme auscultar toda la complejidad de su objeto.

Agradecimientos

El presente libro puede ser pensado como una instancia del trabajo iniciado en el seno del CAI+D «Problemas y desafíos contemporáneos para la Teoría Política» y como una continuación del Simposio organizado sobre el tema en el marco del 56 Congreso de Americanistas en Salamanca, España, por los docentes investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que lo compilan (Andrea Bolcatto y Gastón Souroujon). Lo que permite que algunos de los trabajos que lo integran sean producciones de académicos latinoamericanos reconocidos y preocupados por las preguntas presentadas. A ellos se le suma trabajos de docentes investigadores de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL, y de docentes investigadores de otras universidades nacionales. A todos los que han participado queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento por su predisposición y generosidad, esta empresa no hubiera sido posible sin el compromiso y preocupación que cada uno de estos investigadores demostró.

Para que las investigaciones que se desarrollan por años, en el debate abierto entre colegas, lleguen a conformar un volumen colectivo, se precisa de cierta perseverancia y apoyos. Agradecemos a la Secretaría de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL —sede de nuestro proyecto—, quien viabilizó el libro, a través de su secretaria Ana María Gagneten, y colaboradores Verónica Radesca, Carina Toibero y, especialmente a Esteban Kaipl. A la Coordinadora del Departamento de Ciencia Política, María Jimena García Puente, que nos animó a continuar y así contribuir a la robustez de la carrera novel desde la producción académica. A los organizadores del 56 Congreso de la Universidad de Salamanca, a Ediciones UNL, al Dr. Hugo Quiroga por brindar su valiosa participación prologando este libro y a Mónica Billoni por su constante apoyo e interés.

Tensiones democráticas: las reconfiguraciones institucionales y culturales en los nuevos escenarios conservadores

Andrea Bolcatto

Nos interesa reflexionar sobre el escenario contemporáneo de retraimiento o salida del período denominado «marea rosa o rosada» y de lo que de manera general —admitiendo la insuficiencia de la caracterización global— se ha denominado «oleada progresista o populista» en la región centro y latinoamericana. Dicho retraimiento coincide con un reordenamiento conservador en términos políticos, económicos y culturales con matices, desde la segunda década del siglo xxi en adelante. La migración a gobiernos neoconservadores y/o de derecha, necesariamente reposicionan las estructuras tradicionales (Estado y sus instituciones, partidos políticos, etc.), aunque no se agotan en la observación del sistema político, del Estado o del modo de gobierno.

Orientamos el análisis desde la reflexión teórico–política, en momentos de transición de regímenes y de incertidumbre conceptual. En este sentido, pudiendo describir estos escenarios novedosos, es que podremos dar cuenta de la dinámica de las transformaciones en la relación Estado y sociedad, la noción de legitimidad y las reconfiguraciones de la idea de representación, como elementos necesarios (aunque no suficientes) para pensar las democracias en la región, fundamentalmente las que hegemonizaron el escenario democrático, o sea, las de carácter representativo–liberal–occidental.

Recapitulando, destacamos en el análisis propuesto ver: a) cómo se reposicionan las estructuras tradicionales: Estado y sus instituciones, partidos políticos, coaliciones de gobierno; b) cómo se plantean formas políticas representativas particularmente tensionadas —a la luz del papel de los parlamentos y otros actores políticos en la región— en un escenario que denominamos de legitimidades difusas u opacas. Particularmente, el papel de los parlamentos y la lucha política que de ellos emana ha generado un quiebre, una escisión de la idea de legitimidad popular (electoral) fundamental para pensar las democracias representativas modernas y contemporáneas, ya que en casos actúan de manera cuasi independiente de la ciudadanía, actuando de manera altamente permeable a los sectores concentrados y conservadores (pensar los casos más espinosos y urgentes de los llamados «golpes parlamentarios», «institucionales» o «blandos» en casos como Honduras, Paraguay o Brasil).

Por otro lado, en tanto entendemos la democracia como un régimen de autoinstitución y de desarrollo de capacidades sustantivas en la búsqueda de un orden social y político, encontramos insuficientes ciertas tesis institucio-

nalistas a la hora de pensar las tensiones democráticas (March y Olsen, 1989; Peters, 1999; Pérez Liñan, 2008). Es así, que tenemos como supuesto de trabajo la necesidad de encontrar argumentos explicativos desde un enfoque integral de variables. Por ello, entendemos que la reconfiguración del momento neoconservador se organiza y cristaliza en: a) las instituciones políticas: parlamentos, partidos y gobierno, b) los programas y políticas económicas: reprimarización, apertura, deuda, fuga de capitales, pérdida de derechos, c) las tensiones culturales entre los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores y de las minorías y el discurso moralista–religioso, y, d) los poderes corporativos: mediáticos, empresariales, religiosos, fundaciones y ONGs (Lefort, 2011; García Delgado, 2017; de Sierra, 2017; Sanahuja, 2018).

A partir de estas primeras notas reflexivas, algunos de los interrogantes que vamos a atravesar refieren a: ¿es posible postular las deficiencias de la legitimidad popular en la acción del parlamento? ¿Hay un nuevo modo de dar cuenta del par orden–conflicto, inherente a lo político? ¿Cómo se construye poder público–estatal en los países de América Latina? ¿Qué actores endógenos y/o exógenos están jugando en la formulación de las democracias? ¿Hacia qué tipo de democracias vamos en la región? Entendemos que la teoría política y, en general, las ciencias sociales, tienen un desafío y compromiso potente que nos debe interpelar, para contribuir analíticamente sobre las tensiones y reconfiguraciones democráticas.

Breve caracterización del escenario histórico–político

Escribir sobre un momento histórico–político determinado, más aún contemporáneo, exige intentar situar las particularidades del momento al mismo tiempo que inscribirlas en un arco temporal amplio, algo así como salirse del momento acontecimental y coyuntural para pensar las huellas de ciertos rasgos, cualidades, sentidos y procesos en la larga duración. Fernand Braudel (1979:64–65) pensaba esta relación entre el tiempo corto (el acontecimiento, que es explosivo pero apenas dura), y la larga duración. Esta última permite no solo advertir la importancia de sucesos que aparecen casi de repente, sino ubicarlos en la estructura, que actúa como herramienta analítica para estudiar de mejor modo dichos acontecimientos. Así, hay sucesos, realidades, fenómenos políticos que se ensamblan en ese andamiaje estructural y permiten registros persistentes en el tiempo (Braudel, 1979:70). La mención no es casual, ya que la caracterización de muchos fenómenos políticos se han nombrado con esa impronta: desde textos clásicos, por ejemplo, *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte,* cuando a propósito del *coup de tête* de diciembre de 1851, dice Marx, «el 2 de Diciembre

cayó sobre ellos como un rayo en cielo sereno» (1975:21) (dando cuenta de la sorpresa de las distintas fracciones y del gobierno, frente a esa especie de fenómeno que acontece de repente, sin haberlo previsto), hasta caracterizaciones más próximas y familiares como los momentos próximos a la «debacle» argentina de 2001, donde se leen profusamente adjetivos como «estallido», «precipitación», «aparición». Es por ello que nos interesa advertir acerca de que observar que los fenómenos y procesos políticos son, muchas veces, emergencias o síntomas de decantaciones y transformaciones de larga data (Novaro, 2002; Mocca, 2002; Pousadela, 2004; Rinesi–Nardacchione, 2007).

Como indicáramos al comienzo, las últimas décadas plantearon un escenario de transformaciones radicales a nivel mundial y regional. Un clásico autor, Claus Offe (1996), describió el acuerdo constitucional e institucional que emergió a partir de la segunda posguerra como el «consenso postotalitario», que modificaba sustancialmente la caracterización de la modernidad política. Fundamentalmente el orden social y económico posterior a la segunda guerra mundial se basaría en mixturas de aspectos del liberalismo y de la democracia en las sociedades capitalistas, formalizadas en experiencias como la de los Estados Sociales o Estados de Bienestar, con mayor precisión, siguiendo al autor antedicho, del «Estado de Bienestar Keynesiano», que dominaría las sociedades capitalistas occidentales entre 1945–1975, en un pacto entre capital y trabajo en el marco del reordenamiento del sistema–mundo. En términos de la representación política, dicho consenso se corporizó en el esquema de la democracia político representativa y mediatizada por los partidos políticos. Pero, uno de los grandes problemas fue que, luego de la crisis de los '70, en el marco de la reestructuración del capitalismo a nivel mundial, la crisis de la OPEP, las fuertes críticas fiscalistas a los Estados, ese acuerdo o paradigma de desmoronó. La variante histórica, política y, fundamentalmente, ideológica que emerge es la neoconservadora, en los '80 de la mano de las figuras de Margaret Thatcher y Mayor en Gran Bretaña (fuerte recesión y lucha contra los sindicatos), Ronald Reagan en EE. UU. (desregular la industria, la agricultura y extracción de recursos), expandiéndose a muchos países y regiones (Francia, Australia, Latinoamérica o el impacto en la propia URSS/Rusia y a China (proceso de «liberalización» de la economía y riquezas en alza de Japón, Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur) (Harvey, 2007:8–9). El predominio de las desregulaciones, las privatizaciones, el retiro del Estado de provisiones sociales, etc., han sido las claves, junto con una cierta ética del individualismo contemporáneo (Sennett, 1998; Lash, 1997). Se va creando una combinación de políticas estatales, perfiles ideológicos, una estructura ética y la incidencia de dispositivos tecnológicos y comunicacionales que transforman radicalmente lo espacio–temporal, con consecuencias definitorias en los mercados y en las

experiencias de los individuos y las sociedades. Así, distintos autores caracterizaron la etapa como la caída de la matriz Estado–céntrica, para pensar los fenómenos políticos y el consecuente resquebrajamiento de las instituciones políticas que se desprendía de dicha matriz (por ejemplo, la centralidad de los partidos políticos y sindicatos como medidores de la ciudadanía y como agrupamientos fuertemente identitarios de lo social). Aunque es preciso advertir que en América Latina se produce un proceso paradojal, ya que, por un lado, los años 80 constituyen un momento de recuperación y consolidación de la institucionalidad democrática (transitología), y, por otro, coincide con el creciente deterioro de las capacidades de articulación y representación, debido a los aspectos antes mencionados: crisis de la matriz Estado–céntrica, déficit de la función gubernativa, fracaso de las capacidades para promover la inclusión social, hiato entre grandes promesas y logros de gestión, impugnación de la política, metamorfosis de la representación política.

Las consecuencias han sido muchas y muy variadas, entre las que podemos destacar: a) el cuestionamiento a las instancias generales de representación y coordinación de lo político–social, b) el descentramiento de la política, c) la fragmentación de las identidades colectivas, d) la caída y el vaciamiento de las funciones de las viejas instituciones, e) la metamorfosis de las estructuras tradicionales (Estado, partidos políticos e instancias de poder de la sociedad) (Lechner, 1996; Beck, 2001; Manin, 1997; Villareal, 1985). En especial, la crisis de representación (o sus mutaciones) y de legitimidad habilitó la emergencia de nuevos actores sociales y políticos que avanzaron en la escena pública, como los nuevos movimientos sociales, las ONGs y otras formas de asociativismo. En particular, la confluencia de estos nuevos actores, conviviendo con los tradicionales, fueron una constante en América Latina en las últimas décadas, aunque identificando momentos contra sistémicos y de resistencia (por ejemplo, respecto de las dictaduras y gobiernos neoliberales de los '80) y momentos de articulación político–estatal, que permitieron tanto el avance como la resignificación de nuevos derechos civiles, sociales, políticos y culturales.

Perspectivas teóricas y ordenamiento conceptual

La breve caracterización anterior nos permite contextualizar y fijar elementos necesarios para pensar de mejor modo el escenario contemporáneo, a partir del enfoque enriquecedor de distintos autores. Por ejemplo, Gerónimo de Sierra (2017:7–11), entiende que se han configurado crisis políticas importantes en varios países con gobiernos «progresistas» estos lustros pasados. Todos los países son «Latinoamérica», pero constituyen sociedades diferentes, siste-

mas sociopolíticos distintos, construcciones de ciudadanía diversa, estructuras sociales, de clases y fracciones, y papel del Estado con grandes diferencias. Así, la importancia continental, geoestratégica de Brasil no puede equipararse a la de Honduras, o la centralidad de una economía primarizada pero con un recurso económico–estratégico fundamental para el mundo como Venezuela (reserva de petróleo) la hacen relevante y frágil a la vez. Por tanto, el impacto continental por el cambio en Argentina, Brasil o Venezuela no son iguales que los casos de Uruguay, Perú o Bolivia. Por otro lado, como señalamos al comienzo, hay una irrupción de sectores plebeyos, en tanto actores subordinados o marginados que entran a la escena pública, como movimientos sociales, toman la palabra se organizan y constituyen identidad y cambios (masas populares, indios, negros, mestizos, mulatos, mujeres, que interpelan a los dirigentes progresistas).

Buena parte de estas interpelaciones y de nuestras comillas para decir ciclos «progresistas» refieren a que las demandas de muchos sectores tensan más la matriz capitalista que lo que las propias experiencias de gobierno realizaron o están dispuestas a tensar, ya que el progresismo no coincide necesariamente con la izquierda anticapitalista, sino con perfiles matizados, donde pueden convivir proyectos de reformas, socialdemocracia, centro–izquierda y variaciones humanitarias o inclusivas del capitalismo.

Otro autor, Fabricio Pereira da Silva (2017), señala que un momento de retraimiento o salida de la experiencia denominada «marea rosa/rosada latinoamericana» (siguiendo a Panizza), o Atilio Borón (2006) «experiencias posneoliberales», o, en forma general, progresismos en las democracias de la región, y la migración hacia gobiernos conservadores y/o de derecha (que necesariamente reposicionan a las estructuras tradicionales del Estado y sus instituciones, partidos políticos, etc., como a los nuevos actores mencionados) exige de una revisión y ordenamiento conceptual. Por eso, la reflexión teórico–política propuesta aspira a ser una reflexión sobre la cosa pública y, al mismo tiempo, una reflexión sobre los propios límites de dicha teoría.

Las mismas disidencias sobre la adjetivación de los procesos regionales que han ido en general desde 1999 a 2018, nos advierten sobre la situación analítica compleja y problemática a la que asistimos, que se traslada al problema de designar el «giro» en la región latinoamericana: ¿hay un giro?, ¿giro hacia dónde? ¿giro de qué hacia qué?.

Dicho período está pensado desde la complejidad del momento neoliberal y su paso a la oleada nacional, popular, progresista o populista (según las adjetivaciones valiosas o disvaliosas). Así, el período de Carlos Menem en Argentina (1989–1999), coincidió con los de Carlos Andrés Pérez, en Venezuela (1988–1992); Jaime Paz Zamora, en Bolivia (1989–1993); Color de Mello, en Brasil

(1990–1993) y Alberto Fujimori en Perú (1990–2000), que en general cubrieron la etapa neoliberal–conservadora en la región. El gobierno de Néstor Kirchner (2003–2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007–2015) con los de Hugo Chávez en Venezuela (1999–2013), Rafael Correa, en Ecuador (2007–2017), Evo Morales en Bolivia (2006-), Tabaré Vázquez (2005–2010) y José Mujica (2010–2015) en Uruguay, Lula da Silva (2003–2011) y Dilma Rouseff (2011–2016) en Brasil, intermitencias de Michelle Bachellet en Chile (2006–2010 y 2014–2018), conformando los denominados gobiernos progresistas y/o populistas en la región. De allí que el año 1999 alude a la figura de Hugo Chávez y el año 2018 a la salida de Bachellet, aun perdurando Evo Morales, asumiendo así la complejidad de los «ciclos».

De modo que una tarea siempre presente, en un trabajo de análisis político, es la de revisitar categorías reconocidas en el propio campo. Pensamos, siguiendo a Sheldon Wolin (1974), que el campo de la teoría política configura una tradición de discurso, por el trabajo e interés de formular conceptos particulares, de tener un vocabulario específico y de identificar preguntas recurrentes. La teoría conforma una red de conceptos interrelacionados y coherentes, ligados a la experiencia pero no idénticos a ella, y, en tanto red atrapa los fenómenos políticos, los hace significativos y pertinentes, abreviando una realidad siempre más profusa, diversa y compleja. Así, categorías como orden político, legitimidad, poder, guerra, Estado o liberalismo tienen esta impronta e inscripción histórica particular, y perviviente en el tiempo. Ese lenguaje, sistematizado en conceptos, permite ordenar el caos y brindar cierta estabilidad, actuando como esquemas que nos facilitan la comprensión, comunicación y debate. Ahora bien, no podemos desconocer que los conceptos no son estáticos, sino que tienen una historia, un significado preciso aunque variable según los contextos de producción, enunciación y lectura. Así, por ejemplo, no significa lo mismo hablar de «orden público» en el marco de una dictadura que en el marco de una democracia, significará y representará cuestiones distintas. Los propios sentidos y caracterizaciones del liberalismo y conservadurismo tienen esta cualidad: no resulta lo mismo decir liberalismo político, económico, utilitario o moral. Vale también para el conservadurismo: moral, o práctico, o reaccionario, expresando, en consecuencia, distintos significados y variantes.

Estas advertencias de posibles lecturas cobran más sentido aún si dentro de los acontecimientos a pensar partimos de expresiones como neoliberalismo, neoconservadurismo o nuevas derechas.[1] Ya que, en principio, el prefijo neo

1 Dichas corrientes pueden estar inscriptas en raíces o líneas de pensamiento que no son necesariamente homogéneas, aunque tienen un «aire de familia», que es posible rastrear.

nos orienta hacia actualizaciones, reformulaciones o recreaciones de algo (liberalismo, conservadurismo, derechas).

En consecuencia, sostenemos que estamos frente a las tradiciones políticas, que contienen redes teóricas y conceptuales definidas, pero también postulamos una noción de política como campo de disputa de sentidos, de litigio, controversia, tensión y batalla discursiva permanente. De allí pensamos el desafío de las ciencias sociales para pensar los fenómenos sociales, políticos, históricos en una determinada época, en sus componentes coyunturales y estructurales.

Dicho esto, en consecuencia, las experiencias neoconservadoras o de las nuevas derechas remiten necesariamente a un universo conceptual y simbólico de aquello que precede (identidades y configuraciones posibles de reconocer) y sobre lo cual hay que referir para dar cuenta y para identificar qué de nuevo hay en ese neo. Y, en lo que precede, encontramos rasgos incrustados en las culturas políticas y en las instituciones, como la incidencia de la religión, la moralidad, las formas de pensar las ciudadanías, los tipos de sujetos que se reconocen en la historia, entre otros.

El desafío hacia los estudios políticos y la historia es constante, ya que nos enfrentamos a categorías y problemas propios del campo, como el Estado, las reglas, las leyes, el orden, la legitimidad (Berlin, 2004; Wolin, 1974), y por ello es preciso agudizar y expandir los análisis, al modo en que Pocock advierte: «gran parte de nuestra práctica de historiadores consiste en aprender a leer y reconocer los diversos dialectos del discurso político que eran accesibles en la cultura y momento que estudiamos» (Pocock, 2001:152).

Caracterización del giro conservador

Por lo tanto, pudiendo describir estos escenarios novedosos es que podremos dar cuenta de la dinámica de las transformaciones en la relación Estado–sociedadcivil, la noción de legitimidad y las reconfiguraciones de la idea de representación, como elementos necesarios (no suficientes) para pensar las democracias en la región.

Según Aníbal Pérez Liñán (2008), en las últimas dos décadas, América Latina experimentó la paradoja de democracias estables con gobiernos inestables. Para sintetizar esta apreciación, destaca que entre 1985 y 2005 trece presidentes electos fueron removidos de su cargo o forzados a renunciar. Hernán Siles Zuazo (Bolivia, 1985), Alfonsín (Argentina, 1989), Fernando Collor de Mello (Brasil, 1992), Jorge Serrano (Guatemala, 1993), entre otros.

A nuestro entender, este fenómeno de «presidencias interrumpidas» ha adquirido características distintas y nuevas, ligadas más a derivaciones de cómo caracterizar los golpes blandos o parlamentarios que a una simple inestabilidad presidencial. Para el autor, dentro de estas interrupciones se identifican 1) la renuncia anticipada, 2) el juicio político, 3) el golpe legislativo. Este último afecta a un área ligada a la crisis presidencial (de hecho se remueven o intentan remover presidentes) y al golpe de Estado, pero no a la alteración del orden constitucional.

Frente a estas caracterizaciones nos planteamos los siguientes interrogantes: ¿hay una adopción de formas cuasi parlamentarias que inciden en el equilibrio Poder Ejecutivo (PE) y Poder Legislativo? ¿Es el parlamento el lugar de operaciones políticas, de *lobby* y fortaleza de grupos que legitiman o no el poder político? Esta función del parlamento ¿se debe a que asistimos a la conformación de partidos políticos menos estructurados, más débiles y, a un sistema de partidos fragmentado y atomizado, que lleva a muchos PE alianzas de gobierno, frentes, uniones, coaliciones, que en algún momento declinan ese apoyo?

El artículo de Pérez Liñán, escrito 2008 , les asigna a las instituciones políticas un componente esencial para comprender las crisis presidenciales y la inestabilidad política. La tesis de «parlamentarización», que radica en atribuirle al parlamento un papel más dinámico que los conceptualizados en los regímenes presidencialistas; así como la tesis de «minorías blandas» en las coaliciones gobernantes —por el poco apoyo de los legisladores en determinadas coyunturas, que erosionan la coalición gobernantes— son interesantes pero no dejan de ser vertientes de enfoques, a nuestro entender, demasiados ceñidos a las variables institucionalistas, y por tanto, resultan insuficientes para brindar una interpretación acabada.

En cambio, entendemos que hay que mirar el fenómeno de un modo más integral, incorporando otros actores y factores de influencia para poder precisar el movimiento de los gobiernos, sus crisis, y los neogolpismos o golpes blandos; y pensar desde allí la reconfiguración de las clases dominantes y su vínculo con la élite de gobierno y los poderes fácticos. Por eso nos pareció interesante sumar variables siguiendo a García Delgado y de Sierra (2017), para explicar el momento autoritario y neoconservador, ya que sugieren contemplar: a) las instituciones políticas (parlamentos, partidos y gobierno, etc.), b) los programas y políticas económicas (reprimarización, apertura, deuda, fuga de capitales, pérdida de derechos laborales, etc.), c) las tensiones culturales entre los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores y de las minorías y el discurso moralista–religioso y, d) los poderes corporativos (mediáticos, empresariales, religiosos, fundaciones y ONGs).

No vamos a desarrollar aquí en forma detallada cada uno de estos puntos, pero sí aproximarnos a algunos de ellos. En cuanto al primer punto (a), hemos sostenido la categoría de legitimidad opaca o difusa y de la conceptualización de los golpes blandos. En un escrito reciente, Pierre Rosanvallon (2017), expone que asistimos a un declive del valor de las elecciones en el desempeño democrático.[2] De las cinco funciones que describe, es fundamental el declive de la función de legitimación de las instituciones políticas y los gobiernos, lo que conlleva al declive del valor de las elecciones. El diagnóstico que sigue el autor francés es el de la pérdida o el deterioro de dichas funciones, lo que conlleva a ese declive del valor de las elecciones (Rosanvallon, 2017:149). El argumento también se monta en la idea del desplazamiento del poder creciente de las legitimidades de apoyo (gestión o ejercicio) sobre las legitimidades de origen (o popular o electorales). Este peligroso argumento conservador, nos ubica en el hecho que cobra más centralidad todos los grupos de poder (endógenos y exógenos), a quienes definen en el ejercicio intereses corporativos variables, que van definiendo los apoyos del ejercicio de gobierno, frente a la demanda popular, generando una legitimidad que hemos denominado opaca o difusa. Sobre este problema, entre otros, se montan los denominados golpes parlamentarios o golpes institucionales, modalidad del neogolpismo que no es aislada, sino que encuentra una lógica de poder estratégico en la región, de acuerdo con los alineamientos de las naciones con las políticas hegemónicas del gobierno de los EE.UU. De todos modos, este papel de los parlamentos, que hace oscilante la democracia, la representación y pone en jaque a la legitimidad de los procesos políticos de la región, no puede explicarse solo por la variante exógena, sino que hay que detenerse sobre problemas políticos particulares que pudieron servir al resquebrajamiento de los principios democráticos y a la fuerte convulsión de los Estado de Derecho (por ejemplo, la fragilidad del sistema de partidos políticos o coaliciones de gobierno, el papel de subordinación o no de las FF. AA., los procesos económicos truncos, la persistencia de la matriz productiva, etc.). Los golpes de Estado en Haití 2004, Honduras

2 Rosanvallon (2017) describe lo que entiende constituyen las cinco funciones democráticas esenciales que se les demanda a las elecciones: 1. *una función de representación*, 2. *una función de legitimación* de las instituciones políticas y los gobiernos , 3. *una función de control sobre los representantes*, 4. *una función de producción de ciudadanía,* al dar consistencia al principio de «una persona/un voto» que define el sufragio universal, 5. *una función de animación de la deliberación pública*, históricamente expresada por el modo de organización de las elecciones que reposaba sobre la participación en *asambleas electorales* en las que se podía intercambiar argumentos. Si cumplían estas funciones, las elecciones eran consideradas como el instrumento democrático por excelencia.

2009, Paraguay 2012 y Brasil 2016, así como los intentos en Venezuela 2002, Bolivia 2008 y Ecuador 2010 dan cuenta de esta novedad.

En cuanto a la variable ideológico–cultural, es preciso hacer hincapié en qué características asume el neoconservadurismo o nueva derecha. Por un lado, dentro de las modalidades del universo de las derechas, está la derecha nacionalista, contraria al libre comercio, la diversidad social y cultural, la inmigración y, en consecuencia, expresadas en políticas de seguridad más conservadoras, duras y represivas. En este sentido, quisiéramos abrir un paréntesis y referirnos a la experiencia Argentina, Entendemos que en este caso, es más oportuno afirmar que la variante que se constituye refiere a una derecha conservadora (respecto de lo social, cultural e inmigratorio), con visos neoliberales, desde el costado del capital especulador, financiero y destructor de la producción nacional. La marca ideológica conservadora se fortalece cuando observamos el componente moral, reaccionario, racista y autoritario de estas experiencias, de modo que la presencia del conservadurismo moral e ideológico aleja las prácticas liberales y, más aún, la esperanza depositada por una parte de ese liberalismo de constituir una alternativa de «derecha democrática y moderna».

A esta altura, es necesario decir que los elementos neoconservadores de estas experiencias recogen elementos estructurales de las derechas tradicionales como: la responsabilización del individuo, el borramiento de los conflictos de clase y la solidaridad, el rol mínimo del Estado no intervencionista en la economía y lo social, el mantenimiento de las desigualdades, el elitismo político, social y cultural, la lógica de la mercantilización, la desregulación y políticas pro mercado, la construcción de enemigos como estrategias de poder (el populismo, los «rojos» comunistas, la corrupción, el «castro–chavismo»), la violencia institucional y el socavamiento del Estado de Derecho. Quizás lo novedoso de las derechas neoconservadoras estaría dado por la construcción de un lenguaje de la pospolítica, el ascenso por la vía electoral, la construcción de hegemonías culturales —con vigencia del neoliberalismo— en espacios donde se construye sentidos y representaciones, la enunciación de constituir experiencias de desideologización, el uso de nuevos canales de comunicación, el apego a la democracia procedimental o competencia electoral (aunque habría que pensar mucho más la categoría «democrática» asociada a estas expresiones).

Retomando los aspectos de inestabilidad económica antedichos (punto b), según el análisis de José Sanahuja (2018), desde 2013, emergen cuatro factores de vulnerabilidad estructural en los países latinoamericanos: 1) caída de los precios de la materias primas y el ciclo de los *commodities,* mayor apertura financiera; 2) aumento de las tasas de interés, fuerte aumento de deuda corporativa, crisis financiera global (vulnerabilidad externa); 3) deterioro de

las balanzas fiscales (dependencia de bienes primarios y recesión); 4) estancamiento de los avances sociales (caída del empleo, de coberturas de salud, sociales, previsionales, etc.).

El autor enfatiza en cómo los cambios de ciclo en la segunda década del siglo XXI resitúan la dinámica globalización versus regionalismos. Toma como ejemplo a Argentina, Brasil, Colombia y México como los países que adoptan medidas económicas supuestamente «desideologizadas» y «pragmáticas», con apertura económica, bilateralismo refractario, promoción del sector privado, inversión extranjera directa, reinstalando las instituciones de crédito, OCDE y alineadas a la agenda de seguridad de EE.UU. para América Latina. Con la salvedad de México, que luego del proceso electoral de 2018 vira en su orientación con López Obrador, los ejemplos de la progresiva desvinculación de Argentina (Mauricio Macri), Brasil (Jair Bolsonaro) y Colombia (Juan Manuel Santos) a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), manteniendo el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) con acercamiento a los bloques de Libre Comercio o Alianza del Pacífico (AP) han estado a la orden del día (Seguridad y Comercio como el núcleo de la agenda común).

Sin embargo, ese giro a la derecha regional en virtud de «abrirse al mundo», con políticas liberales y pragmáticas no han tenido sustento por el cierre que propone los EE.UU. con Trump, que no favorece este orden internacional liberal y coaliciones favorables. De modo que las apuestas de las nuevas derechas latinoamericanas por la globalización parecen estar disociadas de los principales procesos que atraviesan la estructura internacional. A esa fractura se le suman los fracasos frente a temas como la corrupción, la diversidad sexual, el descontento social, fortaleciendo —como ya mencionamos— el núcleo reaccionario y conservador de sus políticas.

Respecto del punto (c), las tensiones entre derechos, ciudadanía y discurso reaccionario y moralizador, encontramos en el caso argentino, durante el gobierno de Mauricio Macri desde 2015, el respeto a la libertad individual, a las minorías, a las diversidades y pluralidades se ha resquebrajado. Ha habido un avance de la criminalización de la protesta, persecuciones políticas, ejecuciones sumarias, desplazamientos internos a pueblos originarios y migrantes, protocolos de acción de fuerzas de seguridad contra la ciudadanía más vulnerable, etc., plantean un escenario de incertidumbre y democracias frágiles. Una de las estrategias de poder estatal desplegadas con fortaleza contra los movimientos sociales, ha sido lo que hemos denominado «movimientos espejo». La estrategia consiste producir una reacción sobre la acción de los movimientos, buscando desvirtuarlas, descalificarlas y denostarlas. Dichas acciones estratégicas buscan montarse (con relativo éxito) sobre el sentido

común de las capas medias, desde operaciones discursivas, mediáticas y de acción policial, ubicando un nicho discursivo y procedimental que empatice con las acciones denostativas. Ejemplos de estos «movimientos espejo» son, a nuestro entender, la caracterización —y denostación— que el Estado, a través del gobierno argentino, y otros actores de influencia en la opinión pública, tuvo (y tiene) hacia otros actores y/o movimientos colectivos como: a) los movimientos feministas (que han crecido en volumen y movilización). A tal efecto, la derecha construye la idea de que se trata de movimientos violentos, sustentado por feminazis, mujeres poco aseadas, lesbianas, etc.; b) los movimientos de derechos humanos, que tuvieron y tienen un papel sustancial en las democracias de la región. A éstos se los descalifica con la expresión de «el negocio —curro— de los derechos humanos», los DD. HH. deben ser de todos, etc.; c) los movimientos indigenistas, a los que se (des)califica como formados por individuos o grupos ilegales, violentos, vagos, etc. En todos estos casos, por un lado emerge la potencia organizativa, democrática y contestataria de los movimientos, que dinamiza la democratización, al que se le opone, en este movimiento espejo un conjunto de acciones discursivas y —de hecho— denostativas, descalificadoras y persecutorias. En conjunto, estas prácticas políticas y la forma de pensar lo político contribuyen a un debilitamiento de los Estados de Derecho y de la propia democracia, en lo formal y sustancial, de allí que la derecha «democrática» quede en entredicho.

Por último, tomando el punto (d), la incidencia de los poderes corporativos, interesa mencionar la importancia y función de los *think tanks* (tanque de pensamiento, o laboratorio de ideas, TT), que se constituyen como centro de pensamiento o reflexión, cuya estructura se vincula con una institución o grupo de expertos, intelectuales, sobre asuntos de política social, estrategia política, economía, militar, tecnología o cultura. Pueden estar vinculados o no a partidos políticos, grupos de presión o lobbies, pero se caracterizan por tener algún tipo de orientación ideológica marcada de forma más o menos evidente ante la opinión pública. Son fuertemente influyentes, ya que se constituyen como grupos de presión (o se conectan con estos). Desde 2006, el *Global GoToThinkTank Index Report* evalúa el rol de estas instituciones que revisan e investigan políticas públicas alrededor del mundo. En la edición de este año, encontró 8162 *think tanks* en todo el mundo, de los cuales 1023 están en Latinoamérica (incluyendo al Caribe) y 227 en Argentina, siendo el país de la región con la mayor cantidad y el quinto a nivel mundial, detrás de Estados Unidos, India, China y el Reino Unido respectivamente.[3] Algunos de ellos

3 McGann, James G., «2016 *Global Go To Think Tank Index Report*» (2017). TTCSP *Global Go To Think Tank Index Reports.* 12. Recuperado en http://repository.upenn.edu/think_tanks/12

son: Fundación Federalismo y Libertad, Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), organización ProyectAr, Fundación Pensar e instituciones de la red Atlas (global y regional), que trabajan e inciden financieramente en proyectos vinculados al neoliberalismo y neoconservadurismo, dominando agendas sobre el peligro del populismo y del Estado intervencionista, educación, corrupción, inseguridad, política social y otras áreas de políticas públicas.

Conclusiones preliminares

Retomando algunos de los interrogantes que nos hemos planteado a lo largo del trabajo, ¿cómo se construye poder público–estatal en los países de América Latina? ¿es posible postular el desplazamiento de la legitimidad popular por la legitimidad de ejercicio? Las decisiones de instituciones y actores políticos como los parlamentos en el escenario contemporáneo, ¿erosionan las democracias? ¿Qué actores endógenos y/o exógenos están jugando en la formulación de las democracias? ¿Hacia qué tipo de democracias vamos?

Hemos considerado que, para aproximarnos a estas problemáticas, así como a la caracterización del momento neoconservador, es preciso distinguir particularidades contemporáneas, a la vez que ensamblarlas en el andamiaje estructural que nos posibilita registros persistentes en el tiempo.

Así, retomando las reestructuraciones a nivel global y regional que se plantean desde los '70, destacamos consecuencias variadas que inciden en los modos de pensar las democracias como: a) el cuestionamiento a las instancias generales de representación y coordinación de lo político–social, b) el descentramiento de la política, c) la fragmentación de las identidades colectivas, d) la caída y el vaciamiento de las funciones de las viejas instituciones, e) la metamorfosis de las estructuras tradicionales (Estado, partidos políticos e instancias de poder de la sociedad).

También nos pareció necesario realizar un breve ordenamiento conceptual, que nos permita aclarar qué pensar sobre los fenómenos del neoliberalismo, neoconservadurismo y/o nuevas derechas. De manera que, recuperando distintos teóricos, vimos que los conceptos nos permiten revisitar trayectos conocidos, aunque señalando el sentido histórico de los mismos, e intentando captar sus continuidades así como sus significados novedosos. Es así que pudimos establecer que las experiencias neoconservadoras remiten necesariamente a un universo conceptual y simbólico de aquello que precede, donde encontramos rasgos incrustados en las culturas políticas y en las instituciones, como la inci-

dencia de la religión, la moralidad, las formas de pensar las ciudadanías, los tipos de sujetos que se reconocen en la historia, entre otros.

Respecto de cómo caracterizar el giro conservador, recuperamos enfoques institucionalistas, como la tesis de la «paradoja de democracias estables con gobiernos inestables» (Pérez Liñan, 2008), que se completa con la idea del fenómeno de «presidencias interrumpidas» entre 1985–2005 debido, dirá el autor, a: 1) la renuncia anticipada, 2) el juicio político, 3) el golpe legislativo.

Frente a esta tesis, propusimos mirar el fenómeno de un modo más integral. Siguiendo a García Delgado y de Sierra (2017), para explicar el momento autoritario y neoconservador, contemplamos: a) las instituciones políticas (parlamentos, partidos y gobierno, etc.), b) los programas y políticas económicas (reprimarización, apertura, deuda, fuga de capitales, pérdida de derechos laborales, etc.), c) las tensiones culturales entre los derechos de la ciudadanía, de los trabajadores y de las minorías y el discurso moralista–religioso, y, d) los poderes corporativos (mediáticos, empresariales, religiosos, fundaciones y ONGs).

Finalmente, procedimos a desglosar sucintamente (no exhaustivamente) estos puntos. En cuanto al primer punto (a), hemos sostenido la categoría de legitimidad opaca o difusa, de acuerdo con la reinterpretación de distintos escritos, entre los que destacamos a Rosanvallon (2017), que expone el declive del valor de las elecciones en el desempeño de las democracias contemporáneas. En cuanto a la variable ideológico–cultural, enfatizamos los rasgos que adquiere la derecha conservadora (respecto de lo social, cultural e inmigratorio), con algunos visos neoliberales en lo económico. Una variante que se consolida en el componente moral, reaccionario, racista y autoritario de estas derechas. Por otro lado, los elementos neoconservadores recogen elementos estructurales de las derechas tradicionales como: la responsabilización del individuo, el borramiento de los conflictos de clase y la solidaridad, el rol mínimo del Estado no intervencionista en la economía y lo social, el mantenimiento de las desigualdades, el elitismo político, social y cultural, la lógica de la mercantilización, la desregulación y políticas pro mercado, la construcción de enemigos como estrategias de poder, la violencia institucional y el socavamiento del Estado de Derecho.

Respecto del segundo punto (b), la vulnerabilidad estructural en los países latinoamericanos se explica por: 1) la caída de los precios de las materias primas y el ciclo de los *commodities,* mayor apertura financiera; 2) el aumento de las tasas de interés, fuerte aumento de deuda corporativa, crisis financiera global; 3) el deterioro de las balanzas fiscales; 4) el estancamiento de los avances sociales.

En cuanto al tercer aspecto (c), encontramos, en el caso argentino, que se ha resquebrajado el respeto a los derechos conseguidos (como la libertad individual, derechos de minorías, a las diversidades y pluralidades culturales). La

criminalización de la protesta, los desplazamientos internos a pueblos originarios y migrantes, los protocolos de acción de fuerzas de seguridad contra la ciudadanía más vulnerable —entre otros mecanismos— han crecido y se han robustecido como políticas de Estado (una de las estrategias de poder estatal desplegadas con fortaleza contra los movimientos sociales ha sido lo que hemos denominado «movimientos espejo»). La estrategia consiste en producir una reacción sobre la acción de los movimientos, buscando desvirtuarlas, descalificarlas y denostarlas.

Finalmente, respecto de la incidencia de los poderes corporativos, mencionamos tan solo un aspecto, el de la importancia de los TT, ya que en Argentina, alcanzó un peso regional y global sumamente relevante (227, siendo el que más tiene en la región —por encima de Brasil y México— y quinto a nivel mundial), muchos de los cuales trabajan e inciden financieramente en proyectos vinculados al fortalecimiento de programas y políticas neoliberales y neoconservadoras.

En conjunto, entendemos que estas consideraciones coyunturales, y sus inscripciones estructurales, ponen en jaque a los postulados democráticos en la región, obligan a pensar qué tipo de instituciones queremos y podemos llegar a construir, qué tipo de acuerdos políticos realizar, qué papel jugarán los actores tradicionales y los nuevos actores (MMSS, ONGs, TT), y de qué manera se puede disputar la hegemonía cultural neoconservadora, que se ha cristalizado en valores como la moral religiosa, las tradiciones, lo reaccionario, la intolerancia, el desprecio y el racismo, en total, valores que se encuentran reñidos con los presupuestos democráticos.

Desde la política entendida como campo de disputa de sentidos, de litigio y controversia, de tensiones y batallas por la palabra, es que nos vemos interpelados como cientistas políticos y sociales en el desafío de pensar e interpretar los fenómenos sociales, políticos e históricos en una determinada época.

Las prácticas políticas de retraimiento de derechos, de avance del tradicionalismo reaccionario, del individualismo, la meritocracia y la forma desideologizada de pensar lo político contribuyen a un debilitamiento de los Estados de Derecho y de la propia democracia, en lo formal y sustancial, de allí que la derecha democrática quede en entredicho.

Entendemos que el conjunto de cuestiones que hemos descripto no hacen sino lesionar el núcleo mismo de la legitimidad política y las democracias, parafraseando a Weber, en su origen, desarrollo y efectos. Por eso, la reflexión teórico–política, y de las ciencias sociales en general, tiene un desafío y compromiso potente que nos debe interpelar, para contribuir con análisis certeros a la interpretación sobre las amenazas antidemocráticas y para contribuir al cambio de este statu quo.

Referencias bibliográficas

Arbós, Xavier y Giner, Salvador (1993). *La gobernabilidad: ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial.* Siglo XXI.

AA.VV. (2010). Los gobiernos progresistas en la región: escenarios futuros. *Argumentos. Revista de Crítica Social.*

Beck, Urlich (2001). *La invención de lo político. Para una teoría de la modernización.* FCE.

Berlin, Isaiah (2004). ¿Existe aún la teoría política? En: *Conceptos y categorías.* FCE.

Bolcatto, Andrea (2018). La legitimidad y representación políticas revisitadas: el lugar de las elecciones y los parlamentos en las democracias latinoamericanas. En Alcántara, Sánchez López y García Montero (Comps.) *Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas Salamanca:* USAL (997–1006).

Borón, Atilio (2006). Crisis de las democracias y movimientos sociales en América Latina: notas para una discusión. En: OSAL, *Observatorio Social de América Latina.* CLACSO, VII (20), 289–304.

Castoriadis, Cornelius (2001). ¿Qué democracia? En: Castoriadis. C. *Figuras de lo pensable.* FCE.

Cavarozzi, Marcelo y Abal Medina, Juan (Comps.) (2002). *El asedio a la política.* Homo Sapiens.

Cheresky, Isidoro (Comp.) (2006). *La política después de los partidos.* Prometeo.

Chomsky, Noam y Herman, Edward (2013). *Los guardianes de la libertad.* Austral Humanidades.

Coicaud, J. M. (2000). *Legitimidad y política: contribución al estudio del derecho y de la responsabilidad política.* HomoSapiens.

Constant, Benjamín (1989). *De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos. Conferencia de febrero de 1819.* Centro de Estudios Constitucionales.

De Sierra, Gerónimo (Org.) (2017). *Los progresismos en la encrucijada.* Universidad de la República.

Del Hierro, José Luis (2013). Legitimidad y legalidad. *Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 4,* 179–186.

García Delgado, Daniel (2017). Modernización y reforma del Estado en el Neoliberalismo tardío: Argentina en el cambio de ciclo. En Gerónimo de Sierra (Org.) *Los progresismos en la encrucijada.* Universidad de la República.

García Jurado, Roberto (2000). Fundamentos de la legitimidad. *Estudios Políticos 24,* 129–153.

Giordano, Verónica (2014). ¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»? *Revista Nueva Sociedad, 254.* Recuperado en https://nuso.org/articulo/que–hay–de–nuevo–en–las–nuevas–derechas/

Harvey, David (2007). *Breve historia del Neoliberalismo.* Akal.

Lechner, Norbert (1996). ¿Por qué la política ya no es lo que fue? *Revista Nueva Sociedad 144.* Recuperado en https://nuso.org/articulo/la–politica–ya–no–es–lo–que–fue/

Lefort, Claude (2011). *Democracia y representación.* Prometeo.

Linz, Juan José (2004). Los partidos políticos en las democracias contemporáneas, *Postdata 10.* Recuperado en http://www.revistapostdata.com.ar/2012/01/postdata–n–10–diciembre–2004/

Lupion, Bruno (2017) Juicio político a Dilma. En nombre de Deus, *Revista Anfibia.* Recuperado en http://www.revistaanfibia.com/ensayo/en–nombre–de–deus/

Macpherson, C. B. (1981). *La democracia liberal y su época.* Alianza.

Manin, Bernand (1997). *Los principios del Gobierno Representativo.* Alianza Editorial.

Novaro, Marcos (comp.) (2002). *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad.* Grupo Editorial Norma.

O'Donnell, Guillermo (1997). *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización.* Paidós.

Offe, Claus (1996). Los nuevos movimientos sociales cuestionan los límites de la política institucional. En *Partidos Políticos y Nuevos Movimientos Sociales.* Editorial Sistema.

Pereira da Silva, Fabricio (2017). Fin de la marea rosa y el neogolpismo en América. En Gerónimo de Sierra (Org.) *Los progresismos en la encrucijada.* Universidad de la República.

Pérez Liñán, Aníbal (2008). Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales. *América Latina Hoy 49,* 105–126.

Pitkin, Hanna (1985). *El Concepto de representación.* Centro de Estudios Constitucionales.

Pocock, J. G. A. (2001): Historia intelectual: un estado del arte, *Prismas. Revista de historia intelectual 5,* 145–175.

Rinesi, Eduardo, Nardacchione, Gabriel, Vommaro, Gabriel (2007). *Los lentes de Víctor Hugo. Transformaciones políticas y desafíos en la Argentina reciente.* Prometeo.

Rosanvallon, Pierre (2003). *Por una historia conceptual de lo político.* FCE.

——— (2017). La democracia del siglo XXI. *Revista Nueva Sociedad 269,* 148–162.

Sanahuja, José Antonio (2018). Las nuevas derechas latinoamericanas frente a una globalización en crisis, *Revista Nueva Sociedad, 275.*

Solano Gallego, Esther (2016). Brasil: la caída del PT y el ascenso conservador, *Revista Nueva Sociedad, 266,* 147–165.

Svampa, Maristella (2011). Movimientos sociales, matrices socio–políticas y nuevos escenarios en América Latina. Working Paper 01. Univ. Kasse.

Sztulwark, Diego (2019). *La ofensiva sensible. Neoliberalismo, populismo y el reverso de lo político.* Caja Negra.

Wolin, Sheldon (1974). *Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental.* Amorrortu editores.

Sociedad de riesgo, el momento populista y el resurgimiento de la extrema derecha

Esteban Kaipl

Las derechas, ¿son siempre lo mismo? A priori, se podría decir que no. Es por ello que decidimos hacer un corte arbitrario. Creemos que hay una extrema derecha que puede cobrar cierta relevancia en el mundo contemporáneo (y genera amplios temores), y es a ella a quien decidimos apuntar en este texto. Esta elección no solo es arbitraria, también tiene que ver con uno de los temas que hemos trabajado en los últimos años, el *riesgo*. Es en ese tono que decidimos reflexionar acerca de qué une al *riesgo* con las *derechas radicalizacadas* del mundo contemporáneo.

A partir de ello, hemos decidido reflexionar acerca de experiencias en América Latina en los últimos meses, y experiencias en Europa (particularmente en Francia), estimando que el peor de los temores y el que más puede marcar nuestra realidad, es la que vincula al neoliberalismo, al populismo y al surgimiento de una derecha reaccionaria, moralista y radicalizada.

Más allá de que debamos reconocer que no podremos agotar las fuentes que trabajan en la actualidad sobre el tema, sí podremos hacer un balance sobre el trabajo de algunos autores que elegimos arbitrariamente para poder observar el fenómeno. Retomaremos autores que definen los fenómenos de manera totalmente contradictoria entre sí. No podemos eludir la cuestión pensada en torno a lo conceptual por Chantal Mouffe (2002; 2003; 2016) y Ernesto Laclau (1978; 2008); no puedo dejar pasar algunas nociones prefijadas por Gino Germani (1973, 2003), algunas reflexiones sobre la relación entre la democracia liberal y el populismo, como las de Hugo Quiroga (2005, 2010, 2016), Enrique Peruzzotti (2008), Gerardo Aboy Carlés (2002, 2010), Javier Franzé (2017); tampoco quiero pasar a silencio las reflexiones de autores que establecen lazos entre el material académico y el material de divulgación, como Loris Zanatta (2016), Federico Finchelstei'n (con trabajos de diversa profundidad claro) (Finchelstei'n 2014, 2018), porque creo que estos autores (como Mouffe acaso también) no solo publican sus obras acerca de la cuestión a la altura de la *historia conceptual*, sino que se enrolan en tradiciones de proyectos políticos que interpelan y son interpelados por la realidad de una manera particular.

Nuestra hipótesis intenta ser explícita; hay una línea precisa que atraviesa tres momentos de la política contemporánea: un primer momento pospolítico; un segundo momento populista, que responde a él; y un tercer momento en el

que parecen aprovecharse del último las extremas derechas. Este último puede asediarnos, pero creemos que no sería totalmente comprensible sin los demás.

¿Es el surgimiento de la extrema derecha una consecuencia del liberalismo político?

El primer elemento que trabajaremos retoma una hipótesis muy interesante como potente extraída de diversos trabajos académicos y de divulgación de la politóloga belga Chantal Mouffe. Según la autora, el principal responsable de surgimiento de una extrema derecha, populista (e iliberal), no puede ser otro que el triunfo anterior del liberalismo, las teorías deliberativas y del consenso. De esa manera, podríamos enrolar tres momentos principales de la política contemporánea que marcan en sí, la crisis perceptible de los principios liberales de la democracia liberal contemporánea:

- un primer momento, que podríamos llamar pospolítico, en el que pareciera pensarse a la política como no conflictiva; o el triunfo de la no–política. En este marco vemos expandirse elementos de economía neoliberal que vienen a reemplazar o superar a la «antigua política»; y desandando así diversos derechos sociales obtenidos por el pueblo en el marco de las democracias occidentales;
- un segundo momento, el llamado *momento populista* (Mouffe 2016) en el que se profundiza la crisis del liberalismo político a través de una respuesta que politiza fuertemente a la sociedad. Momento en el cual comienza a reaparecer la idea del conflicto como parte inherente de la política, constitución incipiente de una *idea de pueblo* que viene a manifestar la necesidad del retorno de la soberanía popular;
- y un tercer momento que se explica de la apropiación (peligrosa) de ese *momento populista* por parte de la *extrema derecha*, amplificando aún más la derrota de ciertos elementos liberales clásicos; y asentando firmemente diversos aspectos de la política que vienen apareciendo en los últimos años, moralización de la política, nacionalismos, escisión de la sociedad en *pueblo* y *anti–pueblo*, etc.

Al no poder disponer del espacio para poder desarrollar detalladamente cada momento, retomaremos los elementos que nos parezcan más importantes para llegar a manifestar el riesgo generado por el margen en el que surgen nuevas manifestaciones de *extrema derecha*.

Yendo a una definición fundamental a nuestro propósito, el momento populista sería planteado como una época que es consecuencia de una crisis que encontrara la democracia liberal, los partidos socialdemócratas, las terceras vías, y también las concepciones que avizoraban el fin de la política como conflicto.

Nuestra hipótesis va en el siguiente sentido, sin negar la propia de Mouffe. Creemos que la aceptación del riesgo como elemento propio e intrínseco de nuestras democracias occidentales, representativas y electivas, y la vuelta discursiva de la *soberanía popular*, generan un amplio margen para propuestas iliberales y anticonstitucionales que puedan entroncarse con las de la extrema derecha. Probablemente sea necesario el avance neoliberal como la contraofensiva propia del momento populista para poder percibir el espacio de surgimiento y el ascenso de la popularidad de los partidos y movimientos de extrema derecha.

Pensamos entonces que es probable que la democracia en tanto *fórmula de contingencia* del sistema político, en una época marcada por el riesgo (Luhmann, 1992; Beck, 1998; Beriain, 1996; Aramburu, Kaipl, 2013; Kaipl, 2017) y la indeterminación (Lefort 1990), señale un vacío, y que ese lugar vacío se vuelva un espacio de legitimación de discursos que puedan atentar contra ciertas pautas de liberalismo político presentes en los Estados constitucionales de Derecho posteriores a la segunda guerra mundial. Dicho de otra manera, el riesgo propio de la sociedad contemporánea, facilitaría en una primera mano, el ingreso de elementos *iliberales* en regímenes democráticos en el marco de un espacio que encuentra vacíos de legitimidad. Hecho que puede catapultar a movimientos antiliberales tanto de izquierda como de derecha.

En este primer momento, es necesario también mencionar otra de las importantes acusaciones vertidas por la propia Chantal Mouffe contra el liberalismo (2003). La misma tiene que ver con haber sembrado la despolitización del terreno político, dando inicio a un momento pospolítico (Mouffe 2002). De esa manera, pareciera ser que la lucha de la llamada pospolítica será la de marcar una tendencia socialdemócrata hacia el centro, en la cual las tendencias radicalizadas de izquierda y derecha serán desacopladas de la batalla discursiva de la arena política.

Con todo ello, coincidiremos con el veredicto que se centre en los obstáculos que presenta el mundo contemporáneo a la democracia liberal y que tienen su raíz aquí. Creemos necesario poner el foco en el fenómeno del resurgimiento de los elementos propios de la soberanía popular que habían sido dejados de lado en las configuraciones democráticas de posguerra y el avance del neoliberalismo en la economía global. No queremos dejar de mencionar que encontramos un punto crítico en el que esa soberanía popular retoma su centralidad en un tono expresamente confrontativo con los principios propios de la soberanía constitucional. Fenómeno que aumenta los riesgos notables del resurgimiento de movimientos de extrema derecha que creíamos impensables hace unas décadas.

En torno a la constitución del pueblo (y del antipueblo)

En ese marco, el vocabulario de los líderes populistas de la extrema derecha pareciera serpentear entre las reivindicaciones igualitarias, reivindicaciones nacionalistas, aferrarse a un combate contra sectores o minorías que engañan al *pueblo* (la oligarquía, el establishment, las elites, los políticos tradicionales, los sospechados de corrupción, etc.), y el desconocimiento de principios propios del Estado constitucional de derecho, para poder constituir un *nosotros* «bueno» que excluya al antipueblo, un *ellos* moralmente «malo». Ahora bien, una cuestión válida es la de preguntarse sobre el origen de todo ello. La noción de *riesgo* se vuelve fundamental para observar la *relación histórica contingente* que desconozcan reglas de convivencia fundamentales sobre la que se erige una sociedad constitucionalmente democrática y ser plebiscitadas de un momento a otro.

En los populismos pareciera volverse fundamental la construcción y una relectura que se realiza de la historia para constituir un *nosotros* —en términos de pueblo— y un *ellos* —en términos de antipueblo—; en el caso de los populismos de derecha el hecho fundamental para dicha reconstrucción se puede centrar en un pasado casi mitológico de una idea de nación que se une a un demos único e inapelable. Para ser gráficos con un ejemplo: en el mismo contexto, Marine Le Pen y el Front National francés podrían constituir un populismo de extrema derecha que constituye un nosotros *nacional,* étnicamente blanco, *francés de pura cepa* (*français de pure souche*); mientras que, como contra ejemplo, Jean–Luc Mélenchon podría bien constituir un nosotros en el que exista un acuerdo de clases desventajadas que atraviese fronteras nacionales, que sea laico e inclusivo, aunque también contenga el riesgo de llegar a ir en contra de ciertas libertades propias de la quinta República francesa.

No nos ocuparemos aquí de la vertiente izquierda del fenómeno; sino simplemente la mencionamos como una apelación igualitaria que se realiza en el mismo marco de crisis del liberalismo (aunque en este caso podríamos nombrar neoliberalismo). A estos efectos no entraremos aquí en la profundidad del debate en torno a la disyuntiva del liberalismo político y del neoliberalismo económico (Morresi 2008; Morresi, Vicente 2019), aunque creemos explícitamente que no poseen una naturaleza similar, más allá de la familiaridad que puede encontrar (de manera confusa) Mouffe por momentos.

El incremento de los riesgos para los Estados constitucionales que podríamos ver allí es que la apelación a romper con un sistema que conlleva más y más desigualdad (excluye a más y más ciudadanos, pauperiza más y más la economía productiva). Por lo mismo, parecen oponerse radicalmente un tipo popular de soberanía a uno constitucional. Uno que no canaliza institucio-

nalmente el conflicto real existente, ni vehiculiza un diálogo entre ambos. En este caso el riesgo puede aumentar y recaer en uno u otro tipo de populismo (izquierda o derecha) y, de esa manera, generar una alta volatilidad del sistema político. En cierta manera, el matiz iliberal de la democracia contemporánea se vincula paradójicamente al llamamiento al carácter de *excepcionalidad* (en el sentido schmittiano) para devolver el carácter *igualitario* y el lugar de la *soberanía popular* (que no debió haber sido abandonado) en sociedades en las que se ha desarrollado una alta concentración de riquezas en pocas manos.

¿En qué favorece este cuadro al surgimiento de movimientos o partidos de extrema derecha? En que precisamente estos problemas, que resienten en la vida cotidiana de los ciudadanos, remarcan las dificultades que tienen, hasta discursivamente, de dar veredictos y percibir posibles soluciones «por dentro del sistema» a las demandas por igualdad, al reconocimiento de desigualdades históricas sociales, económicas y culturales. Pues bien, las reivindicaciones *de excepción* de las proclamas de movimientos o de partidos de extrema derecha bien se pueden plantear como provenientes desde el entorno del propio avance neoliberal en el sistema productivo de los países de occidente.

Dichos movimientos parecieran encontrar de esa manera, más elementos para poder ocupar el «vacío», la «indeterminación», achicar (solamente en lo discursivo) el margen de *riesgos*; buscando traducir en respuestas inmediatas lo que satisfaga demandas más allá de las vías institucionales y constitucionales. Desde luego, el pensamiento que revigoriza la noción de populismo vinculada a una idea de democracia que revalorice el principio de igualdad y de la soberanía popular, dirá que el resurgimiento de las extremas derechas es una consecuencia natural del *falso consenso* del que nos hablaran autores como Jürgen Habermas o John Rawls, una especie de contrato que le daba entidad a la pospolítica alejada del conflicto. Así, la extrema derecha se podría revitalizar tomando como base la distinción que coloca a los partidos que defienden el establishment en un lado y a ellos mismos por fuera del sistema.

En ese marco, Mouffe cree que el populismo de extrema derecha tiene demasiadas herramientas liberadas por los consensualistas, para poder establecerse en tanto pueblo que se opone a un no–pueblo. El defensor del no–pueblo, parece ser precisamente el *establishment*, que explota trabajadores en un nivel aberrante al punto tal de poder reclutarlos por fuera de la sociedad política. A partir de allí, el populismo de derecha retoma elementos discursivos iliberales que les son fundantes, la xenofobia, la segregación étnica, el racismo. El pueblo del discurso de extrema derecha parece hundir raíces en un *momento populista* que le brinde fundamentos étnicos, nacionalistas ligados a la estructura económica de *escasez*.

Ante las preocupaciones legítimas por el ascenso de extremas derechas, creemos que hay que asumir que gran parte de los riesgos se encuentran en aplicación de recetas económicas neoliberales, y a la revalorización misma del *momento populista*, en el cual se asumen elementos que dejan de ser marginales, ligados a pasados que se creían remotos. Los problemas que el Estado constitucional de derecho de la posguerra vino a solucionar frente a una sociedad de masas iliberal, vuelven para ponerlo en cuestión. Esto conlleva riesgos. Con esto no queremos vincular (acaso como pueda hacerlo Finchelstein) al populismo con un «fascismo pero con elecciones»; pero sí podemos pensar que tras la crisis generada por el neoliberalismo y la asimilación del *momento populista*, se puede generar un discurso que retribuya derechos a los desaventajados, como también olas de extrema derecha que procuren precisamente quitarles (nuevamente) derechos a los desaventajadas.

La crisis de la democracia liberal conlleva riesgos originados por la indeterminación de la política contemporánea. En muchos casos, elementos propios de la política que debían ser solucionados con esa articulación entre la tradición democrática y la tradición liberal, no fueron tal. Los nuevos populismos de derecha no surgen de la nada y como un capricho de nacionalistas despechados durante la guerra fría o con la caída del muro.

Los llamados planteos políticos consensuales (Rawls, 2006*a;* 2006*b;* Yannuzzi, 2001), o deliberativos (Habermas, 1999; Habermas, J.; Rawls, J., 1998) permitirían encontrar acuerdos que canalicen conflictos en un sistema, con discursos políticos tendientes al centro (sobre todo expuestos en países con sistemas tradicionales y estables de partidos). En ese sentido, si bien no evitan el disenso —como parecieran sugerir autores como Mouffe (2003) o Luhmann (1998)—, sí creen poder sobreponerse ante las oposiciones radicalizadas en política, que existen y cobran relevancia en períodos de crisis. Las voces muy divergentes que parecían quedar puestas fuera del juego político, se unen para generar posturas disruptivas respecto del sistema institucionalizado. La democracia como fórmula de contingencia —y aquí pensamos más bien en la democracia liberal—, que nunca termina de cerrarse sobre sí misma (Kaipl, 2017) termina siendo blanco de embates radicalizados desde los extremos que parecieran ponerla en jaque a menudo.

Es imperante, entonces, poder enfrentar la seducción de los discursos de extrema derecha, la discusión podrá plantearse entonces en los términos de enfrentarlos con más *Constitución* o prolongando el llamado *momento populista*. Mouffe pareciera encontrar la falla del veredicto teórico liberal y deliberativo en ese gran riesgo; nosotros quisiéramos llamar la atención sobre el riesgo que comporta el mismo *momento deliberativo* en conjunto con el *momento popu-*

lista. Agrandar el margen de riesgo podría empujar cada vez más a las sociedades occidentales hacia la extrema derecha.

Con todo ello no queremos manifestar que la política no sea conflicto. Precisamente la política conlleva el conflicto de forma inherente. Pero, el consenso puede ser pensado no desde un acuerdo definitivo que cierre la historia, sino más bien desde la percepción de la existencia de canales canalizadores de las diferencias que nunca dejarán de existir (y está muy bien que así sea). Conflicto y consenso parecen ser ejes conceptuales sobre los que se centran diversas perspectivas de observación de los fenómenos sociales (Graciarena, 2016), dos tipos ideales, más que una negación integral del punto de vista opuesto. La historia parece caminar entre ambos. El acuerdo sobre ciertos elementos de forma básicos no debería implicar el erróneo veredicto del fin del conflicto en la sociedad contemporánea, es una respuesta abierta a nuevos conflictos. Respuesta compleja que le da vital validez a la pregunta de Georg Simmel, de *por qué la sociedad sigue estando integrada,*[1] a pesar del alto nivel de divergencia, conflictividad.

La nueva crisis de los elementos liberales de la democracia contemporánea no deposita en el *momento populista* en el cual se exhiben abiertamente el vacío, el conflicto, la contingencia. El punto de importancia crítica aquí radica en articular los elementos liberales junto con los elementos propios de la soberanía popular y evitar desigualdades sociales disruptivas. Cuando se canalizan institucionalmente los conflictos, la democracia, en construcción permanente, pareciera ser menos popular, más «lenta» y la constitución de un pueblo y de un no–pueblo se vuelve el elemento de riesgo por excelente. Elemento por el cual las izquierdas y las derechas que están fuera del sistema, cobrarían mayor relevancia.

La democracia se liberaliza y el liberalismo se democratiza (MacPherson, 1997), el núcleo problemático es poder detectar: ¿hasta qué punto esa tensión puede ser resuelta? ¿Es necesario creer que en algún punto la resolveremos? Creemos que la tensión no podrá ser resuelta (la propia Mouffe llama esto «el motor de la evolución política occidental»), es lo propio de la *democracia como fórmula de contingencia*, la *contingencia* indica que algo no es obligatorio. La resolución de la tensión no es *necesaria*, en el sentido de una predeterminación histórica, es decir, de ser de una manera determinada y no de otras posibles. La democracia nunca termina de ser (Quiroga, 2016) y guarda en ello un espíritu constitucional abierto y contingente. El *momento populista* parece demarcar un espacio en el que proclamas reaccionarias, chauvinistas,

1 Remontándonos a la pregunta parte aguas de la sociología alemana ¿cómo es posible la sociedad? *WieistGesellschaft möglich?* Ver también Luhmann (2009).

manifestarían poder cerrar la tensión constituyendo el núcleo de lo que es el pueblo, lo que necesita el pueblo y quiénes son el antipueblo.

Queremos ser explícitos en un punto que nos parece fundamental y que no siempre ha sido desarrollado de manera clara. Es el neoliberalismo el que avanza sobre los derechos que garantizan igualdad y participación de gran parte de la ciudadanía en decisiones fundamentales para nuestras democracias, no así los principios de liberalismo político (bien al contrario). La fuente de recursos discursivos de la extrema derecha en el momento populista, no se genera como una respuesta popular ante los derechos pensados por el liberalismo político sino más bien ante las desigualdades generadas por el avance del neoliberalismo económico y el bloqueo de canales por el cual se puedan responder a demandas populares. Probablemente la crisis del liberalismo sea la consecuencia iliberal y paradójica del triunfo del neoliberalismo.

No renunciamos a la propuesta conceptual de Chantal Mouffe, no rechazamos el momento populista y la sucesión casi natural del surgimiento de derechas que ponen en peligro a la democracia liberal, como un fenómeno ligado a crisis de principios liberales. Sí nos manifestamos en que probablemente los elementos que pongan en crisis para generar el *momento* sean los propios del neoliberalismo antes que los principios liberales. En ese sentido el avance por sobre los principios liberales que proponen respuestas sustancialistas de valores populares, en un momento de alto riesgo y volatilidad política, soluciones no constitucionales, parecen elevar la inminente llegada de principios que avancen por sobre otros derechos obtenidos luego de la caída de los fascismos a mitad del siglo xx. Las propuestas que se acerquen a la moralización de la política siempre elevan el nivel de riesgo hasta el punto de poner en riesgo a la democracia.

Problemas de moralización de la política

En este punto no nos proponemos a discutir si hay, en efecto, una moral de la sociedad (Luhmann, 2013), es decir un criterio imperante en un contexto dado según el cual la sociedad *estima* o *menosprecia* algo (un fenómeno, un actor, una acción, etc.). Lo que quisiéramos debatir es el punto en el cual el moralismo (y no la moral) vuelve a ser un actor relevante en la política y cuáles pueden ser los efectos que revitalicen a los movimientos de extrema derecha.

Se puede deducir que, siguiendo nuestro derrotero conceptual, siempre hay riesgo; y que la moral de la sociedad frente al riesgo que no cesa de generarse, no puede hacer otra cosa que cambiar de manera dinámica y constante. El proceso del incremento de la complejidad propio de la modernidad, impide

que un juicio moral puntual de una sociedad en un contexto particular, se cierre de manera definitiva; es contingente como la realidad que observa. Ante el cúmulo de incertidumbre, inseguridad, lo incierto (*Unsicherheit)*[2] que genera la imposibilidad de observar la realidad, el mundo de manera íntegra y el futuro, creemos que se puede alertar ante las posturas moralistas que proclaman respuestas unívocas a cuestiones demasiado complejas.

Desde nuestro punto de vista, el elemento que mueve a la política es el conflicto y las articulaciones que se dan para que las sociedades no se desintegren, son las que colaboran con los teóricos del consenso. Más allá de este movimiento dinámico, por momento pendular, ante momentos de alto riesgo, ante la realidad que no logra articular los intereses de gran parte de las poblaciones, el juicio moralizante re surge con más fuerza. Allí podríamos sintéticamente pensar en dos momentos del conflicto:

- Un primer momento, el del momento de la pospolítica, en el que surgen posicionamientos moralizantes por parte de quienes se llaman los buenos demócratas (planteos políticos tendientes al centro siguiendo a Mouffe) oponiéndose a la extrema derecha o a la extrema izquierda como los portadores del mal.
- Un segundo momento, el del momento populista. Ante la desprotección de gran parte de los ciudadanos, generada por políticas económicas de corte neoliberal, resurge la contraofensiva que intenta revertir el cuadro político pospolítico o despolitizado, más allá de los límites constitucionales.

En ese tándem, vemos una concordancia paradójica entre una postura moralizante de la pospolítica y una postura moralizante igualmente del populismo de derecha. En otras palabras, una postura moralizante que esperaba la llegada del «fin de lo político o del conflicto» y una postura moralizante que espera el retorno de la «politización íntegra de la sociedad».

La articulación de los dos momentos se daría de la manera siguiente:

1) El *consenso* de centro tiene que establecer en algún punto un límite de lo que ingresa y lo que no tiene que ingresar en el juego político. El aspecto paradójico es negar la radicalidad como antidemocrática. En esa posición, existe una construcción de un *ellos* demonizado, una manera demasiado generalizada e indeterminada para poder agrupar en un *ellos* moralmente reprochable diversos grupos con objetivos e intereses muy diferentes. Un ejemplo de esto puede ser lo que podemos ver de manera indiferenciada, la acusación de *populismo*, sin definir con matices, que por momentos parece definir todo, por momentos parece no definir nada.[3]

---

2 Acerca de las diversas acepciones de incertidumbre o inseguridad. Ver Bauman (2001).

3 La visión meramente despectiva del populismo: «que el populismo es vago e indeterminado tanto en el público al que se dirige y en sus discursos, como en sus postulados políticos… que el populismo es mera retórica» Laclau (2008).

Desde el momento en el que una postura se pueda plantear como no–conflictiva en política, cerrando las diferencias, coincidimos con Chantal Mouffe en que aumenta el riesgo de desintegración; porque puede agobiar al pluralismo, estableciendo un *nosotros portadores del bien* y un *ellos portadores del mal*. Esa frontera entre los buenos demócratas y los malos de la extrema derecha es cómoda, pero no hace otra cosa que aumentar el riesgo, porque hay una parte no menor de la población que devienen «enfermos morales», condenables y se intenta negarles su existencia política.

> A partir del momento en el que lo político deba transformarse en no–conflictivo, el «ellos» necesario para hacer de «nosotros» los buenos demócratas, no puede ser figurado como un adversario político, en tanto la frontera debe ser edificada en el registro moral. El establecimiento de una frontera entre los buenos «demócratas» y la «mala extrema derecha» es muy cómoda porque permite considerar al «ellos» como una especie de enfermedad moral, que debe ser condenada moralmente y no combatida políticamente. (Mouffe, 2002:183)[4]

En ese sentido, a medida que se los moraliza, se los despolitiza. Se los expulsa fuera de la arena política y se hace imposible la deliberación en los términos de la democracia liberal misma. La moralización de lo político se vuelve un fenómeno negativo porque es denunciador del mal inherente a la constitución del otro (y aquello que le dé un valor ontológico a la caracterización del *otro* desconoce la contingencia propia del mundo moderno).

Este aspecto contribuye, al mismo tiempo, a negar la posibilidad de interpelar al *otro*, ese otro compuesto por ciudadanos presentados como enemigos del régimen, portadores de una inmoralidad que deben ser negados en el terreno político. Negar el conflicto, despolitizando una parte de la sociedad con la herramienta del moralismo, pudo dar como resultado el *revival* de su oposición radical a través de la politización de diversas esferas a través de la moralización. De esa manera, como no se puede erradicar el conflicto en la sociedad moderna, a través de la moralización; el conflicto vuelve con fuerza moralizadora a ocupar la centralidad en la política. Así, diversos elementos que parecían superados, como el racismo, la segregación étnica, la xenofobia, que

4 À partir du moment où le politique est censé être devenu non conflictuel, le «eux» nécessaire pour faire du «nous» des bons démocrates ne peut pas être figuré comme un adversaire politique, si bien que la frontière doit être édifié dans le registre moral. L'établissement d'une frontière entre les «bons démocrates» et la «mauvaise extrême droite » est très commode puisqu'il permet de considérer le «eux» comme une sorte de maladie morale, qui doit être condamnée moralement et non pas combattre politiquement. En Mouffe, (2002:183) nuestra traducción.

caracterizaban a los *malos antidemocráticos,* se cuelan en discursos de extrema derecha que suman votos en las democracias occidentales.

2) Al *segundo momento*, podríamos llamarle populista, no para desdeñarlo sino retomando la idea de algunos de sus autores principales, como Chantal Mouffe o Ernesto Laclau.[5] En él, el registro indeterminado de lo conceptual no impide la apelación al moralismo que hizo surgir el momento pospolítico anterior. Al haberse introducido el registro del moralismo en la política, la democracia gana en riesgos, y desmonta aspectos que tienen que ver no solo con la diferenciación funcional de la sociedad sino también con el resguardo de las libertades individuales. El juego político que expone el riesgo de la despolitización anterior y la repolitización actual, podría reemplazar a los *buenos demócratas* por el *pueblo patriótico*, y a los *malos antisistema* por los *antipatrias*. El juego no se desmoraliza, sino que invierte la carga y esto da el margen necesario para que puedan surgir líderes de extrema derecha anticonstitucional que apelan a la emoción de ser parte de un pueblo que tiene que combatir al *ellos* compuesto por el antipueblo. La definición moral del *otro* no cesa de incrementar el riesgo.

En esta construcción conceptual, reconocemos un gran valor en el aporte del agonismo de Mouffe (2014); repensar al enemigo como adversario político, pero se hace difícil pensar que, justamente, el momento populista no sea una fuente de la que se inspiran movimientos de extrema derecha para demonizar al adversario, sobre todo liberal. Y todo ello porque, precisamente, el modelo político conflictivo lejos de revertir el proceso de moralización de lo político, se pudo servir de ello para poder combatir un sistema (propio del Estado constitucional de derecho a veces) desde el entorno. Entorno en el que fue puesto por las teorías consensuales de centro probablemente; pero del que se sirven argumentando que el pueblo fue puesto fuera del sistema y sus luchas contra la democracia liberal los va a devolver.

En síntesis

Probablemente las posiciones de extrema derecha le deban mucho a las teorías que evitaban hablar de conflicto en política y que lograron imponer principios neoliberales desde finales de la década del '70 hasta aquí. El posicionamiento

---

5 Que la vaguedad (del populismo) y la indeterminación no constituyen defectos de un discurso sobre la realidad social, sino que, en ciertas circunstancias, están inscriptas en la realidad social como tal… que la retórica (respecto del populismo) no es algoepifenoménico respecto de una estructura conceptual autodefinida, ya que ninguna estructura conceptual encuentra su cohesión interna sin apelar a recursos retóricos. Así el populismo sería la vía a través de la cual podríamos comprender la constitución ontológica de lo político. Laclau (2008).

radicalizado, la excesiva generalidad para concebir un *pueblo* que se enfrenta a un *no–pueblo* dentro de la misma sociedad, la moralización de la política. Se han negado derechos, se ha dado lugar a la generación a excesivos resentimientos en grandes grupos de personas que vuelven con la misma fuerza con la que fueron dejados de lado. Por otro lado, vemos resurgir aspectos propios de las sociedades de masa, ante la apatía política que parecía triunfar en el momento pospolítico, vemos revitalizarse la movilización enérgica de las pasiones.

Los líderes de la extrema derecha pueden, justamente en nombre de la libertad y la dignidad del pueblo, manipular diversas formas de resentimientos en contra de quienes proclamaban una neutralidad inexistente. Ante procesos presumible despolitización, de liberalización de la economía que atentan contra derechos de los trabajadores, ante el aumento del desempleo, la privatización de las empresas públicas, el triunfo del saber técnico por sobre el saber político,[6] el advenimiento del gobierno de empresarios,[7] que dejan sus negocios privados para pasar a la política, surge como lectura de sus consecuencias negativas, una perspectiva reivindicativa de la soberanía popular que puede apelar a la restitución de derechos, pero también puede apelar al chauvinismo, a la xenofobia, o a la voz de los despojados.[8] Ese crecimiento del riesgo, es el instante preparatorio para el surgimiento del discurso de la extrema derecha.

La estrategia discursiva del líder de derecha en un momento populista, echa a rodar algunos elementos que responden al primer momento pospolítico, el llamado a la manifestación de un «nosotros los buenos» defensores de valores nacionales, ligados a la religión algunas veces, a una etnia, excluyente del «ellos los malos» (ligados a otra etnia, religión, los de izquierda, los socialdemócratas). Al mismo tiempo, tenemos que decir que la construcción del espacio público gana en intensidad en el mundo contemporáneo. No queremos decir que antes no haya tenido irritaciones complejas y diversas todo el tiempo; sino más bien que los mecanismos a través del cual irritamos y somos irritados por los demás, se manifiestan en un relato permanente a través de las nuevas tecnologías. La potencialidad de la fabricación de las voluntades temida por Joseph Schumpeter, no solo masifica sino que atomiza.

---

6 En Argentina está muy bien trabajado el ejemplo del Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, ver Souroujon (2014).

7 En el caso de Mauricio Macri, no podemos hablar de grandes empresarios; se instaló la idea de la CEOcracia con algunos directivos de compañías con poder de lobby quizás, pero sin una dilatada trayectoria en el sector privado.

8 En Austria, Jörg Haider apelaba a los *hombrecillos* (*kleiner Mann*) a destronar al establishment que manipulaba los intereses de la Austria tradicional, por ejemplo.

Se puede, entonces, generar un espacio no esperado por la democracia liberal para el combate político; espacio del que surgen voces que condenan a la mismísima democracia liberal por haberlas condenado como antidemocráticas. Un nuevo lugar para la indignación moral radicalizada en Europa, en América Latina, de manifestaciones de cuadros comparables y de alianzas inestables. Todo ello acompañado de un juego en la prensa también, que tiene rol militante (nunca fue neutral pero por momentos guardaban las formas de la objetividad) que encuentra por momentos nuevos diablos a los que demoniza, ataca, y cumple con un rol de confirmación de los prejuicios más íntimos.

Los mecanismos que venimos mencionando a lo largo del texto, y que dan cuenta de los tres momentos que mencionamos rápidamente al principio del mismo, no solo socavan principios liberales sino que también generan un espacio de fortalecimiento de la apelación a la emotividad. Lo no racional es inherente a la política de manera evidente (Michels, 1984; Mosca, 1984; Pareto, 1987; Weber, 1992), de todas maneras hay que llamar la atención la intensidad que toma en períodos en los que el liberalismo político comienza a colapsar. Así como con el surgimiento de la sociedad de masas a fines del siglo XIX, tras una caída en la confianza en el liberalismo, el avance de la economía neoliberal socavando diversos tipos de sostén social; el surgimiento del *momento populista*, y el florecimiento de derechas extremas, la emotividad cobra nuevamente una fuerza inesperada. Es una manera de poder generar la idea de un nosotros unidos más allá de la razón, muy eficaz para movilizar pasiones y de generar una consciencia colectiva de un nosotros que excluirá irremediablemente al otro diferente.

Vemos entonces como un proceso en tres momentos que pone en cuestión a los principios liberales en la democracia contemporánea. Proceso que comenzó con la *negación* retórica del conflicto en política, con una pretendida aunque ficticia despolitización de la sociedad, con una moralización neutral (solo en teoría desde luego) de aspectos políticos, neoliberalismo económico atacando derechos de trabajadores, etc.; hecho que pareció engendrar manifestaciones bien diferenciadas. Esas nuevas manifestaciones marcaron una ola de repolitización que generó un espacio del que pueden surgir movimientos que se apoyan en lo igualitario y en lo popular, horadando nuevamente el espacio de los principios liberales. A partir de allí, y asentado en varios elementos provenientes de las dos instancias anteriores (la moralización, el cuestionamiento al liberalismo, la apelación a las emociones, etc.) se genera ese espacio para el surgimiento de extremas derechas que reivindican cuestiones conservadores y retorno al origen, que quisieron ser tapadas por las primeras dos etapas de este proceso.

Podemos decir que cada una de las manifestaciones triunfantes momentáneamente, contribuyó a generar un movimiento radicalmente opuesto al liberalismo presente en las democracias contemporáneas. Su consecuencia es el aumento de los riesgos de la vuelta de una extrema derecha que se creía erradicada en las democracias occidentales. El *vacío* que puede perfectamente ocupar una nueva tradición de demagogos de la extrema derecha, diría Chantal Mouffe, que dan lugar a voces que manifiestan *miedo*, resentimientos, una cadena de equivalencias (en términos de Laclau) de tinte conservador que viene a combatir de manera feroz y moralista a una cadena de equivalencias que se da en el campo progresista.

Referencias bibliográficas

Aboy Carlés, Gerardo (2002). Repensando el populismo. En *Política y gestión.* Homo Sapiens.

——— (2010). *Las dos caras de Jano: acerca de la compleja relación entre populismo e instituciones políticas* (pp. 21–40). Pensamiento plural.

Aramburu, Leandro; Kaipl, Esteban (2013). ¿Luhmann o Beck? Sobre el riesgo en la sociedad mundial, en colaboración con Leandro Aramburu. *X Conferencia de Sociología de la UBA, 20 años de pensar y repensar la sociología, Buenos Aires.* Recuperado en http://sociologia.studiobam.com.ar/wp–content/uploads/ponencias/1481.pdf

Beck, Ulrich (1998). *La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad.* Paidós.

Beriain, Josetxo (Comp.) (1996). *Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo.* Anthropos.

Franzé, Javier (2017). La trayectoria del discurso de Podemos: del antagonismo al agonismo. *Revista Española de Ciencia Política (*44), 219–246.

Fanzé, Javier (2018). *Populismo y discurso anti–populista,* Recuperado en http://lalibertaddepluma.org/javier–franze–populismo–y–discurso–anti–populista/

Finchelstein, Federico (2014). *Orígenes ideológicos de la guerra sucia. Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX.* Sudamericana.

——— (2018). *Del fascismo al populismo en la historia.* Taurus.

Germani, Gino; Di Tella, Torcuato Ylanni, Octavio (1973). *Populismo y contradicciones de clases en Latinoamérica.* Serie Popular Era.

Germani, Gino (2003). *Autoritarismo, fascismo y populismo nacional.* Temas.

Graciarena, Jorge (1976). *Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina. Apéndice I* (pp. 257–268). Paidós.

Habermas, Jürgen (1999). *La inclusión del otro. Estudios de Teoría Política.* Paidós.

Habermas, Jürgen; Rawls, John (1998). *Debate sobre el liberalismo político.* Paidós.

Kaipl, Esteban (2017). Riesgo y política en la teoría social de Niklas Luhmann. Un enfoque sobre el riesgo en la sociedad–mundo contemporánea. En Olivan López, F. (Ed.). *Aproximación al concepto de globalización y de los derechos humanos en la obra de Niklas Luhmann.* Dykinson.

Laclau, Ernesto (1978). Hacia una teoría del populismo. En *Ernesto Laclau, Política e ideología en la teoría marxista. Capitalismo, fascismo, populismo (*pp. 165–233). Siglo XXI.

——— (2008). *La razón populista.* Fondo de Cultura Económica.

Lefort, Claude (1990). *La invención democrática.* Ediciones Nueva Visión.

Luhmann, Niklas (1998). *Sistemas sociales, lineamientos para una teoría general.* Anthropos.

——— (1992). *Sociología del riesgo.* Universidad Iberoamericana.

——— (2009). *¿Cómo es posible el orden social?* Herder.

——— (2013). *La moral de la sociedad.* Trotta.

Macpherson, Crawford Brough (1997). *La democracia liberal y su época.* Alianza Editorial.

Michels, Robert (1984). *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna.* Ed. Amorrortu.

Morresi, Sergio (2008). *La nueva derecha argentina: la democracia sin política.* Universidad General Sarmiento, Biblioteca Nacional.

Morresi, Sergio; Vicente, Martín (2019). El ocaso del macrismo, Entre liberalismo y neoliberalismo. *Revista Nueva Sociedad*. Recuperado en: https://nuso.org/articulo/liberalismo–cambiemos–kircherismo–macri–neoliberalismo/

Mosca, Gaetano (1984). *La clase política.* Fondo Cultura Económica.

Mouffe, Chantal (2002). La «fin du politique» et le défi du populisme de droite. En R*evista La Découverte, Revue du MAUSS.* Recuperado en https://www.cairn.info/revue–du–mauss–2002–2–page–178.htm %7C

——— (2003). *La paradoja democrática.* Gedisa.

——— (2014). *Agonística, pensar el mundo políticamente.* Fondo de Cultura Económica.

——— (2016). Podemos: El momento populista. En *Diario El País, 9 de junio de 2016.* Recuperado en https://elpais.com/elpais/2016/06/06/opinion/1465228236_594864.html

Pareto, Vilfredo (1987). *Los sistemas socialistas.* Alianza.

Peruzzotti, Enrique (2008). Populismo y representación democrática. En De La Torre C., Peruzzotti, E. (Eds.).*El retorno del pueblo. El populismo y las nuevas democracias en América Latina.*FLACSO.

Quiroga, Hugo (2005). *La Argentina en emergencia permanente.* EDHASA.

——— (2010). *La República desolada: Los cambios políticos de la Argentina (2001–2009).* EDHASA.

——— (2016). *La democracia que no es, Política y sociedad en la Argentina (1983–2016).* EDHASA.

Rawls, John (2006 a). *Teoría de la Justicia.* Fondo Cultura Económica.

——— (2006 b). *Liberalismo político.* Fondo Cultura Económica.

Souroujon, Gastón (2014). *El peronismo vuelve a enamorar. La articulación de un imaginario político durante el gobierno de Menem.* Homo Sapiens.

Vilas, Carlos (2003). ¿Populismo reciclado o neoliberalismo a secas? El mito del «neopopulismo» latinoamericano. *Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales,* 13–36.

Weber, Max (1992). *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva.* Fondo Cultura Económica.

Yannuzzi, María de los Ángeles (2001). El concepto de autonomía en las teorías de Rawls y de Habermas. *Estudios sociales, Revista Universitaria Semestral 21,* 151–173. Universidad Nacional del Litoral.

Zanatta, Loris (2016). *El populismo.* Katz.

Convergencias inesperadas de las derechas políticas

Sergio Daniel Morresi

En el sentido común está instalada la idea de que a América Latina todo llega con retraso, desde los bienes de consumo a las modas culturales, pero lo cierto es que hay áreas en las que el subcontinente ha sido pionero; así lo atestiguan multitud de invenciones (del avión a la píldora anticonceptiva) y la temprana instalación del neoliberalismo que tuvo su debut práctico en la dictadura del Gral. Augusto Pinochet, años antes de que comenzara a desplegarse la llamada revolución conservadora de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Señalar el carácter precursor del neoliberalismo chileno viene a cuento de resaltar algo que trabajos recientes sobre el avance de las derechas llamadas «extremas» parecen pasar por alto: desde sus inicios prácticos, el neoliberalismo tuvo una cierta afinidad electiva con formas reaccionarias, autoritarias y represivas. Esa afinidad que para muchos latinoamericanos resultó siempre obvia se perdió de vista cuando —de modo bastante comprensible— la crítica académica al neoliberalismo se concentró casi de modo exclusivo en sus aspectos económicos y se puso un énfasis —probablemente desmedido— en el modo en que podía convivir con valores progresistas, tal como sucedió durante en Estados Unidos durante los gobiernos de Bill Clinton y Barak Obama, en la Inglaterra del Nuevo Laborismo o en Francia donde el partidos socialista optó por la «tercera vía» antes de que Giddens la comenzara a modelar teóricamente (Giddens, 1999; Mudge, 2018).

Sin embargo, ya sobre el final del primer cuarto del siglo XXI se ve como la conjunción entre el neoliberalismo y lo que algunos analistas llamaron derechas «duras», «extremas» o «antisistema» (Ignazi, 2006) vuelve a estar en primer plano. Desde Colombia a Polonia, hay gobiernos, la mayoría de los cuales llegaron por el voto popular, que impulsan un orden con rasgos de intolerancia, aristas chauvinistas (sin excluir la xenofobia o incluso el racismo) y que apelan a un antiizquierdismo en forma de pánico rojo. Varias de estas derechas a las que recientemente se ha dado en llamar «nacionalpopulistas» (Eatwell y Goodwin, 2019) y que otros prefieren «alternativas» (Hawley, 2017; Main, 2018) se declaran contrarias a la tradición liberal, la globalización económica y cultural y apelan al repertorio populista. Sin embargo, como lo muestran con claridad las administraciones de Donald Trump y Jair Bolsonaro, la cercanía de algunos gobiernos derechistas a este repertorio no les impide continuar desarrollando un orden coincidente con el proyecto neoliberal, es decir fomentando la primacía de la libertad negativa, una visión positiva de la des-

igualdad «económica y procurando un Estado que activo que mercantiliza de espacios, sujetos, bienes y actividades» (Plehwe, Walpen y Neunhöffer, 2005).

Así, dos tradiciones que en algunos países parecen enfrentadas (como sucede en Alemania o Francia) se muestran convergentes en otras latitudes (por ejemplo, en Brasil o Estados Unidos). Pero el hecho de que dos corrientes políticas se crucen no implica que sean la misma cosa o que quepa considerarlas como rostros de un solo emprendimiento. El neoliberalismo no es apenas un eufemismo para referirse al sistema capitalista y el nacionalpopulismo es más que un instrumento del que se sirve estratégicamente una burguesía clarividente y cínica. Por eso, para los fines de este trabajo, conviene tratar a estas dos derechas por separado. Sin embargo, antes de ello, será necesario clarificar qué entendemos por derecha.

El campo de la derecha

Derecha e izquierda designan a opuestos políticos que no solo están alineados como puntos alejados de una recta, sino que adquieren un carácter corpóreo, tridimensional, y que parecen funcionar de una forma similar a la de los campos magnéticos, para la metáfora de Bourdieu y Wacquant (2005). Así, como campos, son configuraciones relacionales dotadas cada una de una gravedad específica que se impone a sus propios componentes e influye y repele a los elementos externos. En este sentido, son espacios de interacción, competencia y conflicto formados por los actores y sus prácticas, es decir por personas que usan recursos para sustentar posiciones. En el caso del campo de la derecha, las posiciones resultan de procesos de comprensión e identidad que se ponen en funcionamiento como una serie de rechazos concretos, geográfica y temporalmente situados, a innovaciones políticas, sociales, económicas, jurídicas o culturales de carácter igualitario o inclusivo que son percibidas como una desposesión (Bobbio, 1995; Lipset y Raab, 1981; Hirschman, 1991).

Los procesos de identidad/comprensión implican la exclusión de al menos un concepto que sirve como exterior constitutivo, permitiendo el trazado de una frontera y la identificación de los que están afuera y los que están adentro. Esta exclusión permite que una idea (o conjunto de ideas) se erija en anatema de eso que ha sido rechazado y se monumentalice como mito fundante capaz de explicar acciones pasadas y justificar elecciones presentes y planes futuros (Laclau, 1996). Así, por ejemplo, para el caso del liberalismo–conservador argentino, el concepto excluido fue el de populismo mientras que la idea de república se transformó en el mito fundante (Morresi, 2011).

Prestar atención a las articulaciones de exclusión/mistificación torna más sencillo el ejercicio de identificar sociohistóricamente (Offerlé, 2011; Noirel, 2017) corrientes o familias de derecha, es decir, grupos de actores que comparten redes, ideas, prácticas, espacios de socialización, memorias y lenguajes (como lo hizo Rémond, 2007 con las derechas francesas). Así, en el campo de la derecha de cada país o región, distintas vertientes o tradiciones (como por ejemplo, liberales, conservadores, fascistas, nacionalistas de derecha) pueden competir entre sí, a veces de modo descarnado, pero también son capaces de actuar de forma solidaria, llegando a acuerdos o incluso a fusiones que, en el origen de cada grupo, hubieran sido impensables (véase Nash, 1987, cap. 6).

Para los fines de este trabajo, vamos a centrarnos en dos corrientes de derecha (la neoliberal y la nacionalpopulista), pero desde una perspectiva más general, poniendo el énfasis en los «complejos ideológicos» (Freeden, 2008) que les sirven de núcleo y en sus repertorios recurrentes (Alexander, 2011). Este abordaje es menos preciso y rico, pues pierde de vista diferencias nacionales de una misma familia y no permite el análisis de los actores y su devenir a lo largo de un período extenso de tiempo. A pesar de estos problemas, el enfoque es adecuado para la meta propuesta y el espacio disponible; a partir de trazos gruesos será posible ver tanto las diferencias como lo compartido por el neoliberalismo y el nacionalpopulismo.

La derecha neoliberal

El término neoliberalismo ha sido sometido a fuertes controversias, se lo ha definido y redefinido y se ha negado que designe efectivamente a un fenómeno. La idea de que «el neoliberalismo no existe» es compartida por un amplio espectro político que incluye tanto a quienes son señalados como neoliberales como a algunos de sus detractores (Morresi y Vicente, 2019). Esto no deja de resultar curioso porque, a pesar de estas reticencias, parece haber acuerdo en reconocer un determinado grupo de actores, prácticas y metas como pertenecientes al neoliberalismo. Así, tanto en la prensa científica como en la popular es común que se señale el carácter neoliberal de un amplio y variado elenco que incluye un cuerpo de autores académicos como el estadounidense Milton Friedman o el austriaco Friedrich Hayek, a líderes políticos como el argentino Álvaro Alsogaray o el chileno Sebastián Piñera y a figuras culturales como el peruano Mario Vargas Llosa o el francés Jean–François Revel. También parece existir unanimidad en identificar como características de quienes impulsan al neoliberalismo la recurrencia a ciertas prácticas, como por ejemplo, el privilegiar la «batalla de las ideas» por sobre las pugnas partisanas y, en

consecuencia, privilegiar la organización reticular de fundaciones, centros de estudios y *think tanks*. Finalmente, con respecto a qué es lo que buscan los neoliberales, cuáles son sus objetivos, hay menos consenso, pero al menos se coincide en afirmar que una de esas metas es la de procurar de forma activa la mercantilización de espacios, sujetos, bienes y actividades.

Pese a todo, hay quienes, en el mundo académico, aseguran que el neoliberalismo es un concepto incoherente, con significados contradictorios y que eso hace imposible arribar a una definición en toda regla y, por lo tanto, debería dejar de utilizarse, ya sea por razones estrictamente académicas (Venugopal, 2015) o por motivos más relacionados a la política (Dunn, 2017 sugiere que su uso genera un efecto de encerramiento que acarrea descrédito a las perspectivas críticas). Pero hacer a un lado la palabra neoliberalismo no tiene más sentido que dejar de usar vocablos como conservadurismo o liberalismo. Todos los conceptos políticos son controversiales y es lógica la existencia de discrepancias. De lo que se trata en todo caso es de clarificar la definición puesta en juego para evitar que la falta de precisión lleve a malentendidos (así como se suele decir liberalismo político en el sentido de Rawls o republicanismo en el sentido de Maquiavelo). Sin embargo, es preciso reconocer que el uso del concepto «neoliberal» encierra al menos dos dificultades adicionales.

La primera dificultad es que, salvo contadas excepciones (Peck, 2018), los propios actores no aceptan calificarse como neoliberales y prefieren rotularse como «liberales clásicos» (Hayek, 2011:527) o «nuevos liberales» (Alsogaray, 1969). En principio esta resistencia no debería ser particularmente problemática; después de todo, no se dejó de usar el término neoconservador aun cuando fueron pocos los que así se autodenominaron (Kristol, 1986:91–96). Además, a menos que se esté haciendo una etnografía, no parece una obligación del analista el amarrarse apenas al uso de categorías nativas; para la mirada sociohistórica las palabras de los protagonistas son fundamentales a la hora de comprender al sujeto que se va a analizar, pero no son las únicas disponibles. En este punto, claro, debe tenerse la precaución de estudiar los usos del término por parte de otros grupos, así como los motivos de la reticencia de los actores para autodenominarse con él (buenas aproximaciones sobre la ambivalencia conceptual y la reticencia para servirse de la palabra neoliberal las encontramos en los trabajos de Cockett, 1994; Doherty, 2007; Mirowski, 2014).

La segunda dificultad consiste en que especialistas reconocidos por sus contribuciones en el campo de las ciencias sociales han popularizado concepciones del neoliberalismo que, a la luz de los análisis más detallados, resultan equívocas. De un lado, ciertas posiciones neomarxistas insisten en que el neoliberalismo implica ante todo la imposición de la economía neoclásica, el «fundamentalismo del mercado», el combate contra todas las políticas de bienestar

y la retirada del Estado para que impere el *laissez faire* (por ejemplo, Harvey, 2005:20–21; Saad–Filho y Johnston, 2005:10–11). Del otro, algunos seguidores de Michel Foucault describen al neoliberalismo como una racionalidad política omnipresente, que permea todos los ámbitos sociales y culturales, de modo que nada queda por fuera de ella y tampoco hay un espacio particularmente relevante desde el cual se despliegue la técnica de distanciamiento que le sería propia. En esta segunda visión la «retirada del estado» sería en sí misma una técnica de gobierno, de modo que el neoliberalismo sería tanto una desgubernamentalización del propio Estado como una gubernamentalización de los otros ámbitos de la vida (Barry; Osborne y Rose, 1996:10–12; Miller y Rose, 2013:80–82).

¿Qué es lo que podría considerarse desacertado de estas visiones? Ante todo,[1] que pierden de vista aquello que, según los propios neoliberales, los distingue del liberalismo anterior (aquello que en algún momento los llevó a autodenominarse como neoliberales, cf. Friedman, 1951). Ese rasgo distintivo y fundamental es el rol activo (no pasivo, no ausente, no distante) que los neoliberales le adjudicaron al Estado, desde los inicios del movimiento en el período de entreguerras hasta la actualidad y tanto en el centro de los debates teóricos de la Sociedad Mont Pèlerin como en las discusiones políticas en América Latina. Tal como se ha observado desde el prisma de la historia (Mirowski y Plehwe, 2009) y la sociología (Wacquant, 2010, 2012), uno de los elementos fundamentales para entender al proyecto neoliberal es el papel que se le adjudica a la acción del gobierno que debe intervenir de manera constante en la vida social y económica para lograr que el mercado realmente existente sea lo más parecido posible al mercado ideal de competencia perfecta. Así, como decía el político argentino Álvaro Alsogaray (1969:15–16) se trataba de dejar de lado el *laissez faire* para asegurar el *laissez passer*. Esto queda más claro aun cuando se le presta atención a Hayek (2013:62, 2011:340), para quien la tarea no consistía en apoyar a la «libre empresa» o la «economía de mercado», sino instituir un «orden libre» bajo el imperio de la ley, un sistema político que hiciera imposible que las personas eligiesen el «camino de la servidumbre», es decir, del socialismo en cualquiera de sus formas (Hayek, 2005).

Dicho de otro modo, el objetivo de los neoliberales no es (nunca fue) que el Estado deje de intervenir, sino que intervenga (mucho y muy extensamente) de un modo «conforme al mercado» (Alsogaray, 1981:12), lo que se traduce

1 Decimos «ante todo» porque tanto las perspectivas que ponen el énfasis en la «retirada del Estado» como algunas de las centradas en la gubernamentalidad tienen otros problemas sobre los que no vamos a tratar aquí (desde su visión acerca de la economía neoclásica hasta el rol de los mercados como dispositivos y no como áreas de agencia de actores empoderados por el propio Estado).

en leyes y marcos de comportamiento para los ciudadanos (Hayek, 2011:489) que impidan que la política (o sea los deseos de una mayoría o de minorías intensas) se impongan a ese orden libre (Buchanan, 1975:107; 1982). En este sentido, el orden neoliberal no es la suma de recetas económicas (como las privatizaciones promocionadas por el Consenso de Washington, cf. Williamson, 1990, 2008) sino un conjunto de propuestas políticas, morales e institucionales orientadas a quitar capacidad de acción a las partes de la ciudadanía que podrían poner en peligro el desarrollo del mercado, ya sea estableciendo regulaciones «corporativistas», impidiendo que se desplieguen procesos de mercantilización de bienes o servicios o exigiendo una igualdad social que dejaría sin efecto al sistema de premios y castigos necesario para generar competencia.

Junto a la idea de intervención del Estado para apuntalar sistemáticamente al mercado, se destaca otra cuestión central para el neoliberalismo: la promoción de la desigualdad social y económica. Para algunos liberales clásicos, la igualdad de derechos civiles y políticos terminarían provocando eso que hoy llamamos igualdad social. Para otros, en cambio, la iniquidad iría a perdurar; estimaban que siempre habría diferencias entre los de arriba y los de abajo aun cuando los hijos de los que hoy ocupan un lugar subalterno pudieran elevarse mañana y descendiese la progenie de quienes hoy estaban en la cúspide. Ni los liberales que veían a la desigualdad como algo pasajero ni los que la creían ineluctable la observaban con alegría; para ellos la igualdad era valiosa. Sin embargo, sucede lo contrario para los neoliberales. Desde su perspectiva, una sociedad igualitaria en sentido económico es factible, pero indeseable. ¿Por qué? Porque, para pensadores como Milton Friedman, Friedrich Hayek o George Stigler la desigualdad es precondición de la competencia y la competencia es un requisito para la innovación y el crecimiento. Solo en sociedades con jerarquías, los individuos tienen incentivos para competir por llegar a las posiciones más elevadas y de esa manera estimular el desarrollo económico y cultural del conjunto (Friedman y director Friedman, 1990:91–124; Hayek, 2013:448–452; Stigler, 1984). Ahora bien, en la óptica neoliberal, para instaurar desigualdades allí donde no las hay y mantenerlas en pie en los espacios en que la ciudadanía elige combatirlas, es fundamental que el Estado actúe regulando o desregulando y poniendo límites a lo que se puede decidir por vía de la acción política (Buchanan, 1982).

Una vez que estas ideas quedan claras, pasa a carecer de importancia que otros aspectos del neoliberalismo sean objeto de controversia, si corresponde analizarlo desde una visión sociocéntrica o estadocéntrica, si obedece o no a la lógica polanyiana del doble movimiento, si la idea de libertad negativa es su piedra fundamental o apenas un accesorio estético, si Foucault tenía o no razón al centrarse en las tecnologías del yo, o si el enemigo del neoliberalismo es solo el socialismo

o también el liberalismo igualitario.[2] Lo que sí interesa es comprender que el neoliberalismo no es un fenómeno económico, sino un proyecto político que tiene (como todo proyecto político relativamente exitoso) consecuencias en la economía, en la cultura, en el tejido social, en los comportamientos.

La derecha nacionalpopulista

Si el término neoliberalismo esulta controversial, lo que sucede con la noción de «populismo» es aún más problemático. Para los fines de este trabajo no vale la pena detenerse en las amplias e interesantes discusiones alrededor del término que vienen floreciendo en los últimos años.[3] Conviene simplemente exponer que coincidimos con varios analistas en comprender al populismo como una lógica (una estrategia o una forma de hacer) política que no está anclada en un tiempo o espacios específicos, que puede desplegarse tanto en el campo de la derecha como el de la izquierda y a la que es posible caracterizar por la presencia de un conjunto de elementos de índole ideológica y sociocultural.

Como afirman Mudde y Rovira Kaltwasser (2017:6), el populismo puede definirse, por un lado, como «ideología delgada» o débil según la cual la sociedad puede ser dividida en dos campos a los que se supone internamente homogéneos y mutuamente antagónicos, el de los amigos (el pueblo puro y virtuoso), de un lado, y el de los enemigos (la elite corrupta) del otro. Sin embargo, como apunta Ostiguy (2017:73) el populismo también puede ser observado como un clivaje sociocultural que puede ser políticamente activado en determinadas circunstancias. De acuerdo con el politólogo canadiense, cuando se activa el populismo, se produce una fractura que es independiente de la que divide a derecha e izquierda y por eso podría ser vista como la división entre lo bajo (caracterizado por la orientación a seguir liderazgos personales y a celebrar la cultura popular y plebeya) y lo alto (inclinado por una autoridad impersonal, legalista y procedimental y por un comportamiento social elitista). Si bien se trata de aproximaciones distintas, no son incompatibles entre sí y es factible considerarlas de modo conjunto como lo hace, por ejemplo Casullo (2019).

Dependiendo cómo se defina al pueblo y a la elite podemos ver la orientación hacia la izquierda (cuando la concepción de pueblo está en construcción y es inclusiva y se supone una elite impersonal y reformable) o hacia la

2 Un repaso general de esas y otras discusiones relevantes pueden encontrarse en Cahill; Cooper; Konings y Primrose (2018).

3 Es imposible listar siquiera los trabajos más importantes en los que se discute el concepto. Para una introducción de la discusión, véase la primera parte de Rovira Kaltwasser; Taggart y Ostiguy (2017).

derecha (cuando la idea de pueblo es cerrada, excluyente y la elite está definida de un modo fijo y unívoco).

Los populismos que se inclinan hacia la derecha suelen identificar al pueblo con una idea de nación fosilizada por razones étnicas, religiosas, históricas, o culturales o una combinación de esos elementos (de allí el nombre de nacionalpopulismo). Asimismo, tienden a establecer como elites enemigas de ese pueblo a quienes están social, política o económicamente en desventaja, sobre todo cuando se trata de colectivos que no aceptan una situación de subordinación plena (por ejemplo, inmigrantes que usan servicios públicos, trabajadores que intentan formar un sindicato, grupos que resisten la asimilación cultural) y también a aquellos de los suyos a los que considera «traidores» por defender a esos sectores (por ejemplo, a intelectuales y líderes políticos y sociales que sostienen ideas más ecuménicas de ciudadanía, impulsan el cosmopolitismo o fomentan políticas que favorables a los sectores precarizados independientemente de cómo hayan llegado a esa situación).

Importa subrayar que el nacionalpopulismo supone una fuerte tensión con la democracia liberal y las visiones pluralistas en general. Pero la existencia de una tensión no es igual a una completa ruptura. El populismo (aún el de derecha) se basa necesariamente en la búsqueda de «más democracia» (o sea una mejor representación, en general por delegación en el líder) para proteger al «pueblo auténtico» de las acciones de una elite que supone predadora, parasitaria y privilegiada. Si bien la democracia liberal realmente existente es compatible con ciertos niveles de autoritarismo, personalismo e informalidad en el momento en que se sobrepasan algunos límites (como los ataques a la integridad física de los «enemigos del pueblo» o la ausencia de elecciones limpias y justas) ya no se puede hablar de nacionalpopulismo sino de una deriva hacia el fascismo (Finchelstein, 2018).

Para algunos intérpretes fuera del mundo académico, el nacionalpopulismo está vinculado al «neofascismo» y el «neonazismo» que tuvieron un momento de relativo auge en Europa en las décadas de 1980 y 1990 (al respecto, ver Ignazi, 2006). Sin embargo, no resulta del todo claro que hoy se esté hablando de los mismos elencos y los mismos repertorios que ayer. Por un lado, muchos de los grupos que tenían lazos más claros con el fascismo histórico se han reducido al punto de extinguirse (como el *Fedreland partiet* noruego) o se han reconvertido y abjurado de sus lazos pasados (como el *Rassemblement National* francés que ya no reivindica la Francia de Vichy). Por el otro, en algunos nacionalpopulismos que hoy se consideran exitosos (Estados Unidos, Filipinas) no es posible rastrear vínculos con experiencias fascistas o neofascistas

anteriores.[4] Para la mayoría de los estudiosos (Bergmann, 2017; Minkenberg, 2017; Eatwell y Goodwin, 2019; Fukuyama, 2019), en cambio, aún si es cierto que el nacionalpopulismo ha sabido heredar los apoyos (y en algunos casos las estructuras) que alguna vez tuvieron los neofascismos es un fenómeno completamente distinto. ¿En qué se basan para hacer esta distinción tajante? Hay dos dimensiones que son particularmente relevantes.

La primera es que mientras que los grupos, movimientos y partidos neofascistas, neonazistas o de «extrema derecha» presentaban una cierta continuidad con la idea de «tercera posición» en sentido económico–social, lo que los llevaba a rechazar no solo al comunismo y al socialismo —algo propio de todo derechismo— sino también al capitalismo. En contraposición, los nacionalpopulistas no solo aceptan al sistema capitalista, sino que lo ensalzan, en general como una muestra de la superioridad de ciertos pueblos sobre otros. Es cierto que esta dimensión es problemática porque, en términos estrictos, tanto el fascismo como el nazismo, más que combatir al capitalismo, lo apuntalaron (Poulantzas, 2018; Neumann, 1983). No obstante, aquí importa menos la verdad en términos históricos que el modo en que de autopercibirse y exhibirse de los neofascistas y los nacionalpopulistas: si los primeros insistieron en que buscaban combatir al capitalismo, los segundos han subrayado su intención de mantenerlo y vigorizarlo a través de correcciones. Como señala Mastropaolo (2017:64), los nacionalpopulistas «no tienen objeciones que hacerle a la economía de mercado» aun cuando su discurso está plagado de denuncias a las consecuencias de la globalización, la tecnocracia internacionalista y la valorización financiera.

La segunda cuestión que distancia a las derechas radicalizadas de fines del siglo xx del nacionalpopulismo del siglo xxi se relaciona con la envergadura del fenómeno. Las derechas extremas, neofascistas y neonazis podían ser consideradas como una patología crónica del sistema político de posguerra, un fenómeno extraño y marginal, constante pero sin consecuencias relevantes, ya que sus representantes no tenían la capacidad para cumplir con los requisitos necesarios para presentarse a elecciones o, cuando lo conseguían, obtenían resultados magros, en general inferiores al 5 % (aunque hubo, en determinados momentos, picos elevados de votos que luego no se mantuvieron en el tiempo). Los nacionalpopulismos, en cambio, se han revelado mucho más hábiles tanto para construir estructuras partidarias como para llevarlas a buen

4 Es interesante señalar que ni Estados Unidos, ni Brasil, ni Filipinas ni Polonia habían sido objeto de análisis por parte de los expertos en derechas extremas o radicales antes de 2015, probablemente porque a comienzos del siglo XXI no había ningún sector significativo de esas sociedades que apoyase ese tipo de iniciativas, cf. Norris (2005).

puerto en los comicios e incluso ganar elecciones y formar gobiernos. Aquí no importa destacar tanto el fracaso de uno y el éxito de otros como los cambios socioculturales e ideológico–políticos que están por detrás.

La ausencia de victorias en el campo electoral no era percibida como una frustración política por el neofascismo, ya que su objetivo no era necesariamente el de integrarse al sistema demoliberal, sino el de impugnarlo. Justamente por ello sus estrategias políticas consistían en exponer discursos y prácticas rechazadas por grandes sectores de la ciudadanía (así, por ejemplo, la reposición de simbología nazifascista, el recurso a la violencia abierta, el racismo desembozado). Para los nacionalpopulistas, en cambio, el éxito (incluso relativo) en los comicios resulta central para poder acceder al poder y desplegar políticas dentro de la democracia liberal tanto como sea posible (Betz, 1993). En este punto, sus discursos y prácticas apuntan a una impugnación muy selectiva del sistema democrático liberal a partir de la radicalización y distorsión de temas que están presentes en amplios sectores del electorado. Así, la valorización positiva de Occidente se convierte en desprecio por otras culturas, la búsqueda de resguardar la identidad transmuta en nativismo y xenofobia, la centralidad del orden y la seguridad se entienden como justificación de cierto grado de autoritarismo y el llamado para que los políticos escuchen lo que quiere el pueblo se transforma en ataques al pluralismo liberal (Betz, 2003; Fukuyama, 2019:75 y 103). De este modo, como ha sostenido Mudde (2007:297), a diferencia de la derecha neofascista que podía ser considerada una patología normalizada, el nacionalpopulismo aparece más bien mostrando una «normalidad patológica» de sociedades que vienen experimentando cambios profundos (cambios, agreguemos que en buena medida son resultado de las políticas neoliberales).

¿Quién teme al lobo feroz?

El auge del nacionalpopulismo generó un amplio rechazo en todo el arco político: no solo es objeto de crítica de las izquierdas —algo por demás natural y esperable— sino también de corrientes del propio campo de la derecha que vieron en el fenómeno una inédita amenaza. En principio, el problema era que los nacionalpopulismos eran partidos o movimiento antisistema, capaces de pervertir la democracia formal/liberal/burguesa. Sin embargo, como se señaló más arriba, estos actores no son del todo extraños al andamiaje demoliberal. En realidad, crecen dentro de él y, cuando acceden al gobierno, lo tensan tanto como les resulta posible sin destruirlo del todo (al menos por ahora no se han dado casos de nacionalpopulismos devenidos en fascismos clara-

mente reconocibles como tales). ¿Entonces, qué es lo que provoca que la derecha tradicional lo rechace como a un cuerpo extraño?

Una posible respuesta es la que dio Žižek (2000), al sostener que «todos aman odiar a Haider» porque el rechazo compartido permitía un desplazamiento del foco político que impedía cuestionar el despliegue del neoliberalismo y sus consecuencias. En el año 2000, esta respuesta resultaba bastante plausible; al fin y al cabo, tanto las derechas como las socialdemocracias europeas implementaban el mismo proyecto neoliberal con leves variantes. En ese contexto (que de hecho no ha cambiado en lo esencial) la denuncia unánime del nacionalpopulismo ocultaba hasta qué punto se había obturado la posibilidad de discutir propuestas de izquierda o progresistas, ya que lo único que valdría debatir sería el modo de defender a la democracia liberal. Como en el cuento infantil, los cerditos izquierdistas deberían mudarse (ya sin remordimientos) a la casa hecha de ladrillos que hizo su hermano derechista para que el lobo feroz del nacionalpopulismo no se los comiese a todos.

Sin embargo, hoy, casi entrando en la tercera década del siglo XXI, el avance del nacionalpopulismo es más claro. Ya no se trata apenas de un puñado de países europeos, sino de una onda que se expande por el mundo a pasos cada vez más largos. Esto ha hecho que se vuelva a plantear la pregunta: ¿el despliegue del nacionalpopulismo significa el fin de la democracia liberal (burguesa/formal/procedimental/minimalista)? Para algunos estudiosos, la respuesta es afirmativa; estamos ante un peligro real e inminente. Así, Levitsky y Ziblatt (2018) buscan comprender pero también denunciar la amenaza que representan líderes como Donald Trump, Viktor Orbán o Rodrigo Duterte.[5] Para ellos, estas figuras y los movimientos que lideran están destruyendo a las democracias desde adentro, erosionándolas lentamente, dando pasos imperceptibles en el camino hacia la autocracia. En este sentido, los gobiernos derechistas de Ronald Reagan o George W. Bush son más parecidos a los de Franklin D. Roosvelt o John F. Kennedy que al del actual ocupante de la Casa Blanca. O sea, el problema no es, si un gobierno se inclina o no hacia la derecha, sino si respeta las reglas (las formales pero también las no formalizadas) del juego. Comprensiblemente, para los nacionalpopulistas, críticas como la de Levitsky y Ziblatt no hacen sino reforzar su concepción según la cual sus líderes están luchando contra elites enquistadas en el poder, sobre las que no vale la pena indagar si son de izquierda o de derecha, porque tienen en común el escudarse en for-

5 En realidad, Levitsky y Ziblatt (2018) no se refieren apenas al nacionalpopulismo, sino a todos los populismos, incluyendo aquellos que se inclinan a la izquierda; de hecho, el libro se abre poniendo como ejemplo al caso venezolano.

malismos, instituciones y reglas para impedir que líderes como Trump o Bolsonaro procuren el «bienestar popular».

Las perspectivas de Žižek y Levitsky y Ziblatt no son incompatibles. El nacionalpopulismo, aun sino deviene en fascismo, es un fenómeno preocupante que pone en riesgo valores de la modernidad como la tolerancia y el respeto por las minorías o la libertad de expresión. Al mismo tiempo, pensar al nacionalpopulismo sin indagar acerca de su íntima relación con otras expresiones del campo de la derecha, sobre todo con el neoliberalismo y su defensa de la mercantilización y la desigualdad, puede ser un error académico y político.

En este punto conviene subrayar la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo que se señaló más arriba. El liberalismo es una tradición política que se remonta a fines del siglo XVII y se caracteriza por defender la libertad como valor superior. Si bien cada autor liberal presentó su propia concepción de libertad, todos coincidieron en que esta debía asentarse en un entramado de derechos y deberes civiles y políticos. En la medida en que el liberalismo se convirtió en la ideología de una burguesía que alcanzaba su apogeo, su derrotero se bifurcó. Por un lado, se continuó luchando contra tiranías y absolutismos, defendiendo de un modo más o menos abstracto valores como la razón, la autonomía, el pluralismo, la tolerancia, el progreso, la privacidad, la igualdad y la propiedad. Pero, también en nombre del liberalismo, se perfiló otra vertiente que ponía énfasis en el orden antes que en las libertades, en la sabiduría antes que en el raciocinio, en la tradición por encima del progreso y en el individualismo frente al bienestar común. A partir de allí se estableció una clara diferencia entre lo que se llamó un «liberalismo radical» (o de izquierda) y un «liberalismo conservador» (o de derecha). Si el liberalismo radical fue el espacio donde abrevó la socialdemocracia, el liberalismo conservador fue el germinador del que nació el neoliberalismo. Pero el neoliberalismo no es apenas la versión *aggiornata* del viejo liberalismo de derecha: a diferencia de sus antecesores enfrentados al Antiguo Régimen, los neoliberales surgieron para combatir al socialismo en todas sus formas; no solo les interesaba combatir el comunismo soviético sino también al keynesianismo y el Estado de Bienestar, incluso si para eso había que aceptar como remedio o como alternativa *second best* al fascismo o a dictaduras militares (Walpen, 2004:93–98; Caldwell y Montes, 2015).

Destacar la distancia entre liberalismo y neoliberalismo sirve para mostrar que aun si es cierto que el avance nacionalpopulista esté destruyendo la democracia liberal eso no implica que se contraponga al neoliberalismo. Dicho de otro modo: el nacionalpopulismo tiene, sí, un problema con el liberalismo (sobre todo con el liberalismo de izquierda), pero puede coincidir con el neoliberalismo y su antiizquierdismo radical.

Los nacionalpopulistas suelen deplorar las consecuencias del despliegue de las políticas neoliberales, denunciar a los líderes que las defienden y combatir a algunas de las instituciones (sobre todo a las internacionales). No obstante, no se muestran contrarios ni a la economía capitalista en general ni al modelo de mercantilización/desigualación asistida por el Estado que propone el neoliberalismo con los que pueden convivir de modo cordial. Vale la pena exponer dos ejemplos de esta convivencia. El primero es el del presidente nacionalpopulista de Brasil Jair Bolsonaro, quien, a pesar de estar rodeado de asesores de la «derecha alternativa», de líderes ultraconservadores y de militares nacionalistas de derecha, confió la cartera de economía a un destacado neoliberal de la escuela de Chicago como Paulo Guedes (Evans, 2018). El segundo ejemplo es aún más llamativo y refiere a Alejandro Chaufen, ciudadano estadounidense de origen argentino que durante décadas estuvo al frente de la Fundación Atlas (una organización que financia instituciones neoliberales en todo el mundo, Fischer y Plehwe, 2013) y actualmente es el director de otro *think tank* neoliberal (el Acton Institute). Chaufen fue un promotor de la campaña de Trump (Chaufen, 2016), destacando que, pese a la imagen de «populista», el candidato republicano se había rodeado de personas confiables para los neoliberales. Más adelante, con Trump en la Casa Blanca invitado a hablar en foros neoliberales se mostró como un gran defensor de la política de Trump. Según Chaufen, las trabas que el presidente estadounidense ha puesto al comercio internacional son criticables, pero poco relevantes cuando se observa el panorama general. Para Chaufen, debe apoyarse a Trump porque ha sido capaz de tomar medidas relevantes en el largo plazo como nombrar decenas de jueces federales de derecha y establecer reformas impositivas que facilitan la competencia, la innovación y el desarrollo (Domínguez, 2017; Sánchez de la Cruz, 2018).

Aquí, allá, en todas partes

La confluencia entre neoliberalismo y nacionalpopulismo a partir del auge del segundo podría ser considerada como un fenómeno pasajero o circunscripto a ciertos países con determinado nivel de desarrollo o una particular posición geopolítica. Sin embargo, como se verá a continuación, hay elementos que permiten dudar de esa visión «tranquilizadora».

Desde que surgió el nacionalpopulismo se viene indagando acerca de los cimientos en los cuales se asienta el fenómeno. Cada especialista ha presentado su propio enfoque a partir de la reflexión, la indagación teórica, los trabajos etnográficos, sociológicos, politológicos y los estudios comparativos

(solo a modo de ejemplos, Fukuyama, 2019; Jamin, 2009; Hochschild, 2016; Bergmann, 2017; Skocpol y Williamson, 2016; Mudde, 2007). A partir de los estudios disponibles es posible notar la recurrencia de ciertos tópicos; Eatwell y Goodwin (2019:245) destacan particularmente cuatro que, según entienden, están presentes en buena parte del occidente desarrollado. Vale la pena pasar revista a los mismos y mostrar de qué modo, hasta qué punto, también están presentes en América Latina.

El primer elemento destacado por la literatura es la desconfianza de la ciudadanía en la naturaleza cada vez más elitista de la democracia liberal. Esto se traduce sobre todo en la impugnación de una burocracia internacionalizada (la de la Unión Europea) alejada de los problemas locales y sorda a los reclamos populares, pero también en el descrédito de los partidos tradicionales (conservadores, liberales y socialdemócratas) cuyas agendas de gobierno son prácticamente indistinguibles una vez barrida la hojarasca retórica. En América Latina esa cuestión parece ausente, no hay burocracias de ese estilo (salvo que se considere así al Fondo Monetario Internacional que, excepto en el caso argentino, tiene cada vez menos injerencia en la región) y los partidos políticos tienen programas claramente distintos en la mayoría de los países. Sin embargo la impugnación a la clase política está muy presente por la vía de señalar su tendencia a la corrupción, los negocios espurios y la venalidad. La idea de que los políticos son «todos iguales, todos ladrones» (refleje o no la realidad de los líderes) está ampliamente difundida en importantes capas sociales de distintos países al menos desde la década de 1990 (Rovira Kaltwasser, 2014).

El segundo elemento que destacan los especialistas es el de una creciente preocupación por mantener la identidad de ciudadanías que ven como un peligro cierto (no importa si real) a la inmigración que vendría a destruir sus comunidades, erosionando su cultura, su religión y su nación. En Europa, esta cuestión derivó en amplios movimientos antiinmigración de rasgos xenófobos y racistas (dirigidos sobre todo, pero no solamente, contra inmigrantes de piel oscura que practican la religión islámica) que han tenido la capacidad de endurecer las leyes contra los inmigrantes y desplegar políticas chauvinistas de bienestar. En Estados Unidos, independientemente de la presidencia de Trump, existía una xenofobia y un racismo atávicos que venían experimentando un acelerado crecimiento desde finales del siglo pasado (es en ese sentido que debería ser leído el libro de Huntington, 2004 sobre la identidad americana). En América latina, en cambio, no hay islamofobia ni grandes oleadas migratorias. Pero la ausencia de altos niveles de inmigración no ha impedido que algunos líderes políticos insistan, con relativo éxito, en denunciar una ola invasora inexistente. La existencia del miedo y el rechazo al extranjero se ha verificado en estudios empíricos incluso en países como Brasil y Argentina

con bajísimos niveles de inmigración reciente (Ipar, 2018). Esto puede explicarse en parte porque se trata de sociedades con un nivel de racismo fuertemente arraigado, muchas veces no reconocido públicamente (Ramos, 1999), pero también en la construcción del otro político como un extranjero irredento («ideologías foráneas», «infiltrados», «traidores apátridas»). Por otra parte, mientras que algunos nacionalpopulismos europeos (como el Frente Nacional francés) abandonan tópicos como el rechazo de las identidades de género no tradicionales, en América Latina, distintos movimientos de derecha han retomado ese punto y han puesto énfasis en defender formas patriarcales y atacar al feminismo y a los movimientos de derechos civiles a los que consideran parte de una peligrosa «nueva izquierda» (véase, por ejemplo, Márquez y Laje, 2016).

El tercer elemento clave que destaca la bibliografía sobre el nacionalpopulismo se refiere a la percepción cada vez más clara del aumento de la desigualdad y las privaciones relativas derivadas del modelo social y económico neoliberal. Para algunos intérpretes, esto implica que el nacionalpopulismo es una reacción por derecha a los efectos del neoliberalismo. Sin embargo, como se ha tratado de mostrar más arriba, si bien la retórica nacionalpopulista está plagada de denuncias a la «globalización salvaje» y la «pérdida de derechos», las propuestas de estas derechas autoritarias no apuntan a restaurar la igualdad, sino a repartir de un modo distinto la desigualdad, recargando de privaciones económicas y sociales a los sectores más vulnerables. En América Latina, la preocupación por la desigualdad y la pobreza dista de ser una novedad, aunque el problema se haya agudizado más en la última década. Sin embargo, interesa notar que la propuesta desde la derecha es distinta a la europea. En general, en las sociedades latinoamericanas en las que se produjeron procesos de empobrecimiento se tendió a privilegiar una distribución equitativa de las privaciones: una desigualdad igualitaria que permite mantener las jerarquías (yo pierdo, pero el que está abajo mío pierde también). Sin embargo, esto no ha impedido los líderes políticos derechistas nacionalpopulistas (como Bolsonaro) o más cercanos a la tradición neoliberal (como el presidente Mauricio Macri en Argentina) hayan impulsado (por ahora sin éxito) medidas propias de lo que chauvinismo de bienestar en medio de denuncias públicas acerca de cómo los extranjeros «parasitan» a los servicios públicos estatales (Heizmann; Jedinger y Perry, 2018; Lacerda, 2019).

El cuarto y último elemento que comparten varios analistas al analizar el fenómeno del nacionalpopulismo está relacionado el desalineamiento de los partidos tradicionales que se tradujo en sistemas políticos más inestables que representaron una oportunidad para el surgimiento de nuevas estructuras y liderazgos. Si bien el desalineamiento de los partidos y la debilidad de los sistemas políticos tienen raíces distintas en Europa que en América Latina, es

difícil no percibir que hay similitudes en el aumento de la inestabilidad política entre ambas regiones. No obstante, también hay que considerar aquí la presencia de populismos orientados hacia la izquierda en Latinoamérica. Estos partidos y movimientos, ¿funcionan como un freno al nacionalpopulismo o, al contrario, facilitan su desarrollo? Dado que el crecimiento del nacionalpopulismo es todavía incipiente en el subcontinente sería arriesgado responder de forma taxativa este interrogante, pero lo cierto es que este es un asunto sobre el que debería indagarse más a fondo en los próximos años.

Más allá de estos cuatro puntos, hay otros dos temas que valdría la pena señalar de modo sumario para mostrar el modo en que las derechas nacionalpopulistas en consonancia con las neoliberales avanzan en Latinoamérica. Uno de ellos es el recurso de reflotar el «pánico rojo», el terror al comunismo. Si bien el tema está presente en nacionalpopulismos y otras derechas en el mundo, en pocos lugares ocupa un lugar tan central como sucede al sur del Río Bravo. También es verdad que el uso del anticomunismo dista de ser una novedad en América Latina, ya que lo único que parece haber cambiado es la residencia de la fuente del mal (que primero se mudó de Moscú a La Habana y ahora reside en Caracas, Vommaro; Morresi y Bellotti, 2015; Maitino, 2018). No obstante, sobre todo para América del Sur, la cercanía geográfica y cultural de Venezuela, la relación entre los líderes y las políticas desarrolladas en los países de lo que se dio en llamar la «marea rosada» operan como catalizadores de un pánico latente en ciertos sectores sociales.

El segundo tema es la promoción política de la violencia física que se da tanto en el terreno civil como en el estatal. Líderes políticos de derecha de algunos países latinoamericanos han impulsado el recurso a la violencia y el uso de armas de fuego por parte de población civil como una respuesta adecuada a la «inseguridad» incluso en naciones donde esos mismos líderes ocupan posiciones de máxima responsabilidad con respecto a la cuestión (Wiesehomeier y Doyle, 2014; Wills–Otero, 2014; Bob, 2012). Por otro lado, también puede notarse una tendencia a que las derechas no solo promuevan el «populismo penal», sino también el uso indiscriminado de fuerza letal por parte de las agencias de seguridad (el «gatillo fácil») y la profundización de un proceso de militarización de las policías en distintas campañas de «lucha contra las drogas» y «control de inmigración» (Otamendi, 2019; Pratt y Miao, 2017; Martens, 2017).

Los seis puntos que repasamos de modo breve muestran que el nacionalpopulismo, sobre todo cuando se conjuga con la derecha neoliberal, tiene potencial para crecer en América Latina. El triunfo de Bolsonaro en Brasil puede no ser un caso aislado, como lo muestra, por ejemplo, la deriva de la alianza Cambiemos en Argentina. Mauricio Macri inició su carrera intentando mostrar su cercanía a líderes de la derecha tradicional (como los del Partido Popular de

España). Luego, en 2015, buscó asimilarse a un neoliberalismo que pudiera convivir con visiones más pluralistas (tomando como modelo al presidente estadounidense Obama). Sin embargo, en la medida que su administración mostró signos de agotamiento, en buena medida por su impericia para gestionar la economía, decidió impulsar una lógica política con tintes nacional-populistas en su campaña para lograr ser reelecto. Si bien Macri perdió las elecciones (obtuvo el 40 % de los votos y fue derrotado por el candidato peronista Alberto Fernández que consiguió el 48 %), parece claro que su estrategia logró activar hacia la derecha (en particular hacia el nacionalpopulismo) a una parte significativa de la sociedad argentina.

A la hora de hacer un balance, aún no está claro que Latinoamérica esté caminando de modo indefectible hacia un realineamiento político en el cual el campo de derecha podrá ser hegemonizado por un nacionalpopulismo capaz de continuar con la implementación del neoliberalismo. Sin embargo, por lo expuesto aquí, debería al menos considerarse la posibilidad de que ese es uno de los resultados posibles en los años por venir.

Referencias bibliográficas

Alexander, Jeffrey C. (2011). *Performance and Power.* Polity.

Alsogaray, Álvaro C. (1969). *Política y economía en Latinoamérica: Principales problemas e ideas que se debaten. Un camino a seguir.* Editorial Atlántida.

Alsogaray, Álvaro C. (1981). *Participación e Intervención del Estado en la Economía: Programa para su reducción.* Fundación Carlos Pellegrini.

Barry, Andrew; Osborne, Thomas y Rose, Nikolas S. (Eds.).(1996). *Foucault and political reason: liberalism, neo–liberalism, and rationalities of government.* University of Chicago Press.

Bergmann, Eiríkur Einarsson (2017). *Nordic nationalism and right–wing populist politics: imperial relationships and national sentiments.* Palgrave Macmillan.

Betz, Hans–Georg (1993). The New Politics of Resentment: Radical Right–Wing Populist Parties in Western Europe. *Comparative Politics* (413–427).

——— (2003). The growing threat of the radical right.In Peter H. Merkl y Leonard Weinberg (Eds.), *Right–wing Extremism in the Twenty–first Century* (pp. 74–93). Merlin.

Bob, Clifford (2012). *The global right wing and the clash of world politics.* Cambridge University Press.

Bobbio, Norberto (1995). *Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política.* Taurus.

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (2005). *Una invitación a la sociología comprensiva.* Siglo XXI.

Buchanan, James M. (1975). *The limits of liberty: between anarchy and Leviathan.* The University of Chicago Press.

——— (1982). Democracia Limitada o Ilimitada. *Estudios Públicos* (6), 37–51.

Cahill, Damien; Cooper, Melinda; Konings, Martijn y Primrose, David (Eds.). (2018). *The Sage handbook of neoliberalism.* Thousand Oaks, CA: SAGE.

Caldwell, Bruce y Montes, Leonidas (2015). Friedrich Hayek y sus dos visitas a Chile. *Estudios Públicos 137,* 87–132.

Casullo, María Esperanza (2019). *¿Por qué funciona el populismo?: el discurso que sabe construir explicaciones convincentes de un mundo en crisis (2° ed.)*. Siglo XXI.

Chaufen, Alejandro (2016). El ala liberal de Donald Trump. *PanamPost.*

Cockett, Richard (1994). *Thinking the unthinkable: think tanks and the economic counter–revolution 1931–1983.* Harper Collins.

Doherty, Brian (2007). *Radicals for capitalism: a freewheeling history of the modern American libertarian movement.* Public Affairs.

Domínguez, José Augusto (2017). Entrevista con Alejandro Chaufen. Café Viena, 5. Recuperado en https://www.juandemariana.org/ijm–media/video/cafe–viena–5–alejandro–chafuen. Consultado en 3–1–2018.

Dunn, Bill (2017). *Against neoliberalism as a concept. Capital & Clas, 41* (3), 435–454.

Eatwell, Roger y Goodwin, Matthew J. (2019). *Nacionalpopulismo. Por qué está triunfando y de qué forma es un reto para la democracia* (María Eugenia Santa Coloma, Trad.). Atalaya, Ediciones Península.

Evans, Peter (2018). Brazil: An unfolding tragedy. *Berkeley Review of Latin American Studies* (Fall).

Finchelstein, Federico (2018). *Del fascismo al populismo en la historia.* Taurus.

Fischer, Karin y Plehwe, Dieter (2013). Redes de think tanks e intelectuales de derecha en América Latina. *Nueva Sociedad* (245), 70–86.

Freeden, Michael (2008). *Ideologies and political theory: a conceptual approach.* Clarendon Press.

Friedman, Milton (1951). Neoliberalism and its prospects. *Farmand* (17), 89–93.

Friedman, Milton y Director Friedman, Rose (1990). *Free to choose: a personal statement.* Harcourt BraceJojanovich.

Fukuyama, Francis (2019). *Identidad: La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento* (Antonio García Maldonado, Trad.). Deustro.

Giddens, Anthony (1999). *La tercera vía: la renovación de la socialdemocracia* (Pedro Cifuentes Huertas, Trad.). Taurus.

Harvey, David (2005). *A brief history of neoliberalism.* Oxford University Press.

Hawley, George (2017). *Making sense of the alt–right.* Columbia University Press.

——— (2005). *Camino de servidumbre* (José Vergara, Trad.). Alianza Editorial.

——— (2011). *The Constitution of Liberty (XVII).*University of Chicago Press.

——— (2013). *Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy* (new in one volume ed.). Routledge.

Heizmann, Boris; Jedinger, Alexander y Perry, Anja (2018). Welfare Chauvinism, Economic Insecurity and the Asylum Seeker «Crisis». *Societies 8* (3), 83.

Hirschman, Albert O. (1991). *The rhetoric of reaction: perversity, futility, jeopardy.* Belknap Press.

Hochschild, Arlie Russell (2016). *Strangers in their own land: anger and mourning on the American right.* New Press.

Huntington, Samuel P. (2004). *Who are we?: the challenges to America's national identity.* Simon & Schuster.

Ignazi, Piero (2006). *Extreme right parties in Western Europe.* Oxford University Press.

Ipar, Ezequiel (2018). Neoliberalismo y neoautoritarismo. *Política y Sociedad 55* (3), 825–849.

Jamin, Jérôme (2009). *L'imaginaire du complot: discoursd'extrême droite en France et aux Etats–Unis.* Amsterdam University Press.

Kristol, Irving (1986). *Reflexiones de un neoconservador* (Juan Carlos Gorlier, Trad.). Grupo Editor Latinoamericano.

Lacerda, Marina Basso (2019). *O novo conservadorismo brasileiro de Reagan a Bolsonaro.* Zouk.

Laclau, Ernesto (1996). *Emancipación y diferencia.* Ariel.

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). *Cómo mueren las democracias* (Gemma Deza Guil, Trad.). Ariel.

Lipset, Seymour Martin y Raab, Earl (1981). *La política de la sinrazón: el extremismo de derecha en los Estados Unidos 1790–1970* (Juan José Utrilla, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Main, Thomas (2018). *Theœ rise of the Alt–Right.* Brookings Institution Press.

Maitino, Martin Egon (2018). Direita, semvergonha. *Plural–Revista de Ciências Sociais 25*(1), 111–134.

Márquez, Nicolás y Laje, Agustín (2016). *El libro negro de la nueva izquierda: ideología de género o subversión cultural.* Grupo Unión, Unión Editorial, Centro de Estudios Libres.

Martens, Juan A. (2017). Entre el miedo y la militarización: la política de (in) seguridad de Paraguay. *Revista de la Facultad de Derecho de México 67*(269), 229–247.

Mastropaolo, Alfio (2017). *Populism and Political Representation.* In Reinhard C. Heinisch; Christina Holtz–Bacha y Oscar Mazzoleni (pp.59–72). Nomos.

Miller, Peter y Rose, Nikolas (2013). *Governing the Present.* Polity Press.

Minkenberg, Michael (2017). *The radical right in Eastern Europe democracy under Siege.* Palgrave Macmillan.

Mirowski, Philip (2014). *Never let a serious crisis go to waste: how neoliberalism survived the financial meltdown.* Verso.

Mirowski, Philip y Plehwe, Dieter (Eds.) (2009). *The road from Mont Pèlerin: the making of the neoliberal thought collective.* Harvard University Press.

Morresi, Sergio Daniel (2011). Un esquema analítico para el estudio de las ideas de derecha en Argentina (1955–1983). In Ernesto Bohoslavsky (Ed.). *Actas del Taller de Discusión sobre las Derechas en el Cono Sur, siglo XX* (pp. 23–41). Universidad Nacional de General Sarmiento.

Morresi, Sergio Daniel y Vicente, Martín (2019). El ocaso del macrismo. Entre liberalismo y neoliberalismo. *Nueva Sociedad (edición digital)* (oct.).

Mudde, Cas (2007). *Populist radical rightparties in Europe.* Cambridge University Press.

Mudde, Cas y Rovira Kaltwasser, Cristóbal (2017). *Populism: a very short introduction.* Oxford University Press.

Mudge, Stephanie Lee (2018). *Leftism reinvented: Western parties from socialism to neoliberalism.* Harvard University Press.

Nash, George H. (1987). *La rebelión conservadora en los Estados Unidos.* Grupo Editor Latinoamericano.

Neumann, Franz (1983). *Behemoth: pensamiento y acción en el nacional–socialismo, 1933–1944* (Vicente Herrero y Javier Márquez, Trad.). Fondo de Cultura Económica.

Noirel, Gerard (2017). *Introducción a la sociohistoria.* (Alicia Bixio, Trad.). Siglo XXI.

Norris, Pippa (2005). *Radical right: voters and parties in the electoral market.* Cambridge University Press.

Offerlé, Michel (2011). Los oficios, la profesión y la vocación de la política. *PolHis* (7), 84–98.

Ostiguy, Pierre (2017). Populism: A Socio–Cultural Approach. In Cristóbal RoviraKaltwasser; Paul Taggart y Pierre Ostiguy (Eds.), *The Oxford handbook of populism.* Oxford University Press.

Otamendi, Alejandra (2019). ¿Demandas de seguridad o demandas de «mano dura»? El «consenso punitivo» en cuestión en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2000–2010), *Hologramática XI* (21), 155–174.

Peck, Jamie (2018). Preface: Naming Neoliberalism. In Damien Cahill; Melinda Cooper; Martijn Konings y David Primrose (Eds.), *The Sage handbook of neoliberalism* (pp. XXII–XXIV). SAGE.

Plehwe, Dieter; Walpen, Bernhard y Neunhöffer, Gisela (Eds.). (2005). *Neoliberal hegemony: a global critique* (Vol. 18). Routledge.

Poulantzas, Nicos (2018). *Fascism and dictatorship: the Third International and the problem of fascism (with a foreword by Riley, Dylan J.)*(Judith White; Judith O'Hagan y Timothy O'Hagan, Trad.). Verso.

Pratt, John y Miao, Michelle (2017). Populismo penal: el fin de la razón. *Nova Criminis 9* (13), 33–105.

Ramos, Víctor (1999). *Racismo y discriminación en la Argentina.* Editorial Catálogos.

Rémond, René (2007). *Les droitesaujourd'hui*. Éd. L. Audibert.

RoviraKaltwasser, Cristóbal (2014). From Right Populism in the 1990s to Left Populism in the 2000s and Back Again? In Juan Pablo Luna y Cristóbal RoviraKaltwasser (Eds.), *The Resilience of the Latin American Right* (pp. 143–166). Johns Hopkins University Press.

RoviraKaltwasser, Cristóbal; Taggart, Paul y Ostiguy, Pierre (Eds.).(2017). *The Oxford handbook of populism.* Oxford University Press.

Saad–Filho, Alfredo y Johnston, Deborah (Eds.). (2005). *Neoliberalism: a critical reader*. Pluto Press.

Sánchez de la Cruz, Diego (2018). Alejandro Chafuen: «Trump es una amenaza existencial para las cloacas del Estado». *Libre Mercado.*

Skocpol, Theda y Williamson, Vanessa (2016). *The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism.*

Stigler, George Joseph (1984). *The intellectual and the marketplace* (Enl. ed. ed.). Harvard University Press.

Venugopal, Rajesh (2015). Neoliberalism as concept. *Economy and Society 44*(2), 165–187.

Vommaro, Gabriel; Morresi, Sergio Daniel y Bellotti, Alejandro (2015). *Mundo PRO. Anatomía de un partido fabricado para ganar. Planeta.*

Wacquant, Loïc (2010). Crafting the Neoliberal State: Workfare, Prisonfare, and Social Insecurity. *Sociological Forum 25* (2), 197–220.

——— (2012). Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism. *Social anthropology 20*(1), 66–79.

Walpen, Bernhard (2004). *Die offenenFeinde und ihre Gesellschaft. Eine hegemonietheoretischeStudiezur Mont Pèlerin Society.*

Wiesehomeier, Nina y Doyle, David (2014). Profiling the Electorate: Ideology and Attitudes of Rightwing Voters. In Juan Pablo Luna y Cristóbal RoviraKaltwasser (Eds.). *The Resilience of the Latin American Right* (pp. 48–72). Johns Hopkins University Press.

Williamson, John (1990). The progress of policy reform in Latin America. I*n The progress of policy reform in Latin America.* Institute for International Economics.

——— **(**2008**)**. A short story of the Washington Consensus. In Narcís Serra y Joseph E. Stiglitz (Eds.), *The Washington Consensus reconsidered towards a new global governance* (pp. 14–30). Oxford University Press.

Wills–Otero, Laura (2014). Colombia. Analyzing the Strategies for Political Action of Álvaro Uribe's Government, 2002–2010. In Juan Pablo Luna y CristíbalRoviraKaltwasser (Eds.), *The Resilience of the Latin American Right* (pp. 194–215). Johns Hopkins University Press.

Žižek, Slavoj (2000). Why we all love to hate Haider. *New Left Review 2* (37).

La derecha conservadora y las acciones colectivas en el siglo XXI sudamericano

Juan Bautista Lucca y Esteban Iglesias

Introducción

And so tonight —to you, the great silent majority
of my fellow Americans— I ask for your support.
Richard Nixon, discurso, 3 de noviembre de 1969

Durante el siglo XXI, América Latina está experimentando una formidable transformación política. A excepción de algunos países como Colombia, Perú y Chile, en la primera década del siglo XXI, la región experimentó la llegada al gobierno de fuerzas partidarias ubicadas a la izquierda y centro izquierda del espectro político configurando lo que se conoció como «giro a la izquierda» (Stoessel, 2014; Peixoto de Oliveira, 2019:18). Sin embargo, en la segunda década, cuando se pone en crisis el «Consenso de las *Comodities*», las fuerzas políticas de la «marea rosa» se ven tensionadas —cuando no relegadas o desplazadas— por fuerzas políticas con vocación mayoritarias que se inscriben en el ideario de derecha, algunas veces vinculadas a formaciones sempiternas como el Partido Colorado en Paraguay, el Partido Nacional en Uruguay o la UCR en Argentina por un lado, o a expresiones de reciente formación como el PSL en Brasil, el FCN en Guatemala, el PRO en Argentina o Cabildo Abierto en Uruguay por el otro, por mencionar algunos ejemplos (Soler, Giordano y Saferstein, 2018:173).

Más allá de su exigua o extensa trayectoria histórica, todas estas organizaciones traen aparejada la singularidad de identificarse como promotores de un «cambio» en la sociedad —principio inicialmente asociado a la izquierda y su ideario revolucionario—, aunque en esta oportunidad entendido como una «retro–evolución», como una búsqueda por recuperar las jerarquías, tradiciones, valores y la seguridad política y ontológica que el giro a la izquierda había puesto en entredicho al aumentar las condiciones materiales y simbólicas de la igualdad (Lucca, Benetti e Iglesias, 2017; Amselle, 2010).

Independientemente de su incursión en los lindes de la democracia liberal electoral, una de las característica singulares de este *ritornello* latinoamericano de derecha en el siglo XXI radica en haber abandonado su fisonomía de «mayoría silenciosa» que intervenía en la política a través de grupos de interés, medios de comunicación, la iglesia, las fuerzas armadas o eventualmente a través de partidos conservadores, para arroparse con aquello que, desde fina-

les de los años 1960, parecía un dominio prioritario de las fuerzas progresistas, izquierdistas o nacional populares: la acción colectiva en el espacio público (Traverso, 2018:46; Blee y Creasap, 2010:271).

Este singular fenómeno pone en tensión a las perspectivas teóricas sobre la acción colectiva surgidas a mediados de los sesenta del siglo xx que se configuraron en torno al interrogante ¿qué sujetos sociales pueden constituirse en sujetos políticos con el propósito de difuminar el principio de la igualdad? (Iglesias, 2008; Lucca, 2012). Ello obedece a que los movimientos sociales constituían los sujetos políticos del cambio en sociedades donde supuestamente la demanda por mayor distribución de la riqueza se encontraba «institucionalizada». Sin embargo, en las últimas décadas es recurrente observar movilizaciones sociales antiigualitarias y en contra de principios articuladores de la democracia, como el pluralismo y el respeto por la soberanía popular (Pichardo, 1997:426).

Ante estas nuevas condiciones políticas, resulta pertinente entender las movilizaciones en términos de «formas de coordinación de la acción colectiva» (Diani, 2015:21) y no en términos de movimientos sociales. Esto implica alejarse de una mirada normativa y circunscrita a las fuerzas de izquierda, en el que las movilizaciones sociales eran articuladores en pos de la «igualdad», para incorporar —y problematizar— otras acciones colectivas poco estudiadas, pero de gran actualidad, en las que la nueva derecha latinoamericana encuentra un fuerte asidero, como son aquellas que defienden: la homogeneidad —de la nación, Estado, etc.— en vez del pluralismo o multiculturalismo; la identidad religiosa y la constitución familiar en contra del aborto, el matrimonio gay y la educación sexual; la propiedad privada y la propia vida, frente al Estado y la anomia, entre otras.

Ahora bien, así como la literatura comparada se encargó de repensar la heterogeneidad de casos, vertientes y derroteros dentro del «giro a la izquierda latinoamericano», es necesario reconocer a qué tipo de derecha hacemos referencia en este artículo. En primer lugar, a aquellas fuerzas políticas que parten de una noción de desigualdad producto de las diferencias de talento natural o esfuerzo individual, y no producto de un accionar sociohistórico (Bobbio, 1994); en segundo lugar, a expresiones de derecha que recuperan la importancia de la tradición, las costumbres, la religión y el patriotismo como fuentes de autoridad y jerarquía (Hobsbawn, 1994:97–98); y, en tercer lugar, a expresiones de derecha que en su accionar colectivo conjugan un ideario anti individualista por un lado, con un carácter reactivo o defensivo de un *status quo ante* en términos morales que se encuentra agraviado y desdibujado por el universalismo y el progresismo, por el otro (VonBeyme, 1985:8 y 24; Giddens, 1994:37 y 47; Romero, 1970:30). En resumidas cuentas, hacemos referencia a la acción colectiva que llevan adelante expresiones conservadoras de derecha

en América Latina durante el siglo XXI, en tanto y en cuanto se rebelan contra el giro a la izquierda y sus orientaciones de política pública que ponen fin a su situación de privilegio moral, jerarquía social y estratificación económica. A tal fin, habremos de focalizarnos en la acción colectiva anclada en el pensamiento conservador de derecha ante los intentos recaudatorios del Estado y la inseguridad como puesta en entredicho de la propiedad individual como ejemplos centrales de este nuevo activismo sociopolítico.

Acción Colectiva en defensa de la propiedad: «los ricos también protestan»

La razón por la que los hombres entran
en la sociedad es para preservar su propiedad.
John Locke

Observar empíricamente la (des)igualdad en las sociedades contemporáneas es una tarea arduo compleja cuando no inasible; sin embargo, a los fines ilustrativos para sustentar el argumento de este escrito, es posible aseverar que en la gran mayoría de los países de América del Sur, a una década de deterioro de las condiciones económicas y materiales de la igualdad a finales del siglo XX, le siguió en la primera década del siglo XXI un crecimiento de la economía, una recuperación en la distribución del ingreso entre individuos y hogares, pero también una mejor recaudación impositiva en términos generales, inclusive en los impuestos sobre las rentas, utilidades y ganancias de capital (Jiménez, 2017:63–64).

Independientemente de las asimetrías e inequidades del sistema tributario, los niveles de evasión, la incidencia real del cobro de impuestos y crecimiento de la economía en la redistribución y la igualdad social, el argumento a señalar aquí apunta a que durante las dos primeras décadas del siglo XXI en América del Sur, se extendió una percepción generalizada, por un lado, de crecimiento económico y mayor generación de riquezas, que se dio, por el otro, junto a un crecimiento de las capacidades e injerencia estatal para recaudar, redistribuir y articular enclaves particularistas. Esta situación fue la piedra de toque para que sectores sociales con altos ingresos y, en contrapartida, mayor presión tributaria, se articularan y movilizaran colectivamente en defensa del «agravio» que suponía la «presión estatal» sobre su propiedad.

Habitualmente, los sectores de mayores ingresos, en adelante «los ricos» según el estándar de la sociedad para simplificar, han sido reacios a la acción colectiva, en parte porque disponen de otros recursos, actores y vías para la

manifestación de su descontento, pero también porque desconocen el terreno de la movilización callejera, sus estrategias, repertorios y modalidades. Sin embargo, aunque poco habituales, los ricos también se manifiestan, especialmente cuando se conjugan: una interpretación de que sus privilegios o status pueden verse afectados inminentemente por una nueva política pública; cuando el poder político de turno encarna el rol del principal antagonista; cuando una plétora multiforme de otros actores y personalidades sirven de base y fundamento para promover el ingreso en una arena de activación pública en la que desconocen cómo desempeñarse; y cuando existe de fondo una lectura de la situación en la que movilizarse efectivamente «hace la diferencia», es una «oportunidad», especialmente frente a la obturación de otros medios y canales para desafiar la autoridad (Martin, 2013:10–11; McVeigh, 2009:38–43).

América del Sur: «¿Es justa la distribución del ingreso?» (en porcentaje)

	1997	**2001**	**2002**	**2007**	**2009**	**2010**	**2011**	**2013**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Muy justa	3	2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	1
Justa	9	7	9	16	19	19	19	23	21	17	16	14
Injusta	**51**	**49**	**51**	**49**	**52**	**51**	**54**	**44**	**47**	**48**	**49**	**50**
Muy injusta	**34**	**38**	**34**	**28**	**23**	**23**	**22**	**25**	**26**	**30**	**29**	**31**
No sabe	2	3	3	3	4	4	3	4	5	3	3	3
No contesta	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1
(N)	10611	10875	11249	12004	12004	12004	12004	12004	12050	12004	12001	12004

Figura 1. América del Sur: «¿Es justa la distribución del ingreso?» (en porcentaje). Fuente: Latinobarómetro http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp). Consultado: 15/10/2019

Tomando como punto de partida este argumento, es posible observar a continuación cómo la acción colectiva de sectores de mayores ingresos en defensa del status quo en relación con la propiedad privada, fue una situación recurrente y exponencialmente evidente en el cono sur durante el siglo xxi, especialmente en aquellos países donde el «giro a la izquierda» buscó modificar las condiciones materiales de la histórica desigualdad económica.

Argentina (2008)

El 10 de marzo de 2008, el Ministerio de Economía del gobierno de Cristina Fernández, propuso aumentar el monto a pagar como derechos de exportación particularmente a la soja, el maíz y el trigo a través de la resolución 125/2008.

Con una economía en expansión producto del valor de estas *commodities*, el aumento del denominado «impuesto al campo» fue decodificado por aquellos afectados por el gravamen como un avance estatal en la ganancia y esfuerzo privado vinculada a la producción de oleaginosas.

Durante 129 días, los sectores patronales, sindicales y campesinos vinculados al trabajo agropecuario, como también un sinnúmero de actores sociales y políticos enconados con el gobierno nacional, llevaron adelante un sinnúmero de intervenciones y movilizaciones en los espacios públicos en pos de retrotraer el gravamen y criticar la orientación estatal recaudatoria. Así, lo que comenzó como un reclamo sectorial, derivó en un cisma social y político que configuró dos subculturas políticas presentes incluso 10 años después.

En este contexto, la «Mesa de Enlace» formada por la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Confederación Rural Argentina (CFA), la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO), entre otras entidades, fue una inédita e histórica construcción política en la que se aglutinaba a los pequeños productores agropecuarios con un histórico aprendizaje de movilización social, junto a actores y corporaciones más grandes y poderosos con una histórica intervención en la esfera pública como grupo de presión e interés antes que por su fuerza a través de la movilización social.

Durante cuatro meses, el cierre patronal derivó en cortes de rutas prolongados, movilizaciones sociales de gran envergadura a lo largo del territorio, cacerolazos, quema de pastizales, formación de asambleas ciudadanas, hechos de violencia, e incluso problemas de desabastecimiento. Estos «piquetes de la abundancia», en palabras de la presidenta Cristina Fernández, lograron que el reclamo de la Mesa de Enlace por defender su posición de privilegio económico, fuera apoyada por toda la oposición política y social enojada con el gobierno kirchnerista.

La resolución del conflicto fue claramente un traspié para el gobierno, que no solo sufrió la renuncia del ministro de Economía (Martín Lousteau), el voto «no positivo» del vicepresidente Julio Cobos en el debate parlamentario de la medida, y la galvanización de una oposición hasta entonces desperdigada; pero también, la evidencia de que «los ricos también protestan» e incluso, parafraseando a la presidenta Fernández, son capaces de armar un partido y ganar elecciones, como las de 2015 a manos de Mauricio Macri y los sectores de la economía agropecuaria (Iglesias, 2013; Retamozo y Di Bastiano, 2018).

Bolivia (2008)

Entre septiembre y octubre de 2008, los «autonomistas» tomaron instalaciones y edificios del gobierno nacional, bloquearon rutas y amenazaron con interrumpir el suministro de gas a Brasil y Argentina en caso en que no se atendieran sus reclamos. El conflicto político entre los prefectos de la «Media Luna» boliviana y el gobierno nacional encabezado por el MAS fue, sin lugar a dudas, de los más agudos de todos los años que ha gobernado Evo Morales, desde 2005.

Cabe señalar que la victoria de Evo Morales y el MAS, en el año 2005, modificó las condiciones en que se desarrollaban las correlaciones de fuerzas con los departamentos–gobernaturas. Los principales vectores que orientaban y definían el gobierno de Evo Morales —nacionalismo e indigenismo— (Mayorga, 2018) se encontraban en las antípodas políticas, económicas y culturales de los territorios de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando (la «Media Luna»).

Por ende, la contracara del triunfo del MAS fue la galvanización del descontento y la formación del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que se articuló bajo la bandera de la «autonomía». Como sostiene Felipe Burbano de Lara:

> A través del Comité, los mismos empresarios asumen el rol de dirigencia política del departamento. También en el departamento de Santa Cruz, como en otros de Bolivia, el Comité funciona como vertebrador del movimiento regional, es decir, como la instancia desde donde se levanta la reivindicación regional y en donde se procesa el conflicto con el Estado. (Burbano de Lara, 2009:303)

Lo que estaba de fondo en el plano económico, era la disputa por los ingresos de la renta de los hidrocarburos y de la producción agropecuaria que se generaban principalmente en esta región, que el gobierno central de Morales había gravado a través de la Renta Dignidad para destinarlo al pago de pensiones (Acosta, 2009). Durante los meses de agosto y septiembre, los prefectos de la oposición convocaron a movilizarse con un discurso secesionista, lo cual derivó en el bloqueo de las rutas, la ocupación las instalaciones de los gobiernos nacionales, e incluso una escalada de violencia de relevancia para la región que buscaba desestabilizar a un Morales que había puesto su cargo a ratificación, obteniendo el 67,4 % de aprobación en el mes de agosto de 2008 (Rojas Ríos, 2015).

La salida a este conflicto se dio a través del enjuiciamiento y detención del prefecto de Pando (Leopoldo Fernández) por la Masacre de Porvenir, pero también a través del debate de una nueva constitución que reconoce de manera relativa la autonomía regional, el establecimiento de una nueva ley de Autonomías y Descentralizaciones, y un intento denodado del gobierno de Morales por «enamorar

a Santa Cruz» en tanto uno de los principales motores económicos y distritos electorales del país, a través de promesas de crecimiento y estabilidad económica.

Brasil (2013)

En junio de 2013 cobró forma una crisis política en Brasil que derivó en la debacle del Partido de los Trabajadores (PT) y catapultó a Jair Bolsonaro a la presidencia de la nación en las elecciones de 2018. Las protestas durante el 2013, impulsadas por el movimiento de jóvenes universitarios por una disminución de la tarifa del transporte público, terminaron siendo capitalizadas por grupos contrapuestos ideológicamente ideológicamente y conformados por sectores medios y medios altos, que denunciaban gastos suntuosos la corrupción y la especulación inmobiliaria que el gobierno del PT había dado pie con la organización de la Copa de las Confederaciones y la Copa del Mundial de Fútbol de 2014 (Rocca Rivarola, 2019).

Lo que se inició como una protesta protagonizada por fuerzas políticas de izquierdas, descontentas con el gobierno, con expresiones como movimiento Pase Libre, la unión de Estudiantes Secundarios y Black Blocs, que incumbía a una nueva clase trabajadora que batallaba día a día para su supervivencia, derivó en la presencia pública–política de expresiones de contrario signo ideológico, como Movimiento Brasil Livre, por VemPraRua, Anonimus, entre otros (Singer, 2018; Amaral, 2016). Si se toma como ejemplo los datos de DataFolha que analizan quienes participaron y apoyaron la protesta del 15 de marzo de 2013 en la ciudad de San Pablo, es posible señalar que estos fueron: principalmente los hombres (63 %), de entre 26 a 50 años (65 %), de piel blanca (68 %), mayoritariamente con un ingreso de 1500 dólares por mes (80 %).

En definitiva, esta composición se condice en gran medida con la clase media tradicional brasilera, que portaba una fuerte impronta conservadora y un claro discurso antipetista. Frente a una histórica tradición de movilización de los sectores populares, estudiantiles y provenientes del mundo del trabajo, la irrupción en las calles de la «elite del atraso» durante el 2013 a 2015, muestra claramente cómo y porqué quienes más poseen salieron a protestar en Brasil (Tatagiba y Galvao, 2019:91–92; Souza, 2018:212).[1]

1 Ver: Clarín, «Los más ricos son quienes más apoyan las protestas en Brasil, según un sondeo», disponible en: https://www.clarin.com/mundo/ricos–apoyan–protestas–Brasil–sondeo_0_HJIzVpfjPXe.html. Consultado el 15/10/2019. DataFolha, «47 % foram a avenida paulista em 15 de março a protestar contra a corrupção», disponible en: http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2015/03/1604284–47–foram–a–avenida–paulista–em–15–de–marco–protestar–contra–a–corrupcao.shtml.Consultado el 15/10/2019.

Acción Colectiva contra la inseguridad: «seguro vienen por lo mío»

Los peligros de la vida son infinitos, y la seguridad es uno de ellos.
J. W. Von Goethe

La derecha conservadora considera que la intervención del Estado es fundamental para para evitar procesos de desintegración de la sociedad, aunque circunscrito a aquellas acciones que ponen el acento en la ley y el orden, ya que estos son los puntales de la seguridad ontológica y material a los sujetos y las condiciones de funcionamiento del mercado (Giddens, 1998:48; Hayek, 2007:157–159). Pero, en contrapartida, enarbolan (emparentados con las corrientes neoconservadoras y neoliberales) una fuerte crítica hacia los gobiernos estatales que se preocupan por el bienestar social, ya que su (in)acción ha derruido la eficacia, eficiencia y espíritu de las instituciones estatales, especialmente en lo que atañe al Estado de derecho y la justicia (Cerrutti, 2009:17).

Por ende, es habitual que los sectores conservadores pongan fuertemente el acento en la evolución (real o percibida) de los delitos y las penas, y que este aspecto sea un estandarte para la acción colectiva, configurando lo que David Garland (2005:8) conceptualizó como «populismo punitivo»: la percepción de la opinión pública de que con el aumento de las penas se puede disminuir el delito y, azuzados por los medios de comunicación y sectores políticos afines, ocupan el espacio público reivindicando una mayor intervención del aparato estatal —policial y judicial— (Mouzo, 2012 y Galar, 2017).

América del Sur: «Vivir en el país es cada día más seguro o inseguro» (en porcentajes)

	2003	2007	2008	2009	2010	2011	2015
Más seguro	3	8	13	10	9	7	7
Igual de seguro	24	27	30	32	34	37	29
Más inseguro	**54**	**63**	**56**	**57**	**56**	**54**	**63**
Muy inseguro	18	0	0	0	0	0	0
No sabe	1	1	1	1	1	1	1
(N)	11400	12004	12004	12004	12004	12004	12050

Figura 2. América del Sur: «Vivir en el país es cada día más seguro o inseguro» (en porcentajes). Fuente: Latinobarómetro http://www.latinobarometro.orglatOnline.jsp. Consultado: 15/10/2019

Por ende, en un contexto donde el universalismo pone en tensión múltiples vectores de seguridad ontológica otrora anclados en la tradición, y donde las sociedades del riesgo se tornan más complejas, la acción colectiva defen-

sora del *status quo* de la seguridad tiende a crecer y hacerse visible al grito de «más seguridad de mi propiedad, de lo que es mío».

Argentina (2004)

Las acciones colectivas que demandan mayor seguridad refieren a «…delitos que son percibidos como amenazas sobre los bienes y sobre las personas cuya característica en común es la aleatoriedad, la percepción de que pueden abatirse sobre cualquiera» (Kessler, 2015:272). Esta demanda emerge en Argentina durante la última década del siglo xx que, según MaristellaSvampa (2005), tuvo como precedente a la masacre del ingeniero Budge (1987), la muerte de Walter Bulacio (1991), el asesinato de Miguel Bru (1993), el crimen del soldado Omar Carrasco en Zapala (1994) y del fotógrafo José Luis Cabezas (1996). Sin embargo, desde inicios del presente siglo cobra protagonismo político y se reinstala como una de las principales preocupaciones ciudadanas. Así, en abril de 2004 Juan Carlos Blumberg, padre de un joven secuestrado y asesinado en la provincia de Buenos Aires, convocó a una protesta logrando una multitudinaria manifestación frente al Congreso Nacional. El recién electo presidente Néstor Kirchner tuvo una actitud proactiva frente a esta situación y potencial conflicto social facilitándole a Blumberg diversos canales institucionales, por ejemplo: que se encuentre presente en una sesión de Cámara de Diputados, permitiéndole designar, incluso, quién podía tomar la palabra y quién no, algo fuera de protocolo e irregular. Lo cierto fue que, en esta ocasión, Néstor Kirchner sabía que no podía rivalizar ni con Blumberg ni hacer caso omiso de esta problemática. Las reformas exigidas por Blumberg al Código Penal y Procesal se efectuaron a partir de la sanción de seis leyes,[2] las que endurecieron las penas y el régimen de libertad condicional (Svampa, 2005). A pesar del impacto público, la figura de Blumberg no tuvo futuro político —su candidatura a la gobernación de Buenos Aires obtuvo un 1,3 %—, sin embargo, el problema de la (in)seguridad urbana se instaló definitivamente en la sociedad argentina (Mauro y Rossi, 2012; Kessler, 2010).

Instalada la problemática en la sociedad y en la agenda política, mucho no se avanzó desde la perspectiva de las políticas públicas durante el kirchnerismo.[3] Lo cierto fue que sobre el temor a la inseguridad y la victimización el

2 Entre abril y junio de 2008 se sancionaron las leyes 25882, 25886, 25891, 25892, 25893 y 25982.

3 Entre las líneas de acción de mayor relevancia se puede registrar la directiva a las fuerzas de seguridad de no usar armas de fuego en las manifestaciones sociales durante parte del gobierno de Néstor Kirchner la creación del Ministerio de Seguridad en 2010, y los planes de desarme de la ciudadanía.

gobierno encabezado por Mauricio Macri construyó un importante vector de política que irradiaba sobre un conjunto heterogéneo de situaciones, desde la criminalización de la protesta hasta el endurecimiento de penas y la baja de la imputabilidad de las personas.

Uruguay (2011)

Los partidos tradicionales en Uruguay (partido Blanco y Colorado), han tenido una actitud crítica y de oposición acérrima a lo largo del gobierno del Frente Amplio que se inicia en el año 2005. En ese sentido, las temáticas de seguridad ciudadana, no estuvieron exentas en el horizonte de amplios sectores de ambas fuerzas que, encabezados por Pedro Bordaberry (hijo del dictador Juan María Bordaberry), recolectaron aproximadamente el 10 % del padrón total en el año 2011 para iniciar el proceso de consulta a la ciudadanía para reducir la edad de imputabilidad de las penas desde los 18 a los 16 años.

Si bien esto redundaría en una amplia reacción, conocida como el «Movimiento No a la Baja» que logró derrotar a la opción propuesta por Bordaberry (Berri y Pandolfi, 2018), en el año 2014 el «Sí» obtuvo el 47 %; por ende, lo que interesa recuperar aquí es la capacidad previa de los sectores más conservadores para poner en el centro de la escena el problema de seguridad, realizar una acción colectiva en torno a la resolución de la misma en un marco de las opciones democráticas de (re)formulación de políticas públicas y, por último, motorizar a la mitad del electorado en torno a una orientación conservadora.

Esta situación no resulta llamativa, si se tiene en cuenta que, desde 1985 a 2011 hubo 14 proyectos de ley presentados e esa dirección y, especialmente, al momento de la presentación del pedido del plebiscito (2011), el 70 % de la población estaba de acuerdo con la propuesta de modificación penal, en parte dado a que la inseguridad era considerado el principal problemas en la opinión pública, independientemente de la (in)trascendencia real del problema (Moras, 2015:256 y 261; Tenembaum, 2011:143). Sin embargo, la estrategia de búsqueda de firmas fue más allá de las subculturas y estrategias habituales de las fracciones de los partidos tradicionales que la apoyaban, al escudarse en las organizaciones de víctimas de delito (especialmente la «Comisión para vivir en paz» en Montevideo), iglesias evangélicas y asociaciones de comercio y pequeñas empresas (especialmente en el interior).

Perú (2018 y 2019)

La seguridad es una percepción asociada a la estabilidad, el *status quo* del orden social; es por ello, que un elemento disruptivo, como la apertura de una sociedad al riesgo, la universalización y el cambio son siempre condiciones inherentes a un estado de situación percibido como «inseguro». A partir del año 2015, el éxodo venezolano comenzó a marchar sobre los países cercanos de la región, provocando un ingreso masivo de migrantes a Brasil a través del estado de Roraima, a Colombia por la ciudad de Cúcuta, a Perú por la de Tumbes, a Ecuador por Rumichaca y a Chile por la de Tacna.

Para el año 2018, alrededor de 500 000 venezolanos habían ingresado en el territorio peruano como inmigrantes, configurando el rol de un «otro nuevo» que ponía en ciernes la rutina del tiempo social de ese país y, obviamente, trastocando la sensación de seguridad. Según datos de Latinobarómetro, desde el año 2015 al año 2018, casi 40 % de los peruanos dice estar preocupados «todo el tiempo» ante la posibilidad de ser víctimas de un delito con violencia (y alrededor del 30 % lo piensa «algunas veces»); pero también, para el año 2018, el 72 % de los peruanos consideraba que la llegada de inmigrantes al país lo perjudicaba.[4] Hacia el año 2019, según la encuestadora Comercio–Ipsos, en la ciudad de Lima el 54 % de los encuestados consideraba perniciosa la inmigración venezolana porque estimaban que «aumenta la delincuencia y las actividades delictivas».[5]

Este panorama fue el caldo de cultivo para que un sector conservador de la sociedad anatemice su inseguridad en la figura del inmigrante y, por ende, lo exprese a través de la acción colectiva. Durante el año 2018 y 2019, se dio un gran activismo en las redes sociales en torno a la búsqueda de la salida de los venezolanos de Perú por ser los activadores de la delincuencia e inseguridad. Pero también se configuraron acciones colectivas: durante el 2018 se produjo la colocación de pancartas que decían «Perú sin venezolanos. Basta» en los puentes viales de la ciudad de Lima;[6] y, en el 2019,se llevaron a cabo diversas «Marchas contra la delincuencia extranjera» en barrios de Lima (febrero) o

4 Ver: Latinobarómetro (http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp). Consultado: 15/10/2019

5 Ver: *El Comercio*, 29/04/2019. «El 67 % de limeños no está de acuerdo con la inmigración venezolana al Perú», disponible en: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/67–limenos–acuerdo–inmigracion–venezolana–peru–noticia–630720–noticia/ Consultado el 15/10/2019.

6 Ver: 800 Noticias: https://800noticias.com/xenofobia–asi–fue–una–protesta–en–el–peru–por–la–llegada–de–miles–de–venezolanos

ciudades como Tacna (septiembre), con consignas como «fuera los venecos», «la casa se respeta» o «Maduro llevate tu basura».[7]

Conclusiones

«Tradición, familia y propiedad» son sin lugar a dudas tres de los baluartes ideacionales que dan forma al pensamiento conservador, especialmente en América Latina, donde los valores religiosos, la tenencia de la tierra y el peso de las jerarquías han sido mojones históricos difíciles de transformar. Por ende, no resultaría llamativo que un sector de la sociedad que se ve representado en estas consigas, al evaluar el presente y futuro bajo el halo del riesgo, del cambio, considere necesario movilizarse en pos de la defensa y primacía de estos valores, en pos de una retro–evolución.

En este escrito, nos hemos concentrado en torno a la propiedad como valor, pero es posible extender el panorama y argumento descrito a la reacción y activación ciudadana de corte conservadora durante el siglo XXI latinoamericano frente a los desafíos que proponen iniciativas como: el matrimonio igualitario, el aborto, la educación sexual integral, el boom de nuevos sectores dinamizadores de la economía, la ampliación de derechos a las minorías, entre tantos otros elementos que ponen en tensión el *status* quo sobre lo que es la tradición y la familia.

Ahora bien, aún resta responder «¿por qué grita esa gente?». Es decir, porqué durante las primeras dos décadas del siglo XXI, los sectores conservadores de derecha hicieron de la acción colectiva y la política contenciosa uno de sus resortes para hacerse oír en América Latina. El argumento que se sostuvo en este artículo señala que esto se debe a:

> 1) una reacción de una parte importante de la sociedad a las orientaciones de política pública de los gobiernos del «giro a la izquierda»; 2) para incidir y/o retrotraer la situación a un *status quo* ante donde primen una situación de jerarquías, privilegios y desigualdades imperantes; 3) en el marco de un debilitamiento de las organizaciones partidarias tradicionales (especialmente los de origen demócrata cristianos) en las cuales los sectores conservadores hacían oír su voz; 3) y un

---

7 Ver: Tenemos Noticias, «"Fuera los venecos": en una marcha peruano gritan mensajes de xenofobia contra venezolanos», disponible en: https://tenemosnoticias.com/noticia/venecos–marcha–venezolanos–mensajes–899212/1639152 Consultado el 15/10/2019. Peru 21, «Peruanos protestan contra venezolanos durante manifestación en rechazo a Maduro», disponible en: https://peru21.pe/lima/peruanos–protestan–venezolanos–manifestacion–rechazo–nicolas–maduro–fotos–457509–noticia/ Consultado el 15/10/2019

> creciente aprendizaje en torno cómo incide y cuáles son los repertorios disponibles de la acción colectiva en democracia que deja de ser dominio exclusivo de los grupos de izquierda. (Murillo, 2019:117)

En este marco, los sectores de la sociedad de corte conservadora, junto a organizaciones de la sociedad civil del mismo tenor (iglesias, sectores rurales, grupos de clases medias y medias altas, entre tantos otros), ingresaron en la arena pública planteando abiertamente su descontento político.

En este marco, no resulta azaroso que las fuerzas de seguridad, que durante la década de 1980 y 1990 retornaron a los cuarteles, sean nuevos depositarios de este renovado grito que motoriza la porción conservadora de la sociedad, dando origen a nuevas fuerzas políticas de relevancia como Jair Bolsonaro en Brasilo Cabildo Abierto en Uruguay por mencionar algunos, pero también de apelación a las fuerzas de seguridad como la última *ratio* en contextos de convulsión política, como es el caso de la crisis Ecuatoriana, Chilena o Mexicana durante el 2019.[8]

En definitiva, el siglo XXI sudamericano no solo dio brillo y lustre a fuerzas políticas y sociales de izquierda con capacidad de gobernar y producir un cambio en las condiciones desiguales de la región, sino también dio lugar y herramientas a nuevas fuerzas políticas conservadoras que —aprovechando el repertorio disponible de acción colectiva desarrollado en el actual período democrático por la izquierda— plantearon su descontento a viva voz con esta «marea rosa» que ponía en tensión o entredicho sus privilegios, tradiciones, valores y propiedad.

Referencias bibliográficas

Acosta, Alberto (2009). *La maldición de la abundancia*. Comité Ecuménico de Proyectos.

Amaral, Marina (2016). Jabutinão sobe em árvore: como o MBL se tornou líder das manifestações pelo impeachment. En *Por qué gritamos golpe. Para entender o impeachmenteacrise política no Brasil* (pp. 49–54). Boitempo.

Amselle, Jean–Loup (2010). *Rétrovolutions: Essais sur les primitivismes contemporains.* Stock.

Berri, Mateo; Pandolfi, Jimena. (2018). Movimiento «No a la baja»: construcción estratégica de la identidad colectiva. *Revista de Ciencias Sociales 31* (42), 37–56.

Blee, Kathleen M.; Creasap, Kimberly A. (2010).Conservative and right–wing movements. *Annual review of sociology 36,* 269–286.

Bobbio, Norberto (1994). *Derecha e Izquierda.* Taurus.

8 Ver: Americas Quarterly, *«Latin America Risks Becoming the Land of Militarized Democracies»*, 24/10/2019, disponible en: https://www.americasquarterly.org/content/latin–america–risks–becoming–land–militarized–democraciesConsultado el 25/10/2019.

Burbiano de Lara, Felipe (2009). Las luchas autonómicas de Guayaquil y Santa Cruz. Una perspectiva comparada. En *Arceo, E. y Bustelo, E. (Comps). Las condicionantes de la crisis en América Latina. Inserción internacional y modalidades de acumulación* (pp. 275–320). CLACSO.

Cerruti, Pedro (2009). Procesos emocionales y respuestas punitivas: acerca del activismo penal de las víctimas del delito. *Revista electrónica de psicología política 6* (20), 15–25.

Diani, Mario (2015). Revisando el concepto de movimiento social. *Encrucijadas Revista Crítica de Ciencias Sociales 9,* 1–16.

Galar, Santiago (2017). Problematizar el problema. Apuntes para complejizar el abordaje de la inseguridad en la dimensión pública. *Papeles de Trabajo 11* (19), 61–76.

Garland, David (2005). *La cultura del control.* Editorial Gedisa.

Giddens, Anthony (1994). *Más allá de la izquierda y la derecha.* Editorial Cátedra.

Hayek, Friederich (2007). *Camino de servidumbre.* Alianza Editorial.

Hobsbawm, Eric (1994). Identidad. *Revista Internacional de Filosofía Política 3,* 5–17.

Iglesias, Esteban (2008). Política y protesta. Visiones comparadas de la acción colectiva. En Fernández, A. y Lesgart, C. (Comps.) *La democracia en América latina. Partidos Políticos y Movimientos Sociales* (pp. 149–170). Homo Sapiens.

Iglesias, Esteban (2013). Kirchnerismo y sindicalismo peronista. La persistente desarticulación de un vínculo en un contexto de revitalización sindical. En Fernández, A. (Comp.), *Rasgos y perspectivas de la nueva izquierda en América del Sur. Partidos políticos y movimientos sociales* (pp. 57–80). Homo Sapiens.

Jiménez, Juan Pablo (2017). Equidad y sistema tributario en América Latina. *Nueva Sociedad 272,* 52–67.

Kessler, Gabriel (2010). El sentimiento de inseguridad y el temor al delito en Argentina. En Kessler G.; Svampa, M. y Gonzáles Bombal, I., *Reconfiguraciones del mundo popular. El Conurbano Bonaerense en la postconvertibilidad.* Prometeo.

——— (2015). *Controversias sobre la desigualdad: Argentina, 2003–2013.* Fondo de Cultura Económica.

Lucca, Juan Bautista; Benetti, Gabriela; Iglesias, Esteban (2017). Partidos, Sindicatos y los Gobiernos del diálogo social en Argentina, Brasil y Uruguay en el siglo XXI. En *Itinerarios políticos contemporáneos en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay* (pp. 91–111). EDUNR. Disponible en: https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/8522

Lucca, Juan Bautista (2012). ¿Por qué se mueve la gente en América Latina? Revista *Mexicana de Análisis Político y Administración Pública 2,* 139–148.

Martin, Isaac William (2013). *Rich people's movements: Grassroots campaigns to untax the one percent.* Oxford University Press.

Mauro, Sesbastián, y Rossi, Federico (2012). Entre la plaza y la Casa Rosada: diálogo y confrontación entre los movimientos sociales y el gobierno nacional. En Malamud, A.; De Luca, M. (Coords). *La política en tiempos de los Kirchner* (pp. 167–178). Eudeba.

Mayorga, Fernando (2018). *Antes y después del referendo. Política y democracia en el Estado Plurinacional.* Universidad Mayor de San Simón. Centro de Estudios Superiores.

McVeigh, Rory (2009). *The rise of the Ku Klux Klan: Right–wing movements and national politics.* University of Minnesota Press.

Morás, Luis Eduardo (2015) La violencia adolescente como excusa disciplinante: el plebiscito para reducir la edad de imputabilidad penal en Uruguay. *Derecho y Ciencias Sociales 12,* 254–271.

Mouzo, Karina (2012). Inseguridad y populismo penal. *URVIO Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 11,* 43–51.

Murillo, María Victoria (2019). Democracia, intereses y estatus en América Latina, *Nueva Sociedad, 282,* 110–120.

Peixoto de Oliveira, Renata (2019). *Semrevoluçoes. Os dilemas das democracias neoliberais andinas.* Appris.

Pichardo, Nelson A. (1997). New social movements: A critical review. *Annual review of sociology 23* (1), 411–430.

Retamozo, Martín; Di Bastiano, Rocío (2017). Los movimientos sociales en Argentina. Ciclos de movilización durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner 2003–2015. *Cuadernos del CENDES 35,* 117–153.

Rocca Rivarola, Dolores (2019). Tres momentos de la movilización política reciente en Brasil (2013–2016). En *Política Brasileña en Español. De la crisis al impeachment* (pp. 25–41). EDUNER.

Rojas, Cesar (2015). *Conflictividad en Bolivia 2000–2014: ¿cómo revertir la normalización de la presión social?* Fiedrich Eber Stiftung.

Romero, José Luis (1970). *El pensamiento político de la derecha latinoamericana.* Paidós.

Singer, André (2018). *O lulismo em crise: umquebra–cabeça do período Dilma (2011–2016)*. Editora Companhia das Letras.

Soler, Lorena; Giordano, Verónica; Saferstein, Ezequiel (2018). Las derechas y sus raros peinados nuevos. *Apuntes de Investigación del CECYP 1* (30). pp. s/n.

Sousa, Jesse (2018). *A elite do atraso.* Leya.

Stoessel, Soledad (2014). Giro a la izquierda en la América Latina del siglo XXI: Revisitando los debates académicos. *Polis (Santiago) 13* (39), 123–149.

Svampa, Maristella (2005). *La sociedad excluyente: la Argentina bajo el signo del neoliberalismo.* Taurus.

Tatagiba, Luciana; Galvão, Andreia (2019). Las protestas en Brasil en época de crisis (2011–2016). *Opinião Pública 25* (1), 63–96.

Tenenbaum, Gabriel (2011). La discusión legislativa de la edad de imputabilidad en los anales de la recuperación democrática Cualquier semejanza con la actualidad NO es pura coincidencia. *Revista de Ciencias Sociales 24* (28), 127–147.

Traverso, Enzo (2018). *Las nuevas caras de la derecha: conversaciones con RégisMeyran.* Siglo Veintiuno.

VonBeyme, Klaus (1985). El conservadurismo. *Revista de estudios políticos 43,* 7–44.

El lenguaje republicano en la nueva derecha. Populismo y republicanismo en PRO–Cambiemos

Gastón Souroujon

Lo saludable de la gramática democrática es su capacidad para vehiculizar la lucha política a través de la palabra, los conceptos reemplazan las armas en el espacio público para dirimir las diferencias y éstos muchas veces son utilizados con la misma belicosidad que caracterizaba a aquellas. Los conceptos son las armas políticas que ostentan los jugadores en el tablero democrático para procurar herir a sus adversarios, deslegitimarlos, una lucha en principios sin sangre, que si bien no atenta contra la vida biológica del contrincante procura afectar su vida política. Desde 1983 en el caso argentino fue el par conceptual democracia–autoritarismo, el blandido para herir a la oposición, más allá de lo fundado o no de esta utilización, la misma permitía presentar al adversario con rasgos autoritarios por lo que el éxito electoral de este actor suponía un riesgo para la misma democracia.[1] En los últimos años un nuevo par conceptual cobra relevancia en Argentina y en otras latitudes, el par república–populismo. Este último se transformaría en la síntesis del gran mal que azota nuestros territorios y erosiona la república. Armas de guerra que adquiere una gran centralidad en el discurso del gobierno liderado por la expresión de la nueva derecha que presenta Propuesta Republicana (PRO)–Cambiemos, que se convertiría en la primera experiencia de este color político, en la primera fuerza liberal conservadora,[2] que llega al ejecutivo nacional con el apoyo popular.[3]

Es fundado el señalamiento de que la utilización de la categoría república por parte de las fuerzas o de los intelectuales de derecha no es una novedad en nuestro país. Como lo describe Morresi (2014:323), a partir del afianzamiento del voto secreto y universal el vocablo república fue utilizado por los grupos conservadores para identificar un conjunto de valores éticos e institucionales en oposición a los nuevos grupos de ciudadanos y a los líderes demagógicos. Categoría también recuperada por la tradición intelectual del

1 Los ejemplos más significativos son la denuncia de Raúl Alfonsín de un pacto militar sindical, y los intentos en el seno de la campaña presidencial de 1989 de asociar la figura de Carlos Menem al pasado violento y autoritario, incluso existió un virulento spot que luego no salió al aire en donde se sucedían las imágenes del futuro presidente con imágenes de los sucesos en La Tablada.

2 Para profundizar en torno a la combinación de tradiciones liberales y conservadora que dan sustento a los gobiernos de centro derecha o de la nueva derecha ver (Souroujon, 2018).

3 Podríamos matizar esta aseveración incluyendo el segundo período de Carlos Menem en la cabeza del ejecutivo nacional inaugurado en 1995.

liberalismo conservador que surca el siglo XX argentino, en particular luego de 1955, en donde oponían a la experiencia peronista un ideario de república, elitista, moderada, enfocado en la protección de las tradiciones e instituciones heredadas, cuya dirección debía estar en manos de los mejores elementos de la sociedad, una aristocracia dentro de la democracia (Vicente, 2015). Como afirma Vicente (2015:45) la articulación liberal conservadora en este contexto confluye con una idea de republica limitada. Esta apropiación de la categoría república también puede ser percibida en el nombre que escogen las distintas fuerzas de derecha para nominar a sus partidos, no solo el PRO, sino el partido de Bussi en Tucumán: Fuerza Republicana, o el partido liderado por Domingo Cavallo: Acción por la República (Adamovsky, 2017).

Allende estos antecedentes, para aquellos interesados en las tradiciones políticas hay algo que incomoda. ¿Cómo es factible que la misma tradición que inspiró las revoluciones modernas se convierta en un arma blandida por fuerzas de derecha?, o si se quiere más acá en el tiempo, por qué la derecha es la que se apropia de una tradición que reemergió en la década del ochenta como la panacea que debería solucionar el problema de las magras performance de las democracias, qué elementos permitieron que la derecha sea la que articule la tradición que, tras el fracaso del socialismo, se erigió como la alternativa que podía hacer frente al dominio de la filosofía política liberal (Maynor, 2003). Preguntas que nos llevan a otro interrogante en el orden de las tradiciones políticas, de qué manera el liberal conservadurismo, una articulación de lenguajes de por sí tensional, incorpora el lenguaje republicano, cuáles son los puntos de contactos en esta triada.

Reconocemos que las tradiciones políticas son un lenguaje que habilita a múltiples juegos, así como los conceptos son armas elásticas (el populismo es un ejemplo irreistible de lo dicho), sin embargo no es factible las apropiaciones ex nihilo, que no tengan asidero dentro de la tradición. En el presente escrito nos introduciremos en la obra del principal exponente del republicanismo contemporáneo, Pettit, para encontrar allí las huellas, las marcas que habilitan la reapropiación por parte de la derecha de esta tradición, y paralelamente comprender que entiende la derecha cuando habla de la otra parte del par conceptual: el populismo. Trataremos de mostrar que el republicanismo contemporáneo, que nace con la revolución historiográfica de la escuela de Cambridge, se asienta sobre una fuerte tradición de república aristocrática que tiene sus antecedentes en Cicerón, Bruni, Guicciardini, *El Federalista;* tradición que desconfía de la participación popular, y tal como afirma McCormick (2003), genera escenarios similares a los articulados por las teoría elitista y procedimental de la democracia de Schumpeter, por lo que difícilmente este republicanismo podría resolver los problemas de las democracias existentes. Si tal

como provocativamente asevera McCormick (2011:14) los demócratas deberían preocuparse cuando los filósofos emplean el lenguaje de la república, es válida la pregunta de qué es lo que los ciudadanos debemos temer cuando la nueva derecha se apropia de este lenguaje.

El resurgir de una tradición olvidada: el republicanismo contemporáneo

El origen del revival del republicanismo se da con el cambio paradigmático en la historiografía de la Revolución Norteamericana. En tanto en la década del 50, de la mano de los trabajos de Louis Hartz (1991), primaba una lectura liberal de este hecho, en donde se subrayaba que fue el pensamiento de Locke el que signó la Revolución, en los años 70 emerge una interpretación republicana sustentada fundamentalmente por Pocock (1987; 2002*a*) y Wood (1998), quienes argumentaban que el vocabulario que primó en la Revolución Norteamericana fue el forjado en las repúblicas italianas del renacimiento y emigrado de allí a la Inglaterra del siglo XVII, vocabulario articulado en torno al eje virtud–corrupción y no a los derechos naturales. Una década después este cambio paradigmático penetró en la filosofía política y fuimos testigo del surgimiento de una gran cantidad de trabajos analíticos y normativos que procuraban articular una teoría republicana que cuestione los pilares del liberalismo político, que luego del éxito de *La teoría de la Justicia* de Rawls parecía constituirse como la teoría hegemónica para dar cuenta de las democracias contemporáneas.

Sin duda, fue la obra de Pettit *Republicanismo,* editada en 1997, la que sobresalió en el seno de este heterogéneo boom bibliográfico, transformándose al poco tiempo en el texto referente de esta tradición. Prestigio que se forjó fundamentalmente a raíz de la nueva concepción de libertad que proponía, o sería mejor decir que rescataba. Concepción que permitía pensar una alternativa a la taxonomía formulada por Isaiah Berlin. Libertad entendida como no dominación, distinta a la libertad negativa: como no interferencia y a la positiva: como autodominio. Tal fue el éxito de esta concepción que hasta uno de los responsables más relevantes del resurgir republicano, Quentin Skinner, en 1998 reconoce como válida esta noción de libertad, dejando de lado su primera formulación en la que articulaba libertad negativa con virtud.

La esclavitud se convirtió en el arquetipo que permite pensar la libertad como no dominación, el esclavo es aquel que está bajo el dominio arbitrario de otro, sin ser relevante para la definición que el amo efectivamente interfiera o no en su accionar. Por lo que la clave del concepto son las dos diferencias entre dominación e interferencia, en primer lugar la libertad republicana

permite contemplar escenarios de dominación sin interferencia, pues la sola *capacidad* de un amo de generar interferencias arbitrarias compone *ilibertad* no solo las interferencias efectivas. En segundo lugar niega la postura liberal de que cualquier interferencia es *ilibertad*, al reconocer la existencia de interferencias *no arbitrarias*, cuando son reconocidos las opiniones e intereses de los agentes afectado (Pettit, 2002)

En un trabajo anterior (Souroujon, 2019*a*) hemos expuesto que las diferencias entre esta concepción de libertad como no dominación y la libertad negativa liberal son más aparentes que reales, pues las novedades que la primera introduciría podrían contemplarse dentro de la concepción liberal clásica. Lo que nos da un indicio de cuál es la verdadera preocupación del republicanismo contemporáneo, el verdadero némesis del republicanismo no es el liberalismo, sino la libertad positiva que Pettit asocia explícitamente con el populismo.

La democracia contestaría de Pettit

Más allá de que Pettit denomine a su proyecto institucional como democracia, su propuesta se articula con el antiguo resquemor a la democracia que desde Aristóteles hasta *El Federalista* acompaña a la república, siendo la excepción en esta larga historia Maquiavelo, quien a los ojos de McCormick (2003) se halla más cerca de una democracia igualitaria que de una teoría republicana. Si Pettit no es tan convincente al momento de demostrar las diferencias entre republicanismo y liberalismo, claramente establece que la república no es populismo. Pero qué entiende por populismo, cuál es aquel Caribdis que lo aterra (ya mencionamos que el barco del republicanismo contemporáneo suele encallar en Escila). El populismo a los ojos de este pensador, es la postura que comprende que la participación democrática es un valor inconmovible, es la forma más elevada del bien, por la cual el pueblo se convierte en amo y el Estado es un siervo que debe responder a sus preferencias. A diferencia del republicanismo que advierte que la participación puede constituir una salvaguarda de la libertad, el populismo considera que la libertad tiene su origen en la participación efectiva de todos en el poder político, que se traduciría en la democracia directa, asamblearia o plebiscitaria.[4] Visión según Pettit

4 «Los escritores identificados con la amplia tradición republicana, consideran que hay que definir la libertad como una situación que evita los males ligados a la interferencia, no como acceso a los instrumentos de control democrático, participativos o representativos. El control democrático es ciertamente importante en esta tradición, pero su importancia le viene, no de su conexión definicional con la libertad, sino del hecho de que sea un medio de promover la libertad» (Pettit, 1999:50).

(1999*a*) cuyo responsable máximo es Rousseau y su idea de voluntad general y que en el siglo XX se fortalece con la teoría de Arendt.[5]

El republicanismo de Pettit niega que la participación del pueblo contenga cualidades epistémicas y normativas, ésta no genera necesariamente decisiones más acertadas, ni implica una superioridad moral. En consecuencia, la participación del pueblo debe limitarse a la elección de los representantes, dimensión electoral de la democracia que se complementa con las instituciones que permiten la disputabilidad de las decisiones políticas, con la dimensión contestaría de la democracia. Es decir contempla una dimensión autoral de la política plasmada en el gobierno representativo y una dimensión editorial plasmada en instituciones en donde los afectados pueden actuar revisando, corrigiendo, editando el accionar de sus representantes (Pettit, 2004). Para evitar la dominación de aquellos que ostentan el poder político Pettit contempla la necesidad de una ingeniería institucional, que incluye desde cupos de minorías en el poder legislativo hasta la figura del ombudsman, en donde los afectados por estas decisiones puedan disputar las mismas, que existan los canales para que los distintos grupos cuestiones estas decisiones.[6] Más allá del resultado final estos canales aseguraran que no haya arbitrariedad en las interferencias, arbitrariedad que tendría su origen en el hecho de ignorar las voces de los afectados.

El autor por lo tanto contrapone dos modelos de democracia: por un lado una democracia populista como expresión de la voluntad general basada en el principio de que el pueblo se da sus propias leyes, modelo de democracia definida solamente como el gobierno del pueblo, que Pettit (2002:139) ve como sinónimo de oclocracia. Por otro lado, una democracia republicana, basada en el control del pueblo sobre las decisiones políticas, mediante un control editorial en donde el pueblo, prosigue Pettit, es más pasivo que activo, no es responsable de dictar la política, lo cuál sería actividad del representante, sino de que la política aplicada se adaptará a los intereses comunes del pueblo. McCormick (2011:149) advierte que estos procedimientos contestatarios del pueblo como editor, por más atractivos que aparenten ser, presentan una

---

5 Dudo mucho que a Arendt le hubiese resultado grato verse asociada a Rousseau, Pettit parece ignorar las críticas de Arendt (1992) a esa forma de comprender la democracia y fundamentalmente a la noción de voluntad general rousseauniana por impedir la elección deliberada y opinión reflexiva que da lugar al consentimiento. Tal como asevera Tassin (2007) la postura de la filósofa alemana se acercaría más a la figura de la voluntad de todos criticada por Rousseau.

6 Las precondiciones que deben satisfacerse para que una decisión sea disputable son: 1. que haya una base potencial para la disputa, 2. que existan canales por cuyo cauce puede discurrir la disputa, 3. que exista un foro en donde las disputas puedan hacerse audibles (Pettit, 1999*a*:244).

serie de inconvenientes: son indirectos y reactivos, no tienen poder de veto, y no deciden sobre la implementación o revocación.[7]

República y democracia, un nuevo episodio de una antigua tensión

Una lectura atenta del modelo esgrimido por Pettit, permite encontrar ciertas huellas inscriptas en el lenguaje republicano que entran en tensión con la democracia, huellas que atraviesan muchas de las distintas modulaciones que históricamente presentó este lenguaje, y que explican la aparición de la república y sus usos como arma de batalla contra el populismo en el discurso de un gobierno liberal conservador. No obstante, el trabajo de rastreo de estas huellas sería trascendente para comprender esta tensión, dado los límites de este escrito nos detendremos en tres características relacionadas entre sí que grafican los elementos anti democráticos del republicanismo, elementos que la nueva derecha recupera

Republicanismo y aristocracia. Las huellas elitistas de la tradición

El majestuoso estudio de Pocock (2002*a*) evidenció, el complejo y sinuoso peregrinar de la tradición republicana hasta llegar a los padres fundadores de la Revolución Norteamericana, un recorrido que entre otras cosas pone de manifiesto, que en el balance buscado por la constitución mixta entre el uno, los pocos y los muchos, gran parte de los pensadores inscriptos en este lenguaje se inclinaban por los pocos. El republicanismo era un ideal patriótico congruente con la aristocracia, que no presuponía que todo el pueblo podría participar del esquema político de la misma forma (Kerber, 1985:479), contrario a la democracia que es el gobierno de hombres no diferenciados entre sí (Pocock, 2002*a*:156).

La promisoria idea de igualdad ante la ley y de gobierno de las leyes con que el republicanismo combatía las decisiones arbitrarias de las tiranías, idea de igualdad fundante de las dos grandes revoluciones modernas, se combinaba con la idea de que una república estable y equilibrada se construye a partir de distintos elementos, de distintos cuerpos, los cuales aportaban cada uno sus cualidades a la república y participaban en ella de forma diferenciada. En contraposición con la democracia, la republica no era algo uniforme sino

7 *«Pettit insists that contestatory democracy should not enable people "to veto public decisions", but rather "to call them into question" by triggering reviews or appeals»* (McCormick, 2011:151).

integrada por elementos diferentes que realizarían distintas funciones acordes a estas distinciones. En la temprana modernidad esta premisa que hacía prevalecer a la aristocracia se materializa en la teoría de la deferencia que atraviesa todo el lenguaje republicano, la cual estipula una sociedad diferenciada entre una elite y una no elite, en donde esta última reconoce el status de la primera y considera su liderazgo político como natural, reconocimiento que debería ser espontaneo y no atado a la coerción. En contraste con la esclavitud (el esclavo no se espera que sea deferente), la deferencia forma parte de un comportamiento político libre, por el cual la no elite acepta libremente su situación. Es la voluntaria aceptación de la elite por personas que no pertenecen a ella.[8] Deferencia que encuentra su final con el irresistible ascenso de la democracia que nos describe Tocqueville (Pocock, 2002*a*:517) y que se grafica en la inauguración presidencial de Andrew Jackson (Kerber, 1985). No es casual que este presidente haya sido tildado de populista ya que sus actitudes marcaron una amenaza para la república.[9]

La república combina un ingrediente aristocrático y uno democrático, este último de forma subordinada (McCormick, 2003:618), combinación que deviene de las virtudes distintivas de ambos grupos, en tanto la aristocracia debe debatir, deliberar, analizar, ya que posee las virtudes de la *theoria*, el pueblo está mejor capacitado para decidir, lo que debería institucionalizar una aristocracia natural, distinta a la hereditaria, en una gramática de igualdad ciudadanía (Pocock 2002*a*518). La clásica distinción, la autoridad en el senado y el poder en los tribunos, da cuenta de la teoría de la deferencia, retomando a Arendt (2016:147) la autoridad siempre demanda obediencia pero excluye medios de coacción, establece un orden jerárquico donde los que mandan y los que obedecen reconocen esta jerarquía.

---

8 Postulado elitista que según la lectura de McCormick (2007), ni siquiera pudo evadir la figura de Rousseau, quien recordemos para Pettit es el que padre fundador del populismo moderno. El ginebrino cuando describe las instituciones romanas, que son la llave para comprender su teoría abstracta, aplaude las instituciones que le dan prerrogativas a las elites dentro de la república, lo que explica su desdén por la democracia ateniense.

9 Con Jackson también somos testigos de un cambio conceptual en torno a la legitimidad del ejecutivo y del legislativo, y con una expansión de poder del primero en detrimento del segundo. Hasta entonces no se cuestionaba la idea de que el representante legítimo de la voluntad popular era el Congreso, Jackson fue el primero que sostiene lo contrario al fundamentar que era el único funcionario electo por todo el pueblo y no solo por una fracción (Guariglia, 2017:129).

La Revolución Norteamericana se encontró con el trabajo de traducir este esquema republicano en una sociedad sin diferencias estamentales, sin embargo tanto federalistas como antifederalistas,[10] seguían manteniendo esta convicción de que el hombre ordinario no estaba capacitado para hacerse cargo de aquellos asuntos que presuponían una inteligencia superior a la media (Rahe, 1994:171) su función se debía limitar a elegir a los representante. Madison subraya las ventajas de la república por sobre la democracia, pues al delegarse la facultad del gobierno en un pequeño número de ciudadanos, la opinión popular es filtrada por la prudencia de los pocos, quienes disciernen mejor los intereses comunes a largo plazo (Hamilton, Madison y Jay, 2014:39), las democracias puras son susceptibles de reproducir un espíritu sectario que atenta contra las minorías.

Más allá de su carácter innovador, el republicanismo contemporáneo de Pettit, al insistir en que el consentimiento no garantiza la libertad sigue reproduciendo este sesgo elitista, ya que: marginaliza la participación popular, solo reconoce las elecciones como medio para escoger magistrados, niega el papel democrático del sorteo, y confía en la elite las definiciones sobre el bien común (McCormick, 2011:167).

Las pasiones de los muchos y la necesidad de despolitizar

Ciertos postulados del republicanismo contemporáneo de Pettit parecen recuperar una huella que acompaña a parte de la tradición republicana, la concepción de que el pueblo es un actor irracional, pasional incapaz de despojarse de los intereses particulares y cortoplacistas en pos del bien común, incapaz de virtud. Un actor que pone en peligro la república que es un régimen de virtud, de abnegación por la cosa pública, que permite la concreción de las mejores leyes a largo plazo para la comunidad política e implica una represión de los deseos inmediatos, de los deseos de primer grado de los hombres en pos de favorecer los intereses de la cosa pública. Es por eso que cualidades como la moderación el autodominio, la frugalidad son elementos que acompañan a la idea de virtud republicana. Virtud que como señala Montesquieu es antinatural, pues direccionan al hombre contra sus inclinaciones primarias (Ribeiro, 2008) y en consecuencia requiere un conjunto de instituciones que la inculquen: educación, religión civil, costumbres.[11] Ante la mirada de

10 Aunque debemos reconocer que los antifederalistas al poseer preocupaciones y valores más afines con la tradición democrática, observaban con reticencia el proyecto que terminó triunfando por considerarlo aristocrático (Storing, 1981:48).

11 Recordemos que Rousseau reconoce la necesidad de un legislador que desde fuera introduzca la constitución que convierta a los hombres en ciudadanos, que convierta al buen

la tradición republicana que defiende la deferencia y la virtud, la democracia es el régimen de los iguales no virtuosos, el régimen que permite expresar las pasiones del pueblo en el espacio público. Pueblo incapaz de juzgar imparcialmente y desapasionadamente.

Este postulado del republicanismo contemporáneo habilita un punto de encuentro con la tradición conservadora, ambos rechazan a la democracia por su incapacidad para pensar en el bien público. Como lamenta Irving Kristol (2011) uno de los exponentes más relevantes de los *Neocons*: el reemplazo del vocablo república por el de democracia expresa una pérdida del bien público que era sustentada por la virtud republicana. La virtud republicana, continua Kristol, le aportaba una prudencia, un sentido de límites a todos los ámbitos de la vida y a todas las profesiones, que posibilitaba que cada actividad este regulada por un código moral en pos de la república. Un ethos que subordinaba la abundancia, los intereses materiales, el lujo, a las demandas morales de la sociedad. Premisa que, por ejemplo, ponía en cuestión cualquier medida de protesta sindical, pues los intereses económicos de corto plazo no justificaban una convulsión en la comunidad. El problema que apareja la democracia es que las instituciones pasan de hacer demandas a satisfacer demandas, lo que genera que el respeto por las mismas desaparezca. En tanto en la democracia lo político se convierte en un espacio de satisfacción de demandas, en la república lo político es el espacio que demandaba exigencias morales a la ciudadanía. El ciudadano republicano es uno que se adapta a las instituciones no como el democrático que quiere adaptar las instituciones a sus intereses

Frente al problema que presentan las pasiones populares y los intereses a corto plazo en el seno del espacio público, Pettit encuentra el remedio en la despolitización de ciertas áreas de decisión mediante la constitución de foros de expertos y opinión pública, o de espacios pequeños de deliberación de gente tomada al azar luego de someterlas a un proceso informativo, solo así se evita la reproducción de medidas arbitrarias y la deliberación razonada primaría en el espacio público[12] (Pettit, 2004). Como crítica McCormick (2011:159) estas medidas que suponen que una elite de expertos puede discutir desinte-

---

salvaje solitario en un ciudadano que forme parte de un todo que lo trasciende. Lo que lo enfrenta a esa famosa aporía: *«que los hombres fuesen antes las leyes lo que deben llegar a ser por* ella» es decir que solo ciudadanos virtuosos reconocerían la bondad de esas leyes, pero es justamente la labor de esas leyes crear ciudadanos virtuosos. Aporía que resuelve con la apelación a Dios.

12 Se debe reconocer que Pettit también observa que la despolitización es la solución frente a los intereses faccionales de los representantes y frente a la incidencia de las aspiraciones morales del pueblo en las decisiones.

resadamente, al poner en juego su reputación y su deseo de estima ante sus iguales, implican alejar las decisiones importantes de la influencia del pueblo.

La necesidad de limitar la incumbencia de lo político, de poner fronteras rígidas a las temáticas susceptibles de ser tratadas por el accionar de las masas, también es visible en Hannah Arendt, en cuya teoría las huellas republicanas abundan. Necesidad de límites que hunde sus raíces en la separación ontológica entre lo público y lo privado, entre la libertad y la necesidad, dada la perversión en las actividades que se genera cuando estos límites se violan (Rabotnikof, 2005:119). La Revolución Francesa es el paradigma de este borramiento de los límites, al permitir que el reino de las necesidades y la pasión de la compasión se presenten en el espacio público (Arendt, 1992). Canovan (2006) remarca que esta necesidad de límites es una característica conservadora que Arendt comparte con autores como Oakeshott. Límites que debe imperar no solo por el comportamiento masificado, enfocado en objetos materiales y fácilmente manipulable de los muchos, sino también en el caso de Arendt por la característica anárquica, impredecible de la acción, la misma capacidad del hombre para obrar milagrosamente los impele a la moderación, a pensar instituciones que permitan la duración (Canovan, 2006:61).

El nuevo César: las mayorías

Históricamente el enemigo natural del republicanismo es el César, en quien convergen todos los elementos antirrepublicanos: la dominación, la corrupción, la unanimidad, el gobierno arbitrario y la sinécdoque de confundir la parte por la totalidad de la comunidad política (Rosler, 2016:257). César como institución, allende que la persona particular que ostente ese rol sea un virtuoso, ya implica dominación arbitraria, como lo es el amo gentil de un esclavo.[13] Como sugiere Rosler (2016) el elemento antirrepublicano del cesarismo no es el personalismo, sino la dominación arbitraria, dominación que como hemos visto también puede surgir de una mayoría pasional. Esto habilitaría en la modernidad que liberalismo y republicanismo compartan un temor común: la tiranía de la mayoría.

Nuevamente es en el seno de la Revolución Norteamericana donde ciertas huellas de la tradición republicana se reactualizan en clave moderna, recordemos que en tanto el gran temor de los antifederalistas era la corrupción en el ejercicio del poder, que los políticos utilicen el poder en perjuicio del pueblo,

13 Como expresa Bruto en la obra de Shakespeare: «Eso puede hacer César y por ese *puede* habrá que tomar medida. Puesto que la causa contra él no tiene mucho peso, digámoslo de este modo aquello que es él acrecentado»

los federalistas sospechaban más del comportamiento colectivo, del accionar de las mayorías. Como hemos sugerido la única cualidad que veían los federalistas en los ciudadanos era su capacidad para distinguir a los gobernantes virtuosos a la hora de elegir, pero cuando el pueblo actuaba colectivamente era una amenaza (Sánchez–Cuenca, Lledó, 2002:23). La mayoría en la forma de gobierno popular puede: «sacrificar a su pasión dominante y a, sus intereses, tanto el bien público como los derechos de los demás ciudadanos» (Hamilton, Madison y Jay, 2014:39).

La solución que idearon los padres fundadores se halla en la extensión de la nueva república y en la multiplicación de intereses que allí habitan, lo que tornaba difícil que se consolide una mayoría homogénea. Una mayoría tendría que estar compuesta de múltiples facciones para conseguir dominar un país tan extenso, lo cual evitaría que una de ellas consiguiera imponer unos intereses locales sobre los demás. A esta se le agregaría instituciones contramayoritarias de corte liberal, la revisión judicial, y el *Bill of Right* impulsado por los antifederalistas.

Las instituciones contestarías que el republicanismo contemporáneo de Pettit propone, en principio reconoce que la dominación arbitraria puede originarse tanto en los representantes políticos, en las prerrogativas de la elite minoritarias, como en las mayorías; sin embargo cuando nos adentramos en su obra y en la ingeniería institucional que contempla notamos que ve a la tiranía de la mayoría como la amenaza central. El problema de la tiranía de la mayoría, según el autor, es que los gobiernos pueden reproducirse ignorando los intereses reconocibles de las minorías, pero lo que la torna más peligrosa es que el colectivo mayoritario, más allá de su arbitrariedad, conforma una voluntad muy difícilmente criticable en nuestras culturas políticas. Irónicamente, continua Pettit (1999*b*:178), el lenguaje igualitario respecto a la gente común le brinda una suerte de inmunidad moral a una fuerza que puede erigirse como la amenaza mayor a la libertad de los individuos.

Las instituciones contestarías de Pettit funcionan entonces más como instituciones contramayoritarias liberales que como las instituciones populares contestarías que la tradición republicana recupera de los tribunos romanos (McCormick, 2011:154), lo que obedece a dos presupuestos conectados con los puntos anteriores. Por un lado la creencia que la instancia electoral participativa, por más mínima que sea, ya implica una garantía de que los intereses de las mayorías serán respetados y representados; por otra parte que la dominación característica de nuestros regímenes es la discriminación a las minorías, por lo que las diferencias económicas y de poder entre ciudadano y elite no requieren compensación contestaría. Pettit parece no darle tanta importancia a la dominación que se ejerce por medio del dinero y que padecen las mayorías.

El liberalismo conservador y la república

Hemos definido la experiencia política de PRO como una expresión de la nueva derecha, articulación que, no obstante poseer sus antecedentes en la derecha moderada del siglo XIX, tiene en los gobiernos de Thatcher en Inglaterra y Reagan en Norteamérica a sus exponentes paradigmáticos en el siglo XX. La mayoría de los estudiosos de estas experiencias coinciden en destacar que es la combinación de dos tradiciones históricamente antitéticas, liberalismo y conservadurismo, el eje sobre el que se estructura la nueva derecha (Levitas, 1986; Thompson, 2007; King, 1987). En particular la cepa consecuencialista del liberalismo cuyo mayor exponente es Hayek (ver Gray, 2003; Freeden, 2015). Constructo liberal conservador, que intuitivamente nos parece contradictorio, pero que se asienta en ciertos puntos de contacto, ciertas afinidades electivas entre algunos filamentos liberales y algunos conservadores, sintéticamente:[14]

a) Pesimismo gnoseológico: las posibilidades de aprehender el mundo humano por medio de la razón es limitada, al estar conformado el mismo por un conjunto de instituciones y costumbres que escapan al entendimiento racional. Lo dicho conlleva a que sea epistemológicamente inconcebible la planificación de la vida desde una razón externa

b) Crítica al welfare state: lo dicho anteriormente es la base sobre la que se erige las críticas al Estado de Bienestar tanto desde el liberalismo como del conservadurismo. En tanto el liberalismo consecuencialista lo crítica por sus consecuencias económicas, por su ineficiencia y su carácter gravoso para la sociedad, el conservadurismo despliega sus críticas por las consecuencias morales del mismo, en particular por la erosión de las instituciones que otorgan estabilidad a la vida social: la familia, la religión, las relaciones jerárquicas. Gobierno excesivo y crisis moral (Micklethwait y Wooldridge, 2007) son el lema de la cruzada de la nueva derecha contra la intervención del Estado. Como expresa Edgard (1986), para muchos de la nueva derecha inglesa había un continuum entre Keynes y John Lennon.

c) Provincialismo: el proyecto de la nueva derecha implica una sospecha al gobierno central y nacional y un consecuente retorno a los espacios de autoridad local (Lakoff, 1998:462). Desde el liberalismo son estos espacios, al ser más próximos a la gente, los que se comportan de forma más eficiente para la administración de lo común a todo. Desde el conservadurismo este estrechamiento es consecuencia de su histórica defensa de los grupos intermedios (Iglesia, Familia, Corporaciones) frente al poder del Estado.

14 Para una profundización de las confluencias entre liberalismo y conservadurismo que hacen a la nueva derecha ver Souroujon, 2018.

d) Temor a la democracia: el problema de los conservadores con la democracia es la amenaza a las tradiciones y a la jerarquía que ésta conlleva, el problema de los liberales es el viejo temor de Tocqueville a la tiranía de la mayoría (Marco, 2005). Recordemos que Hayek (2003) observaba que la democracia puede llegar a ser tan opresiva como un gobierno autoritario, más aún si interviene constantemente en la economía. Estos temores se traducen en una desmitificación de la política, en una cruzada contra de la politización de la sociedad (Barry, 1987:193). La expansión de la política a los distintos ámbitos de la vida motorizada por la democracia de masas no redunda en el interés público sino en una constante puja sectorial que se torna ineficiente e inmoral. Como explica O'Sullivan (1989:168), la nueva derecha es la reafirmación de la necesidad de los límites a la política en el mundo moderno.

Aspectos de la articulación liberal conservadora que concurren con los que hemos subrayado en torno al republicanismo, como asevera Vicente (2014:45): «preeminencia del temor a las masas que viene a sumarse a la voluntad de establecer un poder político institucional acotado, hace que la articulación liberal–conservadora sea confluyente con una idea limitada de República». Según este autor serían tres ejes en donde la idea republicana aparece en el liberalismo conservador: una perspectiva elitista donde los mejores de la ciudadanía dejan fuera el espacio amorfo de las masas, un espacio social institucionalizado que impida los desbordes de las masas y el respeto a las instituciones y tradiciones heredadas contra la amenaza disolvente de la democracia de masas. Rasgos que no solamente pertenecen al republicanismo premoderno, como hemos insinuado el republicanismo contemporáneo también anida en sus escritos más relevantes estos elementos.

República y Populismo en clave PRO

Usualmente, aun dentro de las ciencias sociales, se asocia la apelación a la república con el respeto a cierto entramado institucional, división de poderes, la neutralidad de las leyes, y a la denuncia de ciertos delitos de enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios público. Desde esta óptica es acertado la definición de republicanismo selectivo (Lucca, 2019) o de republicanismo bobo (Adamovsky, 2017), dado el poco respeto a las instituciones que ha mostrado PRO–Cambiemos y a las expresiones públicas de indignación por cuestiones secundarias. Incluso en otro trabajo he denominado la experiencia PRO como de republicanismo imposible, pues carente de patriotismo la gramática republicana se torna muy difícil de mantener (Souroujon, 2019*b*). Sin embargo, la apelación al republicanismo por parte del PRO–Cambiemos toma asidero si la

analizamos a la luz de las tres huellas republicanas que comentamos al inicio del trabajo, la república que defiende PRO–Cambiemos se asocia mucho más a las tres características antidemocrática que acompaña esta tradición que al respeto institucional, la denuncia contra la corrupción e incluso el patriotismo.

Las huellas elitistas son reapropiadas al proponer, como bien indica el trabajo de Canelo (2019:73), una representación de notables. La CEO*cracia* que caracterizó al equipo de gobierno (no obstante muchos de los integrantes del mismo no tuvieron un pasado en las empresas privadas) no solo le permitía legitimar su administración a partir de los valores de eficiencia en la gestión probada en otros escenarios, sino que también fue un modo de inscribir una jerarquía social, que cómo la vieja deferencia fue aceptada por gran parte de la sociedad, la fortuna personal y el éxito en el orden de lo privado fueron traducidos como las viejas virtudes públicas de la aristocracia,[15] como la garantía del conocimiento necesario para actuar con moderación, razonabilidad, y sin dejarse influir por las peligrosas pasiones y los intereses particulares. La distancia de clases no fue un obstáculo para afianzar los lazos de representación sino un valor positivo sobre la que se construyó la confianza y la garantía de que el orden social diferenciado se iba a mantener contra la impugnación de los muchos a ese orden social (Canelo, 2019). La introducción de esta nueva aristocracia en política también fue presentada como un sacrificio, una renuncia a la comodidad, al que la sociedad debía estar agradecida, el escritor Marcos Aguinis da cuerpo a esta idea expresando en su momento: «… es gente bienintencionada, incluso hay millonarios que dejaron sus buenos negocios para meterse en este berenjenal… Es un hecho positivo que gente rica se dedique a gobernar» (Entrevista de Luis Majul a Marcos Aguinis, 13/06/2018).

En las apelaciones de PRO también encontramos la inscripción negativa con que se describe al pueblo, inscripción con que construye la concepción de la amenaza populista y que obliga a frenarla, a despolitizar. Nuevamente Canelo nos ayuda a entender esta idea de pueblo que permeo a PRO, un pueblo débil, perezoso, voluble, manipulable (2019:36). Características que lo convertían en un actor incapaz de renunciar a un presente de bienestar artificial por un futuro más venturoso que obligaba a sacrificios. Un pueblo que, como cierta cepa republicana había reconocido, carecía de la virtud de la moderación, de moderar sus intereses a corto plazo, sus placeres inmediatos, en pos de un beneficio para toda la sociedad, moderación necesaria para que los intereses públicos primen por sobre los privados, recordemos que para el republicanismo la democracia es incapaz de pensar el bien público. Pueblo que a su

15 Tal como asevera Vommaro (2017:198), hubo ciertas virtudes morales y sociales traducibles en virtudes políticas.

vez se había dejado exaltar por las pasiones encendidas por los nuevos Cesares. Como explicita el presidente en la apertura de las sesiones del Congreso en el 2017:«Para hacerlo necesitamos más acuerdos y más realidades, menos exaltación y menos símbolos, menos relato y más verdad». La manera de evitar que estas pasiones impregnen la administración del espacio público, es estableciendo fronteras por la cual las decisiones no dependan de los cambios arbitrarios de humor del pueblo, y si la política en democracia implica la participación masiva la solución como Pettit lo advertía es despolitizar, que las plazas como ágora de la política contemporánea se despoje de estas pasiones. «Movilizarse hacer paro son manifestaciones de la democracia en las cuales no creo» expresaba el presidente Macri en una entrevista en 2017, reconociendo que la democracia conlleva ciertas prácticas que son perjudiciales.

En este sentido se busca reflejar una imagen en la que el Estado se había inmunizado de la política: como se reproduce en la página Web CPC PRO: «de a poco nos vamos dando cuenta que el Estado debe ser administrado, y que para ello no sirven la política, la retórica, los discursos ni el voluntarismo. Que los recursos son de todos y son escasos, y que hay que gestionarlos eficientemente» (Devoto, 2014).

Por último PRO vio materializado el temor republicano liberal a la tiranía de la mayoría en Venezuela, el proceso político que atravesaba ese país eran presentado como el escenario futuro al que estaba destinado Argentina si persistía en el camino de la democracia populista. Venezuela era la manifestación de un gobierno arbitrario que ejercía la dominación de una mayoría impulsada por un demagogo, lo que habilitaba a violentar potencialmente los derechos individuales, y a reproducirse ignorando los intereses reconocibles de las minorías. Arbitrariedades que, como señalaba Pettit, cobraban legitimidad por la inmunidad moral que acompañaba al lenguaje igualitario de la democracia. El ancestral temor republicano se tradujo en el temor de la chavización de Argentina y fue el aliciente principal para que la elite abandone la comodidad del espacio privado y asuma sus funciones políticas (Vommaro, 2017), y para que la sociedad acepte la representación de los notables. Ante la furia de las mayorías, la moderación de los que saben.

Comentarios finales

Sería oportuno finalizar realizando algunas consideraciones en torno a las tradiciones políticas tal como las entendemos, pues el lector atento al ver que liberalismo y conservadurismo confluyen con republicanismo podría preguntarse: qué utilidad poseen estas tradiciones que no se diferencian, por qué denomi-

nar de distinta manera a lenguajes políticos que terminan amalgamándose. Las tradiciones políticas son lenguajes, retóricas con sus reglas gramaticales por el cual los discursos particulares son conducidos (Pocock, 2009:88), que poseen una fuerza paradigmática es decir favorecen, legitiman ciertos modos de acción y afectan a otros (Pocock, 1995). Si bien son suficientemente delimitados, en el transcurso de la historia estos lenguajes se van traduciendo de forma distinta según el contexto, los actores políticos van acentuando ciertos elementos de estos lenguajes en detrimento de otros, permitiendo amalgamas tensionales entre los mismos. Como hemos mencionado, si posamos nuestra mirada en el uso del lenguaje republicano por parte de PRO, vemos este empleo selectivo, desaparece una categoría nodal dentro de la gramática republicana,[16] como patriotismo, y se subrayan otras.

Solo de esta manera se explica como la ilustración conservadora inglesa pudo presentar a la autoridad de la aristocracia como la fuerza modernizadora e ilustrada frente a una arcaica y reaccionaria democracia (Pocock, 2002b:309), y se torna comprensible que ciertas tradiciones otrora bandera de la revolución se transformen en los blasones de la de la nueva derecha. En esta clave es que debemos entender las confluencias, no solo entre liberalismo y conservadurismo, sino entre democracia y liberalismo que se da luego de la segunda guerra mundial, confluencias que cobijan en su seno tensiones y contradicciones que al explotar pone en evidencia la naturaleza distintiva de estos lenguajes.

Las críticas que la nueva derecha realiza al populismo reproducen las críticas del republicanismo a la democracia, en este sentido es legítimo su apelación a la tradición republicana, sin embargo la utilización de la tradición republicana por parte de la nueva derecha no empaña la posibilidad de que esta tradición pueda ser articulada dentro de un proyecto más inclusivo, la riqueza del republicanismo permite a la imaginación política componer escenarios más atractivos.

Por último debemos reconocer que muchos de los temores republicanos, no son meras invenciones reaccionarias, el siglo XX fue testigo de las pesadillas en que el sueño democrático se puede transformar, lo que va del siglo XXI no es más promisorio. Sin embargo, el problema de la tensión república–populismo que erige la nueva derecha es la construcción de un hombre de paja que interfiere con las partes más conmovedoras de este sueño.

16 Recordemos que el presidente Macri al realizar el juramento para la asunción del cargo ejecutivo reemplaza el vocablo patriotismo por el de honestidad como cualidad que signará el desempeño de su mandato (Souroujon, 2019*b*).

Referencias bibliográficas

Adamovsky, Ezequiel (2017). *El cambio y la impostura.* Planeta.

Arendt, Hannah (1992). *Sobre la Revolución.* Alianza.

——— (2016). *Entre el pasado y el futuro.* Ariel.

Barry, Norman (1987). *On classical liberalism and libertarianism.* Palgrave Macmillan.

Canelo, Paula (2019). *¿Cambiamos?* Siglo XXI.

Canovan, Margaret (2006). Hannah Arendt como pensadora conservadora. En *Birules (Comp.) Hannah Arendt el orgullo de pensar (*pp. 51–76). Gedisa.

Edgard, David (1986). The free of the good. En Levitas (Ed.) *The Ideology of the new right* (pp. 80–106) Polity Press.

Freeden, Michael (2015). *Liberalism. A very short introduction.* Oxford University Press.

Gray, John (2003). *Liberalism.* University of Minnesota Press.

Guariglia, Osvaldo (2017). *Democracia, república y oligarquía.* Edhasa.

Hamilton, Alexander, James Madison y John Jay (2014). *El Federalista.* Fondo de Cultura Económica.

Hartz, Louis (1991). *La Tradición Liberal en Estados Unidos.* Fondo de Cultura Económica.

Hayek, Friedrich (2003). *Camino de Servidumbre.* Alianza*.*

Kerber, Linda (1985). The Republican Ideology of the Revolutionary Generation. *American Quarterly 37* (4), 474–495.

King, Desmond (1987). *The new right. Macmillan Education LTD.*

Kristol, Irving (2011). *The neoconservative Persuasion.* Basic Books.

Lakoff, Sanford (1998). Tocqueville, Burke, and the Origins of Liberal Conservatism. *The Review of Politics 60* (3), 435–464.

Levitas, Ruth (1986). Introduction: Ideology and the new right enLevitas (Ed.) *The Ideology of the new right* (pp. 1–24). Polity Press.

Marco, José María (2005). Conservadores, liberales y neoconservadores. *Cuadernos de pensamiento político 8* (129–140).

Maynor, John (2003). *Republicanism in the modern world.* Polity Press.

McCormick, John (2003). Machiavelli against Republicanism: On the Cambridge School's «Guicciardinian Moments». *Political Theory 31* (5), 615–643.

——— (2007) Rousseau's Rome and the Repudiation of Populist Republicanism. *Critical Review of International Social and Political Philosophy 10* (1), 3–27.

——— (2011) Machiavellian Democracy. Cambridge University Press.

Micklethwait John y Wooldridge, Adrian (2007). *Una nación conservadora.* Debate.

Morresi, Sergio (2014). Republicanismo. En Adelstein y Vommaro (eds.) *Diccionario del léxico corriente de la política argentina* (pp. 322–324). UNGS.

**O`Sullivan, Nöel** (1990). The new right: The quest for a civil philosophy in Europe and America. en Eatwell, y O`Sullivan (Comps.) *The Nature of the Right* (pp. 167–192). Twayne Publisher.

Pettit, Philip (1999a). *Republicanismo*. Paidós.

——— (1999b). Republican freedom and contestatory democratization.En *Shapiro y Hacker, Cordón (Ed.) Democracy's value* (pp. 163–190). Cambridge University Press.

——— (2002). Keeping Republican Freedom Simple. *Political Theory 30* (3), 339–356.

——— (2004). Depoliticizing Democracy. *Ratio Juris 17* (1), 52–65.

Pocock, John (1987). Between Gog and Magog: The Republican Thesis and the Ideologia Americana. *Journal of the History of Ideas 48* (2), 325–346.

——— (1985). *Virtue, commerce and history.* Cambridge University Press.
——— (2002a). *El Momento Maquiavélico.* Tecnos.
——— (2002b). *Historia e Ilustración.* Marcial Pons.
——— (2009). *Political thought and history.* Cambridge University Press.
Rabotnikof, Nora (2005). *En busca de un lugar común.* UNAM.
Rahe, Paul (1994). *Republics ancient y modern, vol. 3.* University of North Carolina Press.
Ribeiro, Renato (2008). Democracy versus Republic: I*nclusion and Desire in Social Struggles. Diogenes 55* (45) (45–53).
Rosler, Andrés (2016). *Razones públicas.* Katz.
Sánchez Cuenca, Ignacio y Lledó, Pablo (2002). *Artículos federalistas y antifederalistas.* Alianza.
Souroujon, Gastón (2018) ¿Qué hay de nuevo con la nueva derecha? En Alcántara, Sánchez López y García Montero (Comp.) *Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas* (pp. 300–309). Salamanca: Usal.
——— (2019a) ¿Cuál es el problema de la libertad republicana? Las criticas liberales a la libertad como no dominación. *Revista Argentina de Ciencia Política 22,* 15–35.
——— (2019b). El Macrismo: cuando la honestidad reemplazó al patriotismo. En I*glesias y Lucca (Ed.) La Argentina de Cambiemos.* UNR Ed.
Storing, Herbert (1981). *What the anti–federalist where for.* University of Chicago Press.
Tassin, Étienne (2007). El pueblo no quiere. *Al margen 21–22,* 121–136.
Thompson, Michael (2007). Confronting the new conservatism. En T*hompson (Ed.) Confronting the new conservatism* (pp. 1–9). New York University Press.
Vicente, Martín (2015). *De la refundación al ocaso.* Ediciones UNGS.
Vommaro, Gabriel (2017). *La larga marcha de cambiemos.* Siglo XXI.
Wood, Gordon (1998). *The Creation of the American Republic.* University of North Carolina Press.

Arena legislativa, prioridades e inflexiones representativas en la Argentina de Cambiemos (2015–2019)

Mariana Berdondini

El derrotero de las nuevas derechas en el mapa político regional de América Latina invita a develar sus especificidades comparativas a la luz de los casos nacionales. Al contemplar las concepciones de lo estatal, de lo público y lo privado, los posicionamientos sobre los derechos y las libertades, las áreas de presencia o desplazamiento del Estado y privilegio a los mercados, o los componentes liberales, conservadores y reaccionarios que aparecen, una gama de experiencias complejiza los perfiles de dichas experiencias. Así también, las diversas modalidades de estructurar su representación política como de relacionarse con los distintos grupos e intereses de la sociedad, señala divergencias en la articulación de las bases sociales a las que privilegia, en los modos de asirse de apoyo político y de construir sentido al interpelarlas.

Al insistir en la complejidad fáctica y analítica que implica teóricamente la idea de representación democrática, el entrelazamiento de prácticas institucionalizadas con la contingencia interroga a los gobiernos más allá del signo político e ideología. Desde esta perspectiva, las dinámicas representativas constan de dimensiones institucionales y sociales que no pueden separarse. Ante las formas plurales de representación y los variopintos actores e intereses en disputa, las instancias electorales y no electorales se alternan en los desafíos, estrategias y decisiones políticas. En este sentido, al observar las tramas de relaciones, mediaciones e interacciones que tejen instituciones y actores también la derecha ha revelado ductilidad en el aprendizaje de las reglas de juego, como en el manejo de distintas estrategias de arribo y ejercicio del poder político.

Desde inicios del siglo XXI, ante las mutaciones representativas y la fragmentación política provocadas por la crisis de 2001–2002, el caso argentino presenta ciertas singularidades en la configuración del espacio político de la derecha. Entre los novedosos modos de producción política que se inauguran, afincado en el liderazgo de Mauricio Macri, la emergencia del partido Propuesta Republicana (PRO) se construye como fuerza política y gana incidencia al constituirse como alternativa competitiva a lo largo de los gobiernos del Frente para la Victoria (FPV) (2003–2015) (Berdondini, 2016; 2019). Poniendo entre paréntesis el bipartidismo tradicional protagonizado por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), el binomio kirchnerismo encabezado por el FPV, ante el antikirchnerismo que da forma a la

coalición Cambiemos —PRO, UCR y Coalición Cívica (CC)—, se erige en el nodal articulador de la política argentina.

Las elecciones de 2015 inauguran la primera presidencia de una fuerza de derecha que compite electoralmente, triunfa en dicha instancia y se dirige a concluir su mandato constitucional el 10 de diciembre de 2019. En este camino, el gobierno de la coalición Cambiemos bajo la presidencia de Mauricio Macri ha inspirado un proceso político que dista de ser lineal. Por lo contrario, al observar la agenda política manifiesta en la arena legislativa, laws prioridades temáticas e inflexiones estratégicas que asume la presidencia de Mauricio Macri en Argentina, las aristas neoliberales, conservadoras e incluso reaccionarias que caracterizan su condición en el campo de la derecha son heterogéneas y versátiles. En función de las cuotas de pragmatismo y dogmatismo que el PRO articula como fuerza gobernante, este capítulo analiza la dinámica legislativa a partir de dos fases o momentos cuya bisagra ubicamos en las elecciones legislativas de octubre de 2017 y la paradójica decisión de dar libertad de acción a sus legisladores y augurar el debate sobre el aborto a inicios de 2018.

Por un lado, desde el triunfo electoral y los dos primeros años de gobierno (2015–2017), signados por un discurso liberal republicano en lo institucional y de «gradualismo» en lo económico, junto a la persistencia en la polarización con «la herencia recibida», el gobierno instrumenta con ductilidad su agenda política, mantiene la iniciativa y sortea escollos en la sanción de leyes centrales. Este escenario le permite llegar a las elecciones de medio término triunfando en los principales distritos y logrando mayores bancas legislativas. Con el empeoramiento de los indicadores económicos en escalada, junto al dogmatismo en medidas que señalaban el «fin del gradualismo» y una caída abrupta de la imagen presidencial, el empuje de los límites ideológicos y bases de apoyo hacia posiciones que permiten incrementar su caudal electoral, hallan su punto máximo —a la vez operan de límite— en la paradójica decisión de dar libertad de acción a sus legisladores y augurar el debate sobre el aborto en marzo de 2018 (Berdondini, 2019).

Con esta inflexión, se abre una segunda fase (2018–2019) en la cual renuncia a cierta creatividad que había manejado, recayendo a partir de entonces en posiciones dogmáticas que orientan no solo las decisiones en política económica. Hay un viraje hacia posiciones conservadoras en relación con la inmigración, al uso de las fuerzas de seguridad y al control de la protesta social que surgen como ejes políticos ideológicos. Las tensiones entre las posturas heterogéneas que conviven al interior de la coalición Cambiemos parecen implosionar a partir de esa coyuntura sin lograr hallar un equilibrio que le permita recuperar el liderazgo, la iniciativa y ductilidad que tuvo en su llegada al poder y gobierno inicialmente. En un espacio político con un arco

ideológico en mutación, las estrategias para ampliar su legitimidad política de cara a la contienda electoral renovaron la interpelación sobre el espacio de la derecha a representar.

Singularidades representativas

Si el perfil de derecha neoliberal y conservador surge al advertir los posicionamientos representativos que se asumen ante diversos temas antes de su arribo al poder (Morresi, 2016; Berdondini, 2016), las características del gobierno de Cambiemos en la Argentina presidida por Mauricio Macri (2015–2019), refuerzan esta condición en el espacio político. Con ciertos indicios de qué representa el PRO y la coalición Cambiemos, cabe continuar la exploración de la ductilidad en el cotejo de las estrategias discursivas y prácticas que presenta. El comportamiento electoral de las fuerzas políticas como el de la ciudadanía, no se extiende al período entre elecciones, demandando cada vez mayores grados de atención, vigilia e interacción mutua. Al tornar indisociables los mecanismos para instituir la confianza y la expresión social de la desconfianza (Rosanvallon, 2011), cada vez con mayor voracidad y vertiginosidad, la legitimidad electoral y la de ejercicio se intercalan meticulosamente.

Con esto, si bien los valores ideológicos y bases de apoyo son representativos, al preguntarnos por los niveles de dogmatismo y pragmatismo se procura dar cuenta de los márgenes que se manejan entre las posturas ideológicas que se cristalizan, y la flexibilidad en relación con las decisiones políticas. Al abordar la representación política, las dimensiones institucionales, electorales, partidarias y territoriales, se conjugan con aspectos no formalmente institucionalizados, pero que apelan a lo establecido, irrumpiendo e interpelando el orden de lo común (Berdondini, 2017). Esto supone no solo advertir las dimensiones de construcción de la continuidad en la discontinuidad, si no contemplar en ello, los rangos de creatividad y contingencia en el gobierno de la cosa pública. Tanto los gobiernos de izquierda como los de derecha, sean más progresistas, conservadores o reaccionarios, se ven compelidos a legitimar sus discursos, acciones y políticas. Para ello recurren a diversos imaginarios y estrategias, las cuales mutan y se reevalúan a la luz de los contextos, de las prioridades y expectativas sociales.

Al analizar las características de la representación contemporánea, nuevos y viejos actores juegan las reglas poliárquicas, las interpelan y también hallan los vericuetos para cambiarlas, adaptarlas e incluso vetarlas. En la medida que lo representado, lo representativo y lo representable varían a partir de cada contexto, como de los temas e intereses que se hacen públicos, los desafíos para

construir el lazo representativo se diversifican y Cambiemos parece ajustarse a este dilema. Más allá de ciertos rasgos que las ubican en determinada familia ideológica, las derechas son versátiles en las especificidades que representan, como en las estrategias y las bases de apoyo a las que recurren.

En Argentina, Vommaro y Morresi (2016) hallan la novedad de la experiencia del PRO en cierto reparo de la histórica relación entre derecha y democracia. Pese a su heterogeneidad constitutiva y la pretensión posideológica de sus cuadros, las redes del partido con la derecha internacional y la pertenencia de sus votantes fundamentales lo ubican en ese radio (Vommaroet ál., 2015; Morresi, 2016). En este sentido, en la comparación con la experiencia menemista de centro derecha que tuvo lugar en los años 1990, Souroujon encuentra semejanzas en los imaginarios políticos construidos, que operan como el «Hilo de Ariadna explicativo del apoyo por parte de importantes y heterogéneos sectores sociales a un programa político–económico que décadas atrás solo podía implementarse mediante la coacción» (2019:132).

En este cuadro, Morresi (2016:182–187) halla su identidad en el espacio de las derechas a partir de las posiciones socioeconómicas compatibles con el neoliberalismo y las posturas conservadoras en temas éticos, culturales y políticos. Durante la larga década kirchnerista, el lugar del PROcomo un «partido nuevo» y «de lo nuevo» se afianza de la mano del liderazgo de Mauricio Macri en los años de gobierno de la Capital Federal (Vommaro et ál., 2016), quien se erige en referente central de la oposición, como de la coalición que constituyen con la UCR y la CC a partir de los años 2009 y 2010, primero de modo informal a partir de los posicionamientos y votaciones públicas frente al oficialismo, y luego formalizada en 2015 frente al contexto electoral. Si bien puede que esta trayectoria no haya sido suficiente para que articulara una identidad sólida y tenga un arraigo más volátil en el seno de la sociedad, esto posibilita una mayor plasticidad al momento de incorporar símbolos, discursos y tradiciones (Souroujon, 2019:132).

De acuerdo con Altman et ál. (2009), los perfiles partidarios en Argentina registraban poca diferenciación en los cruces de posicionamiento ideológico y tradición. Por ello, al buscar evidencia acerca de la configuración de familias ideológicas y la estructura de competencia en la representación política entre partidos y votantes, dicho estudio mostraba que en las prioridades del debate público a nivel regional emergían la delincuencia, la pobreza y la corrupción como preocupación, en desmedro de los derechos humanos, la salud y la educación (781–782). Pero en Argentina los datos arrojaban que la delincuencia era compartida como preocupación con 12 países de América Latina, mientras la inflación y los derechos humanos eran centrales entre las inquietudes a diferencia del contexto regional.

Al considerar el rumbo que Bobbio (1995) ha marcado para la diferenciación nodal entre la derecha y la izquierda, señala la valoración de la relación igualdad–desigualdad natural e igualdad–desigualdad social. Según se enfatice la posibilidad de eliminarlas o naturalizarlas, ya sea por la fuerza de la naturaleza, o de la costumbre, la tradición o el pasado, y por ende entendidas como no eliminables, habría un primer aspecto a cotejar. Mientras el PRO es capitalizador de una serie de alianzas que afianzan su liderazgo en la coalición con la UCR y la CC, las identidades en disputa se moldean y bifurcan a partir de los posicionamientos, intereses y valores defendidos públicamente. Pero el tenor ideológico de las posturas de los dirigentes del PRO es representativo ante la protesta social y la necesidad de controlarlas; las visiones sobre la inmigración y la necesidad de medidas más estrictas; el rechazo a debatir una ley sobre el aborto y las posturas sobre los derechos humanos relacionadas a la memoria y justicia por los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura de 1976–1983 (Morresi, 2016:187–188). Si bien hay mayor atención ante las cuestiones de género y diversidad sexual, las posturas y políticas sobre el aborto, la educación sexual, antes del ascenso al poder reflejada en las posturas, argumentos y votaciones parlamentarias a raíz del Matrimonio Igualitario connotan el tenor de esta coalición (Berdondini, 2016), de cuadros y bases organizacionales fuertemente vinculadas al mundo religioso y con valores conservadores.

En este tornar representativa la relación, la capacidad de articular discursivamente ideas que interpelen a la ciudadanía como de responder a las cuestiones que la afectan, los márgenes de pragmatismo y el manejo de la contingencia marcan diferencias. A través de un discurso republicano en lo institucional y de «sinceramiento» económico, Cambiemos logra dar forma al malestar creciente con el kirchnerismo. El poder performativo de la idea de Cambio se instala acompañada de tres cuestiones que se instalan como ejes: «pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos». Ante la «politización» y polarización kirchnerista, pero con la promesa de no afectar los derechos y políticas inclusivas, la coalición Cambiemos enfatiza el diálogo, la escucha, los acuerdos y la gestión para «ocuparse de los problemas de la gente», «haciendo lo que hay hacer».[1]

Paula Canelo (2019) reconoce la potencia y versatilidad del proyecto de Cambiemos a partir de la construcción de un relato que llevó al paroxismo el carácter individualista de la sociedad argentina, devenido desde el último golpe de estado en 1976 y que avanzó sin detenerse más allá del proceso democrático. Según la autora, con una retórica basada en el éxito individual, con

---

1 Remitimos a los discursos presidenciales de Mauricio Macri y a los spots de Presidencia de la Nación.

la figura de los CEOs y el emprendedurismo, el relato macrista y Cambiemos propusieron una alquimia diferente en relación con el «imaginario individualista», al exacerbar e «hiperindividualizar» los modelos a seguir.

Con esto, afincado en la búsqueda pragmática de poder y lejos de una doctrina sistemática sobre la democracia (Morresi, 2016:196–197), el PRO ha empujado sus límites ideológicos y bases de apoyo hacia posiciones que le permitan incrementar su caudal electoral. Para ello ha explotado la política de proximidad, con recursos de cercanía como el timbreo y el cara a cara que ya no se limitan al recorrido barrial del mundo público si no que ingresan a la intimidad de los hogares y familias, articuladas con la exploración y expansión de tácticas virtuales desarrolladas a través de las redes sociales y el manejo sistemático del *big data* (Landau y Annunziata, 2017).

Si cabe la pregunta sobre cierta «derechización» de la sociedad (Canelo, 2019), o por la dimensión igualitaria e inclusiva en este derrotero, al analizar la decisión de abrir el debate del aborto, paradojalmente surge la ductilidad y reconocimiento del manejo de la contingencia, al tiempo que los límites que esta fuerza de derecha presenta (Berdondini, 2019). Entonces, al caracterizar el perfil de la derecha que representa, observamos mayor disposición a sacrificar las posiciones éticas morales y políticas culturales a la hora de recurrir al pragmatismo, antes que las posturas e intereses socioeconómicos, a los que se aferra de modo dogmático (206). Continuando dicho estudio, reconociendo la heterogeneidad constitutiva del PRO y la coalición Cambiemos, las prominentes tensiones ideológicas que conviven se han revelado mayormente en el ejercicio del gobierno. Aun cuando resta explorar las aristas duales que entrecruzan el comportamiento de la coalición en respuesta a sus bases apoyo y al electorado, al evaluar las instancias institucionales y no formalmente instituidas, la dinámica entre ejecutivo–legislativo no excede estas cuestiones.

Correlación de fuerzas y arena parlamentaria

Los estudios políticos comparados sobre política legislativa dieron cuenta de ciertas persistencias para el caso argentino, incluso luego de la crisis de 2001–2002 ante la fragmentación política y la necesidad de las coaliciones (Calvo, 2012; Jones y Micozzi, 2013; Zelaznik, 2014). La arena parlamentaria, y lo que se expresa en la agenda legislativa, es uno de los lugares donde analizar el procesamiento de conflictos y consensos al interior del entramado representativo. Como un espacio de condensación de lo representado y demandado, a veces lo licúa y otras lo solidifica, también suele amplificar o dar entidad a aquello invisibilizado, como simplificar el tenor de lo debatido o problematizado en

el espacio público. Es decir, a veces concentra lo disperso, otras aumentan su intensidad o número, pero principalmente sintetiza, resume y compendia el contenido y la forma de los debates, de los intereses en conflicto y de las decisiones políticas públicas (Berdondini, 2016).

Con una articulación novedosa de las dimensiones dogmáticas y pragmáticas, las facetas neoliberales y conservadoras singularizan la condición del gobierno de Cambiemos en el campo de la derecha a partir de posicionamientos, decisiones y políticas que estructuran los modos de gobernar, administrar y gestionar la cosa pública. Así, la presencia del Estado «donde sea necesario» se enlaza con los objetivos de racionalizarlo, bajar el déficit fiscal, atender a las variables macroeconómicas y liberalizar las fronteras a los mercados y capitales. Relevando un estado eficiente y el crecimiento sobre la distribución, con un discurso liberal republicano en lo institucional y de «sinceramiento» económico, la coalición Cambiemos apela al dogmatismo y al pragmatismo en la instrumentación de la agenda política. En este camino, las fronteras ideológicas han ido mutando en la consecución de las metas gubernamentales, como de los problemas abiertos y las bases sociales de apoyo que lo interpelan.

El presidente Macri es renuente a hablar en términos de derechos, en lugar de lo cual selecciona una agenda de temas muy concreta, que secunda al reordenamiento macroeconómico. En ello, inicialmente el gobierno busca saturar o revertir las polémicas en torno a la memoria y justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura e insta a motorizar los «derechos de hoy», como aquellos «que estaban solo en los papeles» en referencia a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Esto se advierte en el discurso de asunción en el que no hay una sola mención al derecho y/o a los derechos. En la apertura legislativa en el 2016 y 2019, son los años en los que más veces menciona los derechos —cinco veces—. En el primero lo hace en clave de política regional e internacional, refiriendo a «la agenda de pobreza y la distribución del ingreso, la democracia y los derechos humanos, la pelea contra el terrorismo y el narcotráfico, la investigación científica y tecnológica, la preservación de la paz, el diálogo interreligioso, la promoción del comercio y las inversiones y la lucha contra el cambio climático». En dicha alocución, al único derecho al que le da afinco es al acceso a internet, mientras, la mención a los 40 años del golpe de Estado de 1976 no se da en términos de derechos, y refiere a «la época más oscura de nuestra historia […] Nunca más a la violencia social y política».

En el 2017, el presidente Macri enfatiza las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares y en el 2018, los derechos se nombran al introducir la política de parques nacionales. Finalmente, en 2019 la idea de derechos resulta asociada a la condición de pobreza, a la niñez y a las mujeres. Nuevamente el

contexto regional con el caso de Venezuela, es la oportunidad para condenar el régimen en términos de vulneración de los derechos humanos.

En este sendero, profundizando el perfil de derecha que gobierna la Argentina, la articulación de los valores e intereses ideológicos y los márgenes pragmáticos de ejercicio, llegamos al derrotero de los dos momentos que introdujimos analíticamente. Por un lado, una primera etapa que se identifica en los dos primeros años de mandato (2015–2017) y se extiende hasta inicios de 2018 con la decisión de dar libertad de acción a sus legisladores y augurar el debate sobre el aborto. Se trata de una etapa signada por el pragmatismo en los temas económicos y ético políticos, lo cual les permite evitar mayores niveles de conflictividad social, al tiempo que sortear escollos en la sanción de leyes centrales, y llegar a las elecciones de medio término obteniendo resultados importantes al superar el 40 % de votos en todo el país, con el triunfo en los cinco principales distritos y con mayores bancas legislativas. La derrota de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires, principal opositora al gobierno, por parte de la candidatura a senador encabezada por Esteban Bullrich, es señera de los tiempos beneficiosos en términos de caudal político.

Por otro lado, identificamos una segunda etapa iniciada en el año 2018, que se solapa y trasmuta paradojalmente mientras acontece el debate legislativo por la interrupción voluntaria del embarazo, a partir de lo cual renuncia a cierta creatividad que había manejado hasta entonces. El «gradualismo» que había signado la fase anterior, realizada a costa de un fuerte endeudamiento, deja lugar al dogmatismo, vislumbrado en las decisiones de política económica que agilizan un plan de ajuste previsional, flexibilización laboral y reforma impositiva. Este viraje también es acompañado por la exposición —y sobreactuación en ciertos casos— de posiciones conservadoras en relación con la inmigración, al uso de las fuerzas de seguridad y la represión en las protestas sociales.

De modo que si las fronteras ideológicas mutan en función de la consecución de sus intereses y los que representa, al cabo de las elecciones de medio término en octubre de 2017, el dogmatismo empieza a agudizarse con una serie de medidas que conllevan a un escenario de diáspora del capital político cosechado en la contienda electoral, sin lograr en adelante hallar estrategias que lo reviertan.[2] El primer momento es en diciembre de 2017 a raíz de la inclusión de la reforma previsional en el tratamiento legislativo en sesiones extraordinarias, acompañado por movilizaciones que ocurren en rechazo de

2 Los valores de imagen del presidente a lo largo del año 2018 según la consultora Poliarquía revelan un franco retroceso al reunir entre enero y abril el 48 % positivo y el 50 % negativo; entre mayo y agosto el 39 y el 60 %; entre septiembre y noviembre el 33 y el 65 % y en diciembre el 39 y 59 %. Recuperado de: https://www.lanacion.com.ar/politica/macri–freno–la–caida–de–su–imagen–publica–y–exhibe–un–leve–repunte–nid2202925

la política y la represión con la que se responde, coyuntura en la que el índice de confianza cae un 10 %.[3]

Sumado al contexto recesivo e inflacionario que escala a la par del deterioro de cada indicador social y económico, los anuncios sobre las tarifas y los servicios públicos inscriben en los primeros 15 días de 2018 otra merma en la medición de la imagen del gobierno, dejando lo que sería de los peores momentos.

Este panorama pantanoso se agudiza en febrero de ese año cuando estalla el escándalo al conocerse la renegociación de la deuda de la empresa familiar del presidente —Correo Argentino—. Será la implosión de la movilización por el aborto legal, seguro y gratuito lo que concluya ese mes con el anuncio presidencial de dar libertad de acción a los legisladores, luego reforzado ante la Asamblea Legislativa en su alocución, lo que marca paradójicamente una inflexión nodal entre los valores, las decisiones y los márgenes ideológicos cotejados. Al incluir uno de los temas áridos y sensibles especialmente (pero no solo) en relación con sus cuadros y bases de apoyo, sino también por tratarse de un problema históricamente evadido y no esperable de ser tomado por una fuerza de derecha (Berdondini, 2019).

La correlación de fuerzas del presidente y la coalición Cambiemos en el primer bienio —2016 y 2017—, los ubica siendo la primera minoría en la Cámara de Diputados con 86 bancas, mientras en el Senado son minoría con 15 bancas de 72. En el segundo bienio (2018–2019), el interbloque Cambiemos reúne 107 bancas en Diputados, 51 que dispone el PRO; 41 de la UCR, 10 de la Coalición Cívica, entre otros espacios como Cambiemos para el Bicentenario (1 diputado); Confianza Pública (1 diputada), Frente Cívico y Social (1 diputado), Partido FE (1 diputado) y Salta Somos Todos (1 diputado). Al tiempo que en el Senado llega a 25 bancas, donde priman la UCR con 12 senadores, seguido por el PRO con 9.

En el primer bienio legislativo[4] crece el éxito legislativo del Ejecutivo, originando en 2016 (período 134, 1/3/2016 al 28/2/2017), 27 de 101 leyes sancionadas (26,7 %), mientras diputados origina el 55 % y el senado el 17,8 %. En 2017, 28 de 86 leyes se originan en el ejecutivo (32,6 %), en igual porcentaje lo hace diputados y el senado es el de mayor iniciativa con el 34,8 % de las leyes. Dado que en Diputados es secundado por el FPV–PJ con 72 legisladores, principal oposición al Gobierno en el Congreso, un peronismo que persiste dividido posibilita la política de alianzas. Es la negociación con los bloques

3 Diversas encuestas de opinión revelan la caída en la imagen presidencial: si en octubre de 2017 la imagen positiva del presidente asciende al 52 o 55 % frente a la imagen negativa del 40 al 44 %, en diciembre esto se revierte.Cfr: https://www.perfil.com/noticias/politica/en–el–ultimo–mes–la–imagen–de–macri–se–ajusto–y–perdio–8–puntos.phtml

4 Se toma el período legislativo que va del 1 de marzo a febrero del año siguiente.

que responden a Sergio Massa (Frente Renovador, 37 escaños) y a Diego Bossio (Bloque Justicialista, 17 legisladores) lo que le permite llevar adelante la agenda. Por su lado, en el Senado la negociación con el bloque peronista liderado por Miguel Pichetto y con algunos gobernadores le permite salir airoso.

Por el otro, el año legislativo que inicia en el 2018 con la renovación legislativa y mayores bancas en ambas cámaras, el ejecutivo origina 19 (30 %) de las 66 leyes sancionadas, diputados prima en la iniciativa con el 50 %, mientras senadores es origen del 18 % de las leyes. Con 36 leyes del período ordinario y 30 que se sancionan en las sesiones extraordinarias, si bien la productividad legislativa fue cuantitativamente baja —se inscribe en uno de los de menor producción legislativa desde 1983—, ha sido cualitativamente interesante lo ocurrido en la esfera legislativa. En esta oportunidad, el debate por el aborto entre los meses de abril y agosto —y la no ley tras el rechazo en el Senado— confirma como otros períodos desde el regreso de la democracia, que la productividad legislativa en términos cuantitativos, no necesariamente coincide con la calidad de los debates y asuntos públicos que acontecen en la política legislativa.

Una nota comparativa que surge acerca de la productividad legislativa y cómo lidiar en contextos adversos con la contingencia en la construcción representativa, se da al mirar los años 2009 y 2010 durante la primera presidencia de Cristina Fernández. A raíz del conflicto agropecuario en el 2008, el desmembramiento hacia el bloque del «Peronismo Federal» menguó la representación del oficialismo seguida por la derrota electoral legislativa en octubre de 2009. A partir del recambio legislativo en diciembre de 2009 el oficialismo sustancia quedar en minoría en las dos Cámaras del Congreso, pasando en Diputados de 121 a 87 bancas. Como señalamos, dicho bienio «adverso» en números — de bancas y proyectos—, fue de gran capitalización política (Berdondini, 2016). Si la iniciativa de las leyes en el 2009 —año del tratamiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual— es de 37 PE y 74 el Congreso, en 2010 —año en el que se trata y sanciona la ley de Matrimonio Igualitario— es de 37 para el ejecutivo y 33 el Congreso. Comparable también con 1987 —año de sanción de la ley de Divorcio— 57 leyes: Alfonsín cuenta aún con mayoría propia en Diputados pero su imagen pública comienza a caer. El año 2005, ante la ruptura de kirchneristas y duhaldistas es otra coyuntura que sobresale por «baja productividad» legislativa.

Finalmente, al evaluar el 2019, acorde a las tendencias que persisten en los años electorales, se reitera la escasa producción legislativa pero en este caso se conjuga con una baja cantidad de sesiones (15), potenciada a partir del deterioro de la capacidad del oficialismo. Si a mitad de año se contabilizaban 9 leyes sancionadas, al cerrar el periodo ordinario, las 37 leyes confirman la pérdida de iniciativa e incidencia del oficialismo. La reconfiguración de los blo-

ques en función de los posicionamientos electorales, las tensiones propias del armado de listas de candidatos y las dificultades para consensuar la agenda legislativa resultan factores determinantes para la caída de la actividad. Pero el deterioro de la capacidad del oficialismo se agudiza y se explica en el bajo volumen de leyes sancionadas, como en las escasas sesiones realizadas, inusitado al comparar con otros períodos.

Temas y prioridades

Como fuerza de derecha que por primera vez llega por la vía democrática al ejercicio del gobierno de Argentina, veamos pormenorizadamente los temas y prioridades que impulsa la presidencia de Macri y la coalición Cambiemos en la arena parlamentaria. En este sentido, en la gestión de los conflictos y consensos posibles, y para ser una fuerza como primera minoría, al revisar los mensajes y proyectos presidenciales en relación con los temas y proyectos legislativos, se avizoran las fases de pragmatismo y ductilidad, como aquellos en los que el dogmatismo y ausencia de creatividad, gobiernan la agenda.

Acorde al diagnóstico y sendero que el presidente marca en su primera alocución ante la Asamblea Legislativa en 2016, con eje en la «herencia recibida», la corrupción y el rol de la justicia en clave republicana, la inflación y la necesidad de reducir la emisión monetaria «descontrolada e ir bajando el déficit fiscal, que debe llegar a cero al final del cuarto año», a las fiestas, monumentos o lugares históricos que reúne cada año la mayor cantidad de proyectos aprobados por el Congreso (39 y 33 % respectivamente), lo siguen 12 leyes sobre Justicia (13 %), destacándose las que se destacan la figura del arrepentido, flagrancia y modificaciones de la estructura judicial, centrales para el oficialismo en su preocupación por la celeridad en los tiempos procesales.

También la prioridad acerca del libre funcionamiento de los mercados, se cristaliza en las leyes en materia económica, laboral y relaciones internacionales, siendo 10 en cada área (31,26 % en conjunto). El conflicto con los *holdouts* que el presidente resalta en aquel discurso, es la primera victoria de Cambiemos en el Parlamento con la sanción de la ley de pago a los fondos buitre. Lo siguen los temas de salud (5 %), de defensa al consumidor (4 %), agroindustria (3 %), reforma del sistema político (3 %), transporte (1 %), entre otros. Una de las frustraciones en este período resulta del pretendido cambio en materia electoral en la implantación del voto electrónico.[5]

5 Cfr. Secretaria de Información parlamentaria Cámara de Diputados de la Nación y Balance Legislativo Fundación Directorio Legislativo.

Por su parte, el 2017 fue productivo para tratarse de un año electoral y que por ende dificulta la labor legislativa en la medida que los legisladores se abocan a la competencia en sus distritos. Los acuerdos comerciales y las relaciones internacionales explican el 25 % de los proyectos aprobados con 21 leyes, a las que prosiguen las de carácter económico (18 %), entre ellas las de capital emprendedor y las declaraciones de emergencias productivas. Al comparar con el año anterior, estos temas aglutinados representan el 43 % de la agenda legislativa y asumen mayor importancia frente a las cuestiones de justicia (12 %) y laborales (2 %). Sin embargo, al tiempo que en materia de justicia se sancionan 7 leyes como ser la de protección a víctimas de delitos y pena privativa, marcando la creciente sensibilización por la cuestión de género —representan el 3,57 %—, se releva la ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, puesta sobre tablas por las legisladoras, a punto de perder estado parlamentario.

Con más presencia de los temas de Salud (3,57 %) e inclusión, se destacan la de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, la de tarifas para electrodependientes y el de cobertura y uso del bastón verde para personas con visión reducida. Educación (1,19 %) y Ambiente (1,19 %) quedan rezagadas.

Al cabo de las elecciones de medio término en 2017 y habiendo triunfado al incorporar mayores bancas en diputados y senadores, el oficialismo se ubica en mejor situación pero lejos de una «mayoría automática». Fortalecido al cabo de los resultados electorales, entre los temas de las sesiones extraordinarias el ejecutivo incorpora y se aprueban leyes en relación con el Presupuesto 2018, la Reforma Tributaria, el Revalúo impositivo y cambios en el Régimen Fiscal, la Reforma previsional, el Impuesto a los créditos y débitos bancarios, pero quedan sin ser tratadas las propuestas de Financiamiento Productivo, la Reforma laboral y la Reforma del Ministerio Público Fiscal.

Llegados a 2018, el viraje se profundiza al advertir la preeminencia política que se le otorga a la variables gerenciales y técnicas, enfatizado a partir de entonces. En el 2018, el debate por el aborto entre los meses de abril y agosto, con la no ley tras el rechazo en el Senado, confirma que la productividad legislativa —de las más bajas desde 1983—, no necesariamente coincide con la calidad de los debates, coyuntura que se articula con un álgido contexto económico que empeora y procura ser acompañado con leyes de ese tenor. En este sentido, la mayor cantidad de leyes aprobadas son de carácter económico (24 %), lo que revierte la tendencia de años anteriores en relación con las declaraciones de días o fiestas nacionales (17 %) o a la aprobación de tratados internacionales (15 %). Dentro del 38 % que suman las cuestiones económicas y de tratados internacionales, sobresalen en esta materia prioritaria para

el gobierno, la ley de reforma del Mercado de Capitales (o de Financiamiento Productivo), la nueva norma sobre Defensa de la Competencia y los cambios en el régimen de la ley de «Compre Argentino». A la par que el Gobierno veta la ley de emergencia tarifaria, uno de los temas que marcan el viraje dogmático responde al anuncio del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Ese año la polémica inició tempranamente con la publicación en el Boletín Oficial de un «megadecreto» de desburocratización y simplificación del Estado —DNU 27/2018—, a través del cual el Gobierno realiza una reestructuración ministerial al modificar 140 leyes y derogar unas 19 normas vigentes. La medida para «simplificar regulaciones y potenciar la producción de once áreas del Estado» no tardó en ser ampliamente cuestionada por la oposición, presentándose desde el Frente Renovador una acción para declarar inconstitucional el decreto. Hacia fin de mes, Cambiemos se aseguraba la mayoría de miembros en la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada del análisis del DNU. Pese al dictamen de mayoría declarando la validez del decreto 27/2018, ante el fuerte rechazo de la oposición, el presidente de la Bicameral de Trámite Legislativo, el senador radical Luis Naidenoff, anunció que se presentarían tres proyectos de ley para reemplazar la medida presidencial. Los mismos son presentados en la Cámara baja, con las firmas de los jefes del bloque PRO, Nicolás Masot; de la UCR, Mario Negri; y de Juan Manuel López en nombre de la Coalición Cívica. Las leyes sobre desburocratización y simplificación del Estado son sancionadas en mayo al cabo de ser tratadas por ambas Cámaras.

Como en años anteriores, el 12 % de las leyes sancionadas (8) refieren a los temas de justicia, entre ellas importantes en materia de legislación penal, destacándose la aprobación del régimen de subrogancias, una modificación al Código Penal sobre delitos contra la integridad sexual, la reforma del Código Procesal Penal y la creación del régimen de reparación para hijos de víctimas de femicidio —«ley Brisa»—. En materia social, las leyes resultan ser el 8 % (5), salud el 5 % (3) y ambiente el 5 % (5). Se relevan en estos temas, la modificación de la ley de donación y trasplantes, denominada «ley Justina», la ley de Regularización Dominial y urbanización de villas y la creación del plan nacional de reducción de desperdicio alimenticio.

Un año atravesado por el debate legislativo del aborto y la sensibilidad de las cuestiones de género interpelando la agenda pública, al tiempo que la crisis económica, monetaria y financiera se desata, las sesiones extraordinarias serian centrales. Mientras en materia de género es importante la sanción de la «ley Micaela García» al establecer la capacitación para los funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado, a la par, la reducción de la alícuota de tributo por ganancias para mutuales y cooperativas, como la libe-

ración del precio del papel de diarios —nueva ley de papel prensa— marcan el ritmo económico. Por su parte, en salud la nueva ley de Vacunas; como la creación de la Cédula Escolar Nacional en materia educativa, logran ser sancionadas en ese periodo.

En el período 2019 que rige, de las 9 leyes sancionadas en la primera mitad del año, el senado sancionó la ley para prevenir el acoso callejero hacia las mujeres; la de economía del conocimiento, que incluye beneficios impositivos para el software y otras industrias; la que instituye la promesa de lealtad a la Constitución Nacional en las escuelas; y la que declara la emergencia económica para la producción de cítricos en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy y Salta. Por su parte, Diputados, sancionó la nueva ley de Financiamiento de los Partidos Políticos; otra sobre competencia judicial en los casos de narcomenudeo y la prórroga por un año de la emergencia económica para la producción de peras y manzanas en Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan y La Pampa. También se convirtieron en ley la creación de un fondo de asistencia directa a las víctimas de trata de personas; y un convenio entre el Ministerio del Interior y las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa.

El dilema de qué y a quienes representar

El PRO y la coalición Cambiemos conocen las reglas democráticas, las juegan y se ajustan a las mutaciones para tornar representativo el lazo. En ello, no solo ha establecido alianzas y negociado con otras fuerzas, supo construir consensos y sortear coyunturas adversas que pusieron en cuestión su modo de gobierno y estrategias. Se ha permitido explorar virajes dentro del arco ideológico que representa, como también encontrar ciertos límites ya sea en dicha fuerza de derecha, como en el espacio político partidario, en el concierto institucional y en lo no formalmente instituido.

En esta singularidad representativa que se observa en la agenda legislativa, las prioridades e inflexiones temáticas que asume el gobierno de Cambiemos en Argentina (2015–2019), las cuotas de pragmatismo y dogmatismo que el PRO articula como fuerza gobernante advierte dos momentos bien definidos. Por un lado, desde el triunfo electoral y los dos primeros años de gobierno (2015–2017), en el que instrumenta con ductilidad su agenda política, gana las elecciones de medio término en los principales distritos y logra mayores bancas legislativas. Al empujar los límites ideológicos y bases de apoyo hacia posiciones que permiten incrementar su caudal electoral, hallan su punto máximo —a la vez operan de límite— al augurar el debate sobre el aborto a

inicios de 2018, se abre una segunda fase (2018–2019) de agotamiento, internas y brechas internas que no logran saldarse.

Mientras el respeto a la ley y la institucionalidad se contraponen discursivamente a la corrupción y a la «pesada herencia» asociada al gobierno anterior, el combate a la pobreza —que opera de enlace a las dimensiones inclusivas—, queda supeditado a una agenda de crecimiento que no llega. En este sendero, junto al perfil neoliberal y conservador que profesa, reinstala el predominio del mercado y las variables económicas, administrativas y técnicas en el manejo de lo público y se refugia en los valores conservadores ante las políticas que desde el estado impulsa. Efectivamente la inflación es reconocida como una de las cuestiones nodales a abordar, eje articulador del predominio que la política económica asume al erigir el déficit fiscal y el equilibrio en las cuentas públicas como horizonte. Pero tampoco en esta materia nodal el gobierno logra mostrar eficacia y contundencia política. En el perfil promercado que revela su pertenencia ideológica y se agudiza con el paso del tiempo al perseguir dogmáticamente recetas de endeudamiento externo para financiarse, un Estado que interviene en función de la distribución de recursos que requiere el mercado, va agotando sus recursos. En este esquema, más allá de la fidelidad que las bases de apoyo tengan, cabe la pregunta de cómo y con qué convocar e impulsar un horizonte de sentido que renueve expectativas.

Al recaer en posiciones dogmáticas que orientan las decisiones en política económica con el «fin del gradualismo», hay también un viraje hacia posiciones conservadoras en relación con la inmigración, al uso de las fuerzas de seguridad y al control de la protesta social que surgen como ejes políticos ideológicos inicialmente pero se agudizan. Las tensiones entre las posturas heterogéneas que conviven al interior de la coalición Cambiemos parecen implosionar a partir de esa coyuntura sin lograr hallar un equilibrio que le permita recuperar el liderazgo, la iniciativa y ductilidad que tuvo en su llegada al poder y gobierno inicialmente. A la par, la unión del kirchnerismo y otras vertientes del peronismo como fuerza opositora, fueron una jugada que adelantó posiciones, exacerbando el agotamiento de los recursos políticos explorados, manifiesto en cierta parálisis legislativa.

En el perfil de la derecha de la experiencia de Cambiemos, se renueva la versatilidad y desenfado al desplegar las diversas facetas a las que recurre pragmáticamente. Para ello, se asienta en valores conservadores, dimensiones político–culturales en las que es más flexible y parece dispuesto a mutar, pero evade afectar o desafiar a los intereses socioeconómicos que representa y a los que se aferra de modo dogmático. Entre las posiciones liberales, conservadoras y ciertas posturas reaccionarias que anidan en su conformación, las aristas revelan en su curso cierta «derechización» a la que se inclina. Si en un

momento pudo augurar un debate y posibilitar cierto liderazgo de sus legisladores en la contienda por el aborto, a partir de entonces se ha ido corriendo hacia posiciones más conservadoras, a políticas y respuestas más excluyentes, junto a ciertas manifestaciones de exhibición militar, a discursos de control inmigratorio, con alianzas y posturas de política regional, entre otras variables que se fueron revelando.

Si ante las brechas e internas abiertas que ocurren a lo largo de 2018 nos interrogamos por su dualidad, el PRO y la coalición Cambiemos renovaron la maleabilidad de cara al contexto electoral, mostrando saber jugar con miras a ampliar su caudal político. Las estrategias para ampliar su legitimidad política en la contienda electoral enfatizan este contenido ideológico y, aunque hallan en este derrotero una *performance* inaudita, dejan preguntas sobre el espacio de la derecha a representar.

Referencias bibliográficas

Altman, David; Luna, Juan Pablo; Piñeiro, Rafael y Toro Sergio (2009). Partidos y sistemas de partidos en América Latina: aproximaciones desde la encuesta a expertos 2009. *Revista de Ciencia Política 29* (3), 775–798.

Berdondini, Mariana (2019). Derechas y derechos en la era Macri. La irrupción del aborto en la agenda legislativa de Cambiemos. EN Iglesias, E. y Lucca, Juan (Comp.) *La Argentina de Cambiemos (*pp. 183–208). UNR Editora.

——— (2017). Representación y contingencia. Una lectura de la dinámica política desde la Argentina contemporánea. *Andamios Revista de Investigación Social 14* (35), 187–210.

——— (2016). *Lo representable. Pujas públicas, actores, arena parlamentaria y leyes candentes en la política argentina.* Prohistoria.

Bobbio, Norberto (1995). *Derecha e Izquierda.* Taurus.

Calvo, Ernesto (2013). Calvo, E. (2013). El peronismo y la sucesión permanente: mismos votos, distintas élites. *SAAP 7* (2), 433–440.

Canelo, Paula (2019). *¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos.* Siglo XXI Editores.

Jones, Mark P. y Micozzi, Juan Pablo (2011). Control, Concertación, Crisis y Cambio: Cuatro C para dos K en el Congreso nacional. En Malamud, A. y De Luca, M. (Coord.) *La política en tiempos de los Kirchner.* EUDEBA.

Landau, Matias y Annunziata Rocío (2017). La campaña cara a cara, ¿Qué hay de nuevo en el timbreo? *Revista Anfibia.* Recuperado de http://revistaanfibia.com/ensayo/que–hay–de–nuevo–en–timbreo/

Morresi, Sergio (2015). Acá somos todos democráticos. El PRO y las relaciones entre la derecha y la democracia en Argentina. En Vommaro, G. y Morresi, S. (Org.), *Hagamos equipo. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina* (163–202). Ediciones UNGS.

Rosanvallon, Pierre (2011). *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza.* Manantial.

Souroujon, Gastón (2019). Los imaginarios de la centroderecha argentina. Entre el primer mundo y la autoayuda. *Reflexión Política 21* (42), 129–143.
Vommaro, Gabriel (2017). *La larga marcha de Cambiemos. La construcción silenciosa de un proyecto de poder.* Siglo XXI Editores.
Vommaro, Gabriel y Morresi, Sergio (Org.) (2016). *Hagamos equipo. PRO y la construcción de la nueva derecha en Argentina.* Ediciones UNGS.
Vommaro, Gabriel, Morresi, Sergio y Bellotti, Alejandro (2015). *Mundo PRO.* Planeta.
Zelaznik, Javier (2014). El Comportamiento Legislativo del Peronismo durante el Menemismo y el Kirchnerismo. Cambio de Agenda y Adaptación Partidaria, *Desarrollo Económico. Revista de Ciencias Sociales 54* (213), 203–230.

Documentos

Fundación Directorio Legislativo, Balance Legislativo, años 2016, 2017, 2018 y 2019.
Mensaje del presidente Mauricio Macri en la apertura del 134, 135, 136, período de sesiones ordinarias del Congreso, 1 de marzo de 2016, 2017, 2018, 2019.
Período 134, 135, 136, 137 Cantidad de leyes sancionadas, Honorable Congreso de La Nación, Estadísticas Parlamentarias, Secretaria Información Parlamentaria, Cámara de Diputados de la Nación.

Diarios

La Nación, Página/12, Perfil.

Sitios web

Casa Rosada: http://casarosada.gob.ar
Fundación Directorio Legislativo https://directoriolegislativo.org
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. http://www.diputados.gov.ar
Honorable Cámara de Senadores de la Nación. http://www.senado.gov.ar
Parlamentario.com en: http://www.parlamentario.com

La «nueva» centroderecha en Argentina y Chile: sus entornos sociales y sus mecanismos de legitimación[1]

Alejandro Pelfini

La llamada «nueva» centroderecha primero en Chile y luego y más recientemente en Argentina presenta elementos originales y novedosos al menos en dos dimensiones de relevancia que no suelen ser estudiadas en los análisis de partidos políticos: el entorno social y los mecanismos de legitimación. El primer ámbito remite a la relación de las élites políticas con otras élites funcionales (económicas e intelectuales) y con el mundo de las organizaciones sociales. En los mecanismos de legitimación también se evidencia un desplazamiento de la legitimación por principios a una legitimación por rendimiento y procedimental. Se intentará comprobar ambas hipótesis, la de la horizontalidad y complejización de la incrustación social de los partidos y la del desplazamiento de sus mecanismos de legitimación, a partir de una encuesta aplicada en el marco del Proyecto Fondecyt 1151503, dirigido por Stéphanie Alenda.

No obstante esta evidencia que se presentará, sigue quedando pendiente la pregunta por la novedad y originalidad de la emergencia de la «nueva» centro–derecha: ¿hasta qué punto esta relativa horizontalización y legitimación menos principista y más pragmática implica realmente una mayor democratización y mesocratización del sector o no es más que una estrategia comunicacional y de acumulación político–electoral que mantiene incólumes a los intereses de clase y de disciplinamiento social?

Introducción

El ascenso de Mauricio Macri a la presidencia de Argentina en diciembre de 2015, representando a la Propuesta Republicana (PRO) a través de la Alianza de Cambiemos, estableció un cambio de paradigma en el escenario polí-

1 Este texto forma parte del proyecto IDICSO 2018–2019 (Universidad del Salvador) «Sociedad y política en Argentina y Chile. Bases para una comparación sistemática». Para el caso chileno se reúne información y análisis desarrollados en el Proyecto Fondecyt N 1151503 concluido en 2018 y que lleva por título «Explicando el cambio partidario desde una sociología institucional y del entorno: El caso de estudio de las derechas chilenas» y fue dirigido por Stephanie Alenda y contó con Julieta Suárez Cao y con Alejandro Pelfini como co–investigadores. Agradezco a Leslie Quezada por la colaboración en la búsqueda de evidencia para el caso argentino.

tico argentino, donde una coalición de centroderecha llega por primera vez al poder por vía democrática derrotando al Peronismo luego de 12 años en el poder, ya consolidado como «kirchnerismo». Asimismo en Chile, la definida explícitamente como de centroderecha accede por segunda vez al poder de la mano de Sebastián Piñera asumiendo en marzo de 2018 en un formato que, una vez más, intenta dejar atrás la herencia pinochetista y los reflejos de la derecha tradicional.

La novedad de la centroderecha gobernante en Argentina y Chile no parece ser solo coyuntural sino que también se manifiesta en la construcción de agenda y en el estilo de liderazgo. Tampoco la centroderecha se mueve dentro de una agenda clásica donde impera únicamente el estilo gerencial. Por ejemplo, un nuevo Piñera 2.0 o un Macri Presidente y ya no jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parecen integrar todas las variantes en la construcción política: la ingenuidad inicial de creer que con la simple gestión empresarial bastaba para mantenerse en el poder y responder a las cada vez más exigentes demandas ciudadanas fue siendo reemplazada por ciertas dosis de talento político, llegada a los territorios, empatía con la población y una relación más fluida con los partidos políticos y otros actores sociales. Así Piñera y Macri dicen emular a una figura menos clasificable como la del joven líder francés Emmanuel Macron y descubren la meritocracia como horizonte. De este modo se persigue una difícil combinación de liberalismo económico con lucha contra la pobreza. En consecuencia, se equivocan los diagnósticos apresurados que aseguran ver en esta centroderecha un simple *revival* del neoliberalismo de los '90 y del Consenso de Washington. Más bien se trata de un neoliberalismo tardío (García Delgado y Gradín, 2017) o híbrido que no reniega del Estado ni ignora completamente la «cuestión social».

Más interesante y original resulta esta aparente novedad en términos estructurales. En primer término, la «nueva» centroderecha mantiene vínculos más horizontales y plurales con su entorno social o mundos de pertenencia en comparación con las jerarquías mecanismos de distinción y la combinación de padronazgo/paternalismo que tradicionalmente mantenían los partidos de derecha clásica. De este modo, los gobiernos de centroderecha no funcionan necesaria ni únicamente como correas de transmisión de los intereses del mundo privado y corporativo o se ven sobredeterminados por las agendas de los sectores dominantes. Tampoco se presentan en términos clásicos en lo que hace a las disputas ideológicas y valóricas, defendiendo a rajatabla y en forma principista posiciones conservadoras. Las posiciones tradicionales de lo que sería un *milieu* sociocultural de derecha dejan de ser innegociables, tal como se manifiesta en la política de derechos humanos al finalizar el primer gobierno de Sebastián Piñera o en el tratamiento parlamentario en torno a

la despenalización del aborto en el 2018 en la Argentina. Esto se refleja en los mecanismos de legitimación para el liderazgo y en las justificaciones que se le otorgan a las diversas políticas públicas así como en un modo menos radical y pasional de intervenir en el espacio público en un intento de bajar los decibeles de la «batalla cultural» o de la «grieta», para usar dos designaciones con que en cada país fue retratada la crispación de la esfera pública durante la «nueva mayoría» o durante el kirchnerismo, respectivamente. Evidentemente, y esto es algo que retomaremos en la discusión final, todo esto va variando enormemente con la coyuntura política y económica en cada país, así como en las propias fases de un gobierno dado: las estrategias y justificaciones no son las mismas al llegar y pretender mantenerse en el poder que cuando ese mismo liderazgo se ve jaqueado y las posibilidades de no poder renovar un mandato se hacen patentes.

Para comprobar estas hipótesis y confirmar esta intuición inicial se analizan algunas variables y datos recabados en la encuesta a dirigentes de partidos políticos de la coalición Chile Vamos (UDI, RN, Evópoli y PRI) realizada en el marco del proyecto Fondecyt N 1151503 entre 2016 y 2017 y se comparan con interesantes datos recolectados por el Observatorio de las Elites Argentinas, IDAES–UNSAM y plasmados en Canelo y Castellani (2017). Respecto de los mecanismos de legitimación se hará un recorrido por ciertos tópicos centrales en la justificación de las políticas implementadas así como un foco en la referencia a la racionalidad administrativa y en política económica así como a la meritocracia. Sin olvidar por ello, el uso y abuso en campañas electorales de las metáforas de «Chilezuela» o de la «Chavización» que resultaron claves en la victoria de las coaliciones de centroderecha en Chile y en Argentina, respectivamente.

El entorno social de la centroderecha en Argentina Chile

El estudio de las élites políticas suele concentrarse en los mecanismos de reproducción y reclutamiento de nuevos miembros, así como también en las trayectorias de dirigentes en organizaciones clave: partidos políticos y cargos gubernamentales (Vommaro y Gené, 2018). Menos asiduo es el análisis de la relación de estas élites políticas con sus entornos inmediatos, concretamente con otras élites funcionales (económicas e intelectuales) y con el mundo de las organizaciones sociales, en sentido amplio. Particularmente en cuanto a los partidos de derecha al hablar de su incrustación social usualmente se tiende a pensar en un vínculo privilegiado con sectores pudientes y poderosos. Pareciera que un partido de derecha no sería más (o mucho más) que un trans-

misor de intereses del mundo privado y del conservadurismo social en las agencias estatales (Duverger, 1957).

No obstante, el mapa que ofrecen otros partidos de la llamada «nueva centroderecha» en la región, con el PRO en Argentina como caso saliente (Vommaro et ál., 2015) y ni que hablar de los llamados populismos de derecha en Europa es más diverso y complejo: ONGs, organizaciones barriales, clubes de fútbol son organizaciones centrales para el reclutamiento de nuevos miembros y militantes, para canalizar demandas e incluso para implementar políticas públicas una vez que se ocupan cargos gubernamentales.

En una consideración inicial, el eje de relación entre entorno social y partido político de derecha es más bien vertical. Es decir, que lo social y económico sobredetermina lo político: los partidos serían representantes de intereses predefinidos y privilegiados en el mundo social y económico y que por tanto se ven obligados a extenderse a lo largo de la estructura social mediante coaliciones multiclasistas (Gibson, 1992; Middlebrook, 2000). Sin embargo, en la «nueva centroderecha» el vínculo con el entorno pareciera moverse a una relación más simétrica u horizontal. Esto no significa que los grupos de interés dominantes en la sociedad hayan perdido influencia, pero al menos no son los únicos ni los actores definitorios, y probablemente el modo en que ejercen influencia también ha cambiado.

A continuación se presenta una comparación entre datos recabados en una ambiciosa encuesta a 696 dirigentes de partidos políticos de la coalición Chile Vamos (UDI, Unión Democrática Independiente; RN, Renovación Nacional; Evópoli, Evolución Política; y PRI, Partido Regionalista Independiente)[2] con el análisis realizado por el Observatorio de las Elites Argentinas, IDAES–UNSAM (Canelo y Castellani 2017; Canelo et ál., 2018). Específicamente, se indaga en las trayectorias de los dirigentes en cuanto a su proveniencia institucional, ejercicio profesional, vínculos y desempeño en organizaciones sociales y de representación de intereses. No solo el origen es clave aquí sino las expectativas, por ejemplo en lo que atañe a una posible reinserción en caso de abandonar la política profesional. El tipo y alcance de las expectativas no solo dan cuenta de un vínculo estrecho con instituciones del entorno social como empresas, iglesias y organizaciones sociales, sino también con un *habitus* específico de clase social o de *milieu* sociocultural de pertenencia.

Un primer eje de comparación relevante es de la relación de los dirigentes partidarios y luego gubernamentales de los partidos de centroderecha con organizaciones de la sociedad civil y el llamado tercer sector en general. Cuando para la encuesta en Chile se consultaba no solo por la percepción de los vín-

2 Este pequeño partido se disolvió a inicios de 2018 y había sido fundado en 2006.

culos que su respectivo partido mantenía con organizaciones sociales, sino con vínculos reales que cada dirigente mantiene, la mayor parte declara pertenecer a organizaciones locales (juntas de vecinos, centros de adultos mayores) y civiles (voluntariado sin fines de lucro) y, en menor medida, a grupos de interés como *advocacy groups* y organizaciones sindicales. Menor a la esperada es la vinculación con grupos religiosos permitiendo cuestionar parcialmente el mito de una estrecha imbricación entre partidos de derecha e iglesias.

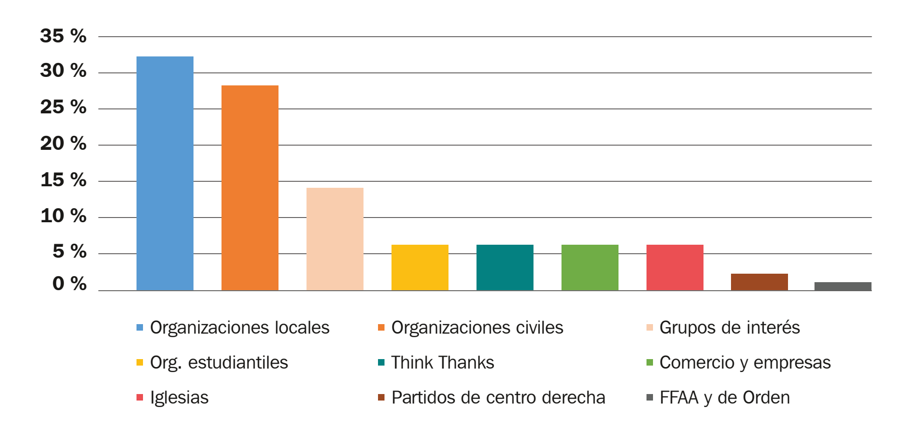


Figura 1. Participación de los encuestados en organizaciones del mundo social (Chile). Fuente. Elaboración propia a partir de la encuesta a dirigentes de Chile Vamos (Fondecyt Regular 1151503)

Para la Argentina y un registro comparable, los datos del Observatorio de las Elites Argentinas de la UNSAM dan cuenta de que casi la mitad de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional pertenecientes al PRO (Partido Propuesta Republicana, el principal de la coalición gobernante Cambiemos 2015–2019) participan o participaron anteriormente a una organización del mundo social.

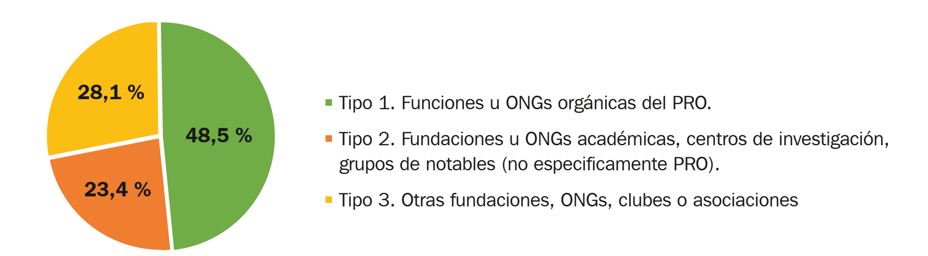


Figura 2. Tipo de organizaciones en que participaron funcionarios gubernamentales del PRO (Argentina). Fuente: Observatorio de las Elites Argentinas, IDAES-UNSAM (Canelo y Castellani, 2017).

Otro eje de importancia en la comparación en la incrustación social y en la trayectoria de los dirigentes partidarios es la indagación sobre las ocupaciones y trayectorias profesionales. En el caso de Chile, como todos los encuestados ocupan algún cargo en la estructura partidaria, emerge una previsible mayoría de cargos de elección popular (21 %), seguidos por profesionales del área de Humanidades, Artes o Ciencias Sociales (fundamentalmente profesores de enseñanza media), y de empresarios pequeños o medianos (14 %). En este último punto resulta importante resaltar que si bien ocupan ocupaciones en pequeñas o medianas empresas, pareciera ser que no hay una correspondencia porcentual con organizaciones de esta naturaleza.

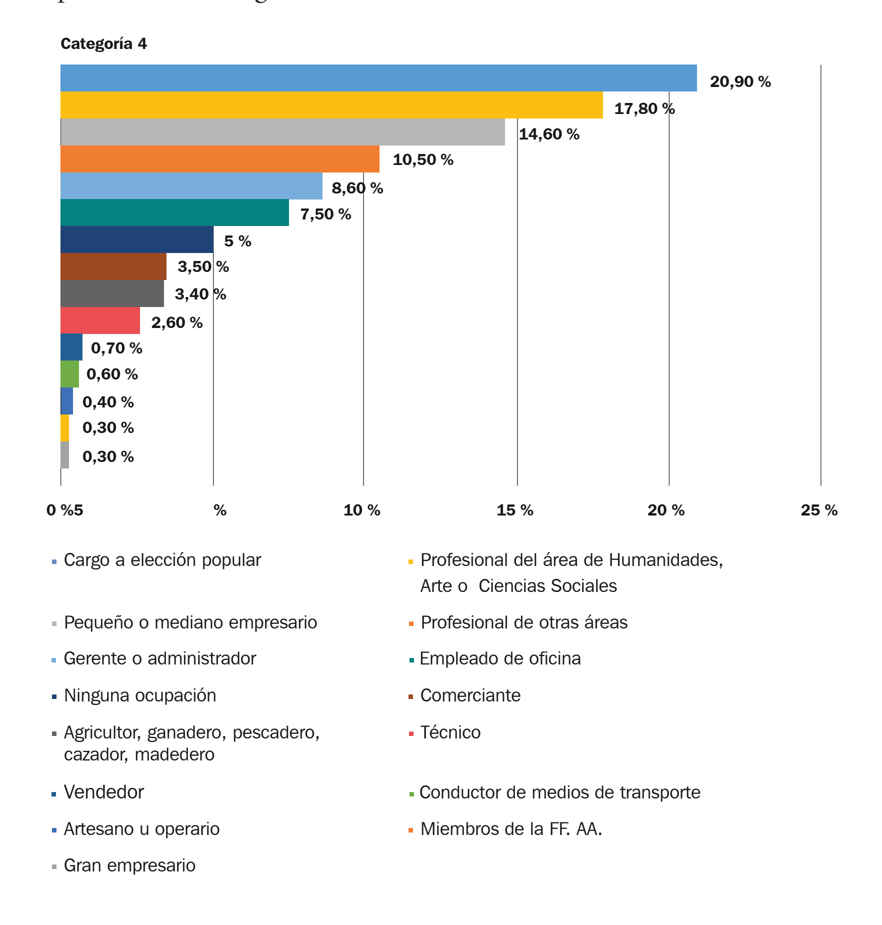


Figura 3. Ocupación actual de los dirigentes partidarios (Chile). Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a dirigentes de Chile Vamos (Fondecyt Regular 1151503)

Si bien los datos no son homogéneos como para desarrollar una comparación sistemática, para Argentina y acercándonos al problema de la «puerta giratoria» entre el mundo privado/corporativo y la administración pública se muestra un cuadro con los porcentajes de funcionarios actuales con trayectoria no públicas puras. Se explicitan los porcentajes por cada ministerio, donde no casualmente los resortes más productivos y económicos en sentido estricto (energía, producción, agroindustria, trabajo) son los que registran las mayores proporciones de funcionarios con trayectorias «dobles».

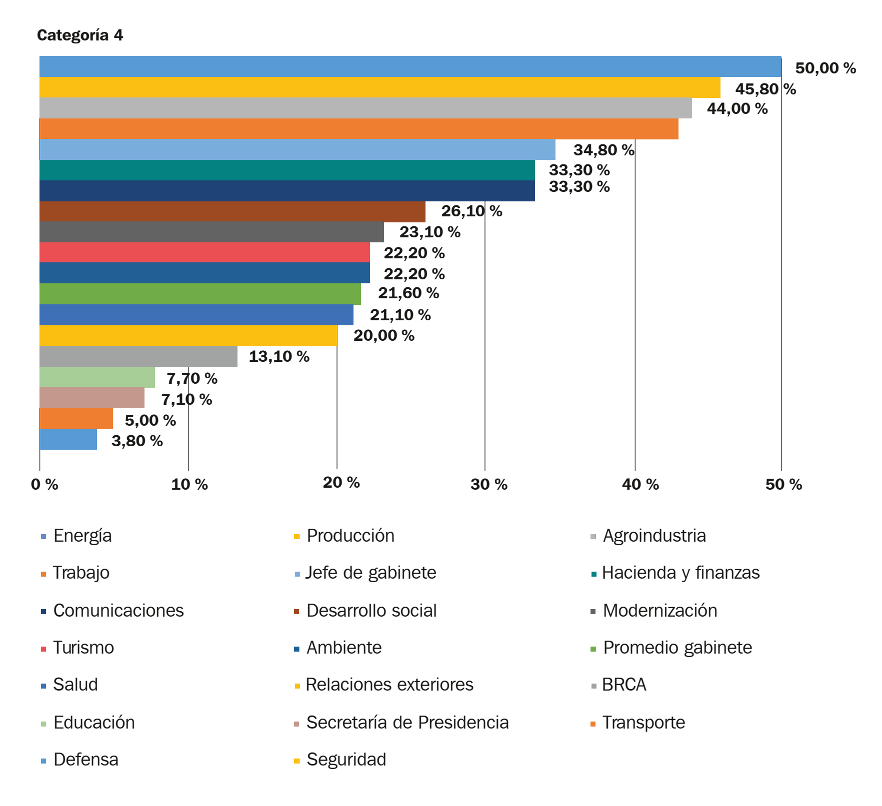


Figura 4. Porcentaje de funcionarios con trayectorias «privadas puras» por dependencia. (Argentina). Fuente: Observatorio de las Elites Argentinas, IDAES-UNSAM (Canelo y Castellani, 2017)

El último eje ineludible es el del financiamiento de los partidos políticos y el de la circulación de funcionarios a nivel de cargos directivos entre el mundo privado/corporativo y la administración pública. Para Chile cabe destacar que la encuesta no da cuenta de datos certeros sobre financiamiento efectivo sino

que indaga en las propias percepciones de los miembros de los partidos de centroderecha sobre el financiamiento que reciben los respectivos partidos.

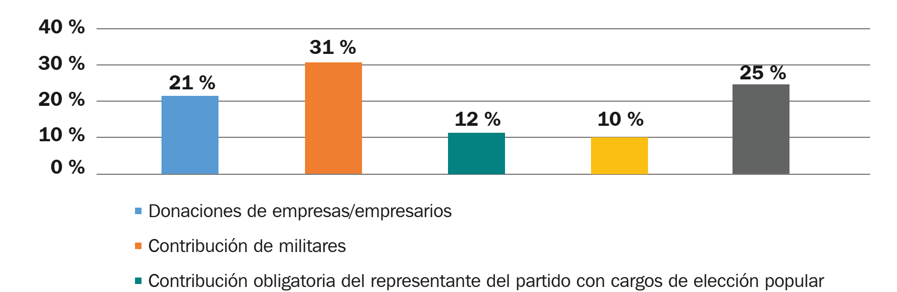


Figura 7. Percepción sobre el proceso de financiamiento de campañas (Chile). Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a dirigentes de Chile Vamos (Fondecyt Regular 1151503).

Entre las mayores fuentes de financiamiento que se señalan están la contribución de los mismos militantes y el financiamiento público. Las donaciones del empresariado no dejan de considerarse importantes superando el 20 % del financiamiento general, pero no son percibidas como la fuente principal para sostener las actividades partidarias. Si bien la encuesta da cuenta de vínculos transversales entre los partidos y su entorno, así como una diversidad de dedicaciones profesionales no necesariamente de un nivel socioeconómico alto ni vinculadas primordialmente al mundo de la empresa, no es posible distinguir el peso específico (o las cuotas de poder) que puede tener el núcleo dirigencial de las cúpulas partidarias y los cargos electivos en general que van desde lo comunal a lo nacional y desde concejales a senadores. Es decir, que es necesario complementar esta información con lo que sucede realmente en los cargos directivos en los partidos y cuáles son las posibilidades reales de que esas diversas organizaciones del entorno influyan realmente en el ámbito decisional de cada organización y en sus contenidos doctrinarios así como de que militantes llanos puedan hacer carrera en el partido.

Para ambos países, a pesar de que los datos dan cuenta efectivamente de una mayor pluralización y horizontalidad en el vínculo entre los partidos de centroderecha y su entorno social, la relación entre empresariado y estos partidos sigue siendo de fundamental importancia. Esto es al menos lo que surge de los datos sobre financiamiento de los partidos políticos, sobre directorios de empresas, así como de algunas entrevistas en profundidad a líderes del empresariado organizado (al respecto, Pelfini y Rueda, 2019; Matamala,

2015). En el caso de Chile puede decirse que este sector es el gravitacional en la renovación del mundo de la derecha y asume un rol clave en la defensa del modelo de sociedad de mercado instaurado con la dictadura y en la cooptación de buena parte de la clase política.

En financiamiento empresarial es transversal (es decir, que contempla a todo el arco político salvo el PC), pero escasamente transparente incluyendo mecanismos abiertamente ilegales por medio de los cuales también se realizaron aportes: boletas ideológicamente falsas, es decir, por medio de pagos a trabajos no realizados. También son notorios los vínculos transversales entre dirigentes políticos de las dos principales coaliciones (Chile Vamos y Nueva Mayoría en su momento) con directorios de empresas de diversos sectores económicos donde es corriente que dirigentes partidarios y políticos de trayectoria formen parte de los mismos. Estos vínculos regulares, transversales y cruzados se observan principalmente en dos sectores económicos emblemáticos de las reformas ocurridas durante la dictadura y las privatizaciones: la reforma a la educación superior ocurrida en 1981 que abre un sistema de inversiones y de creación de universidades privadas; y la reforma al sistema estatal de pensiones sancionada en 1980 que crea Administradoras privadas de Fondos de Pensión (AFP).

En la Argentina, a pesar de que las ONGs aparecen como un nuevo ámbito de reclutamiento y de «servicio» en el PRO, la preeminencia del empresariado frente a otros «mundos de pertenencia» también es contundente y se plasma en lo que se ha dado en llamar CEOcracia (Zaiat, 2015; Astarita y De Piero, 2017).

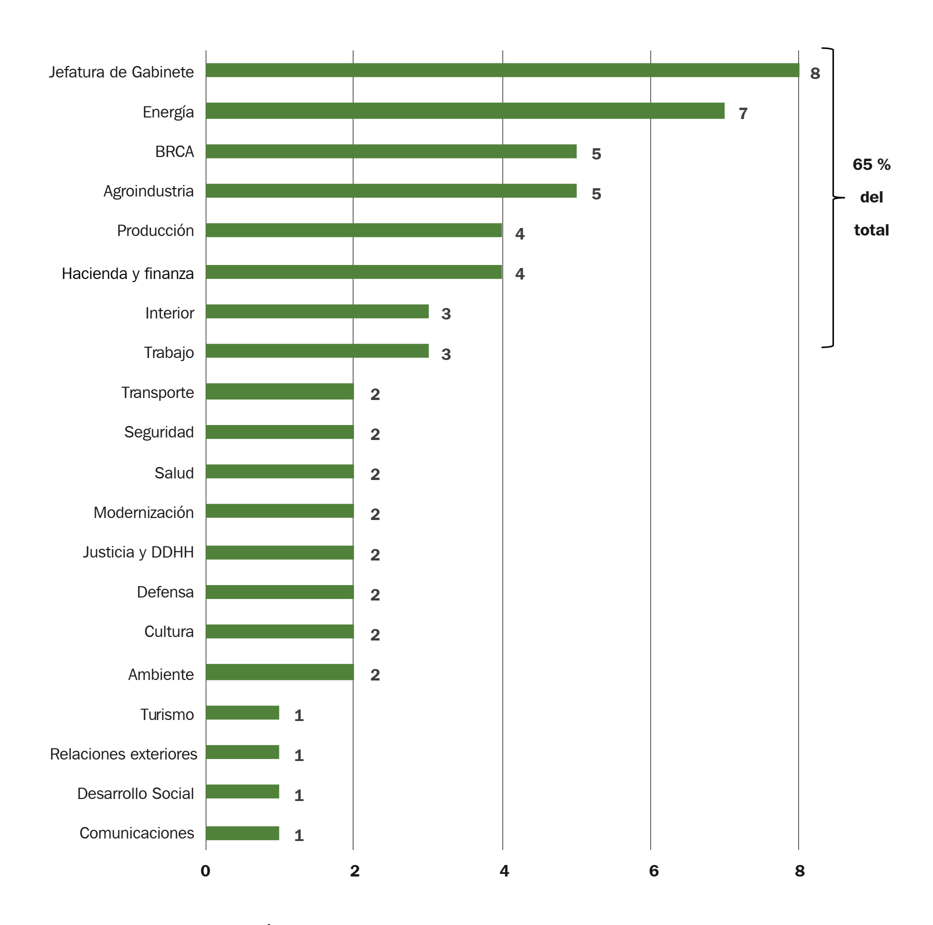


Figura 6. Distribución de casos directos de «puerta giratoria» por dependencia (Argentina). Fuente: Observatorio de las Elites Argentinas, IDAES-UNSAM (Canelo y Castellani, 2017)

Interesante resulta aquí resaltar cómo esta circulación fluida y en un «alto nivel» entre el mundo privado/corporativo y la administración pública, si bien es una tendencia general, se concentra en determinados resortes: ministerios «productivos», y en forma más esperable en el Banco Central, pero también en la Jefatura de Gabinete dando un sesgo modernizante y managerial a un espacio de coordinación tradicionalmente caracterizado por sus funciones y talento políticos: diálogo, negociación, persuasión, monitoreo. Las tendencias a la privatización parecen haberse agudizado en tiempos de crisis siguiendo el derrotero hacia una mayor polarización y encierro en el ámbito confiable y conocido que fue encarando la Coalición Cambiemos a medida que su estrella se iba opacando y el contexto escapaba a su control: «la crisis económico–financiera parece haber sido determinante en la confirmación de esta

tendencia. Antes que recurrir a funcionarios con mayor experiencia pública o política, el macrismo profundizó su tendencia originaria a confiar en hombres del mundo privado para transitarla» (Canelo et ál., 2018:132).[3]

Nuevamente, la exploración preliminar parece indicar, primero que el vínculo entre partidos y élites empresariales es bidireccional en sentido de «puerta giratoria» con un alto grado de circulación público–privada dentro del mismo sector económico (Maillet et ál., 2016) y, en segundo lugar, que al menos para Chile, el empresariado no mantiene un vínculo privilegiado únicamente con los partidos de centroderecha más allá de la preferencia ideológica compartida; es decir, que el sector tiende a dominar y a dar forma al escenario político en general. La pregunta que se plantea aquí es cómo relacionar esta evidente imbricación estrecha del empresariado con los partidos de centroderecha, pero que es a la vez transversal a buena parte del arco político ideológico, con la evidencia presentada que da cuenta de un enraizamiento social más profundo, variado y no necesariamente jerárquico de los partidos en la sociedad. ¿Resulta posible mantener ambas imágenes al mismo tiempo o esto da cuenta más bien de una fractura al interior de los partidos entre las cúpulas dirigenciales y el resto similar a la brecha que se registra actualmente en Chile entre élites y ciudadanía? ¿La posible vitalidad que puede representar una nueva centroderecha realmente da cuenta de una democracia activa y vital o de un vínculo que se acerca a lo que se ha dado en llamar posdemocracia?

De la legitimación por principios a la legitimación por rendimiento y procedimental

Otra dimensión relevante de la aparente novedad de la centroderecha en la región se vincula con su modo de intervención en el espacio público, en sus clivajes fundamentales y en la justificación de sus decisiones de política pública. Cuestiones que pueden ser englobadas dentro de la categoría «mecanismos de legitimación». Los mismos representan una apuesta permanente y contingente en sociedades plurales donde la legitimidad no está garantizada por apelación a la verdad o a principios aparte del mismo orden político. Por lo tanto,

3 Analistas como Marcos Novaro cuestionan el determinismo o el carácter lineal que estos estudios le atribuyen a la relación entre mundo político y empresarial (Novaro, 2019). Objetan puntualmente que estos porcentajes de cargos gerenciales sean excepcionales y no ven con malos ojos el que se haya intentado superar el extrañamiento entre ambos mundos y la extrema politización de los cargos públicos. Además de ello, consideran que difícilmente Cambiemos hubiera contado con otras canteras donde reclutar profesionales sobre todo cuando se compartía un ethos de profesionalización de la gestión pública.

se debe generar aceptación según la forma clásica de Weber aunque incorporando elementos que complejizan esta forma inicial y típico–ideal en cierto modo obsoleta (Dogan, 2009). Así, la legitimidad debe construirse y reconstruirse en forma hermenéutica a través de la misma deliberación, la inclusión de voces diversas y por pertenencia a una comunidad legal (Brunkhorst 2014, Habermas, 1998). De parte de esta nueva centroderecha se busca obtener y renovar legitimidad en la medida en que se presenta un proyecto político para liderar al conjunto de la sociedad y no solo para representar intereses particulares de un colectivo determinado o corporación. Al respecto, la nueva centroderecha en Chile y Argentina presenta dos mecanismos fundamentales de legitimación: el primero es la apelación a la racionalidad entendida como seriedad y responsabilidad en la gestión pública asociada al control del gasto y la defensa de un modelo económico neoliberal. El segundo es el ideal de la meritocracia basado en el principio de la autonomía individual.

En relación con la racionalidad como mecanismo de legitimación se asume con llamativa facilidad una especie de monopolio de la racionalidad, por el cual la «nueva» centroderecha sería la que dirime lo que es racional de lo irracional en la función pública asociando la primera a una especie de responsabilidad y previsibilidad en la toma de decisiones. Esto se expresa con relativa simpleza en el pragmatismo del «hacer las cosas bien». El otro de esta racionalidad no es más que la dilapidación demagógica de una redistribución irresponsable y subsidiaria, categorizada erróneamente como «populismo». En términos de política económica, lo racional estaría relacionado estrechamente con la consolidación de la economía de mercado y con la autonomía de sus mecanismos y criterios ante cualquier «intromisión» de motivaciones políticas o de justicia distributiva. Tal como se pudo demostrar para Chile en el Proyecto Fondecyt 1141001 «La transformación de las élites en una sociedad emergente. Distinción, tolerancia y transnacionalización en las élites empresariales chilenas»,[4] este monopolio de la racionalidad y esta autopercepción de superioridad cognitiva están estrechamente vinculados al mantenimiento y profundización del modelo económico neoliberal. Así como las élites empresariales se ven a sí mismas como guardianes de este modelo, la centroderecha se presenta como la más capaz de sostenerlo y de implementar las políticas públicas necesarias para su consolidación. Y esto se da mediante dos procesos que se refuerzan entre sí: por un lado, la afinidad entre dirigencia política y élites empresariales aseguraría la capacidad de interpretar y traducir la racionalidad del mercado en los asuntos públicos; y, por otro, la incorporación de

4 Proyecto desarrollado entre 2014 y 2017, bajo mi dirección. Sus resultados y enfoques conceptuales se publicarán en (Pelfini, en prensa).

criterios de *management* en la gestión pública serviría como garantía de seriedad y responsabilidad.

Un dato interesante que refuerza la idea de monopolio de la racionalidad dice relación con que al menos las élites empresariales no ven al modelo como tal, es decir, como un constructo artificial —modélico, en sentido estricto— sino como algo natural que expresa el orden de las cosas (Mayol, 2013). Si fuese un modelo construido, sería susceptible de ser reformado y cuestionado. Por el contrario, al tratarse de algo que expresa lo supuestamente natural y evidentemente racional, apenas queda margen para su revisión y cualquier crítica o reforma profunda queda del lado de la irracionalidad y del maldecido «populismo» (Cortés y Pelfini, 2017). Un modo más radical de plantear esta oposición sobre todo en el marco de campañas electorales es el uso y abuso de la metáfora «Chavización» o de nombrar el peligro de acercarse a la actual Venezuela de Maduro como conjuro contra cualquier experimento tildado de demagógico. Experimento que consistiría supuestamente en una combinación de irracionalidad económica junto a un tono autoritario en la construcción política, en el que caería cualquier alternativa que plantee una tímida heterodoxia en política económica y que se presente en el espacio público con motivaciones socialdemócratas y con banderas latinoamericanistas. Puntualmente en Chile en las elecciones presidenciales de 2017 se agitó rabiosamente el fantasma de «Chilezuela» como destino inexorable en caso de que la Nueva Mayoría que llevaba como candidato presidencial a Alejandro Guillier volviera a ganar las elecciones. En las elecciones en la Argentina viene sucediendo algo parecido, y un candidato como Alberto Fernández o antes cualquiera que desafíe a la centroderecha en el poder, tiene que medir como nunca sus palabras al referirse al régimen de Maduro y a las propuestas de política exterior respecto de Venezuela.

El segundo mecanismo de legitimación está vinculado con el ideal de la meritocracia propio de una visión de la justicia social basada en la igualdad de oportunidades. No se trata entonces de introducir reformas estructurales, subsidios compensatorios o una reforma impositiva con tintes redistributivos. Más bien el esfuerzo estatal debe estar puesto en abrir oportunidades y eliminar discriminaciones. El énfasis recae en las capacidades y rendimientos individuales y en los caminos para el despliegue de las potencialidades subjetivas y menos en los tejidos y recursos colectivos y en las restricciones objetivas o estructurales a la movilidad social. Así se plantean oposiciones binarias del tipo agencia frente a estructura; igualdad de oportunidades frente a igualdad de condición (según la fórmula desarrollada por Dubet, 2011); capacidad emprendedora individual frente a innovación social y luchas colectivas. Evidentemente esta «nueva» centroderecha no es una simple reedición de la Dere-

cha privatizadora de los años 90 en la región o la que se desplegó en Chile luego de 1982. Su novedad reside justamente, y entre otros elementos, en que no parece tener como objetivo central hacer retroceder derechos adquiridos —al menos no explícitamente— y en una fase inicial (quedará para otro análisis lo que pueda suceder en caso de que estas experiencias se consoliden). Más bien edifica sobre ello pretendiendo generar más dinamismo, desregulando y gestionando en forma más eficiente y transparente lo que recibe en sus manos. Nuevamente y a diferencia de la Derecha neoliberal, esta «nueva» centroderecha no es meramente anti–estatal. Más que un Estado mínimo o un rechazo al mismo, se pregona la idea de un mejor Estado, que si bien puede requerir cierto empequeñecimiento, no necesariamente lo supone como fin principal: «el reconocimiento del rol de Estado es uno de los rasgos que identificamos en PRO que lo distinguen de las derechas neoliberales tradicionales» (Vommaro, 2017:77).

De este modo, los mecanismos de legitimación principales tienen más que ver con el rendimiento (según la clásica fórmula de Lipset, 1959) que con procedimientos (Luhmann, 1969) o con principios, por ejemplo de justicia distributiva o de libertad e igualdad. No obstante, en lo relativo al segundo mecanismo, los procedimientos, sí se hacen presentes otras apelaciones: por ejemplo, al republicanismo, al énfasis en una gestión tecnocrática y eficiente (modernización del Estado) propias al Estado de Derecho y a un ideal de transparencia. En cuanto al «otro» a superar aparecen dos frentes: por izquierda o desde el progresismo, el contraste es con el antagonismo populista, el liderazgo personalista, la movilización y la politización permanente (y con la corrupción asociada a estos). El argumento de la «nueva» centroderecha diría que ellos no solo hacen mejor las cosas (mayor eficacia en el rendimiento) sino que además lo logran de forma más correcta, transparente y eficiente. El otro frente que se abre es la Derecha a secas, o bien derecha tradicional o «vieja». El republicanismo supone una valoración de la democracia, la libertad económica ciertamente, pero también la libertad civil y política. El autoritarismo del pasado asociado a esa vieja Derecha aparece como un fantasma —algo así como otra «pesada herencia»—. Esto se vuelve más claro en Chile, donde las violaciones a los derechos humanos se presentan como una frontera que esta nueva centroderecha no parece tener intenciones de cruzar (recordar el importante rol de Piñera en su primer gobierno; el macrismo es algo más ambiguo y confuso, pero no cuestiona en forma directa la validez de los DD. HH.). La centroderecha recupera legitimidad política intentando superar o dar por cerrado el clivaje dictadura/democracia que ya no es asunto que preocupe a las nuevas generaciones que crecieron en democracia. Además, con esto se incorpora toda un ala liberal de la centroderecha sea en la forma de un partido joven y hasta

emancipatorio en cuestiones valóricas como Evópoli o a un partido tradicional, pero que fue clave en la transición democrática argentina y en la política de derechos humanos como el Radicalismo. También esto se hace posible porque en Chile efectivamente se cuenta con una derecha más dura y tradicional, tanto en la coalición gobernante, en lo que es la UDI (Unión Democrática Independiente) como heredera del Pinochetismo y en el último tiempo con una derecha autoritaria con tintes populistas con José Antonio Kast y su Acción Republicana. En el caso argentino, este otro fantasma en la derecha tradicional es más difuso o parece asustar menos. Esto se debe, por un lado, a que no existe una fuerza política relevante más a la derecha que el mismo Cambiemos o el PRO como partido, y por otro, a que esta misma coalición incluye elementos autoritarios reciclados sobre todo en las áreas de Seguridad e Inteligencia. Los debates generados en torno a los derechos humanos durante el gobierno de Cambiemos muestran toda esa ambigüedad: si inicialmente y al interpelar a un votante medio se presentaba una postura más bien neutral frente al tema, a medida que la polarización con el kirchnerismo parecía resultar un buen negocio y la coalición se iba sintiendo más segura en el poder se hicieron varios pruebas de tipo como ensayo y error que si bien fueron ampliamente resistidas, fueron corriendo el límite de lo enunciable en la esfera pública:

> El macrismo ha intentado arrasar con esta conquista histórica y llevar a su «lado de la grieta» a articularse con el «partido militar», a demonizar a la militancia de los '70 y, en ella, a toda lucha actual contra las consecuencias del ajuste, a relegitimar la represión pasada para darle fundamento a la represión presente, generando un clima donde han vuelto a cobrar legitimidad figuras nefastas de Argentina y prácticas que creíamos desterradas como el asesinato de militantes populares por las fuerzas de seguridad o las persecuciones en clave ideológica. (Feierstein, 2019:9)

En este sentido y para resumir lo relativo a los mecanismos de legitimación y la primacía de mecanismos de rendimiento y también procedimentales sobre los relacionados con principios, coincidiendo con el análisis de José Natanson podemos decir que se registra un

> sutil desplazamiento del foco político: de la redistribución a la discriminación y de la desigualdad a la pobreza, objetivos estos últimos más consensuales y menos conflictivos, que a su vez justifican políticas públicas orientadas a corregir antes que a reformar, y que no suponen esquemas de suma cero, en el que para que uno gane el otro tenga que perder. (Natanson, 2017)

Otro modo posible de diferenciar la orientación clásica de la derecha y esta «nueva» centroderecha es retomando la distinción entre un ethos heroico y otro posheroico según lo plantea Helfried Münkler (2007). Mientras que lo heroico apela a una misión histórica con un ánimo redencionista que da sentido al sacrificio individual, lo posheroico es más pragmático y más que un ánimo refundacional se centra en uno correctivo, donde ninguna narrativa histórica o gran relato o misión justifica el sacrificio individual ni el uso abierto de la violencia. Usualmente desde las tribunas de contienda política se atribuye a la derecha en general y precisamente al llamado cambio de ciclo en Sudamérica en un giro hacia la derecha, un ánimo restaurador y refundacional y que intentaría volver al pasado o bien recuperar las banderas y proyectos abandonados por los desvaríos populistas o socialdemócratas. Sin embargo, y como venimos destacando en este texto, una de las novedades de la «nueva» centroderecha reside también en el modo en que se vincula con la narratividad histórica. El modo en que esta derecha «renovada» se sitúa en la temporalidad de cada nación es menos refundacional y épico y se acerca a un pragmatismo posheroico (Münkler, 2007) en que el sacrificio y la restauración son menos importantes que la búsqueda —aunque sea forzada— de consensos y de la proyección hacia el futuro a partir de lo que se entiende por una «buena gestión pública». Esto se hace más patente en el momento de acceder al poder y cuando el mismo no se encuentra en disputa. Como vimos, el tono gerencial de la «nueva» centroderecha se va también crispando y volviéndose menos posheroico cuando no logra explicarse cómo las mayorías no la aclaman si ellas son las que detentan el monopolio de la racionalidad. Evidentemente, la orientación hacia el pragmatismo posheroico no es inocua y no es necesariamente positiva (o al menos ésa es una evaluación que excede este texto). La falta de «espesor histórico» (como diría H. González) nos abre al pathos positivo del emprendedurismo (Bröckling, 2015) y al ideal meritocrático que señalábamos anteriormente, donde la realidad es solo vista como un horizonte de oportunidades de desarrollo y de realización de potencialidades con el riesgo de terminar ignorando el peso de las determinaciones históricas y estructurales en la creación o limitación de esas mismas oportunidades para los sujetos.

Reflexiones finales

A la hora de hacer un balance de este recorrido a partir de fuentes de información diversas (resultados de una encuesta reciente, entrevistas en profundidad a empresarios e investigaciones periodísticas), se hace evidente que la pregunta acerca del vínculo entre los partidos políticos de centroderecha y su

entorno social, mirando fundamentalmente al mundo empresarial, no puede responderse de plano o en una visión de conjunto. Más bien el análisis muestra dos caras contrapuestas. Por un lado, sí se hace evidente la existencia de un entorno complejo y de un enraizamiento social más profundo y variado frente a lo supuesto tradicionalmente. Al considerar a los partidos en general y en base a una encuesta a dirigentes en diversos niveles (y aún más en un universo amplio que tiende a borrar las diferencias y los privilegios) así como las estrategias de reclutamiento y formación de un partido como el PRO en la Argentina aparece un cuadro de vínculos diversos, complejos y bastante transparentes con varias organizaciones sociales, con el mundo religioso, con trayectorias de origen y de proyección profesional que no necesariamente relacionan primordialmente a los partidos de centroderecha con sectores privilegiados ni con actores del mundo empresarial o con las organizaciones más conservadoras y elitistas de la iglesia católica. Por otro lado, cuando a partir de datos secundarios y de entrevistas en profundidad en el mismo mundo empresarial, pero también a partir información de ocupación de cargos públicos en el gobierno de Macri se observan los vínculos entre el núcleo dirigencial en la cúspide de la toma de decisiones o élites partidarias y el entorno social inmediato, el panorama es muy diferente: los vínculos se tornan opacos, bidireccionales y además transversales y, cuando no, ilegales. Para el caso chileno, excediendo además a los partidos de centroderecha e incorporando a otros colores políticos bajo la defensa del modelo y de una supuesta racionalidad canónica.

La otra dimensión de la supuesta novedad, la de los mecanismos de legitimación, nos acerca también a un contexto «posdemocrático» (Crouch, 2004) en el cual los clivajes ideológicos no tendrían ya relevancia porque en realidad ya se habría consumado la colonización del sistema político por el económico vía los grandes conglomerados de medios de comunicación. En este contexto, mientras que el marco formal de la democracia se mantiene, la ciudadanía pierde gran parte de su autonomía real: la democracia se vuelve «reductible [...] al mero juego de los dispositivos estatales y las armonizaciones de energías e intereses sociales» (Rancière, 1996:129), así como los clivajes políticos principales se desvanecen. Nuevamente aquí la brecha entre lo explicitado y lo latente, entre lo táctica y la estrategia es enorme: la centroderecha se presenta en términos posideológicos y orientada según mecanismos de legitimación por rendimiento y por procedimientos, más que por principios fundamentales. En otros términos, se presenta a sí misma como signada por un pathos posheroico sin ánimos redentoristas ni refundacionales. No obstante, y sobre todo a partir de lo que ocurre en la Argentina donde las discusiones en torno a la validez y sustentabilidad de los modelos de desarrollo aún no se zanjaron como en Chile a favor de uno de ellos, cabe preguntarse si la deseada supera-

ción del «populismo», ¿no contiene también un ánimo refundacional y una misión histórica de carácter épico?

En este sentido, y relevante para la hipótesis de este texto es que si bien el vínculo con el entorno puede tender a ser más complejo, variado y profundo de lo que supone la literatura vigente, los vínculos decisivos en cuanto a influencia y liderazgo aparecen menos permeados por el pluralismo propio de una incrustación social variada y se mantienen reservados a contactos privilegiados, opacos y hasta ilegales. Así, la centroderecha no sería mucho más que una versión más amable y menos crispada de la derecha tradicional donde se expresa el poder instrumental y social de los sectores privilegiados en la sociedad y de un empresariado que siempre quiso tener al Estado a su servicio. De este modo, la novedad sería menor a la aparente y asistiríamos a una nueva expresión más sutil y refinada del capitalismo jerárquico, como la variedad típica del capitalismo latinoamericano (Schneider, 2013) de base familiar y que pretende disciplinar al Estado a los sindicatos. De ahí que en esta misma mirada sociológica resulta clave distinguir entre la retórica y las políticas públicas concretas, o bien entre los mecanismos de legitimación presentados y la experiencia real de esta «nueva» centroderecha. Una diferencia parangonable a la existente entre el software y el hardware o bien entre el poder representado y el poder crudo y duro entre bambalinas vinculado a los «poderes fácticos». Las declaraciones públicas, el marketing político, las justificaciones de política tienden a distanciarse enormemente de las decisiones de política cotidiana que no necesariamente se ajustan a estos procedimientos y principios y que en forma evidente hacen retroceder derechos adquiridos sobre todo en lo social. Este distanciamiento entre el marketing y la toma de decisiones se hace aún más patente cuando las condiciones de gobernabilidad se vuelven más dificultosas: así el tono managerial y dialoguista va cediendo terreno a uno más virulento y al coqueteo con posiciones de la derecha autoritaria (por ejemplo en temas se seguridad interna) como pudo observarse en la campaña de la coalición Juntos por el Cambio antes de las PASO (agosto 2019) en la Argentina, o directamente expresando un clasismo explícito, como en el discurso del Presidente Macri y otras figuras de la coalición luego de conocerse los sorpresivos resultados de las primarias (Svampa, 2019). De este modo, la llamada grieta o el discurso crispado pueden ser aprovechados en una campaña electoral o como estrategia política por los mismos que habían venido a superarlo. Queda por verse si se trata de una grieta productiva o improductiva, siguiendo la distinción de Rodríguez y Touzon (2019); es decir, entre una polarización que favorece la transformación por diferenciación y otra que consolida las adhesiones estables, pero no logra interpelar a los neutrales. Ciertamente que una evaluación más detallada y certera

de la relación la retórica y las políticas públicas concretas solo puede hacerse *ex post* y para ello apenas contamos con la experiencia del gobierno de Piñera en Chile (2010–2014), unos pocos años de su apagado segundo gobierno y el gobierno de Macri en Argentina (2015–2019).

Referencias bibliográficas

Alenda, Stéphanie; Pelfini, Alejandro; López, Mguel, Riveros, Claudio (2018). El estudio de las élites políticas en Chile: los sostenes del orden» en Vommaro, G. y Gené, M. (Eds.). *Las élites políticas en el Sur. Un estado de la cuestión de los estudios sobre Argentina, Brasil y Chile.* Ediciones UNGS.

Astarita, Diego y De Piero, Sergio (2017). «Cambiemos y una nueva forma de elitismo: el político–empresarial». En García Delgado, D. y Gradín, A. (Eds.) *Neoliberalismo tardío. Teoría y Praxis. Documento de Trabajo 5* (pp. 187–201). FLACSO.

Bröckling, Ulrich (2015). *El self emprendedor. Sociología de una forma de subjetivación.* Ediciones Universidad Alberto Hurtado.

Brunkhorst; Hauke (2014). *Critical theory of legal revolutions.* Bloomsbury.

Canelo, Paula; Castellani, Ana; Gentile, Julia (2018): Articulación entre elites económicas y elites políticas en el gabinete nacional de Mauricio Macri (2015–2018). En García Delgado, D.; Ruiz del Ferrier, C.; De Anchorena, B. (Eds.). *Elites y captura del Estado: control y regulación en el neoliberalismo tardío (*pp. 117–135). FLACSO.

Canelo, Paula y Castellani, Ana (2017). Perfil sociológico de los miembros del gabinete inicial del presidente Mauricio Macri. *Informe de Investigación Nº 1 del Observatorio de las Elites Argentinas del IDAES–UNSAM.* IDAES–UNSAM.

Cortés, Alexis y Pelfini, Alejando (2017). *El populismo en Chile: ¿tan lejos o, tan cerca? Izquierdas (*32), 58–78.

Crouch, Colin (2004). *Posdemocracia.* Taurus.

Dogan, Mattei (2009). Political legitimacy: new criteria and anachronistic theories. *International Social Science Journal 60* (196),195–210.

Dubet, François (2011). *Repensar la justicia social. Contra el mito de la igualdad de oportunidades.* Siglo XXI.

Duverger, Maurice (1957). *Los partidos políticos.* FCE.

Fairfield, Tasha (2015). *Private Wealth and Public Revenue in Latin America.* Cambridge University Press.

Feierstein, Daniel (2019). El legado subjetivo del Macrismo. Un campo minado, Le Monde Diplomatique Edición 242. Agosto de 2019.

Fischer, Karin (2017). *Clases dominantes y desarrollo desigual en Chile (1830–2010)*. Ediciones UAH.

García Delgado, Daniel y Gradín, Agustina (Eds.). Neoliberalismo tardío. Teoría y Praxis. *Documento de Trabajo 5 (*pp. 187–201). FLACSO.

Gibson, Edward (1992). Conservative Electoral Movements and Democratic Politics: Core Constituencies, Coalition–Building, and the Latin American Electoral Right. En D Chalmers, D., Souza, M., Borón, A. (Eds.). *The Right and Democracy in Latin America.* Präger.

Habermas, Jürgen (1998). *Facticidad y validez: sobre el derecho y el estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso.* Trotta.

Maillet, A.; González–Bustamente, B y Olivares, A. (2016). ¿Puerta giratoria? Análisis de la circulación público–privada en Chile (2000–2014), *Documento de Trabajo del PNUD–Chile.*

Matamala, Daniel (2015). *Poderoso Caballero. El peso del dinero en la política chilena.* Catalonia.

Mayol, Alberto (2013). *El derrumbe del modelo.* LOM.

Middelbrook, K. (Ed.) (2000). *Conservative Parties, the Right, and Democracy in Latin America.* John Hopkins University Press.

Münkler, Herfried (2005): *Der Wandel des Krieges. Von der Symmetriezur Asymmetrie,* Velbrück.

Natanson, José (2017). *Macronmacri, Le Monde diplomatique, N° 218* – agosto de 2017.

Novaro, Marcos (2019). *Dinero y poder. Las difíciles relaciones entre empresarios y políticos en la Argentina.* Edhasa.

Pelfini, Alejandro (2017). Trump y la ilusión de la desglobalización. En García Delgado, D. y Gradín, A. (Eds.) *Neoliberalismo tardío. Teoría y Praxis, Documento de Trabajo 5.* FLACSO.

———(Ed.) (en preparación): *¿Son o se hacen? Las élites empresariales chilenas ante el cuestionamiento ciudadano.*

Pelfini, Alejandro y Rueda, Vicente (2019). Las dos caras del entorno social de la Centro–derecha en Chile. En Alenda, Stephanie. Anatomía de la centro–derecha chilena: nuevos y viejos protagonistas. Fondo de Cultura Económica.

Schneider, Ben Ross (2013). *Hierarchical Capitalism in Latin America.* Cambridge University Press.

Rancière, Jacques (1996). *El desacuerdo. Política y filosofía.* Nueva Visión.

Rodríguez, Martín y Touzon, Pablo (2019). *La grieta desnuda. El Macrismo y su época.* Capital Intelectual.

Svampa, Maristella (2019). Cinco primeras lecciones de las primarias argentinas, *Nueva Sociedad Newsletter* (agosto 2019).

Vommaro, Gabriel (2017). *La larga marcha de Cambiemos*. Siglo XXI.

Vommaro, G.; Morresi, S.; Belloti, A. (2015). *Mundo Pro. Anatomía de un partido hecho para ganar.* Planeta.

Vommaro, Gabriel y Gené, Mariana (Eds.) (2018). *El estudio de las élites políticas en el Sur.* Ediciones UNGS.

Zaiat, A. (2015). La CEOcracia, *Página 12.* Recuperado en https://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2–287680–2015–12–06.html

A ascensão da Nova Direita no Brasil

Christiane Vieira Laidler

Introdução

Em 2018, Jair Bolsonaro foi eleito no Brasil, representando o que se pode classificar como extrema direita. Imediatamente após a sua posse, ficou claro que estava associado ao governo de Donald Trump, com quem estabeleceu tratativas sobre acordos e sobre a atuação numa possível intervenção na Venezuela. A ascensão de um deputado que por mais de duas décadas havia sido um pária no Congresso Nacional, atuando nas sombras como representante de uma única pauta, qual seja a dos salários de militares, não parecia uma possibilidade até o início da campanha eleitoral. Por isso, explicar o fenômeno exige reconhecer elementos do cenário externo após a crise de 2008 e a disputa comercial global que se instalou com a ascensão da China como potência industrial e tecnológica. Neste novo cenário, o patrimônio público, os serviços públicos e a parte da renda produzida que é redistribuída pelo Estado estão sob permanente ataque das corporações globais em busca de lucratividade em tempos de desaceleração econômica e juros baixos. O ajuste é exigido dos países por meio da guerra fiscal, de ataques às moedas e por sanções que hoje substituem as intervenções militares que eram as formas habituais de enquadrar os governos nacionais recalcitrantes. Tal ajuste que impõe austeridade e diminuição do Estado, com o objetivo da redução de impostos e da transferência de ativos públicos para mãos privadas, priva a população de serviços, impõe processos recessivos, precariza o trabalho e gera uma insatisfação social latente, nem sempre consciente dos fatores da crise. Daí resulta a crise profunda da representatividade do sistema de partidos que já não são capazes de canalizar as demandas sociais e perdem a confiança dos cidadãos. No Brasil, o discurso público construído para dar respostas à crise, explicando suas causas e prescrevendo as soluções necessárias, teve caráter monolítico, estabelecendo o pensamento único em favor de soluções de mercado, sem intervenções do Estado. Além deste discurso econômico e da linguagem que configurou o projeto de Estado mínimo, será necessário apontar, ainda que precariamente, alguns elementos que, associados ao consenso neoliberal, criminalizaram a atividade política contribuindo para a desmoralização de partidos e lideranças. Destaco a atuação do Poder Judiciário que demanda uma investigação para o conjunto da América Latina, e a intervenção de novos grupos políticos internacionais de direita, com financiamentos clandestinos, que alteraram a cultura política e a linguagem da disputa por meios digitais.

Análises muito próximas aos fatos são sempre precárias, porém as observações sobre a dinâmica dos fenômenos presentes são um registro fundamental para o avanço da compreensão do cenário, pois a acumulação dessas observações permite que se estabeleçam as relações mais duradouras entre os grupos de interesses nos níveis doméstico, internacional e global. Com esse objetivo, procurarei expor algumas análises, incluindo a conjuntura do processo eleitoral de 2018, considerando o contexto de crise global e dos conflitos políticos específicos do Brasil.

A agenda global e a elite associada

As transformações do quadro político no Brasil que culminaram com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, em 2016, por meio de um processo político que aqui será compreendido como golpe de Estado,[1] estão diretamente relacionadas ao quadro geopolítico internacional e aos desafios à hegemonia americana no contexto de ascensão da China, dos acordos do BRICS e da descoberta das reservas de petróleo na camada do pré–sal no Brasil. Essa descoberta foi elemento fundamental de um projeto de autonomia política e econômica e de promoção da liderança do Brasil na região. A UNASUL e o propósito de consolidação de um bloco que atuasse de forma coordenada nas negociações internacionais foi a materialização de uma estratégia política autônoma da região nos marcos da ampliação de suas relações multilaterais.

A nova agenda regional teve como expressão econômica no Brasil a expansão da internacionalização de empresas de engenharia e do agronegócio, com financiamentos subsidiados pelo BNDES. No âmbito doméstico, os investimentos da Petrobrás se multiplicaram com o objetivo da conquista da autossuficiência no abastecimento e da exploração do pré–sal, com impactos diretos na indústria nacional em razão da exigência de conteúdo local nas concessões de exploração, de acordo com as determinações da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

---

1 Para uma análise do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, considerando a inexistência de crime de responsabilidade previsto na Constituição e os bastidores da conspiração no Congresso, ver André Singer, *O Lulismo em crise.* Em interessante análise sobre as novas formas de golpe de Estado e rupturas institucionais, Álvaro Bianchi chama a atenção para o fato de que o golpe pode ser perpetrado por uma parte da própria burocracia estatal, não contra o Estado, mas, por meios excepcionais, promover uma mudança institucional e uma alteração radical na distribuição de poder entre as instituições políticas, in «Golpe de Estado: o conceito e sua história».

Entre 2006 e 2012, o Brasil cresceu integrando–se com mercados emergentes e desenvolvendo setores importantes da economia nacional, com expansão do crédito, de salários e de programas sociais. A dinâmica de incremento produtivo se fez acompanhar por um processo de inclusão social e aumento da renda dos salários, promovendo o que André Singer chamou de realinhamento eleitoral, vinculando os segmentos mais pobres, sobretudo da região Nordeste, ao Partido dos Trabalhadores (Singer, 2018:162). A desaceleração da economia mundial, que começaria a ser sentida no Brasil com a queda dos investimentos a partir do ano de 2012, determinou as primeiras dificuldades do governo, que respondeu com um programa de intervenções em favor dos investimentos produtivos: diminuição de juros, com consequente desvalorização cambial, subsídios às tarifas de energia, desonerações fiscais e programas de concessões. Na sequência, o programa passou a ser demonizado em meios de comunicação e pelos próprios empresários que se uniram em torno de um consenso ultraliberal, referindo–se a todas as intervenções como causas da destruição da economia, do déficit público, da inflação e de um ambiente em que a confiança do investidor fora abatida pela insegurança das regras. Quanto às desonerações, entretanto, cujos impactos se fizeram sentir nos déficits fiscais, o que se verificou foi a impossibilidade de sua suspensão em razão das pressões desse empresariado, os seus beneficiários diretos.

A questão que se coloca sobre como a burguesia nacional, ligada à indústria e à produção, se uniu à burguesia rentista contra políticas econômicas que visavam promover o desenvolvimento da capacidade produtiva e de competição da economia nacional e encontra respostas em duas constatações. A primeira é a de que não há mais esta divisão de forma nítida. Industriais ganham no mercado de ações e em títulos do Tesouro tanto ou mais do que na produção de mercadorias. Por outro lado, a burguesia é global e a maioria dos empresários de ramos industriais está integrada a cadeias de fornecedores externos e de créditos, sofrendo impactos da alta do dólar, de sorte que a política cambial que favorece as exportações também os atinge negativamente. A segunda refere–se à promessa da agenda ultraliberal de realizar as «tarefas» para diminuir os custos da produção, notadamente a reforma trabalhista, realizada pelo governo Temer em 2017.

Esse alinhamento do empresariado nacional é fundamental para compreendermos que as rupturas promovidas no Brasil, embora num cenário externo de graves desafios à autonomia nacional e à agenda Sul–Sul promovida pelos governos do PT, contam com a determinação das elites nacionais e sua associação aos interesses de diminuição do Estado que significam a desoneração de seus capitais. Contrariamente ao que se observa em países onde a extrema direita ascendeu ao poder contra as perdas impostas pelas relações econô-

micas pós–globalização, na produção industrial, em empregos e salários, no Brasil a agenda é toda a favor da internacionalização e dos interesses das corporações e fundos estrangeiros. É o antinacionalismo absoluto, de Temer a Bolsonaro, sem nenhuma diferença. A expressão desse alinhamento está nos meios de comunicação de massa e nas redes sociais, com grupos ligados a *think tanks* liberais globais e a bolsonaristas, tornados facção política a partir da militância digital em canais que contam com até 3 milhões de seguidores.[2] Perto dessa máquina renovada de comunicação, a esquerda e os setores progressistas ficaram pequenos. Nos grupos digitais como o MBL e Vem pra Rua, que hoje contam com vários cargos em legislativos municipais, estaduais e federais, as ideias ultraliberais têm como referência a Escola Austríaca. Já entre os bolsonaristas, o ideólogo é um senhor chamado Olavo de Carvalho, que vive nos Estados Unidos, sem formação acadêmica, que se autointitula filósofo e vende cursos pela internet. Hoje seus seguidores compõem boa parte do governo. Suas ideias são confusas, pois tratam de antiglobalismo, mas servem ao projeto do imperialismo de Trump, ou seja, ao nacionalismo americano, no qual o Brasil encarna a periferia dependente de forma radicalizada, neocolonial. Também trata de restauração da civilização cristã ocidental, o que dá munição para a guerra digital contra as demandas identitárias de minorias, servindo para desviar a atenção das reformas ultraliberais em meio a hostilidades explosivas que acabam por pautar segmentos progressistas ou de esquerda. Por fim, afirma haver uma conspiração comunista no mundo, elegendo como inimigo o perigo dos anos 1960 e convertendo todos os críticos em comunistas, incluindo os setores mais notórios do capitalismo rentista e os meios de comunicação de massa que são suas máquinas de propaganda. A dinâmica do debate político que envolve o governo do Brasil de hoje e sua militância digital não guarda qualquer contato com a realidade material do país. É um teatro onde se constrói uma disputa entre torcidas, alienada de questões objetivas. Até o argumento central da disputa, que é a condenação moral do grupo destituído do poder, ou a guerra contra a corrupção, é uma ficção na medida em que o presidente e seus filhos são objeto de denúncias de corrupção em seus mandatos parlamentares e na campanha eleitoral de 2018.

As empresas fechadas, o endividamento das famílias, o aumento da pobreza ou da concentração da riqueza e da renda não são temas tratados por este governo. A agenda continua a ser cortar direitos, gastos públicos e diminuir o Estado para atrair (ou esperar) investidores. Mas já não é enunciada, ela

---

2 Um exemplo é o canal do ativista digital Nando Moura. Seu canal no Youtube tem atualmente 3,34 milhões de inscritos. Além de gravar vídeos contra Lula e o PT, todos manipulando a indignação contra a corrupção genérica e pressuposta, o ativista promove o curso «Mestres do Capitalismo», título de um livro de sua autoria.

se efetiva sem necessidade de debate público. Na pauta dos meios de comunicação reinam as disputas pequenas, rivalidades pessoais, denúncias que se renovam todos os dias, ofensas, traições e conspirações dentro do grupo do governo. Os noticiários funcionam como uma cortina que esconde os graves retrocessos sociais que o Brasil vive com a atualização do neoliberalismo em sua feição mais radicalizada.

É importante observar como o pensamento acadêmico, a pesquisa social e o conhecimento foram alijados do debate público no Brasil. Os meios de comunicação de massa já vinham abstendo–se de convocar para comentários e entrevistas os especialistas em questões econômicas e sociais oriundos das universidades. Todo o comentário político e econômico no Brasil tem sido feito por jornalistas pagos pelas emissoras, por consultores de mercado ligados a fundos de investimentos ou por pesquisadores liberais que atuam em escolas ligadas à elite empresarial. Esses meios contribuíram para criar o consenso social em torno do Estado mínimo antes mesmo da implosão do sistema político que permitiu a ascensão do presidente Bolsonaro afirmando–se como antissistema.

O discurso econômico: o mercado contra o Estado e a política

Nos anos de 1990, o Brasil e a América Latina enfrentaram a dupla tarefa de renegociar as dívidas acumuladas pela grande crise da década anterior e solucionar o problema inflacionário. As tarefas estavam associadas, pois a crise da dívida externa foi o motor do desequilíbrio fiscal permanente e da desvalorização cambial que produziram a inflação crônica e a instabilidade econômica, impedindo qualquer forma de planejamento. Portanto, equacionar o problema da inflação dependia da renegociação da dívida externa e da possibilidade de estancar o fluxo financeiro direcionado ao mercado internacional. O preço da renegociação das dívidas foi o compromisso com as reformas estabelecidas no Consenso de Washington. Cada um dos países da América Latina, em negociações individuais, entrou no primeiro ciclo de reformas neoliberais que deixou um rastro de endividamento, aumento do desemprego e da desigualdade e desindustrialização.

Nessa primeira fase, o Brasil abriu o mercado para importações, equiparou as empresas estrangeiras ao capital nacional, privatizou empresas estatais e pôs fim ao monopólio da Petrobrás sobre a exploração e comercialização do petróleo. A estabilização da moeda se deu por meio da valorização cambial e da abertura comercial, produzindo aumento das importações e déficit da balança de pagamentos, compensado por meio dos investimentos externos diretos,

ou de curto prazo, remunerados com altas taxas de juros. Uma receita insustentável, como provaram as crises cambiais no México, no Brasil, no Equador e na Argentina. Os países dependiam de entradas de capitais que fugiam ao menor sinal de crises internas e externas, inviabilizando os pagamentos.

Iniciadas no governo de Fernando Collor de Mello, as reformas foram ampliadas com Fernando Henrique Cardoso nos seus dois mandatos, entre 1995 e 2002, período em que o Brasil viveu duas graves crises cambiais e recorreu ao FMI. A retórica que subsidiou este programa foi a da necessidade de readequação do papel do Estado, apontado como responsável pelos desequilíbrios que levaram o país à estagnação da década anterior. O receituário era que o Estado devia se retirar de qualquer atribuição produtiva ou planificadora para se transformar em regulador. Naquela conjuntura as atribuições sociais sobreviveram. Elas eram caras à maioria política que lutara pela afirmação da democracia e estabelecera o consenso em torno da Constituição de 1988. Ao mesmo tempo, serviam como argumento para o desmonte do setor produtivo estatal que deveria gerar sobra de recursos para os serviços sociais.

Os resultados dos anos 90 foram muito ruins. Houve déficit da conta corrente, elevação da dívida pública, baixo investimento e aumento do desemprego (Averbug, 2000:13). O que é menos lembrado, entretanto, é que o custo do Estado, que diminuiu ao vender importantes empresas estatais de setores estratégicos, como a Vale do Rio Doce e a Embraer, ficou mais alto para o contribuinte. A carga tributária saiu de 24,1 % do PIB, em 1989, para 32,6 % em 2000, patamar em que foi mantida nos governos do PT. Em 2014, quando se iniciou a recessão, a carga tributária foi de 31,87 % do PIB.

Os pilares macroeconômicos do ajuste que garantiu a estabilidade monetária foram mantidos pelo PT, eleito em 2002 após o fracasso da onda neoliberal. Durante os treze anos de governo o câmbio flutuante, a meta de superávit primário e o controle da inflação permaneceram como dogmas. Um ciclo próspero de exportações de commodities garantiu a distribuição da renda na base da pirâmide por meio da elevação do salário mínimo e de programas de transferência, além da ampliação de investimentos em educação e saúde.

O fim desse ciclo coincide com o agravamento da crise europeia, a partir de 2011, e com a desaceleração do crescimento da China. O governo brasileiro procurou então viabilizar uma reorientação do setor produtivo, notadamente o industrial, com medidas como o corte das taxas de juros, o controle das tarifas de energia e dos preços de combustíveis, desonerações fiscais de empresas, financiamentos subsidiados pelo BNDES e um programa de obras públicas —o PAC—. No conjunto, esperava–se que as medidas anticíclicas estimulassem o mercado e os investimentos privados, pois coincidiam com as reivindicações da FIESP em 2011 (Singer, 2018:60). Mas os investimentos não se elevaram e

o Brasil registrou baixo crescimento entre os anos de 2011 e 2014. A crítica ao governo por intervenções no mercado e pela elevação de gastos foi intensificada. O tom do discurso econômico subiu, com o adensamento da campanha contra a chamada «nova matriz econômica» nos meios de comunicação e a criminalização do gasto público. Duas operações marcantes de combate a corrupção, tornadas públicas como espetáculos televisivos ao vivo reforçaram a condenação dos gastos públicos. Segunda a retórica veiculada em meios de comunicação, o Estado «paquidérmico», que representava um peso nas costas do indivíduo empreendedor, permitia a grupos políticos que se servissem de contratos e de estatais como meios para perpetuarem–se no poder.

O conflito distributivo que se estabeleceu em 2014 foi o resultado da queda do PIB e do superávit primário que levou a distribuição da riqueza a depender do endividamento. Vetada pelo mercado a discussão sobre a tributação da renda e da riqueza, a equação passou a depender do corte de gastos —desde que preservados os gastos financeiros—. Por outro lado, o baixo crescimento da economia global e a intensificação da competição intercapitalista tornaram o mercado de serviços públicos e os ativos nacionais estratégicos objetos de disputa internacional.

Na segunda fase neoliberal que se inaugurou no segundo mandato da presidenta Dilma Rousseff, aquelas atribuições do Estado poupadas no contexto político dos anos 90, tornaram–se objeto de ataque. No programa do PMDB (hoje MDB) é possível encontrar a proposição de um orçamento de base zero, sem vinculação de recursos a quaisquer atribuições, como educação e saúde, ideia também defendida por Armínio Fraga, economista do PSDB.

Em 2015, o discurso econômico ultrapassou os antigos obstáculos morais ligados aos direitos e garantias constitucionais. O Estado precisava ser reduzido como único meio de superar a crise econômica que fora atribuída exclusivamente ao excesso de gastos públicos. Apesar da diversidade das fontes de informações e das diferentes interpretações da crise, a comunicação de massa continuou a ser pautada por organizações do mercado e ao serviço do mercado, ignorando os fatos, a pesquisa especializada e até as atribuições jornalísticas. A repetição do diagnóstico e outros métodos que tinham por objetivo formar a corrente de opinião mobilizando as emoções populares eram cuidadosamente planejados por uma editoria com pauta única. Tratava–se de desqualificar o Estado, desmoralizando suas ações e a própria atividade política. O medo e o ódio foram ativados despertando o estado de alerta. Nunca o Brasil esteve tão conectado à política e, ao mesmo tempo, tão alienado e surpreendentemente desinteressado dos direitos e conquistas como a aposentadoria dos trabalhadores, a educação, a saúde e a mobilidade. O curioso é que houve uma mudança profunda nas representações da população em poucos

anos. Uma insatisfação gerada pela onda de expectativas dos jovens foi transformada em pouco tempo em ódio à política e ao Estado, incluindo a parte destinada à garantia dos direitos que só por meio dele podem ser efetivados. A palavra de ordem por trás dessa metamorfose foi o combate à corrupção.

Em 2013, grandes manifestações se espalharam pelas principais cidades do Brasil a partir da luta contra o aumento das tarifas de transportes. Os manifestantes, em sua maioria jovens, fizeram diversas reinvindicações relacionadas aos serviços públicos. Dez dias depois do seu início, o movimento passou a ser pautado por agentes desconhecidos, com o surgimento de uma agenda denominada «as 5 causas», completamente estranha às reivindicações das ruas, mas noticiada pela TV Globo, em 20 de junho, como a pauta de uma suposta liderança somente reconhecida pela empresa de comunicação. Entre as reivindicações estava a rejeição de uma Emenda Constitucional que tramitava no Congresso Nacional restringindo o direito do Ministério Público fazer investigações. As outras quatro medidas também se relacionavam à corrupção, incluindo a investigação das obras da Copa do Mundo.[3]

As empresas de mídia, atuando para capturar o movimento e exercer liderança, colocaram a questão da corrupção no centro dos noticiários sobre as manifestações. O Brasil havia saído de um longo julgamento de corrupção com a condenação de empresários e políticos do PT e de partidos da coligação do governo. O espetáculo televisivo havia sido transmitido pela TV Justiça no segundo semestre de 2012. O tema da corrupção estava muito vivo e foi fácil relacionar a ineficiência dos serviços públicos e dos gastos do governo à corrupção.

O ano de 2013 representaria uma inflexão. A insatisfação generalizada que se expressou nas manifestações de junho abriu espaços para o ataque direto ao governo. Porém, as demandas populares eram por maiores investimentos sociais, o que significava necessariamente maiores gastos. Ao mesmo tempo, o crescimento econômico minguava e a economia mundial não dava sinais de recuperação.

Foi neste contexto que o ataque de novas organizações em favor do Estado mínimo ganhou força. Movimentos de extrema direita e pró mercado, como o Movimento Brasil Livre (MBL), saído do Estudantes pela Liberdade (EPL), uma organização com financiamento da Atlas Network (Baggio, 2016:11), o Vem pra Rua e o Revoltados On Line passaram a atuar nas redes sociais constituindo–se como lideranças. Seu papel nas manifestações pelo impeachment em 2015 e 2016 seria grande. Bem financiados, esses grupos desenvolveriam relações com partidos de oposição, propagariam ideias liberais e ataques ao PT.

---

3 *O Globo,* 20 de junho de 2013.

Os desafios colocados pelas ruas e a diminuição da capacidade de investimentos do governo em meio à desaceleração econômica ativou o comportamento defensivo do mercado contra o aumento das atribuições do Estado e do gasto público. Apesar das desonerações tributárias que o governo promoveu, o empresariado fez oposição na campanha de 2014, quando a agenda neoliberal se ampliou. Como demonstra André Singer (68–70) o empresariado produtivo via a política de valorização salarial no contexto de retração como ônus, diminuindo a margem de lucro. Os projetos de terceirização e da reforma trabalhista, com o contrato de trabalho intermitente, uniram o empresariado. Havia ainda as dificuldades de exportação e a contrariedade diante da disposição do governo de não participar de acordos de livre comércio, notadamente o Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

Em 2014 o governo contingenciou gastos, teve contração expressiva da arrecadação e sofreu o impacto da queda dos preços das commodities. O Brasil estagnou, com 0,1 % de crescimento e o primeiro déficit primário da série histórica iniciada em 2001 (32,53 bilhões de reais, ou 0,63 % do PIB). Com alarme, os jornais noticiaram a deterioração das contas públicas acusando como responsáveis as desonerações e os aumentos de gastos durante a queda da atividade econômica.[4] A partir do resultado das eleições, cresceu a narrativa de que o governo havia promovido gastos para vencer o pleito. A interpretação que dominou os meios de comunicação e o discurso da oposição foi a de que o gasto público era a causa da retração. Dilma e sua «nova matriz econômica» haviam quebrado o Brasil. Esse discurso esteve na base do julgamento do impeachment em 2016. Ele justificou junto ao eleitorado o golpe contra a presidenta e sedimentou a opinião contrária ao Estado planejador e intervencionista.

O senador Aloysio Nunes, do PSDB, durante o julgamento do impeachment, afirmou que «Dilma praticou crime com dolo específico, pelo desejo imoderado de se manter no poder, valendo–se da fraude. Crime qualificado pelo resultado: essa crise (...) lojas fechadas, os empregos se esvaindo, esse é o resultado dos crimes». A linguagem do PSDB na tribuna foi a da condenação de um crime, para despertar a indignação do eleitor, mobilizando seu sofrimento com as dificuldades econômicas e apontando o gasto público como causa. Porém, o ajuste liberal vinha sendo adotado pelo governo Dilma em seu segundo mandato e a situação econômica havia se deteriorado agudamente. No ano de 2015 Dilma Roussef implementou um forte ajuste fiscal, com corte de mais de 60 bilhões nos gastos e aumento da taxa básica de juros, política advogada pela oposição e pela imprensa. Essa política econômica foi

4 G1, 30 de janeiro de 2015.

a agenda de campanha da oposição liderada pelo PSDB e jogou o país em profunda recessão, com a queda de 3,8 % do PIB. Portanto, era preciso relacionar a crise ao intervencionismo anterior do ajuste implementado em 2015, que correspondia à parte do programa da coalizão golpista e uma das razões do golpe.

No processo de impeachment, em consonância com o discurso da grande imprensa, o PSDB estabeleceu um vínculo causal entre gastos públicos e a derrocada econômica do país, exatamente o contrário da realidade se consideramos que apenas depois dos cortes de gastos e aumento das taxas de juros a economia deprimiu e a taxa de desemprego duplicou, como era de se esperar. Afinal, quem poderia pensar em investir com o mercado deprimido e os títulos pagando 14,25 % de juros ao ano? A demanda nas condições de 2014 só poderia vir do Estado, que decidiu se encolher atuando no sentido do ciclo recessivo.

Desde o início da Lava Jato, em 2014, as TVs ampliaram o tempo dos noticiários exclusivamente voltados para a cobertura da operação. Demais temas da vida social perderam espaço para o tribunal excepcional de Curitiba. Das TVs e jornais para as mídias sociais, por meio dos portais de notícias ou de memes e vídeos dos grupos da ultradireita, a operação foi compartilhada pelos brasileiros. A pauta política passou se concentrar na luta contra a corrupção. Deixamos de ter qualquer veleidade de projeto político ou econômico. A corrupção era a causa de todos os males. Uma falácia repetida para empobrecer nosso diálogo político, mas instrumental à medida que reforçava a opinião sobre o Estado como o lugar do mal, em oposição ao mercado, o lugar da eficiência (Jessé Souza, 2015:91). Estava em curso uma mudança da cultura política visando a estabelecer uma postura hostil não apenas a todo o intervencionismo, mas também à política. O projeto de construção desse consenso foi amplamente vitorioso.

Era fundamental estabelecer a relação entre gasto e crise de forma abrangente. No impeachment, os gastos considerados crimes relacionavam–se ao Plano Safra, que subsidia produção rural, e a créditos suplementares do Ministério da Educação. Criminalizados, reiterava–se que na falta de arrecadação, como nos ciclos recessivos, qualquer atividade ou obrigação deve ser descontinuada. Nada pode estar acima da meta fiscal. Mas não era assim que a população era informada. Ninguém falava sobre o que era o Plano Safra, ou de como a Educação gerava receitas próprias que podiam ser usadas na forma de créditos suplementares. Tudo era tratado como irresponsabilidade simplesmente. Tampouco as informações veiculadas apontavam a relação entre a queda do PIB, a diminuição da arrecadação e os constrangimentos dos gastos. Nunca os brasileiros ouviram a questão posta como um dilema a ser decidido democraticamente: devemos ou não manter o financiamento subsidiado da agricultura? Ou as provas de ingresso nas universidades? Provavelmente os

brasileiros responderiam que esses gastos deveriam ser mantidos. Mas nunca tiveram a oportunidade de escolher. Teriam apenas a oportunidade de avalizar ou não, por meio do voto.

O golpe de 2016 teve como projeto o alinhamento do Brasil ao livre mercado e a diminuição do Estado, compreendendo a manutenção da moeda estável, a precarização do trabalho e a diminuição da carga tributária, exigindo ajuste fiscal permanente. A fórmula não teve resultados, os investimentos privados simplesmente não aconteceram desde o início do programa de austeridade, em 2015. O problema foi atribuído à falta de confiança do investidor em razão do aumento da dívida pública.

No programa de governo apresentado pelo PMDB (hoje MDB), *Uma ponte para o futuro,* o diagnóstico sobre a recessão iniciada em 2014 apontava a crise fiscal como responsável. Não é um acaso que o PMDB, um partido fisiológico e sem identidade programática, tivesse um programa de governo publicado meses antes do início do processo de impeachment. O partido era o único ator político que podia conferir legitimidade ao golpe, pois detinha as cadeiras da sucessão presidencial.

O maior obstáculo ao crescimento, segundo o documento, era o endividamento do Estado. O gasto público havia levado ao aumento da inflação, dos juros, e das incertezas, desencadeando pressão cambial e retração de investimentos. Nenhuma dessas relações é explicada no programa. São dogmas, apenas, uma vez que a crise havia se desencadeado por um freio na demanda global, atingindo a economia em todo mundo. No Brasil, as condições se deterioraram apenas quando aplicado o ajuste. Enquanto houve gasto público a economia apenas entrou em estagnação, sem aumento do desemprego. As premissas do documento eram as mesmas dos comentaristas midiáticos, contra as evidências.

Na sequência, o ataque aos direitos constitucionais foi constante. A afirmação de que «o crescimento automático das despesas não pode continuar entronizado na lei e na Constituição», tinha implicações diretas no sistema de aposentadorias, colocando a previdência social como principal alvo (PMDB, 2015:7). A primeira prescrição foi acabar com as vinculações constitucionais do orçamento. Um novo regime fiscal exigia um «novo regime orçamentário, com o fim de todas as vinculações e a implantação do orçamento inteiramente impositivo» (PMDB, 2015:9).

O Novo Regime Fiscal estabelecido foi, no entanto, diferente. No lugar das desvinculações, que provavelmente não passariam no Congresso, o governo propôs um congelamento de gastos por 20 anos na forma de Emenda Constitucional. O projeto tramitou nas duas casas legislativas e foi aprovado em dezembro de 2016. Comemorando a «vitória» do governo, a jornalista e comen-

tarista de economia, Miriam Leitão, afirmou em sua coluna do jornal *O Globo* que o Brasil precisava enfrentar o desequilíbrio das contas públicas para evitar um «desastre». As despesas públicas do Brasil haviam crescido desde 1997 em média 6,1 % acima da inflação, e haviam sido cobertas pelo aumento da arrecadação, cenário que se alterou no governo Dilma. O que devia ser uma razão de comemoração, pois o Brasil havia crescido para permitir que o Estado investisse mais, era motivo de condenação. Por outro lado, o argumento escondia o que de fato importava que era a relação entre o gasto e o PIB, mantida em rigorosa disciplina até 2014. Nesse sentido, tratava como desequilíbrio um ciclo virtuoso que permitiu o aumento dos gastos sociais e investimentos em infraestrutura.

A retórica do medo tem acompanhado a nossa propaganda contra as iniciativas com atributos desenvolvimentistas do primeiro governo de Dilma Rousseff. «É preciso dizer com todas as letras: o risco é de uma crise de confiança na dívida pública, e isso afetaria todas as aplicações financeiras dos brasileiros. A PEC dos gastos não evita o perigo contratado pela irresponsabilidade do governo anterior na economia, mas começa a dar um horizonte para as contas públicas».[5]

O gasto público ganhou uma nova enunciação valorativa na expressão «populismo fiscal». Retomando um dos significados originais do termo populismo, que começou a circular no Brasil nos anos 50 e 60 para desqualificar o governo Vargas e o trabalhismo, por manipular as massas (Ferreira, 2001:111–113), think tanks e imprensa elegeram–no como sinônimo da irresponsabilidade fiscal derivada de uma relação pouco republicana entre governo e sociedade baseada no engano predominantemente lesivo ao Estado e, em consequência, ao povo. O engano só pode existir à medida que existe aquilo que se supõe ser a norma, o verdadeiro. Numa sociedade complexa com conflitos de interesses não pode existir o certo, mas apenas a expressão de interesses e posições políticas, muitas vezes em conflito. O único parâmetro que pode se aproximar do certo é o que está pactuado no contrato social, na Constituição. Se os gastos se elevaram em razão deste pacto, como aconteceu com os gastos da Previdência e demais gastos sociais, não é admissível falar em populismo fiscal. Por outro lado, as despesas discricionárias que têm lugar na lei orçamentária, aprovada pelo Congresso, são o reflexo da escolha política feita pelo eleitorado. Ao transformar a posição de um setor específico em norma, como uma verdade científica, fruto de um saber especializado, o jornalista transformou–se em instrumento de esvaziamento do conflito político e da representação de interesses em oposição.

5 *O Globo,* 14 de dezembro de 2016.

Quando o crescimento desacelerou no Brasil, a partir de 2013, e a arrecadação foi menor do que as projeções, os investimentos públicos diminuíram e, igualmente, o superávit primário —a economia para pagamento de juros da dívida pública—. Entretanto, somente em 2014, com a estagnação, o Brasil deixou de fazer o superávit. Não pelo excesso de gastos, mas pela contração da receita. E boa parte dessa contração se deveu a desonerações fiscais feitas para restaurar a lucratividade das empresas, que, no entanto, não investiram. Desse momento em diante, tendo em vista o processo eleitoral e depois a campanha do impeachment, o populismo fiscal passou a figurar na nossa estrutura discursiva sem explicações sobre o seu significado. O repetido uso garantia o entendimento ou a sua incorporação como estrutura do pensamento. O termo populismo compreendia uma forma de enganar a população, praticando irresponsabilidade com o dinheiro público e semeando crises.

Em 1991, o economista Bresser Pereira, favorável naquela data a um ajuste fiscal, mas compreendendo a necessidade da renegociação da dívida, falou de populismo econômico, um distributivismo ingênuo com indisciplina fiscal. Adiante, depois da desilusão com as reformas neoliberais, o economista desenvolveria a tese da «doença holandesa», apontando a valorização cambial como fundamento da desindustrialização e resgatando o tema do desenvolvimento econômico no chamado «novo desenvolvimentismo». A tese do populismo fiscal, entretanto, foi amplamente utilizada nas interpretações que responsabilizaram o governo e o Estado pela crise crônica desencadeada no início dos anos 80 e advogaram a liberalização e desregulamentação da economia. Quando a crise despontou, em 2014, a ideia da irresponsabilidade fiscal foi revigorada.

Uma vez que a Constituição estabeleceu direitos ainda não totalmente atendidos, que implicam a majoração do gasto público, o equilíbrio está garantido apenas enquanto a economia cresce nos mesmos patamares do aumento das despesas. Quando há estagnação, o Estado precisa se endividar para financiar os direitos. A disputa pelos recursos e a possibilidade de majoração de impostos abre o conflito de interesses que o Estado democrático deve ser capaz de disciplinar por meio das suas instituições. Se um grupo de interesses obtém a vitória eleitoral e seu programa é condenado e vetado, a democracia deixa de representar os diferentes interesses. Foi dessa maneira que a natureza democrática, ela mesma, foi desqualificada como populista. O golpe de 2016 atuou no sentido de impedir que o programa vitorioso nas urnas fosse implementado.

Porém, a forma de impedir que os direitos fossem garantidos ou que novas demandas populares fossem atendidas, implicando a transferência de uma parcela maior da riqueza na forma de bens sociais, era manietar o próprio Estado de forma definitiva. Foi por meio da intensa apologia ao mercado desregulamentado, e da campanha de criminalização do gasto público, que também

advogava a privatização de todos os serviços, que se estabeleceu amplo consenso social contra o «dirigismo» estatal e em favor do Estado mínimo, numa operação que separou definitivamente a economia e a política. A primeira, um dado da natureza, compreendida apenas pelos iniciados apresentados como um corpo homogêneo portador de um dogma absoluto —o livre mercado. Já a segunda, destituída de substância, subtraída de sua função de negociação permanente dos conflitos em disputa, resumiu–se à disputa periódica pelo cargo de gestor, enquanto o legislador se ocupa de ajustar a sociedade à verdade do mercado, com cada vez menos oposição, o que dá a dimensão da vitória do consenso ultraliberal construído no Brasil.

É notório que a totalidade dos profissionais da grande imprensa compartilha a fé na necessidade da diminuição de gastos, cortes em todas as áreas e a fórmula necessária da reforma do sistema de previdência. Não faz parte do repertório dialógico a questão sobre como financiar o custo crescente do envelhecimento da sociedade ou a da diminuição do emprego. Não há que financiar, simplesmente. O limite da contribuição coletiva já foi estabelecido à medida que a estrutura de diagnósticos e projetos tem como fundamento a relação necessária, segundo o discurso hegemônico, entre o atraso e a hipertrofia do Estado.

A primeira medida do governo do golpe, de Michel Temer, foi o estabelecimento do teto de gastos públicos, congelando as despesas da União por 20 anos. Ficaram livres apenas os gastos financeiros, pagos aos credores da dívida pública, que representaram nos últimos anos 8 % do PIB e mais de 40 % do orçamento. E isso não parece uma excentricidade. Implementada como dispositivo constitucional, a medida inviabiliza qualquer mudança de política econômica e fiscal que se imponha pela disputa eleitoral. Se mantida, serão 5 mandatos presidenciais sem a possibilidade da implementação de um plano de investimentos, de um salto na educação ou da solução para o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde (SUS). O processo em curso é de desoneração do capital e garantia de sua lucratividade, pela menor tributação e maior participação nos serviços públicos. Mesmo que a economia tenha crescimento, os investimentos estão vetados, o que significará a diminuição da carga tributária ao longo do tempo e a diminuição do Estado e de suas funções distributivas. Na prática, os royalties advindos da exploração do petróleo da camada pré–sal, que haviam sido destinados à educação e à saúde pela Lei 12.858 de 2013, serão apropriados de outra forma e abrirão espaços para a redução de impostos.

O sequestro do orçamento e a redução forçada do Estado se somam à autonomia da política monetária, sob o comando do Banco Central e de um comitê que decide sobre a transferência de renda, via aperto de liquidez e pagamento

de juros, sem ter mandato popular. Desde o Plano Real o Brasil convive com elevadas taxas de juros e com a autonomia do Banco Central. Com a implementação do sistema de metas de inflação, em 1999, sua atribuição ou mandato passou a ser determinado para a manutenção da taxa de inflação, sem nenhum compromisso com o crescimento e o emprego. Diferentemente do Federal Reserve, cuja função é fazer o desemprego recuar tanto quanto possível sem gerar inflação, no Brasil, a política monetária é, em tese, usada exclusivamente para controlar a inflação. Digo em tese porque o Banco Central, diante da fragilidade cambial, nos anos 90 usava a taxa de juros para reter capitais voláteis no país. Nos anos recentes, entretanto, prevaleceu a regra anti–inflacionária, com o pequeno interregno entre o final de 2011 e abril de 2013.

A relação entre a taxa de juros e a inflação é muitas vezes apresentada pelos economistas de forma complexa, considerando um horizonte de expectativas racionais que ao cabo significa tão somente que altas taxas resultam em inflação baixa. No entanto, em 2015 a economia desaqueceu, portanto, não podia justificar uma política de controle de demanda, com alta taxa de juros. Evidentemente, os setores rentistas se beneficiaram da política monetária e constituíam o apoio político ao processo. E dada a maior participação de rendimentos financeiros na lucratividade das empresas, que se protegem por meio das operações com títulos públicos, temos uma coalizão rentista que sustenta politicamente o modelo que os comentaristas e especialistas reiteram cotidianamente, apesar dos seus efeitos recessivos.

O começo dessa ciranda de remuneração de capital ocioso se deu no governo FHC, depois do Plano Real. O custo para o Estado com o aumento da dívida tem sido alto, sobretudo nos ciclos de baixo crescimento. Depois de renegociada a dívida externa em 1992/93, o endividamento do Estado brasileiro caiu. Em 1994, ano do Plano Real, a dívida brasileira correspondia a 37 % do PIB, chegando a 71 % em 1999 e a 76 % em 2002, anos das crises cambiais. Durante os governos do PT a dívida começou a cair e oscilou na faixa dos 60 %. Nos anos do primeiro governo de Dilma Rousseff, entre 61 % e 63 % do PIB, saltando para 73 % no ano recessivo de 2015, quando as taxas de juros foram responsáveis por engordar a dívida bruta do país.

Entre o início das reformas neoliberais, em 1990 e a crise de 2015, o Brasil construiu um arcabouço institucional que garantiu a estabilidade da moeda para os investidores, o superávit primário nas contas públicas e o câmbio flutuante. O resultado de longo prazo foi a dependência de investimentos externos e a reprimarização da economia. Quando as condições externas se tornaram desfavoráveis e a desaceleração seguida de recessão derrubou «a nova matriz econômica», a retórica do populismo fiscal passou a dominar os meios de comunicação e o discurso da elite empresarial, repetindo a tese do início

dos anos 90 para uma crise de natureza diversa. O objetivo, no entanto, era o mesmo: diminuir o Estado.

Esse movimento se construiu com a personificação do mercado. Entre analistas e comentaristas dos meios de comunicação e das consultorias o sujeito da narrativa é o mercado. O boletim *Focus* do Banco Central é a institucionalização dessa personalidade que comanda a política. A publicação, atualizada semanalmente, indica as expectativas do mercado em relação ao crescimento, à inflação, às taxas de juros de curto e longo prazo e ao câmbio, os preços estruturais da economia. As expectativas vão compondo um fluxo traduzido em gráficos que expressam projeções positivas ou negativas. Quem formula essas projeções são consultores do mercado de capitais, que os jornalistas chamam de investidores. Suas expectativas informam o comando da economia, como uma bússola, ou um chicote criado para açoitar o governo. Se a inflação tem tendência de alta, o conjunto dos atores da mídia cobra providências, se os gastos públicos saem do padrão com reflexos nas expectativas dos juros, o governo apanha, se o dólar sobe, o governo é criticado porque haverá reflexos sobre a inflação. Na linguagem diária, o mercado fica nervoso, o mercado está preocupado, o mercado quer a reforma da previdência para restabelecer a confiança. Enfim, o mercado governa.

Se entendemos que a economia é economia política, ou seja, que o mercado é um conjunto de atores tomando decisões sobre a alocação de recursos em uma determinada estrutura institucional; se compreendemos que o objetivo da política em uma democracia está além da disputa eleitoral para o próximo ciclo, e que necessariamente deve mediar conflitos e garantir direitos que implicam a redistribuição dos recursos e o planejamento, precisamos reconhecer que os mecanismos do Estado democrático foram sequestrados. No Brasil, moeda e orçamento público já não estão disponíveis para a decisão discricionária do poder democrático. O povo escolhe um gestor das decisões do mercado anunciadas pelos meios de comunicação dos quais partidos e líderes dependem na democracia de massas. Não há espaço para negociações ou projetos de desenvolvimento econômico e social. O campo político vive a rotina de aprovar as leis para o mercado e lutar pela próxima eleição. Não à toa, a gestão da economia está a cargo de agentes do mercado. É isto a democracia?

A Lava Jato ou Partido da Justiça

Como mencionamos acima, o consenso que permitiu a implementação de medidas ultraliberais sem grande oposição foi derivado não apenas da condenação do gasto público como populismo e irresponsabilidade, mas de sua cri-

minalização de fato. Até 2014, o programa neoliberal e a defesa de um regime de austeridade não ganhou as eleições. Acabou sendo implementado por um governo sem votos, cujo mandatário conspirou para destituir a presidenta eleita. No entanto, o processo de destituição contou com apoio popular. Às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff, pesquisa do Instituto Datafolha apontou que 68 % da população apoiavam o seu afastamento.[6] Quinze dias antes, o ex–presidente Lula havia sido conduzido coercitivamente para prestar depoimento à Polícia Federal em ação que incluiu uma busca em sua residência e no Instituto Lula. A ação envolveu diretamente a maior liderança popular do Brasil das últimas cinco décadas no cenário do maior escândalo de corrupção de todos os tempos, como noticiava a grande imprensa.

Entre a eleição e o impeachment, tivemos um ano de crise recessiva e do avanço da Lava Jato contra o PT e seus aliados. Enquanto isso, a presidenta Dilma Rousseff, seguindo a agenda derrotada nas eleições, promoveu um vultoso corte de gastos, aumentou os juros e as tarifas de energia. A receita parecia ter por objetivo simplesmente proibir os investimentos, o oposto do que se propagandeava. E logo ficou claro que as medidas jogaram o país na recessão, ampliando gravemente o problema fiscal, com o aumento das despesas financeiras com juros e o encolhimento da arrecadação. Um desastre que só pode ser explicado pela necessidade de agradar o sistema financeiro com o objetivo de se blindar contra a oposição que anunciava sua disposição em destituir a presidente questionando o resultado das urnas.

O Ministério Público Federal havia criado, em 2014, uma força tarefa especial para cuidar do escândalo de corrupção envolvendo a Petrobrás. Os diretores da empresa, indicados pelos partidos da base de apoio ao governo, eram responsáveis por recolher propinas de empreiteiros e fornecedores contratados pela empresa que podiam chegar a 3 % dos valores dos contratos. O dinheiro servia para financiar campanhas eleitorais, mantendo, dessa forma, os partidos ligados às estruturas do poder em ampla vantagem em relação a competidores de fora do sistema. Numa democracia eleitoral de massa como a do Brasil, com voto proporcional, as candidaturas dependem de campanhas caras para que possam ser efetivamente conhecidas. Trata–se de um processo com claras distorções, mas os legisladores são seus beneficiários e não demonstraram disposição para restringir as formas de financiamento ou os gastos das campanhas.

A operação Lava Jato atingiu o sistema político de maneira fulminante. Primeiramente a coalizão liderada pelo PT. Até o impeachment, a perseguição poupou apenas lideranças do PMDB que operavam o processo de destituição no Congresso Nacional, notadamente o presidente da Câmara do Deputados,

6 *Folha de São Paulo,* 19 de março de 2016.

Eduardo Cunha, o presidente do Senado, Renan Calheiros e o vice–presidente da República, Michel Temer. Depois do impeachment, desencadeou–se uma disputa clara entre o campo político destruído moralmente, e os atores da luta anticorrupção —juízes, procuradores, o Grupo Globo e uma legião de ativistas digitais cuja pauta política era exclusivamente o combate à corrupção, entre eles, os grupos da nova direita acima mencionados—.

A articulação da Lava Jato com o Grupo Globo ficou evidente ao longo de suas infindáveis etapas, com ampla cobertura ao vivo para todo o país. Cada operação de busca e apreensão, cada condução coercitiva (a maioria ilegal, sem prévia convocação de investigados) e cada prisão foi um espetáculo combinado, com helicópteros e repórteres que conheciam os detalhes das acusações na ponta da língua. O cronograma do golpe também parecia ser construído em franca colaboração entre oposição, Lava Jato e Grupo Globo.

A principal partido da oposição, o PSDB, conspirou desde a divulgação do resultado das eleições de 2014. Seu candidato derrotado entrou com uma ação de impugnação da chapa da presidenta eleita no Superior Tribunal Eleitoral. O governo do PT, que então terminava o seu terceiro mandato e iniciaria o quarto, tinha reais possibilidades de estender no tempo o alinhamento eleitoral que havia garantido suas três últimas eleições. Os recursos da exploração do pré–sal, que àquela altura apenas começava a produzir óleo com baixos custos, prometiam representar um salto de investimentos em educação e saúde pública. Apenas o Campo de Libra deveria gerar em royalties 300 bilhões nos trinta anos seguintes à concessão, realizada em 2013. 75 % dos recursos seriam destinados à educação e 25 % à saúde. A magnitude dos recursos explica a decisão da oposição de usar todos os meios para destituir o governo. Também explica o interesse das corporações internacionais em apoiar o golpe com o objetivo de acabar com o regime de concessões que fazia da Petrobrás a única operadora e detentora de, no mínimo 30 % de todo o petróleo dos novos campos da camada do pré–sal. O golpe de 2016 mudaria toda a engenharia política e a apropriação desses recursos, não apenas pela alteração da lei de exploração, mas pelo teto de gastos que impediu, na prática, o aumento real de gastos públicos.

Por essas razões não é possível ignorar o papel da Lava Jato nesse processo de reordenamento do poder político e econômico. Também é notável a expansão na América Latina das operações judiciais contra governos populares, com métodos semelhantes e relações estreitas com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. No caso brasileiro, as relações entre o juiz que comandava a operação e o Procurador da República com autoridades americanas são conhecidas e determinaram, inclusive, o compartilhamento de investigações e provas que causaram enormes prejuízos à Petrobrás em tribunais dos Estados Uni-

dos. Este fato, que devia ser um escândalo, foi noticiado com naturalidade pela imprensa brasileira que dessa forma contribuía para a criminalização da empresa e justificava o acordo de US$ 2,95 bilhões feito pela nova gestão da Petrobrás após o golpe, em benefício dos acionistas americanos.[7]

Ao longo do ano de 2015, a Lava Jato foi elemento fundamental para a condenação moral do PT e para a destituição da presidenta. Em abril, o juiz Moro ordenou a prisão de João Vacari, tesoureiro do PT. Em agosto, foi a vez de José Dirceu, que era o segundo homem do partido durante o governo Lula, tendo sido condenado como responsável pelo Mensalão, o escândalo de compra de votos de parlamentares julgado em 2012. Em novembro de 2015 foi a vez do líder do governo no Senado, o senador Delcídio do Amaral. Neste episódio todos os limites foram testados pois foi a primeira prisão da história de um senador no pleno exercício do mandato.

Em 16 de março de 2016, um mês antes da votação de admissibilidade processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a presidenta nomeou Lula como seu ministro da Casa Civil, tentando uma última cartada para reagrupar a coalizão que desmoronava. Havia muitos deputados e senadores com medo da Lava Jato e imaginavam a possibilidade de um acordo com o STF «para estancar a sangria», como disse o senador Romero Jucá, do PMDB. A nomeação de Lula foi interpretada como uma forma de garantir ao ex–presidente a imunidade do cargo. Em áudio de conversa entre Lula e Dilma, a presidenta dizia que estava encaminhando o documento de nomeação para que ele usasse em caso de necessidade. O áudio obtido de forma ilegal foi divulgado pelo juiz por meio da Rede Globo. Não havia mais dúvidas de que o juiz não atuava sob os constrangimentos legais e estava determinado a atuar pela aprovação do impeachment.

Na sequência, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu em decisão monocrática a nomeação, cassando, na prática, a prerrogativa presidencial. Era um fim de tarde de uma sexta–feira. Do seu gabinete o ministro saiu para uma viagem a Portugal, onde participaria de um seminário. A decisão não foi revista pelo Tribunal. Nenhum dos ministros foi capaz de observar e restaurar o direito e a atribuição da presidência. Sinais claros para a sociedade e para os parlamentares de que o Supremo Tribunal Federal estava com o golpe.

Neste ano de 2019, as mensagens trocadas entre os grupos de procuradores da operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, reveladas pelo The Intercept Brasil e veículos de imprensa parceiros, demonstraram que o juiz coordenou toda a operação, instruiu procuradores e Polícia Federal atuando como parte acusa-

7 *Valor Econômico,* 3 de janeiro de 2018.

tória do tribunal que, em 2018, ano eleitoral, condenou e prendeu o ex–presidente Lula sem provas dos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro de que era acusado e sem a condenação definitiva, contrariando princípio constitucional afrouxado pelo STF justamente para se adequar às exigências da atuação deste tribunal excepcional da Lava Jato.

Há duas constatações que podem ser feitas ao final deste processo. A primeira diz respeito à sedimentação do consenso sobre a necessidade da diminuição do Estado, longamente trabalhado pelos meios de comunicação, com especial vigor a partir de 2014. A Lava Jato traria uma contribuição fundamental ao reafirmar a representação de um Estado pesado e corrupto, onde o gasto público se confundia com atividade criminosa. Na organização dos telejornais, um grande espaço diário era conferido às notícias sobre o grande processo em suas intermináveis fases e, na sequência, apareciam as notícias sobre a crise econômica diagnosticada como resultado de políticas equivocadas de ampliação de gastos públicos.

A segunda constatação é a desintegração do campo político com a desmoralização dos partidos tradicionais. Depois do impeachment, as operações atingiram o PMDB, inclusive o presidente Michel Temer, e até o PSDB na figura do candidato derrotado em 2014, Aécio Neves. Os três grandes partidos foram condenados politicamente, como ficou evidente na eleição de 2018. O PT comandara um grande sistema de financiamentos ilegais de campanhas eleitorais, cooptando partidos grandes e legendas de aluguel, com consequências desastrosas para o sistema, transformado em um balcão de negócios. É fato que a democracia de massas sofre o constrangimento do poder de grandes financiadores em toda a parte, mas isso não exime os seus operadores de serem cobrados, sobretudo quando os esquemas de corrupção são usados pelos concorrentes políticos em ataques que passam a fazer parte da disputa pelo poder. O sistema tem suas vísceras expostas e a disputa política se amesquinha, perdendo conteúdo programático. O Brasil assistiu à queda dos dois referentes da política nacional (PT e PSDB) e ao vazio político aberto à espera de ser preenchido por novos atores dos quais se esperava que fossem capazes de reinventar a vida política.

As novas organizações de direita cresceram nesse vazio e começaram a ocupar espaços. Entre elas, a própria Lava Jato, que passou a exercer papel de partido político, orientando militantes virtuais em favor de suas propostas legislativas e criando uma organização de direito privado de combate à corrupção com recursos de multas da Petrobrás obtidos em acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O Ministério Público Federal impediu que essa irregularidade ocorresse e os recursos foram enviados aos cofres públicos.

A ascensão do bolsonarismo

A crise econômica se aprofundou no primeiro ano de governo de Michel Temer. Somente em 2017 o Brasil deixou a recessão e mesmo então o crescimento foi pífio e o desemprego continuava em patamares altos, acima de 12 % dos trabalhadores. A diminuição eventual dessa taxa tem ocorrido apenas com o aumento do trabalho precário ou por conta própria. Essa situação se mantém no ano de 2019, assim como a estagnação da economia. A nenhum meio de comunicação, entretanto, ocorreu reavaliar o diagnóstico sobre a crise. Eles mantêm o consenso que sempre trabalharam para obter, sustentando a opinião em favor da diminuição do Estado e da transferência de patrimônio público para mãos privadas, o que permanece como projeto com o governo de Jair Bolsonaro.

Em 2017, o governo de Michel Temer se desmoralizava não apenas pela persistente estagnação, mas, sobretudo, porque o presidente tornara–se réu em processos de corrupção. O combate à corrupção permanecia como pauta única da política nacional, amesquinhando a política e facilitando as reformas neoliberais que iam sendo aprovadas, como a reforma trabalhista e a extensão da terceirização.

O campo político, no entanto, ao perceber que a Lava Jato constituía a essa altura uma força política sem limites que ameaçava a todos, se organizou para sobreviver e passou a resistir aos seus projetos, assim como blindou o presidente da República, impedindo que ele fosse investigado, como havia sido solicitado pelo Ministério Público Federal. O juiz do STF, Gilmar Mendes, que havia colaborado com o golpe ao impedir que Lula fosse nomeado ministro, desautorizando a presidenta, mudou de posição e passou a defender o campo político, concedendo diversos *habeas corpus* e manifestando–se contra as prisões preventivas e demais condutas consideradas abusivas do tribunal excepcional comandado pelo juiz Sérgio Moro. Na verdade, a mudança de entendimento e a atuação como garantista era apenas a manifestação de sua defesa do grupo político que se beneficiou com o golpe. O fato é que, depois do impeachment, os apoiadores e beneficiários do golpe se dividiram. De um lado os defensores da Lava Jato e de um suposto combate à corrupção como agenda política por excelência. De outro, parlamentares, partidos tradicionais e parte do STF, tentando conter a força do lavajatismo, um partido que reunia parte do sistema de Justiça, os meios de comunicação de massa, e contava com apoio e suporte técnico norte–americano.

Essa disputa foi o combustível da nova direita, que se apresentou como antissistema e adotou o combate à corrupção como agenda principal. O instrumento por excelência da propaganda foram as redes sociais, que pela primeira vez tiveram peso determinante no processo eleitoral brasileiro.

Segundo Debora Messenberg, que pesquisou 18.923 publicações no facebook de grupos e indivíduos da direita ao longo de 2015, período de grandes manifestações pelo impeachment, o antipetismo foi o campo semântico que reuniu o maior número de emissões. As ideias relacionadas a esse campo eram o impeachment, a corrupção, a crise econômica e o bolivarianismo. Ao PT era atribuída a crise econômica e aquilo que foi alçado à condição de maior problema do país: a corrupção. A pesquisa destacou ainda os campos semânticos do conservadorismo moral e dos princípios neoliberais. Foi nesse contexto da luta política que o bolsonarismo e seu filósofo, Olavo de Carvalho, cresceram.

Um indicativo da força da rede subterrânea do Whatsapp foi a grande greve dos caminhoneiros, que paralisou o país em maio de 2017. Sem líderes, o movimento horizontalizado expressou a falta de representatividade do sistema político e a disposição dos trabalhadores da categoria, autônomos ou assalariados, de promover a ruptura do sistema. Nas comunicações *on line* em diversos grupos e canais do Youtube, os caminhoneiros terminavam suas transmissões com a interjeição «Intervenção Já», referindo–se a uma intervenção militar. Naquele momento ficou evidente a dissolução dos vínculos daqueles trabalhadores com organizações sindicais ou partidos políticos tradicionais, de sorte que não havia canais de negociação definidos ou formas de diálogo e mesmo de punição da categoria. A cobertura jornalística do evento mostrou o susto dos segmentos políticos e econômicos do poder diante da perda do controle sobre o trabalho e os processos fragmentados de associação e representação.

Aqueles trabalhadores haviam comprado seus caminhões no período de expansão econômica e, em 2017, enfrentavam o aumento da concorrência num cenário de retração econômica, queda dos valores dos fretes e aumento dos combustíveis que seguiam os preços internacionais desde o golpe, sem nenhum tipo de controle visando a proteger a economia doméstica. Importa ressaltar, no entanto, que em nenhum momento os caminhoneiros pediam uma política de preços que alterasse as diretrizes de cotações de mercado da Petrobrás, mas repetiam fórmulas de diminuição de impostos que incidiam sobre os combustíveis. Ou seja, os interesses dos acionistas da Petrobrás não eram ameaçados, repetindo–se o mesmo padrão de pensamento que norteava os meios de comunicação, mas os impostos que teriam impactos diretos sobre os serviços públicos locais, considerando que estados e municípios foram profundamente impactados pela maior recessão da história entre 2015 e 2016, podiam ser cortados. Estava claro que havia consenso entre a maioria dos trabalhadores brasileiros sobre o Estado, identificado à exploração do povo por meio de altos impostos que serviam aos negócios da corrupção e à manutenção dos privilégios.

O movimento acima descrito foi um termômetro. De um lado, havia graves problemas no controle de setores sensíveis, de outro a consolidação de um valor antiestatal. O campo político estava impotente. Não tinha acesso ao movimento, nenhum canal ou liderança que pudesse estabelecer diálogo. Enquanto

o movimento foi condenado pela direita e pela esquerda, o pré–candidato Jair Bolsonaro saiu em sua defesa. Colocou–se na posição de representante antissistema, contra tudo o que estava posto, ou, na sua linguagem, contra «a velha política». A campanha do candidato deslanchou não por causa da greve dos caminhoneiros. Seu crescimento tem relação com inúmeras variáveis, sendo a mais importante a dinâmica da polarização entre o PT e Antipetismo, com o PT sendo associado a mais Estado e à corrupção. Essa relação havia sido longamente estabelecida pelos meios de comunicação desde o impeachment, como vimos demonstrando. Ela se aprofundou no discurso dos grupos radicais da nova direita quando o ex–presidente Lula foi preso. Seus partidários denunciaram a perseguição política e o fato de não haver provas no processo que o condenou. A prisão teria como objetivo impedi–lo de ser eleito. No lado antipetista, por sua vez, a direita ampliava sua condenação ao ex–presidente e a seu partido, agora identificando claramente o gasto público à corrupção. Tratava a militância de esquerda como corrupta e defensora de corruptos.

A guerra virtual foi sem precedentes e as antigas lideranças políticas não perceberam que a propaganda da televisão já não tinha relevância, não apenas pelo uso profissional das redes sociais, mas porque os partidos tradicionais não mereciam credibilidade naquele contexto. Foi nesse vazio que a candidatura «antissistema» de Jair Bolsonaro cresceu, definindo–se como competitiva à medida que o crescimento da candidatura do PT levava uma parcela do eleitorado a optar pelo candidato mais bem colocado para evitar a sua volta.

Conclusão

O Brasil vive as contradições de uma dupla crise do sistema mundial capitalista. Por um lado, a globalização e seus efeitos na ampliação de assimetrias internacionais e domésticas causaram no Brasil os mesmos impactos disruptivos observados em outros países. Em 2013 parecia claro que as políticas de distribuição da riqueza eram insuficientes e que surgia uma juventude com maior acesso à educação, com expectativas que não podiam ser realizadas por uma economia desindustrializada e que entrava em processo de estagnação. Depois da crise de 2008, e especialmente com seu aprofundamento na Europa, em 2011, a estagnação mundial e as pressões competitivas amplificaram a agenda neoliberal, revelando a disposição das grandes corporações na apropriação da riqueza pública ou destinada aos serviços públicos. Por contraditório que pareça, as insatisfações com o sistema de representação foram mobilizadas por esse programa profundamente radical de diminuição da participação do Estado na apropriação e distribuição da riqueza. Para que ocorresse

tal captura dos movimentos e demandas sociais, um intenso trabalho de propaganda foi levado a cabo por grandes empresas de comunicação que monopolizam a mediação jornalística, com peso incontrastável no discurso público.

A crise global reflete ainda um componente adicional a partir de 2014, quando do acordo entre a China e a Rússia, que é a questão da ameaça à hegemonia americana. Esta nova conjuntura geopolítica tem reflexos diretos sobre a nossa região e determina o avanço da competição, apropriação e da influência norte–americana sobre o continente, o que explica o interesse na desestabilização de regimes nacionalistas e na apropriação de recursos naturais e de patrimônio público, para além da simples expansão dos mercados. Essa visão geopolítica merece esforços conjuntos de pesquisa em toda a região. O processo de desestabilização, instabilidades institucionais e o consequente empobrecimento da região parece estar longe do fim.

Referências bibliográficas

Averburg, André e Giambiani, Fabio (2000). *A crise brasileira de 1998/1999, origens e consequências*. *Textos para Discussão 77.* IPEA.

Baggio, Kátia (2016). *O poder da Atlas Network: conexõesultraliberaisnas* Américas https://voyager1.net/politica/atlas–network–conexoes–ultraliberais–nas–americas/acessado em 20/5/2018.

Belluzo, Luis G., Galípodo, Gabriel (2017). *Manda quem pode, obedece quemtemprejuízo.* Contracorrente.

Bresser–Pereira, Luiz Carlos (Org.) (1991). *Populismo econômico.* Nobel.

Bianchi, Alvaro (2019). Golpe de Estado: o conceito e suahistória. *En Pinheiro–Machado, R. e Freixo, A. (Orgs.). Brasil em transe: Bolsonarismo, Nova Direita e desdemocratização* (pp. 50–62). Oficina Raquel.

Castells, Manuel (2015). *O poder dacomunicação.* Paz e Terra.

Ferreira, Jorge (2001). *O populismo e suahistória.* Civilização Brasileira.

Laidler, Christiane Vieira (2018). *Retorica e farsa. Trinta anos de neoliberalismo no Brasil.* Paco.

Lima, C. C. https://www.youtube.com/watch?v=sv2–Vdf7hB0, acessado em 21/5/2018.

Machado, Marco AntônioPinheiro (2019). *Pré–sal: a saga.* L&PM.

Messenberg, Debora (2019). A cosmovisão da ‘nova’direita brasileira. En Pinheiro–Machado, R. e Freixo, A. (Orgs.). *Brasil em transe: Bolsonarismo, Nova Direita e desdemocratização* (pp.25–49). Oficina Raquel.

Ministério da fazenda. Receita Federal (2017). Carga Tributária no Brasil, 2016.

Nunes, Aloysio (2018). Discurso https://www.youtube.com/watch?v=6QVcxwUxH50, acessado em 21/5/2018.

PMDB (2015). *Uma ponte para o futuro.* FundaçãoUlysses Guimarães.

Portal G1 http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/01/contas–do–setor–publico–tem–primeiro–deficit–da–historia–em–2014.html, acessado em 24 de maio de 2018.

Singer, André (2018). *O lulismo em crise.* Companhia das Letras.

Souza, Jessé (2015). *A tolice da inteligência brasileira.* Leya.

Stiglitz, Joseph (2003). *Os exuberantes anos 90.* Companhia das Letras.

——— (2016). *O Grande abismo.* Alta Books.

¿Un partido de derecha radical en Brasil?[1]

Bruno Konder Comparato

Un espectro ronda la Europa, el espectro de la intolerancia y del fascismo. Desde su retorno al escenario político occidental en la década de 1980, la extrema derecha acumula victorias electorales significativas. Con votaciones que alcanzan hasta el 25 % de los votos válidos, los partidos de extrema derecha ya no pueden ser ignorados e incluso se les invita a integrar coaliciones de gobierno. En 2018, el gobierno de ocho países de la Unión Europea (Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Polonia, Hungría y Eslovaquia) estuve «dirigido por partidos de extrema derecha, nacionalistas y xenófobos» (Traverso, 2019). Fue el tiempo en que los partidos de extrema derecha eran rotulados de partidos neofascistas y relegados a una categoría residual en las clasificaciones de las familias partidarias. Inspirada por el ensayo de Adorno sobre la «personalidad autoritaria» (Adorno, 2019), las ciencias sociales de los años 60 y 70 se contentaban en identificar las actitudes conservadoras y radicales de derecha en los individuos, sin preocuparse con la posibilidad de una nueva galvanización de las masas, como en el 1930, con el surgimiento de los regímenes fascistas en Europa. Como alerta Gordon, «condenar algo como *fascista* es al mismo tiempo un grito de alarma y un paliativo: nombra un extremo político y ofrece el pensamiento consolador que un extremo no es la norma» (Gordon, 2019).

El propósito de este capítulo es reflexionar sobre el alcance de estas ideas en Brasil. De hecho, aunque por un lado es extraño que los sistemas partidarios brasileños nunca hayan dejado un espacio, si no marginal, para las formaciones de partidos de extrema derecha, por otro lado, las recientes disputas electorales han demostrado la fuerza que las ideas conservadoras pueden tener junto al electorado, capitalizando con un discurso contra el aborto y los derechos de las minorías. Debemos agregar a esto las recientes campañas de moralización política, manifestaciones recientes que se han extendido por todo el país y cuya marca es el rechazo vehemente de cualquier alusión a los partidos políticos tradicionales, e incluso un movimiento que reclama el regreso de un gobierno militar.

1 Versiones anteriores de este texto han sido presentadas y discutidas en encuentros o congresos anuales de ANPOCS, Associação Nacional de Pós–graduação e Pesquisa em CiênciasSociais (2013), ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política (2014), ICA 56 Congreso Internacional de Americanistas (2018), IPSA 25th World Congress of Political Science (2018). Agradezco a los comentaristas que me permitieron refinar el argumento.

Recientes encuestas realizadas en Brasil muestran la creciente importancia de las ideas radicales y de extrema derecha defendidas por parte importante del electorado, así como la creciente desconfianza en las instituciones democráticas. Comparten una ideología común que incluye apoyo a la pena de muerte y al endurecimiento del derecho penal, el rechazo de inmigrantes y xenofobia, acuerdo con actitudes autoritarias y, sobre todo, una identificación de los políticos en general con la corrupción y la incredulidad en el sistema político como capaces de acomodar diferencias. Al igual que las democracias europeas, Brasil presenta las condiciones sociológicas para el florecimiento de un partido de extrema derecha. El reciente *impeachment* de una presidente electa por el partido de los trabajadores y la posterior inculpación de los partidos de izquierda por la crisis política y económica del país podrían actuar como un fuerte incentivo para el surgimiento de un partido de extrema derecha. En octubre de 2018, el candidato exitoso en las elecciones presidenciales fue el ex capitán del ejército Jair Bolsonaro, quien se presentó como un anticandidato y con un discurso político que incluyó la defensa de la pena de muerte y el elogio de la tortura como método para silenciar a sus oponentes. Su voto le permitió conseguir una décima parte de los diputados del Congreso para el partido con el que se presentó a las elecciones, el hasta entonces oscuro Partido Social Liberal (PSL), pero en octubre de 2019 se volvió en contra del partido, en una clara demostración de que su elección no dependía en nada de la fuerza de su partido. En efecto, diversos análisis muestran que la elección se decidió mucho más en las redes sociales que por los intermediarios tradicionales del discurso político, incluidos los partidos, y que los argumentos se discutieron más en los canales de You Tube y en los grupos whatsapp que en los medios de comunicación tradicionales (Fisher, Max; Taub, Amanda, 2019).

De la extrema derecha a la «nueva derecha radical»

Desde la década de 1980 en adelante, el campo político de la extrema derecha comenzó a acumular fuerza con cada nuevo proceso electoral y está presente de manera significativa en casi todos los países del continente europeo. Algunos marcos importantes a menudo se recuerdan y sirven para marcar esta evolución. En las elecciones generales de Austria de 1999, el *Partido de la Libertad* (FPÖ), dirigido por Jörg Haider, obtuvo el 26,9 % de los votos, eligió 52 diputados y se unió a un gobierno de coalición con el *Partido Popular de Austria* (ÖVP). Después de amenazar con un boicot diplomático de Austria, los otros 14 países de la Unión Europea introdujeron sanciones contra el gobierno recién formado. En aquel momento, los funcionarios de la UE justificaron las medi-

das afirmando que «la admisión del FPÖ en una coalición gobernante legitimó a la extrema derecha en Europa» (Meret, 2010). El 21 de abril de 2002, el candidato y líder del *Front National* Jean–Marie Le Pen causó un shock sísmico en la escena política francesa cuando pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con 16,86 % de los votos. Conocido por sus declaraciones polémicas y abiertamente racistas, Le Pen admitió haber torturado personalmente a presos políticos durante la guerra de Argelia en 1962, y declaró en 1987 que las cámaras de gas eran solo un «detalle» de la Segunda Guerra Mundial. El siguiente cuadro muestra que el voto de la extrema derecha en siete países europeos se triplicó entre 1980 y 2004, aumentando gradualmente año tras año (Ver Figura 1: voto promedio en siete partidos europeos radicales de derecha entre 1980 y 2004).

En 2012, la derecha radical estaba representada en 16 parlamentos nacionales en Europa y tenía 41 de los 736 diputados al Parlamento Europeo. Como se puede ver en la tabla siguiente, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, la derecha radical ganó el 10 % o más en 9 países y entre el 5 y el 10 % de los votos en otros 6 países. Cinco años después, en las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, la derecha radical ganó el 10 % o más en 11 países, con porcentajes superiores al 20 % en cuatro países (Austria, Dinamarca, Francia y el Reino Unido). [Tabla 1: Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo (2009–2014)] Las elecciones de 2014 para el Parlamento Europeo dispararon nuevas alarmas ya que los partidos de extrema derecha fueron los más votados en Francia, Reino Unido y Dinamarca. En Francia, el *Frente Nacional* (FN) alcanzó el 24,9 % de los votos que resultaron en 23 diputados al Parlamento Europeo. En el Reino Unido, el recién creado *Partido de la Independencia del Reino Unido* (UKIP) de Nigel Farage aplastó a los conservadores y se situó frente a los laboristas con el 27,9 % de los votos, lo que resultó en 24 diputados. En Dinamarca, *Dansk Folkeparti* (O) ganó el 26,6 % de los votos y ganó 4 escaños. En Alemania, vimos la elección de un diputado del Partido Nacional Democrático neonazi (NPD) que hará su debut en el Parlamento Europeo.

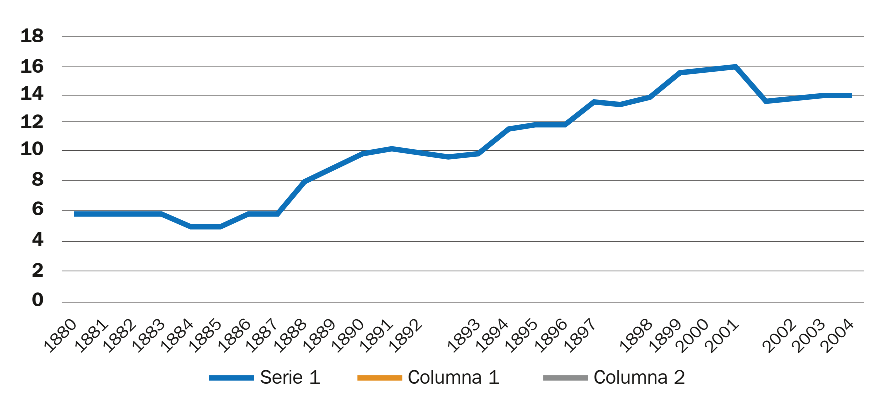


Figura 1. voto promedio en siete partidos europeos radicales de derecha entre 1980 y 2004. Fuente: (Gráfico reproducido de Norris, Pippa. (2005:8). Radical Right: voters and parties in the electoral market. Cambridge: Cambridge University Press.

Este gráfico ilustra la evolución del poder de voto promedio en la Cámara de Diputados entre 1980 y 2004 para los siguientes partidos europeos, que celebran regularmente elecciones legislativas desde 1980 en Italia (MSI/AN), Austria (FPÖ), Suiza (SVP), Dinamarca (FP/DF), Noruega (FRP), Bélgica (VB) y Francia (FN). Todos estos partidos pueden considerarse relevantes, habiendo alcanzado el 3 % de los votos en al menos una elección nacional durante este período. En los casos italiano y danés, las divisiones tuvieron lugar en las partes, pero hubo una continuidad con los partidos sucesores.

A lo largo de este periodo, la derecha radical participó en la formación de gobiernos en cinco países (Austria, Italia, Países Bajos, Suiza y Eslovaquia) y apoyó a los gobiernos minoritarios en Noruega y Dinamarca. En 2011, la inclinación nacionalista del gobierno húngaro alarmó a las autoridades europeas después de aprobar leyes incompatibles con la legislación de la UE (limitando la libertad de prensa y la ley sobre cultos religiosos). En las elecciones nacionales, regionales o locales, algunos resultados sorprendentes confirman el avance de estas ideas. Por ejemplo, el 28,9 % de los votos ganados por la Unión Democrática del Centro (UDC) en las elecciones parlamentarias de 2007 en Suiza, confirmado por el 26,6 % de los votos en la misma UDC en 2011 y el éxito de los referendos contra los minaretes en 2009 y contra los inmigrantes en 2010. Desde 1999, cuando ganó el 22,5 % de los votos en las elecciones federales, el UDC se ha convertido en el mayor partido político suizo y dirige la campaña contra el ingreso de Suiza a la Unión Europea.[2] En Noruega, el *Partido del Progreso* (FRP) obtuvo el 22,9 % de los votos en 2009, en Finlandia el *Partido*

2 Desde su surgimiento en la escena política suiza en la década de 1970, la derecha radical ha utilizado ampliamente las herramientas de la democracia directa para afirmar su punto de vista y bloquear las iniciativas gubernamentales destinadas a otorgar más derechos a los

de los verdaderos finlandeses (PS) obtuvo el 19 % en 2011 y en Polonia el *Ley y Justicia* (PiS) experimentó un proceso de radicalización en los últimos años y ganó el 29,9 % de los votos en 2011, todo en elecciones legislativas. En Grecia, el recién creado *Amanecer Dorado* (XA) alcanzó el 7 % de los votos en las elecciones legislativas de 2012 con la propuesta de colocar minas terrestres en la frontera con Turquía para inhibir la entrada de inmigrantes (Vidal, 2012; Giblin y Lacoste, 2012; Psarras, 2014).

País	Partidos	Votos (%)		
Países en los que la derecha radical ganó el 20% o más		**2009**	**2014**	**2019**
Austria	Partido por la Libertad (Martin) y Alianza para el futuro (BZÖ)	21,9	20,2	17,2
Dinamarca	Dansk Folkeparti (O)	14,8	26,6	10,8
Francia	Front National (FN)	6,3	24,9	23,3
Italia	Lega Nord (LN), Fratelli d'Italia / Alleanza Nazionale (FDI-AN)	10,2	9,8	40,7
Reino Unido	British National Party (BNP), United Kingdom Independence Party (UKIP), Brexit Party (Brexit Party)	22,1	27,9	34,0
Países en los que la derecha radical ganó entre 10% y 20%		**2009**	**2014**	**2019**
Alemania	Alternative für Deutschland (AfD), Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)	-	8,1	11,3
Bélgica	Vlaams Belang (Vl. Belang), Lijst Dedecker (LDD) y Front National (FN)	15,7	4,8	11,7
Bulgaria	Ataque de la Unión Nacional (Ataka), El Frente Nacional para la Salvación de Bulgaria (NFSB), Organización Revolucionaria Interna de Macedonia (VMRO)	12,0	16,7	9,6
Finlandia	Partido de los verdaderos finlandeses (PS)	9,8	12,9	13,8
Grecia	Rally Ortodoxo Popular (LAOS), Amanecer Dorado (XA), Solución Griega (EL)	7,15	12,1	9,1
Hungría	Movimiento por una Hungría mejor (Jobbik)	14,8	14,7	6,3
Letonia	Por Patria y Libertad (TB/LNNK+VL!)	7,45	14,3	16,4
Lituania	Partido Orden y Justicia (TT)	12,2	14,3	2,7
Países Bajos	Partido por la Libertad (PVV)	17,0	13,3	3,5
Suecia	Sverigedemokraterna (SD)	3,3	9,7	15,3
Países en los que la derecha radical obtuvo entre 5% y 10%-				
Chipre	Frente Nacional del Pueblo (ELAM)	0,22	2,69	8,3
Rumania	Partido de la Grande Rumania (PRM)	8,65	2,7	-
Eslovaquia	Partido Nacional Eslovaco (SNS)	5,6	3,6	4,1

Figura 2. Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo (2009–2014).
Fuente: http://www.europarl.europa.eu

Hoy, no podemos permanecer indiferentes, y la advertencia de Bertolt Brecht, lanzada en 1941 cuando estaba en el exilio del régimen nazista en Finlandia, sigue siendo peligrosamente actual: «sigue siendo fecundo y procreando el

inmigrantes o integrar organizaciones internacionales como la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional (FMI) e incluso las Naciones Unidas (Kriesi y Gentile, 1998:131).

vientre del que eso salió gateando» (Brecht, 1976) Por supuesto, los estudiosos de los partidos europeos se han centrado cada vez más en este tema. El diagnóstico de que la clasificación izquierda–derecha ya no tendría sentido después de la caída del Muro de Berlín y el colapso del régimen soviético ahora es obsoleta. Los estudios sobre la «extrema derecha», la «derecha radical», el «populismo de derecha», están creciendo e incluso hay quienes se refieren al «lado oscuro de Europa».[3]

A pesar de que todavía son una minoría en los resultados electorales, y como consecuencia de las formaciones gubernamentales, las ideas y el discurso político de la extrema derecha están presentes en el debate público y ciertamente influyen en la discusión sobre las políticas públicas.[4] Como señala

---

3 Como lo ilustran los títulos de algunas publicaciones recientes: Ignazi, P. *Extreme Rights-Parties in Western Europe*. Oxford: Oxford University Press, 2003; Ignazi, P. *L'estremadestra in Europa: da Le Pen a Haider*. Bologna: Il Mulino, 2000; Betz, H.G. *Radical Right–Wing Populism in Western Europe*. New York: St. Martin's Press, 1994; Betz, H.G., Immerfall, S. *The New Politics of the Right*. New York: St. Martin's Press, 1998; Harris, G. *The Dark Side of Europe*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1990; Le Bohec, J. *Sociologie du phénomène Le Pen*. Paris: La Découverte, 2005; Stöss, R. *Politics against democracy: Right–wing extremism in West Germany*. New York: Berg, 1991; Givens, T. E. *Voting radical right in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Art, D. *Inside the radical right: the development of anti–imigrant parties in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011; Norris, Pippa. *Radical Right: voters and parties in the electoral market*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005; Kitschelt, H., *The radical right in western Europe*. Ann Harbor, The University of Michigan Press, 1995; Merkl, P. H., Weinberg, L. *Encounters with the contemporary radical right*. Oxford: Westview Press, 1993; Beyme, K. *Right–wing Extremism in Western Europe*. London: Routledge, 1988; Hainsworth, P. *The extreme right in Europe and the USA*. New York: St. Martin's Press, 1992; Vidal, D. *Le ventreest encore fécond: les nouvellesextrêmesdroitesen Europe*. Paris: Libertalia, 2012; Giblin, B., Lacoste, Y. *L'extrême droite en Europe*. Paris: La Découverte, 2012; MAMMONE, A., GODIN, E., JENKINS, B. (Eds.) *Varieties of Right–Wing Extremism in Europe*. New York: Routledge, 2013; Milza, P., *L'Europeen chemise noire–Les extrêmesdroiteseuropéennes de 1945 à aujourd'hui*. Paris: Fayard, 2002; Altermatt, U., Kriesi, H. *Rechtsextremismus in der Schweiz: Organisationen und Radikalisierung in den 1980er und 1990er Jahren*. Zürich: Neue Zürcher Zeitung, 1995; Langebach, M., Speit, A., *EuropasradikaleRechte: Bewegungen und Parteien auf Strassen und Parlamenten*, Zürich: OrellFüssli, 2013; Botsch, G., *Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute*, Darmstadt: WBG, 2012; Brauner–Orthen, A., *Die Neue Rechte in Deutschland: Antidemokratische und rassistische Tendenzen*. Opladen: Leske und Budrich, 2001; Psarras, D., *Aube Dorée–Livre Noir du Parti Nazi Grec*, Paris: Syllepse, 2014.

4 Tomemos, por ejemplo, los resultados de una encuesta de opinión pública realizada en Francia el 23 y 24 de mayo de 2002, un mes después de que el candidato de extrema derecha pasara la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y sufriera una intensa campaña negativa que resultó en la elección de su oponente Jacques Chirac con un voto récord. Esa encuesta reveló que más de una cuarta parte de los franceses se adhirió a las ideas de la extrema derecha. (Milza, 2002:9)

Paul Hainsworth, el éxito electoral no es el único criterio para la consecución de ideas políticas. Se debe considerar que en algunos casos los partidos de la extrema derecha no prosperan simplemente porque el sistema político puede incorporar algunas de sus ideas (Hainsworth, 1992).

De todos modos, Peter Mair señala que hay dos tendencias importantes que han tenido un impacto reciente en los partidos y los sistemas de partidos, y que a partir de ahora deben influir en la dirección del cambio en los sistemas de partidos. La primera tendencia es la «victoria de la democracia» que llevó a la desaparición de los partidos antisistema tradicionales. «En la política contemporánea», dice, «y probablemente por primera vez en la historia democrática, casi todas las partes se han vuelto aceptables» (Mair, 2006:69). Este diagnóstico es válido incluso para los partidos radicales de derecha que, incluso si difieren de otros partidos por sus propuestas o su «estilo peculiar de política», están totalmente de acuerdo con ellos cuando se trata del compromiso de mantener procedimientos democráticos. Por improbables y «desagradables» que sus propuestas puedan parecerles a muchos votantes, los partidos tradicionales pueden, en algunos casos, construir acuerdos y plataformas comunes con los partidos radicales e incorporarlos al gobierno, en una demostración completa de que las diferencias en la orientación política, por grandes que sean, son siempre negociables. La segunda tendencia observada por Mair es el declivio de los partidos como organizaciones que reúnen afiliados. Como consecuencia, los partidos de hoy se parecen cada vez más, especialmente en la forma en que se comportan en la escena política y en la forma en que se comunican y se relacionan con la sociedad. En la evaluación de Mair, la combinación de estas dos tendencias sugiere que los sistemas de partidos se mueven inexorablemente hacia los sistemas bipolares, que mejor reflejan disputas electorales sobre individuos y candidatos en lugar de programas partidistas. Por lo tanto, los extremos del espectro político se rehabilitan progresivamente, ya que ayudan a los votantes a diferenciar los dos lados en disputa. Al carecer de una mejor alternativa, la distinción clásica entre izquierda y derecha aún resiste el discurso político, el análisis de politólogos, el trabajo académico y la opinión de los electores, a pesar de que sus términos han sido en gran parte reconfigurados (Mair, 2006).

Para definir con mayor precisión de qué se trata la extrema derecha, debemos empezar por identificar lo que queremos decir con derecha. Como muchos autores han señalado, definir la derecha no es fácil, porque es una construcción ideológica más nebulosa que la izquierda, que se basa en principios más explícitos como la igualdad y la participación (Deutsch, 1999). De todos modos, hasta hace poco, se habían distinguido tres grupos en el campo de la derecha: los conservadores, que se oponían moderadamente al cambio, con la espe-

ranza de que pudiera ser controlado por ellos; los reaccionarios, que deseaban restaurar el pasado; y los fascistas o contrarrevolucionarios, que compartieron con los reaccionarios su odio al presente y las ideas comunistas, pero se diferenciaron de ellos por sus métodos violentos, su oportunismo y su radicalismo. Como señala Anthony Giddens, el radicalismo político siempre se ha asociado con el pensamiento de izquierda, que aboga por una profunda transformación de la sociedad para mantener el control del proceso revolucionario. La mayor justificación para el pensamiento conservador desde la época de Edmund Burke ha sido la sospecha de un cambio radical en todas sus formas. ¿Cómo podemos entender a los conservadores de hoy que «abrazan más o menos exactamente lo que una vez repudiaron: la competencia capitalista y los dramáticos y profundos procesos de cambio que el capitalismo tiende a provocar»? (Giddens, 1994:2). Con el desmoronamiento de la Unión Soviética los roles se invirtieron y muchos socialistas concentraron sus energías en la protección del estado de bienestar y la conservación de los beneficios sociales adquiridos a lo largo del siglo xx.

Es posible encontrar varias expresiones para referirse a los grupos o movimientos que son el objeto de este texto: fascistas, neofascistas, extremistas de derecha, radicales de derecha, populistas, totalitarios, nuevos derechistas radicales. Los términos «fascismo», «neofascismo», «extremismo de derecha», «populista» y «totalitario» se utilizan con frecuencia en tono acusatorio, no pocas veces en contra de los partidos de izquierda. Además, estos términos están muy relacionados con los partidos fascistas de los años veinte y treinta. En cuanto a la expresión «nueva derecha», está asociada a los neoliberales de la década de 1980, que ciertamente no pueden confundirse con extremistas de derecha. Por estas razones, preferimos usar los términos «derecha radical» o «nueva derecha radical».

Es necesario, antes de proceder, diferenciar a los partidos de la derecha radical de los partidos fascistas de las décadas de 1920 y 1930, porque:

- el ascenso de los partidos fascista y nazi fue rápido, mientras que el progreso de los partidos de la derecha radical es lento, pero duradero;
- los partidos de la derecha radical no son partidos de masas, a diferencia de los partidos fascistas de la primera mitad del siglo xx, y las bases sociales sobre las cuales se basan los partidos radicales de derecha votan en sus candidatos, pero no se organizan en extensas redes de militantes;
- los partidos fascistas alentaron la violencia y defendieron públicamente la violencia masiva, mientras que los partidos de derecha radical niegan públicamente cualquier conexión con la violencia, incluso si pueden ocurrir episodios aislados;

• los militantes de los partidos de derecha radical no constituyen grupos armados y uniformados como las ss y las camisas negras o marrones, aunque atraen la simpatía de los grupos neonazis y skinhead que, aunque desempeñan funciones importantes durante las campañas electorales, son ocultados por los líderes de los partidos que niegan insistentemente cualquier conexión con estos grupos (Salas, 2006; Buford, 1992; Konopnicki, 1996).

Cuando nos referimos, entonces, a los partidos radicales de derecha de hoy, debe quedar claro que estos no son grupos pequeños dirigidos por individuos nostálgicos de los regímenes fascistas de la primera mitad del siglo xx, aunque a menudo es posible encontrar conexiones con esos partidos pioneros, o terroristas lunáticos que planean ataques con bombas o propagan opiniones racistas y antisemitas. Hay algunos casos de partidos extremistas de derecha apoyados e incluso mantenidos por empresarios exitosos con una riqueza confortable.[5]

Es difícil establecer un perfil bien definido del electorado de los partidos de extrema derecha en Europa, excepto quizás por el predominio del voto masculino, aunque esto no es cierto para todos los países. De hecho, entre sus partidarios, hay tanto trabajadores como funcionarios y collares blancos, con una distribución bastante homogénea entre los distintos grupos de edad y en diversos niveles de educación. El hecho de tener un trabajo o estar desempleado o retirado no puede correlacionarse positivamente con el voto en la derecha radical (Ignazi, 2003, Givens, 2005, Betz, 1994, Norris, 2005). Al analizar el tema de los partidos antisistema, Giovanni Sartori insiste en la necesidad de distinguir la variedad de motivos que llevan a los votantes a apoyar a los partidos antisistema:

> La negación cubre o puede abarcar una amplia gama de actitudes diferentes que van desde la alienación y la negativa total a protestar. Ahora, claramente, la alienación y la protesta son de naturaleza diferente, no solo en grado. (...) Los votantes pueden ser guiados por la protesta, mientras que los militantes partisanos pueden ser alienados. Del mismo modo, el liderazgo del partido puede estar motivado ideológicamente, mientras que la militancia simplemente puede resentirse por la falta de pan. (Sartori, 1976:132)

5 El líder del Frente Nacional francés (FN), Jean–Marie Le Pen, se convirtió en multimillonario al heredar en 1976 una enorme fortuna de Hubert Lambert, un nacionalista empedernido y heredero de una industria del cemento, que murió a los 42 años debido a una enfermedad degenerativa y cuyo último deseo era fortalecer al partido radical de derecha con la esperanza de que ayudaría a restablecer la monarquía francesa. (Konopnicki, 1996) El líder del FPÖ austriaco, Jörg Haider, se enriqueció en un negocio nebuloso con una gran porción de tierra en la región de Carintia confiscada a los judíos italianos durante la Segunda Guerra Mundial.

Lo que une a los votantes de la derecha radical es un cierto resentimiento con la sociedad y el sistema político de sus países. En general, comparten una ideología común que incluye apoyo a la pena de muerte y endurecimiento del derecho penal, rechazo de inmigrantes y xenofobia, acuerdo con actitudes autoritarias y, sobre todo, una identificación de los políticos en general con la corrupción y la incredulidad en el sistema político como capacitado para acomodar las diferencias.

Por lo tanto, los partidos radicales de derecha de Europa que surgieron a partir de la década de 1980 no son partidos neofascistas. Si se los percibe como partidos de extrema derecha, es porque ocupan el extremo conservador del espectro político izquierda–derecha y comparten varias de las siguientes características:

- son partidos antisistema en la medida en que socavan la legitimidad del sistema democrático con su discurso y acción, incluso cuando aceptan las reglas del juego electoral y buscan conquistar el poder por medios electorales;
- se oponen radicalmente a la idea de la representación parlamentaria y la resolución negociada de los conflictos por los partidos, prefiriendo los mecanismos de representación personalista o corporativa;
- están en contra del principio de pluralismo que perjudicaría el ideal de «armonía social»;
- se oponen a la idea de igualdad de acceso a los derechos de ciudadanía independientemente de sus características personales, como la raza, el idioma y la etnia;
- son autoritarios e insisten en la relevancia de una autoridad colectiva (estado, nación o comunidad) como superior a los derechos individuales.

En todos estos aspectos, los partidos de extrema derecha de hoy entran en conflicto con los principios básicos de la democracia liberal contemporánea. Tal vez el mayor peligro en las democracias consolidadas de Europa occidental, esta nueva derecha radical se apoya en tácticas populistas que van más allá de su radicalismo o extremismo, evidenciado por el «uso sin escrúpulos y la instrumentalización de sentimientos públicos difusos de ansiedad y desencanto, y su atractivo para el hombre su sentido común supuestamente superior» (Betz, 1994:4). La propaganda del francés Jean–Marie Le Pen resume bien este procedimiento al presentarlo como «el que habla en voz alta lo que los franceses piensan en voz baja».

Explicaciones para el voto radical de derecha

El éxito de los partidos de derecha radical en Europa ha provocado un intenso debate en el que se avanzan varias hipótesis explicativas. Por lo tanto, el crecimiento del voto en la extrema derecha representaría:

- un renacimiento de la ideología fascista y nacionalsocialista alimentada por una crisis económica y altas tasas de desempleo (Milza, 2002);
- la combinación de factores individuales (baja autoconfianza, obediencia ciega a la autoridad, necesidad de héroes y líderes, gusto por la jerarquía, odio a los débiles, conformidad e inflexibilidad, incapacidad para manejar los conflictos) y factores sociales (crisis económica, crisis política, cultura política antidemocrática) que conducen a un clima de resentimiento y alienación (Stöss, 1991; Betz, 1994);
- una reacción racista y xenófoba contra el multiculturalismo de las sociedades de Europa Occidental como resultado de la creciente afluencia de inmigrantes de culturas no occidentales, especialmente musulmanes, africanos y asiáticos (Arte, 2011);
- una respuesta a los cambios institucionales en las democracias occidentales, donde el control de la vida individual de la clase política cada vez más preocupa a una gran parte de los ciudadanos que apoyan una reacción libertaria y populista al gran gobierno y al poder de las elites político–económicas;
- el resultado de un cambio social estimulado por la impugnación de la redistribución de los recursos económicos por parte del estado de bienestar y la valorización de los modos autoritarios y paternalistas de toma de decisiones dentro del Estado, las empresas y la familia; es posible combinar opciones estratégicas de partidos conservadores moderados con la capacidad de los líderes de derecha capaces de encontrar la «fórmula ganadora» que tenga un atractivo electoral (Kitschelt, 1995);
- la combinación de una oferta del partido de extrema derecha con una demanda de más posiciones autoritarias y discriminatorias, en un contexto de una disputa electoral en la que se permite a los partidos radicales de derecha registrarse, competir y hacer campaña (Norris, 2005; Givens, 2005).

El alcance de las ideas de la derecha radical en Brasil

Lo que nos interesa, en lo que respecta al sistema partidario brasileño, es explicar, no la presencia o el éxito, sino precisamente la ausencia de un partido de extrema derecha capaz de contestar las elecciones con un grado razonable de éxito. Entendemos que las condiciones sociológicas para la existencia de un par-

tido de derecha radical ya existen, y el marco institucional con respecto a las reglas electorales no es tan diferente de los europeos en tanto que se rechaza la posibilidad de tal partido.

En el estudio publicado en 2000 sobre partidos conservadores en el Brasil contemporáneo, Scott Mainwaring, Rachel Meneguello y TimotyPower describen el Partido de Reconstrucción del Orden Nacional (PRONA) como un «partido de extrema derecha dirigido por un líder personalista, Enéas Carneiro» (Mainwaring, Meneguello, Power, 2000:32). Con una plataforma de campaña que incluía la defensa de la investigación nuclear con fines bélicos, lo que implicaría el desarrollo de una bomba atómica en Brasil y la inevitable ruptura de acuerdos pacíficos internacionales y posiciones moralizantes y patrióticas. El PRONA surgió en 1989 y permaneció activo hasta 2006, cuando se fusionó con el Partido Liberal (PL), dando lugar al Partido de la República (RP) para escapar de la cláusula de barrera incluida en la legislación electoral introducida en 2007. El innegable éxito electoral del PRONA, aunque limitado, se confunde con la capacidad de su líder y fundador para ganar votos. Fallecido en 2007, Enéas Carneiro sigue teniendo el récord absoluto de votos para diputado federal, con 1.57 millones de votos emitidos en 2002, y en las elecciones presidenciales de 1994 obtuvo el tercer mejor puntaje con el 7,38 % de los votos, por delante de líderes políticos tradicionales como Leonel Brizola (PDT) y Orestes Quércia (PMDB). A pesar de estos innegables éxitos, el PRONA nunca ha estado anclado por un movimiento de derecha más amplio en la sociedad brasileña, a ejemplo de los partidos radicales de derecha europeos.

Al igual que las democracias europeas entre las guerras, Brasil también tenía su prototipo de un partido fascista con la *Acción Integral Brasileña* (AIB), que propagaba la defensa de los valores familiares, la jerarquía, el nacionalismo, demonizaba a los judíos e incluso tenía una milicia formada por simpatizantes vistiendo camisas verdes y uniformes, como sus homólogos europeos. Cerrado por el Estado Novo surgido en 1937, que incorporó varias de sus banderas, la AIB no es reclamada por ninguna formación de partidos relevantes en el Brasil contemporáneo. Sin embargo, es posible encontrar una línea de continuidad representada por políticos pertenecientes al integrismo en la década de 1930, que ayudaran a derrocar a Vargas en 1945, lucharan contra Vargas en la década de 1950, apoyaran el golpe militar en 1964 y encontraran un hogar en la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) durante el régimen militar. Sin embargo, a diferencia de los partidos radicales de derecha en Europa, ningún grupo en Brasil ha logrado dar el paso de capitalizar la insatisfacción y la indignación de los votantes y crear un partido basado en ideas radicales de derecha que puedan presentarse como aceptables para el electorado. Pero eso no significa que no pueda suceder en el futuro.

Es necesario tener en cuenta el potencial devastador que pueden tener las ideas populistas de derecha en una democracia aún en consolidación, como la brasileña. Las diversas ediciones de la encuesta Latinobarómetro muestran que Brasil es el país con una de las creencias más débiles sobre los beneficios de la democracia en América Latina.[6] No nos dejemos engañar por la autoclasificación de los políticos que siempre prefieren estar situados más a la izquierda que su partido, y consideran que su partido está más a la izquierda de lo que es verdaderamente (Kinzo, 1993:79). Frecuentes declaraciones en los medios, e incluso en las tribunas de las asambleas y cámaras, por parte de algunos de nuestros diputados y representantes revelan una ideología extremadamente conservadora y prejuiciosa contra las minorías.

Aunque estudios recientes han demostrado que los votantes brasileños pueden posicionar adecuadamente a los partidos políticos en un eje izquierda–derecha y guiar su voto según esta percepción, la dificultad para diferenciar partidos entre ellos como consecuencia de las características de nuestro sistema electoral que privilegia a los individuos en detrimento de los partidos, al menos en el ámbito electoral, no les permite ir mucho más allá.

En un artículo de 1987, Antônio Flávio Pierucci identificó rasgos comunes a los activistas de una «nueva derecha» en Brasil, cuya «tendencia más evidente es sentirse amenazado por los otros». Después de señalar que aún no era un partido formalmente organizado, Pierucci advirtió sobre el potencial político representado por el grupo en cuestión:

> No son, por lo tanto, simples votantes, ni siquiera militantes del partido. Su identificación con activistas estacionales, o activistas de campaña, denota con mayor

6 De los 18 países comparados en el informe latinobarómetro para 2016, Brasil solo pierde ante Guatemala, en términos de apoyo a la democracia medido por acuerdo con la afirmación de que «la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno», con solo el 32 % de respuestas afirmativas. El 19 % de los encuestados en Brasil está de acuerdo con la afirmación de que «en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático», mientras que el 22 % está de acuerdo con la frase «para personas como yo da el mismo régimen para ser democrático o antidemocrático», y 13 % no sabía o no respondió. Al considerar el período entre 1997 y 2011, Brasil solo pierde ante Ecuador de acuerdo con frases que miden la legitimidad del Congreso y los partidos políticos: solo el 45 % de los brasileños respaldan la frase «Sin el Congreso Nacional no puede haber democracia», y el 43 % está de acuerdo en que «sin partidos políticos no puede haber democracia». En cuanto a la discriminación de ítems, Brasil es el campeón. Si, en la región promedio para el período de 2009 hasta 2011, el 20 % de los encuestados se consideran «parte de un grupo que es discriminado en el país», en Brasil esta cifra alcanza el 34 %. Si, de nuevo en el promedio de la región para el período de 2009 a 2011, responden Los encuestados creen que el 45 % de sus compatriotas son discriminados por alguna razón, en Brasil esta cifra llega al 59 %. (Latinobarómetro, 2016; Latinobarómetro, 2011)

> precisión el grado de participación político–electoral de los encuestados, así como su nivel de información política y estructura ideológica. (Pierucci, 1987)

El discurso de la intolerancia no es nuevo en Brasil, aunque está ingeniosamente disfrazado como una forma de indignación. No es porque se niegue públicamente el racismo que él no existe en Brasil. Como argumentó FlorestanFernandes, una característica del brasileño es el «prejuicio de tener prejuicios» (Fernandes, 1972). Siguiendo este razonamiento, si ningún partido se ha atrevido a presentarse a los electores con un programa declaradamente discriminatorio y prejuicioso contra las minorías, esto no significa que estas ideas no tengan un atractivo electoral en Brasil.

La existencia de movimientos punk y skinhead en Brasil, que florecieran respectivamente en 1977 y 1981, con el surgimiento de los llamados «rapados del suburbio» inspirados en movimientos similares originados en Europa, demuestra que hay un flujo de ideas entre el viejo continente y el nuestro (Caiafa, 1989; Costa, 2000) En el origen de los movimientos musicales y la contestación social, tanto los punks como los skinheads se confundían con movimientos de orientación política. Como afirma Glauco Mattoso en su presentación a la edición brasileña de la Biblia Skinhead:

> Si en Brasil fenómenos como los hippies o los punks ya están desactualizados o adulterados, imagine lo que no sucede con el skinhead, que en Inglaterra y en los países europeos se ha distorsionado debido a la infiltración derechista y xenófoba. (Marshall, 1993)

Una cosa, sin embargo, no deja de causar inquietud, cuando se considera la importancia y la fuerza que las hinchas organizadas han adquirido en Brasil. Las investigaciones de campo realizadas tanto en Inglaterra como en España han revelado que existe una estrecha relación entre los hooligans de los aficionados de los grandes equipos de fútbol europeos y los partidos nacionalistas y racistas de extrema derecha, aunque esta información se oculta cuidadosamente al público en general. Bill Buford asegura que los vándalos de la torcida uniformizada del Manchester United en Inglaterra no solo apoyan, sino que también participan en las reuniones políticas del Frente Nacional Británico (FN) (Buford, 1992). La misma relación de promiscuidad fue revelada por el periodista investigativo Antonio Salas que se infiltró en el movimiento skinhead español y, a través de una cámara oculta, pudo demostrar la estrecha conexión entre los *Ultras Sur*, la hincha organizada del *Real Madrid* y los skinheads y neonazis españoles (Salas, 2006). Los bares y cervecerías en el entorno del *Santiago Bernabéu*, el estadio del *Real Madrid*, sirven como

punto de encuentro para la venta de material para los seguidores de los *Ultras Sur* y de cabezas rapadas y grupos neonazis.[7] La misma realidad se puede ver en el *Camp Nou*, el hogar de los fanáticos de la extrema derecha *BoixosNois* del Barcelona; en el *Estadio Olímpico*, en Roma, donde los seguidores de *AS Roma* y *SS Lazio*, conocidos como los *Ultras* romanos, desfilan; en las cercanías de *Old Trafford*, el estadio del *Manchester United*; o en el *Parc des Princes*, donde los ultras del *Paris Saint Germain* confraternizan con los cabezas rapadas francesas y los fanáticos del *Front National* en las torcidas organizadas *Kop Boulogne* y *Army Korps*, cuyas denominaciones no dejan lugar a dudas sobre la admiración de sus miembros por el Tercer Reich (Bodin, Robène, Héas, Sempé, 2010; Testa, Armstrong, 2013). El vínculo entre los *hooligans*, *skinheads* y militantes de extrema derecha también ha sido ampliamente documentado en Alemania en los equipos de Berlín, Dortmund y Leipzig (Schröder, 1992).

Brasil tiene una larga tradición de incidentes de violencia en el fútbol y las hinchas organizadas en Brasil son notorias por su afición a pelear contra hinchas de otros equipos. El fútbol brasileño terminó su temporada 2013 con 30 muertes en incidentes relacionados con el fútbol, que representaron el número más alto en la historia del juego en el país. Los casos mortales han aumentado constantemente en los últimos años. Entre 1999 y 2008 hubo 42 muertes relacionadas con el fútbol, pero en 2012 la cifra llegó a 29 al año.[8]

Tentativa de explicación para el caso brasileño

Scheuch y Klingemann formularon la «teoría de la normalización» en 1967, según la cual «el potencial de los movimientos políticos radicales de derecha existe en todas las sociedades industriales occidentales (...) Desde esta perspectiva, el radicalismo de derecha es un síntoma «normal» de las sociedades industriales liberales» (Scheuch y Klingemann, 1967:12). Extendiendo este razonamiento al campo político–electoral, uno esperaría que en una sociedad liberal industrial todo el espectro político seríaocupado por los partidos políticos. Por lo tanto, no sería necesario mantener un espacio vacío en la extrema derecha de las preferencias partidarias, mientras que la extrema izquierda está llena. Pero

7 Los Ultras Sur recientemente acapararon titulares en España después de que cuatro miembros fueran multados con 3000 € (£ 2.500) y excluidos de eventos deportivos durante un año después de exhibir esvásticas y otros símbolos nazis durante un partido contra el Atlético de Madrid. (Kassam, 2013) (https://www.theguardian.com/world/2013/dec/09/real–madrid–ultras–sur–fans)

8 *Football violence: a view from around the world*, en *The Guardian*, 19/12/2013. https://www.theguardian.com/football/2013/dec/19/football–violence–view–around–world

para que un partido sea creado y permanezca, no es suficiente que se cumplan las condiciones sociológicas para su existencia, también es necesario que encaje en las reglas institucionales que condicionan la disputa electoral. Esta es precisamente la estrategia empleada por Pippa Norris para abordar el problema. A partir de un análisis comparativo de las reglas institucionales que regulan la existencia de partidos en diferentes países, puede explicar por qué existen partidos radicales de derecha en ciertos países y no en otros (Norris, 2005).

Según su modelo, se debe prestar especial atención a los «efectos mecánicos» derivados de los requisitos constitucionales, los estatutos legales y los procedimientos administrativos que rigen todo el proceso electoral. Para este propósito, distingue tres momentos distintos: la nominación, la campaña y la elección. La nominación se refiere al acceso a la lista electoral, que depende de las normas legales para que un partido sea registrado y de la decisión de qué candidatos pueden tener su candidatura debidamente registrada y autorizada por la justicia electoral. La campaña está relacionada con el acceso a los medios y el financiamiento de los costos de la propaganda electoral. Pippa Norris piensa sobre todo en la publicidad gratuita en los medios y en el financiamiento de campañas para fondos públicos. Finalmente, la elección de hecho está condicionada a la observación del nivel mínimo de votos que debe superarse para conquistar una silla. Según el sistema electoral y la existencia o no de una cláusula de barrera, la obtención del cociente electoral puede ser más o menos fácil.

Lo que Pippa Norris llama nominación está regulado por el Artículo 17 de la Constitución Federal de 1988, que en el capítulo v (De los Partidos Políticos) establece, entre otras medidas, que:

> Párrafo 4: «está prohibido el uso por los partidos políticos de una organización paramilitar».

Además, la ley 9096 de 19 de septiembre de 1995, que establece partidos políticos, establece en su Artículo 6 que «está prohibido que el partido político imparta instrucción militar o paramilitar, utilice una organización de la misma naturaleza y adopte uniformes para sus miembros.»

Añádase a esta prohibición el Artículo 20, § 1 de la ley de Delitos Raciales (ley 7716 del 5 de enero de 1989, modificada por la ley 9459 del 15 de mayo de 1997), que define crímenes resultantes de prejuicios raciales o de color, proporciona que:

> practicar, inducir o incitar a la discriminación o prejuicios de raza, color, origen étnico, religión u origen nacional mediante la fabricación, comercialización, distribución o exhibición de símbolos, emblemas, ornamentos, insignias o anuncios que utilizan la esvástica para propagar el nazismo constituyen un crimen punible con una pena de prisión de dos a cinco años y una multa.

Pero además de observar estas condiciones, los interesados en crear un nuevo partido tienen un arduo trabajo de organización por delante, porque, según la misma ley 9459:

> Art. 7º El partido político, luego de adquirir personalidad jurídica en forma de ley civil, registra su estado en el Tribunal Superior Electoral.
> § 1º Solo se admite el registro de la condición de partido político que tiene carácter nacional, considerando como tal el que demuestre el apoyo de los votantes correspondiente al menos al medio por ciento de los votos otorgados en las últimas elecciones generales para la Cámara de Diputados , sin contar los votos en blanco y los votos nulos, distribuidos por un tercio o más de los Estados, con un mínimo de un décimo por ciento del electorado que ha votado en cada uno de ellos.
> § 2º Solo el partido que haya registrado su estado en el Tribunal Superior Electoral podrá participar en el proceso electoral, recibir recursos del Fondo del Partido y tener libre acceso a la radio y la televisión, en los términos establecidos en esta ley.
> § 3º Solo el registro del estatuto del partido en el Tribunal Superior Electoral asegura la exclusividad de su nombre, acrónimo y símbolos, el uso por terceros de variaciones que pueden inducir a error o confusión.

Como si estas dificultades para la creación de nuevos partidos fueran pocas, y ya en el momento que Pippa Norris llama etapa de la campaña, esta se relaciona con el acceso a los medios de comunicación y el financiamiento de los costos de la propaganda electoral. En Brasil, el acceso a los recursos del fondo del partido está regulado por la ley 11459 del 21 de marzo de 2007, que añadió el art. 41–A a la ley 9096, a fin de establecer los criterios para la distribución del Fondo del Partido por el siguiente:

> 5 % del Fondo del Partido total se entregará para distribución equitativa a todos los partidos que tengan sus estatutos registrados en el Tribunal Superior Electoral y el 95 % del Fondo total del Partido se les distribuirá en proporción a los votos emitidos en las últimas elecciones generales para la Cámara de Diputados.

Como el tiempo de publicidad gratuita al que los partidos brasileños tienen derecho en los medios también se define después de los resultados de las últimas elecciones a la Cámara de Diputados, la combinación de esta regla con la que regula el acceso al Fondo Partidario restringe considerablemente los partidos. Cuando disputó su primera elección en 1989, el líder de PRONA Enéas Carneiro solo tenía 17 segundos, y no podía decir mucho más que su famoso leitmotiv «mi nombre es Enéas».

Pippa Norris presenta datos interesantes al analizar el efecto del sistema electoral sobre el voto en la derecha radical. Del análisis de los resultados electorales en 39 sistemas electorales diferentes, concluye que:

- a diferencia de la sabiduría convencional, la proporción de votos atribuidos a los partidos radicales de derecha en las últimas elecciones legislativas nacionales fue similar en los sistemas mayoritarios (7,2 %) y proporcional (7,1 %). La explicación de esta aparente contradicción con respecto a la «tesis del voto desperdiciado» es que, primero, la distancia entre los partidos radicales de derecha y otros partidos que podrían ser depositarios de «votos desperdiciados» es demasiado grande para seducir a los votantes, y en segundo lugar, el hecho de que los votantes de un partido de derecha radical a menudo están más interesados en «enviar un mensaje» a la clase política que en elegir un representante para la legislatura;
- la segunda conclusión es más intuitiva porque, a pesar de tener la misma proporción de votos, los partidos de derecha radical tuvieron más del doble de éxito en ganar escaños bajo representación proporcional que en los principales sistemas electorales. En las elecciones más recientes, los partidos radicales de derecha ganaron el 3,8 %los escaños en los sistemas mayoritarios contra el 9,9 % cuando fue proporcional;
- en cuanto a las cláusulas de barrera, pueden ser formales, cuando se definen específicamente mediante legislación electoral, o informales, cuando surgen de desproporciones en el sistema electoral debido a la mayor o menor magnitud del distrito electoral.[9] El impacto de las cláusulas de barrera en los resultados electorales radicales es controvertido, ya que si por un lado no parecen afectar el voto, en un efecto similar al del sistema mayoritario, por otro lado, la confirmación de los votos en asientos en sistemas proporcionales sin cláusula de barrera permite legitimar al partido como una opción aceptable y aprovechar más votos en las siguientes elecciones. En el caso de Brasil, es necesario considerar el regimiento interno del Congreso Nacional que privilegia a los partidos grandes y no ofrece incentivos a la acción individual y no partidista de los diputados. Esto explica por qué, después de elegir a seis diputados federales gracias a la votación récord de Eneas Carneiro por el PRONA en 2002, el partido vio reducido su representación federal a solo dos diputados después de que cuatro de ellos transfirieran se a partidos con más recursos de poder dentro del Congreso;
- en países donde el voto es obligatorio, los partidos radicales de derecha obtienen resultados más expresivos (8,8 % de los votos en las últimas elecciones contra 5,9 % de los votos cuando la votación es opcional), que el autor explica

9 Cabe señalar aquí que la «cláusula de barrera del cinco por ciento» impidió que los partidos extremistas de derecha ingresaran al *Bundestag* en Alemania hasta la década de 1990 (Stöss, 1991).

canalizando para la derecha radical partes de una votación de protesta que sería la expresión de un sentimiento anti partido y desaprobación del sistema político.

Consideraciones finales

El propósito de este capítulo era identificar la posibilidad de establecimiento un partido radical de derecha en Brasil. Primero, se presentaron los resultados de una serie de estudios de los partidos europeos de extrema derecha sobre programas partidistas, las características de su electorado, las actitudes de sus principales líderes y las circunstancias que acompañaran su reciente ascenso. En un segundo momento, se verificaron tanto la existencia de estas características en Brasil como la posibilidad de su fortalecimiento. El prejuicio de los partidarios de la derecha radical europea contra los inmigrantes de origen musulmán podría encontrar un paralelo peligroso en un prejuicio aún difuso, pero no menos presente contra el surgimiento de la «nueva clase media» en Brasil y el avance de los programas sociales de los gobiernos de izquierda de Lula y Dilma, contra los cuales se emprendió el golpe de 2016.

Nunca es demasiado vigilar contra el «despertar de la bestia», ya que varias de las condiciones que permitieron el surgimiento de la derecha radical en Europa también están presentes en Brasil:

- surgimiento de nuevos problemas y profunda transformación de la sociedad;
- crisis de representación;
- surgimiento de políticos carismáticos en la extrema derecha junto con la creciente personalización de la disputa política electoral;
- aumento de la alienación social y política y de la insatisfacción de los electores con la política tradicional.

Todas las condiciones sociológicas necesarias para un partido de derecha radical están presentes en Brasil, el terreno ideológico también está preparado para el florecimiento de ideas de extrema derecha, y las reglas institucionales no son suficientes para bloquear la creación de partidos de derecha radicales. Posiblemente no haya un partido de derecha radical en Brasil porque sus ideas ya son absorbidas por los partidos conservadores brasileños y no hay necesidad de defender públicamente posiciones de derecha radical.

Referencias bibliográficas

Adorno, Theodor W., Frenkel–Brunswik, Else, Levinson, Daniel J., Nevitt Sanford, R. (2019). *The Authoritarian Personality.* Verso.

Altermatt, Urs; Kriesi, Hanspeter (1995). *Rechtsextremismus in der Schweiz: Organisationen und Radikalisierung in den 1980er und 1990er Jahren.* Neue Zürcher Zeitung.

Art, David (2011). *Inside the radical right: the development of anti–immigrant parties in Western Europe.* Cambridge University Press.

Betz, Hans George (1994). *Radical Right–Wing Populism in Western Europe.* St. Martin's Press.

Betz, Hans George; Immerfall, Stephan (Eds.) (1998). *The New Politics of the Right: Neo–Populist Parties and Movements in Established Democracies.* New York: St. Martin's Press.

Beyme, Klaus Von (Ed.).(1988). *Right–wing Extremism in Western Europe.* Routledge.

Bodin, Dominique; Robène, Luc; Héas, Stéphane; Sempé, Gaëlle (2010). «Le football à l'épreuve du racisme et de l'extrémisme: un état des lieux en Europe». En Crettiez, Xavier; Mucchielli, Laurent (Comp.). *Les violencespolitiques en Europe: un état des lieux (pp.* 195–209). La Découverte.

Botsch, Gideon (2012). *Die extreme Rechte in der Bundesrepublik Deutschland 1949 bis heute.* WBG.

Brauner–Orthen, Alice (2001). *Die Neue Rechte in Deutschland: Antidemokratische und rassistische Tendenzen.* Leske und Budrich.

Brecht, Bertold (1976). *La Résistible Ascension d'Arturo Ui*. [1941] *Théatrecomplet, Volume 5* (Trad. par Armand Jacob). L'Arche.

Buford, Bill (1992). *Entre os vândalos. A multidão e a sedução da violência.* Companhia das Letras.

Caiafa, Janice (1989). *Movimento Punk nacidade. A invasão dos bandos sub.* Jorge Zahar.

Costa, Márcia Regina da (2000). *Os carecas do subúrbio.* Musa.

Deutsch, Sandra McGee (1999). *Las Derechas. The extreme right in Argentina, Brazil, and Chile 1890–1939.* Stanford University Press.

Fernandes, Florestan (1972). *O negro no mundo dos brancos.* Difel.

Fisher, Max; Taub, Amanda (2019). *How YouTube Radicalized Brazil. The New York Times*. Recuperado en https://www.nytimes.com/2019/08/11/world/americas/youtube–brazil.html

Giblin, Béatrice; Lacoste, Yves (Comp.) (2012). *L'extrêmedroite en Europe. Hérodote – revue de géographie et de géopolitique, 144.* La Découverte.

Giddens, Anthony (1994). *Beyond left and right. The future of Radical Politics.* Polity Press.

Givens, Terry E. (2005). *Voting radical right in Western Europe.* Cambridge University Press.

Gordon, Peter E. (2019). Introduction to the authoritarian personality. En Adorno, T. W., Frenkel–Brunswik, Else, Levinson, Daniel J., Nevitt Sanford, R. (2019). *The Authoritarian Personality.* Verso.

Hainsworth, Paul (1992). *The extreme right in Europe and the USA.* St. Martin's Press.

Harris, Geoffrey (1990). *The Dark Side of Europe. The Extreme Right Today.* Edinburgh University Press.

Hirschman, Albert O. (1991). *Deux siècles de rhétoriqueréactionnaire.* Fayard.

Horkheimer, Max; Adorno, Theodor (2012). «Projeto de pesquisa sobre o antissemitismo: a ideia do projeto». *Temáticas, Dossiê Pensamento Conservador e Modernidade 39* (20), 109–143.

Ignazi, Piero (2003). *Extreme Rights Parties in Western Europe.* Oxford University Press.

——— (2000). *L'estremadestra in Europa: da Le Pen a Haider.* Il Mulino.

Kassam, Ashifa (2013). Real Madrid moves to send off Ultras Sur fans. *The Guardian,* Recuperado en https://www.theguardian.com/world/2013/dec/09/real–madrid–ultras–sur–fans

Kinzo, MariaD'Alva G. (1993). *Radiografia do quadropartidário brasileiro.* Konrad Adenauer Stiftung.

Kitschelt, Herbert (1995). *The Radical Right in Western Europe. A comparative analysis.* The University of Michigan Press.

Konopnicki, Guy (1996). *Les filièresnoires.* Paris: Denoël.
Kriesi, H.; Gentile, P. (1998). «Contemporary Radical–Right Parties in Switzerland: History of a Divided Family». En Betz, H. G.; Immerfall, S.*The New Politics of the Right: Neo–Populist Parties and Movements in Established Democracies* (pp. 125–141). St. Martin's.
Latinobarómetro. *Informe 2011.* Recuperado en www.latinobarometro.org
——— *Informe 2016.* Recuperado en www.latinobarometro.org
Langebach, Martin; Speit, Andreas (2013). *EuropasradikaleRechte: Bewegungen und Parteien auf Strassen und Parlamenten.* OrellFüssli.
Le Bohec, Jacques (2005). *Sociologie du phénomène Le Pen.* La Découverte.
Mainwaring, Scott; Meneguello, Rachel; Power, Timothy (2000). *Partidos conservadores no Brasil contemporâneo: quaissão, o que defendem, quaissãosuas bases.* Paz e Terra.
Mair, Peter (2007).«Left–Right Orientations». En Dalton, Russell J.; Klingemann, Hans–Dieter (Eds.). *The Oxford Handbook of Political Behavior* (pp. 206–222). Oxford University Press.
——— (2006). «Party System Change».En Katz, Richard S.; Crotty, William (Eds.). *Handbook of Party Politics.* Sage, 63–73.
Mammone, Andrea; Godin, Emmanuel; Jenkins, Brian (2013). *Varieties of Right–Wing Extremism in Europe.* Routledge.
Marshall, George (1993). *Espírito de 69. A bíblia do skinhead.* Trama.
Mathieu, Lilian; Pattieu, Sylvain (Comp.) (2003). *Nouveaux monstres et vieuxdémons: déconstruirel'extrême droite*. *Contretemps, nº8.* Textuel.
Meret, Susi (2009). *«The Danish People's Party, the Italian Northern League and the Austrian Freedom Party in a Comparative Perspective: Party Ideology and Electoral Support».* Aalborg University: Institute of History and International Social Studies, PhD dissertation.
Merkl, Peter H., Weinberg, Leonard (1993). *Encounters with the contemporary radical right.* Westview Press.
——— (Dir.) (1997). *The revival of right–wing extremism in the nineties.* Frank Cass.
Milza, Pierre (2002). *L'Europe en chemisenoire. Les extrêmesdroites européennes de 1945 à aujourd'hui.* Fayard.
Norris, Pippa (2005). *Radical Right: voters and parties in the electoral market.* Cambridge University Press.
Pierucci, A. F. (1987). «As bases da nova direita». *Novos Estudos, 19,* Dezembro.
Psarras, Dimitris (2014). *Aube Dorée: livrenoir du parti nazi grec.* Syllepse.
Salas, Antonio (2006). *Diário de um skinhead. Um infiltrado no movimentoneonazista.* Planeta.
Sartori, Giovanni (1976). *Parties and party systems.* Cambridge University Press.
Scheuch, Erwin; Klingemann, Hans D. (1967).«Theorie des Rechtsradikalismus in westlichen Industriegesellschaften». *Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts und Gesellschaftspolitik. Tübingen 12* (11–29).
Schroder, Burkhard (1992). *RechteKerle: Skinheads, Faschos, Hooligans.* Rowohlt.
Stöss, Richard (1991). *Politics against democracy: Right–wing extremism in West Germany.* Berg.
T**esta, Alberto; Armstrong, Gary** (2013). «The Ultras: the extreme right in contemporary Italian football» En Mammone, Andrea; Godin, Emmanuel; Jenkins, Brian. *Varieties of Right–Wing Extremism in Europe.* Routledge.
Traverso, Enzo (2019). *The new faces of fascism, populism and the far right.* Verso.
Vidal, Dominique (2012). *Le ventre est encore fécond: les nouvelles extrêmes droites en Europe.* Libertalia.

Golpe contra el Estado en Bolivia

Cecilia Lesgart

Bolivia exige ser pensada y su situación necesita ser articulada políticamente con palabras claras más acá de los juegos de lenguaje, porque en los conceptos que usamos públicamente anidan las batallas políticas del presente.

Bolivia emerge dentro de una situación política muy complicada para la América Latina actual, una *región en donde la democracia está en abierta disputa* como construcción de un horizonte común de sentido y como lazo que une a representantes y representados. Y donde, al mismo tiempo que se ha deprimido la presencia de organizaciones regionales que actúen en la promoción de espacios de diálogo y de negociación en caso de conflictos,[1] se renueva la presencia de los militares en la vida pública y/o gubernamental. Situación que no replica, pero renueva el recuerdo del pasado reciente de golpes militares y dictaduras cívico–militares en la región (Pellet Lastra, 2019; Pirotta, 2019; Tokatliàn, 2019).

En octubre de 2019 en Chile emergieron protestas sociales disparadas por la suba del boleto del metro a las que el presidente Piñera respondió, antes que nada, con un inescrupuloso «estamos en guerra». Protestas sociales y políticas que intentaron ser reprimidas y no lo lograron con la declaración de estado de sitio, la ostensible presencia de carabineros y militares en el espacio público y una represión que vulnera seriamente el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de sus ciudadanos. La cifra de heridos de balas de goma especialmente disparada en los ojos se acrecentó, como también la de perseguidos y detenidos y es aún incierta la de los muertos en las protestas (Yaccar, 2019).[2] Diferentes son los ciudadanos que han declarado haber sido golpeados y atropellados y las mujeres han denunciado violencia sexual en situación de detención policial o de arresto arbitrario. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha manifestado que en Chile existió un uso excesivo de la fuerza y actos de violencia generalizada contra los ciudadanos. Ecuador había declarado el toque de queda unas semanas antes y la represión a las movilizaciones sociales ante los ajustes impuestos por las medidas del FMI también le fue confiada a los militares. En Perú, el mes de octubre ha sido institucionalmente controvertido. El presidente disolvió al Congreso que sucesivamente suspendió al presidente, y la vicepresidenta juramentó en su lugar. También aquí las FF. AA. contribuyeron al sostenimiento de un controvertido orden político.

La *renovada presencia de los militares en la vida pública* es heterogénea pero contundente. Ocupa funciones clave en gobiernos cuyos países padecieron golpes de estado y cruentas dictaduras militares. Como en Brasil, donde el

presidente Jair Bolsonaro y el vicepresidente son un capitán y un coronel retirados, pero dentro de un gabinete que tiene a los militares como funcionarios en distintas líneas. En México, las FF. AA. han sido sacadas al espacio público para reprimir el crimen organizado. Y allí también han contribuido, como en Guatemala, El Salvador y Honduras, en las tareas de represión de los migrantes. Exceptuando Costa Rica, en Centroamérica las FF. AA. son utilizadas para tareas de seguridad interna, regulación del narcotráfico y contención ofensiva de los migrantes. El fracaso del diálogo en Colombia los ha puesto en escena, y en Venezuela sostienen el gobierno del presidente Maduro.

Por todo esto, la «sugerencia» realizada por la policía y las FF. AA. a Evo Morales en el momento inmediatamente posterior a que el presidente aceptara los resultados de la Auditoria de la OEA y llamara a elecciones para encontrar una salida institucional a la crisis política desatada, no solo renueva la presencia de los militares y policías en la vida pública y política. Desnuda la marcada acción de amenaza coactiva de dos de las instituciones estatales que poseen el monopolio de la violencia física sobre el personaje político principal. Un presidente que, si hubiese funcionado el Estado Constitucional de Derecho, tendría que haber encontrado en esas dos instituciones subordinación. En cambio, inmediatamente después de producida esa recomendación coactiva, la policía que hasta ese momento había estado amotinada se desacuartelό y, haciendo uso de un artículo de una Constitución que ya había violado, recurrió a las Fuerzas Armadas para dar el batacazo siguiente. He aquí el núcleo principal de la *situación golpista*.

Esto es un golpe

Hay que insistir y hacer audible que nada de lo acontecido con anterioridad al domingo 9/11 justifica el golpe del 9/11. Ojalá llegue el momento en que se puedan discutir las múltiples causas y comportamientos políticos que corroen por dentro a las democracias.[3] Pero hoy, ninguna de las controversias institucionales anteriores acerca del carácter más o menos forzado (pero no informal) de los arreglos que llevaron al tercer mandato de Evo Morales,[4] ni la suspen-

3 Que pueden llamarse de muy distintas maneras: «muerte lenta de la democracia», «desdemocratizaciòn de la democracia», «crisis de la democracia liberal». Consultar, entre otros Levitsky y Ziblatt (2018); Galli, Carlos (2013).

4 En 2009 El presidente Evo Morales convocó a una reforma constitucional en la que se establecieron dos períodos consecutivos como límite a la elección presidencial. Por lo que su deseo de presentarse para un tercer mandato consecutivo quedaba constitucionalmente inhabilitado. Ante esta situación convocó a un plebiscito ciudadano para dirimir su candi-

sión momentánea del recuento de votos aguardando los resultados que provenían de las zonas rurales, justifica la ruptura institucional y la vulneración del Estado de Derecho provocados por el «golpe político–policial y cívico» —para llamarlo, provisoriamente, con las palabras del presidente Morales—.[5]

Es que el tiempo de las controversias institucionales anteriores quedó interrumpida en el preciso instante en que la policía (acuartelada hasta ese momento)[6] y las FF. AA., ambas instituciones armadas que poseen el monopolio de la fuerza física, desoyeron y desposeyeron de todo valor político e institucional el llamado de Evo Morales a elecciones para garantizar una salida institucional a la crisis. La propuesta presidencial era democrática porque tras los resultados arrojados por la Auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), *Evo Morales llamó a elecciones*. Aunque los fundamentos de acusación sobre el fraude no están claros ni en el informe de la OEA (que habló de «irregularidades») ni en la oposición política boliviana. El presidente no solo tomó un camino institucional. Se avino, además, a la posibilidad de que la contingencia del resultado de unas nuevas elecciones le fueran adversas para el triunfo de su candidatura y del MAS. Por lo que la «sugerencia» coactiva de la policía y de las FF. AA., realizada casi en forma simultánea al llamado a elecciones, revela *el golpe*.

Toda la situación coercitiva y represiva de invasión policial y militar del espacio público, que se extendió antes, durante y después del 9/11, muestra la decisión golpista de desplegar la violencia estatal y clausurar las garantías del Estado de Derecho. No es solamente la orden de detención librada contra el presidente por una policía que después negó lo dicho pero fue a buscar a las FF. AA. amparándose en el artículo de una Constitución que ya había violado, también es la ocultación clandestina de Evo Morales, quien tuvo que protegerse con los «hermanos de las Federaciones del trópico», su gente, los cocaleros del Chapare. En el momento en que le sacaron el avión presidencial fueron los militares los que impidieron la salida legal del territorio boliviano. Posteriormente el saqueo y el vandalismo hacia su casa. Por supuesto que hubo otros arrestos posteriores que pusieron en evidencia que la circulación de formas de amedrentamiento, persecución, violencia física, racial y xenófoba de los días previos abrevaron en el golpe. Las listas negras que circularon los días anteriores al 9/11, una alcaldesa tomada como rehén y torturada, amenazas de quema de los domicilios particulares de distintos funcionarios y de legisladores del MAS, la toma de otros rehenes que fueron agredidos, violentados

---

datura. Ante los resultados adversos lo resolvió el Tribunal Constitucional, que lo habilitó por fallo a presentarse. Por lo tanto, es una candidatura devenida de un fallo judicial. Antes del año 2009, Evo Morales había ejercido un mandato presidencial.

y humillados, muestran la manera en que se inician los autoritarismos (Lesgart, 2020), aunque aún no se pueda hacer prospectiva de la forma política que sobrevendrá. La declaración de estado de sitio *de facto* el día lunes 11 a la noche revela el socavamiento del Estado de Derecho, y muestra una vez más el *golpe contra el Estado*.

Qué tipo de golpe es y cuál no es

El conjunto de acciones, declaraciones y la ostensible presencia de la policía y de las FF. AA. en el espacio público y en la vida pública boliviana en estos días cruciales no convierten al golpe en un golpe militar. Al menos, no lo es en el sentido en que nos enseñaron las experiencias conclusivas de apoderamiento enérgico del poder político de los años 60 y 70 del siglo pasado. Cuando las FF. AA. como institución y como actor estatal, derrocaban y destituían por la fuerza a autoridades legítima y legalmente constituidas y se hacían cargo de las riendas del gobierno y del Estado. Como en el caso de Argentina, apoyándose en la Doctrina de Seguridad Nacional e implantando el terror estatal (Lesgart, 2019).

Pero al ser dos instituciones estatales y dos actores que poseen el monopolio de la fuerza física legítima las que «sugieren», mediante amenaza coactiva y uso manifiesto de la fuerza, la renuncia de un presidente y de un gobierno legítimo y legalmente constituido tras un nuevo llamado a elecciones, golpean al presidente Evo Morales y al gobierno del MAS. Este desplazamiento provocado mediante «sugerencia» coactiva y uso manifiesto de la fuerza es novedoso en relación con las anteriores formas de acceso al poder político que suelen manifestarse en los golpes de Estado: no es estrictamente una remoción por la fuerza ni un derrocamiento ni una destitución.

El uso de la fuerza golpea la institución impersonal del Estado, desafiando a un Estado Constitucional de Derecho que ya estaba severamente dañado por la no subordinación de dos fuerzas estatales al mando constitucional y por la generalizada situación de persecución, amedrentamiento y violencia policial hacia la oposición y hacia la población. Es, por tanto, un golpe contra la institución impersonal, aunque no se trata, como en los golpes militares, de la conquista ofensiva y violenta del Estado por parte de un actor colectivo, elitista y minoritario. Aún no se puede prever cuán definitivo o concluyente es este golpe, porque un golpe no inaugura necesariamente un nuevo tipo de régimen político o una nueva forma política. Lo dicho hasta aquí hace visible a uno de los actores que Evo Morales nombró como responsables del «golpe cívico, político y policial».

Este golpe tampoco se ajusta a los llamados golpes parlamentarios, en donde un conjunto de acciones audaces, pero no secretas ni sorpresivas, son realizadas desde uno de los poderes hacia otro, generando el desplazamiento de autoridades legítimas. Tampoco se parece a los golpes dentro de la democracia (blando, constitucional, institucional), como el denunciado en Brasil por Dilma Rousseff y llamado por quienes la sucedieron en el gobierno como *impeachment* en el año 2016, o la moción de censura contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012. En ellos, una acción o conjunto de acciones de actores formales —estatales y gubernamentales—[7] generan inestabilidad hacia un gobierno generando un desplazamiento por mecanismos institucionales o constitucionales de autoridades legítimamente constituidas, que golpean al gobierno sin alterar el régimen político.

Así, los intentos por recuperar el funcionamiento institucional previamente violado y dañado se vuelve complicado en la Bolivia actual. Tras la *«sugerencia» coactiva* a la renuncia del presidente y del vicepresidente, se sucedieron las renuncias de una parte nutrida de la línea sucesoria establecida por la Constitución. Renuncias que, paradojalmente, no pudieron ser aceptadas o rechazadas por la falta de garantías constitucionales y amenazas para el trabajo parlamentario. Las que son denunciadas por los políticos y funcionarios, muchos de los cuales, además y por ahora, no darán quorum reglamentario para refrendar una renuncia coactivamente sugerida.

Esto llega hasta la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la senadora santacruceña del oriente terrateniente Jeanine Añez, quien se autoproclamó presidenta interina de Bolivia fuera de todo mecanismo de convalidación constitucional y de todo consenso legislativo, dado que no hubo quorum en las sucesivas reuniones parlamentarias. Aún resta por considerar cómo se rencauzará este conjunto de acciones. Pero hay que subrayar que Jeanine Añez no cuenta con legitimidad de origen. Y se autoproclamó por mecanismos institucionales que, en el estado de situación actual, no siguen el ordenamiento constitucional para cubrir la acefalía. Por ahora, esta senadora ha callado la audibilidad que tuvieron en su momento el hombre visible de la oposición política Carlos Mesa y el hombre de Santa Cruz, proveniente de la derecha conservadora, católica y reactiva contra las tradiciones de los pueblos originarios, Fernando «el macho» Camacho (Stefanoni; Molina, 2019). Esto hace visible a otro conjunto de actores políticos que Evo Morales nombró como responsables de lo que llamó golpe cívico, político y policial, aunque no sean ellos los golpistas.

7 Aunque puedan participar también actores informales y civiles, en el golpe institucional o constitucional, decisiva es la acción de los formales y gubernamentales.

El tiempo posgolpe

Este tiempo de oscuridad en Bolivia nos deja algunos legados que la región tal vez esté a tiempo de asumir.

Nada de lo ocurrido con antelación al 9/11 lo justifica. Pero hay que subrayar que hay líderes de diversos lugares del mundo que suelen forzar las reglas institucionales y constitucionales debilitando los regímenes democráticos y forcejeando con la decisión popular soberana. Este problema no es una particularidad latinoamericana, aunque en nuestros países esta suele ser una práctica que se generaliza con el transcurrir de los tiempos democráticos. Aunque se lo ha llamado de muy distintas maneras[8] es una de las *regresiones constitucionales* más palpables de las democracias contemporáneas. Problema que pone en escena complejas tradiciones políticas que hoy conviven como arreglos conflictivos: la democracia, el populismo, el liberalismo político, el Estado de Derecho. Y que se entronca con la espinosa cuestión de la sucesión presidencial y/o de los líderes en el mundo actual. Aun cuando la democracia debe entenderse como un orden conflictivo, la alteración o el forzamiento de las instituciones formales generan una inestabilidad corrosiva para los regímenes políticos democráticos. La Bolivia anterior al 9/11 obliga a pensar estas cuestiones.

Hay prácticas que sobrevinieron al 9/11, que forcejean con el núcleo de sentido de las democracias: la expresión del pueblo soberano. En este caso, a diferencia de lo anterior, se trata de mecanismos constitucionales, como el toque de queda o el estado de sitio, que ya no pueden integrarse ligeramente en el repertorio de las prácticas de un estado democrático. La presencia renovada y heterogénea, pero extendida y contundente de las FF. AA. y de la policía en el espacio público de los distintos países de la región, deja el legado de la necesidad de formación democrática y del control civil que debe establecerse sobre las fuerzas destinadas a la seguridad y de las fuerzas destinadas a la defensa nacional. Dos actores que, como muestra la Bolivia de hoy y de manera contundente enseñan las dictaduras militares de los años 60 y 70, no están destinados a suplantar al pueblo soberano. Tampoco están capacitados para interpretar o sugerir, mucho menos mediante amenaza coactiva y uso manifiesto de la fuerza, el destino democrático de los gobiernos de nuestros países. La Bolivia anterior y posterior al 9/11 lega la urgencia de construir políticas públicas dentro y fuera de su territorio nacional.

---

8 Autoritarismo competitivo, global, régimen híbrido, pseudo–democracia. Consultar: Diamond, 2004; Levitsky, 2004; Diamond, M. Plattner, Walker (2016).

Actualmente los mecanismos institucionales que funcionan siguen siendo ilegítimos, pero ha habido disposición de los actores para el diálogo nacional. La presidente Jeanine Añez tiene 3 meses (por disposición constitucional) para convocar a elecciones y aunque todavía no ha puesto fecha cierta, el reciente Congreso del MAS que ha colocado a Evo Morales como jefe de campaña, muestra el esfuerzo de los actores políticos y sindicales por encontrar un canal institucional para canalizar el tiempo político post golpe. Sobre todo, queda en duda cómo y quiénes serán los que, finalmente, nombren los vocales que integren el Tribunal Supremo Electoral. En el caso de Bolivia y a pesar de los esfuerzos institucionales arriba descriptos, la democracia como régimen político ha sido duramente minada. Pero, además, la crisis política pre y post golpe han demostrado la endeblez y el golpe contra el Estado de derecho. Tras toda la violencia represiva de los días previos al golpe y durante las jornadas en que este aconteció, el decreto 4078 dictado por la presidente le exime de responsabilidad penal a las FF. AA. por la represión. Y así se sucedieron la declaración de sedición hacia los periodistas nacionales, el hostigamiento a los medios de comunicación extranjeros y las masacres de Sacabe y de Sankata. El juego institucional establecido como diálogo nacional se mantiene, pero están severamente dañados el derecho del pueblo a manifestarse, la libertad de expresión y libertad de prensa. El estado se ha desobligado de proteger a sus ciudadanos.

También por estos días en que hay muchas voces disputándose la soberanía se nota la falta de organismos regionales que se imaginen reconstruyéndose sobre el declive y el desprestigio actual de muchas de las instituciones nacidas al calor de la Segunda Posguerra mundial y del sistema de Naciones Unidas. Tal vez otro de los legados que nos deja Bolivia es la necesidad de unos organismos regionales sólidamente comprometidos con el futuro democrático de América Latina. Una democracia que, como nos lega cada uno de los países de la región, es un orden común litigioso pero contingente.

Referencias bibliográficas

De la Peña, Ricardo (2019). *Sobre el informe de la elección en Bolivia, 2019.* Recuperado en https://oraculus.mx/2019/11/11/sobre–el–informe–de–la–eleccion–en–bolivia–2019/

Diamond, Larry (2004). Elecciones sin democracia. A propósito de los regímenes híbridos, *Estudios Políticos 24,* 117–134.

Diamond, Larry; Plattner, Marc y Walker, Christopher (2006). *Authoritarianism goes global. The challenge to democracy.* Johns Hopkins University Press.

Galli, Carlos (2013). *El malestar de la democracia*. Fondo de Cultura Económica

Lesgart, Cecilia (2019). Golpes de Estado y Golpes constitucionales. Usos e innovación de un concepto político fundamental, *PolHis. Revista del Programa de Historia política, 23 (*12), 163–194.

——— (en prensa). Autoritarismo. Historia y problemas de un concepto contemporáneo fundamental. *Revista Perfiles Latinoamericanos.*

Levitsky, Steven (2004). Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo, *Revista Estudios Políticos, 24,* 159–176.

Levitsky, Steven y Ziblatt, Daniel (2018). *Cómo mueren las democracias.* Ariel.

Long, Rosnick, Guillaume Long (et ál.) (2019). What happened in Bolivia's 2019 vote count? *The role of the OAS electoral observation mission. Center for Economic and Policy Research*.

Pellet Lastra, Ramiro (2019). En América Latina, los militares ganan terreno al calor de la inestabilidad. *Diario La Nación.* 25 de octubre de 2019.

Pirotta, Ignacio (2019). Los militares, Bolsonaro y la democracia brasileña, *Revista Nueva Sociedad,* Recuperado en https://www.nuso.org/articulo/los–militares–bolsonaro–y–la–democracia–brasilena/

Stefanoni, Pablo y Fernando Molina (2019). Bolivia y la contrarrevolución. ¿Cómo derrocaron a Evo? *Revista Anfibia http://revistaanfibia.com/ensayo/como–derrocaron–a–evo/*

Tokatliàn, Juan Gabriel (2019). Latinoamérica y el retorno de la cuestión militar. *Diario Página 12,* 12/11/19.

Yaccar, María Daniela (2019). El desborde en Chile. *Diario Página 12,* 10/11/2019.

Desafíos feministas en un contexto de nuevas derechas

Sacha Victoria Lione / Marina Andrea Martínez

Introducción

En las elecciones nacionales del año 2015 se inició un período de gobierno liderado por la unión entre el partido denominado Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR), y la Coalición Cívica. Por primera vez en la historia de nuestro país, fuimos espectadores de la asunción de un gobierno de derecha por vía democrática (Natanson, 2018). Este proceso que inició es el síntoma de una «modificación profunda en el lazo social y en las solidaridades que unen nuestra sociedad, en los vínculos que mantienen los diferentes grupos sociales que la integran, en sus creencias, valores e intereses, en las relaciones que entabla con la política» (Canelo, 2019:19).

En el afán de nominar este actor político que irrumpe en el escenario nacional, se lo ha conceptualizado como un gobierno de «nueva derecha», categoría que también ha sido empleada para hablar de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan; y su expresión nacional encarnada en Carlos Menem. El estiramiento conceptual en el que se inscribe la categoría, si bien es relevante reconocerlo, no constituye objeto de interés del capítulo.[1] Lo que si buscamos problematizar es cómo en la alianza política de Cambiemos, que accedió democráticamente al poder, y que encarna la amalgama de dos tradiciones políticas contrapuestas (conservadurismo y liberalismo), existen intersticios en los que se expresan ciertas corrientes del feminismo.

De acuerdo con Souroujon (2018) existen afinidades electivas entre un tipo de conservadurismo y un tipo de liberalismo que en determinados contextos históricos emergen como aliados estratégicos. Entonces, aquellas tradiciones políticas antitéticas, históricamente pensadas enfrentadas y con principios contrarios, logran generar espacios de acuerdos. En ese escenario político con una fuerza política a cargo de la gobernación del país, que proponía un agresivo plan de refundación de la sociedad argentina (Canelo, 2019) nos preguntamos: ¿cómo se infiltran expresiones del feminismo dentro de la alianza de Cambiemos? ¿cuáles son los espacios en los que se lo habilita? ¿cómo es posible la existencia de un feminismo que no critique un modelo económico pro-

1 Para recuperar los debates sobre lo novedoso de las «nuevas derechas» se recomienda Giordano (2014) y Souroujon (2018).

ductivo que genera empobrecimiento y precariedad de la vida? ¿cuáles son los desafíos del movimiento feminista en este contexto?

Cuando hablamos de feminismo, lo hacemos en plural, justamente porque hay múltiples lecturas y expresiones del más amplio y diverso espectro. Como sostiene Masson:

> Las denominaciones diversas, que conforman el feminismo y lo convierten al plural *feminismos*, traducen al lenguaje, bajo la forma de taxonomías, el juego de oposiciones a partir del cual las feministas, dotadas de propiedades sociales específicas parcialmente diferentes, pero en parte también comunes, que se reconocen entre sí. (2007:114)

Entonces, en el repertorio de categorizaciones de feministas, nos resulta llamativo que se reconozca como una oposición (u opción) «válida» a las feministas «de derecha», que se inscriben en estos espacios políticos en los que también subyacen un conjunto de contradicciones sui generis. Asimismo, cabe la pregunta de cómo pueden coexistir en el movimiento feminista, un movimiento político cuya piedra angular es la crítica a una estructura conservadora de poder como es el patriarcado, expresiones de derecha.

En este capítulo buscamos compartir un conjunto de reflexiones incipientes que pretenden generar más preguntas que certezas. Las ideas que expondremos son puntapiés para seguir profundizando en el análisis acerca de las contradicciones y las posibilidades de emergencia de sectores feministas que tienen espacio de expresión dentro de una fuerza liberal conservadora, como lo es Cambiemos. El presente escrito es producto de la reflexión crítica en un contexto que nos preocupa y en el cual pensamos y repensamos los marcos teóricos y la praxis política al mismo tiempo que avanza la marea feminista.

En el apartado siguiente buscamos esbozar cómo en un escenario en que una alianza de derecha elegida democráticamente habilita la emergencia de espacios de expresión de «feministas» de derecha. Planteamos un intertexto con la categoría de «derecha» para pensar las connotaciones que sorteaba en la década de 1980 en contraposición a la década de 1990 y la contemporaneidad. Asimismo, recuperamos los inicios del «Ni una menos» y la confluencia de espacios disímiles de feministas y no feministas detrás de una consigna de fácil acuerdo como es el: «no nos maten».

Seguidamente, reflexionamos sobre los desafíos feministas frente a un gobierno de nueva derecha. Tomando en consideración los aportes teóricos de Nancy Fraser, en especial su concepto tridimensional de justicia (entendiéndose como redistribución, reconocimiento y representación) analizamos las nuevas expresiones tanto liberales como conservadoras que se expresan en la alianza Cam-

biemos y los desafíos que ello le imprime al feminismo en cuanto movimiento revolucionario. La pregunta que subyace en todo el apartado se la debemos a Angela Davis (2019): ¿cómo es posible levantarse y defender la justicia solo para un tipo de personas y permitir que la injusticia afecte a otras?

En el tercer apartado, planteamos que más allá de los avances del feminismo neoliberal, también hay una fuerte puja y consolidación de un movimiento feminista que tiene expresiones no solo antipatriarcales, sino también antirracistas y anticapitalistas. Además de incluir una multiplicidad de identidades disidentes que trascienden la idea de«mujer», estas expresiones feministas pueden ser la base para pensar una nueva estrategia contrahegemónica, reivindicando políticamente un feminismo plural, diverso, inclusivo, antirracista y anticapitalista.

¿Un feminismo de derecha?

Tal como introdujimos, la alianza PRO–Cambiemos encarna en su seno la contradicción de representar dos tradiciones políticas contrapuestas. De acuerdo con Giordano (2014), el motivo de encuentro y aglutinante de esta alianza de derecha consistía en la necesidad de vencer lo que se consideraban fuerzas políticas progresistas no sólo en el páis sino que en todo el Cono Sur. Frente a esta avanzada fue alucinante la consolidación de las Derechas, no solo en latinoamérica, sino que también en el contexto internacional, con la restauración de ideas conservadoras e incluso reaccionarias (Berdondini, 2019).

En este contexto, desde que asumió el gobierno en el año 2015 hasta la actualidad, Cambiemos se presentó como una fuerza política que se diferenciaba con creces del proyecto político social cimentado por el kirchnerismo desde el año 2003, distancia que se expresaba en un desmantelamiento de los pilares

que sostuvieron aquel otro gobierno.[2] No obstante, no solo buscó distanciarse y plantear una alternativa respecto de quienes los precedían inmediatamente, sino que hubo intenciones —con diferentes grado de éxito— de

2 Como sostiene Natanson: «Al comienzo, en efecto, Macri aplicó una serie de *shocks*: desmontó de un día para el otro el complicado sistema de control de cambio establecido por el kirchnerismo; avanzó en la desregulación de algunos sectores, sobre todo aquellos con los que tenía compromisos políticos (en telecomunicaciones, por ejemplo, adoptó una serie de medidas favorables a los intereses del Grupo Clarín); bajó o eliminó los impuestos a la exportación –las retenciones—, otro compromiso asumido durante la campaña; y avanzó en una veloz y muy costosa normalización del frente financiero mediante el pago de la totalidad de la deuda reclamada por los «fondos buitres». La política exterior, en tanto, giró a la búsqueda de una serie de acuerdos de libre comercio (se intentó avanzar sin éxito en un tratado entre el Mercosur y la Unión Europea), el acercamiento a las potencias occi-

reemplazar algunos de los pactos y creencias cimentados en la vuelta a la democracia de 1983[3] (Canelo, 2019).

En el contexto de emergencia de una «nueva» expresión de fuerzas políticas de derecha, las reivindicaciones del movimiento feminista se reorganizan y transmutan a nuevas oposiciones, donde se consolidan renovados conflictos y disputas entre los diversos sectores que se expresan dentro del mismo. La forma en que se posicionan ciertas figuras influyentes de mujeres dentro de la alianza Cambiemos, supone una experiencia novedosa y a la vez contradictoria. De acuerdo con Paula Canelo (2019), no se puede pensar en un tipo de «mujer de derecha» homogénea, sino que los rasgos más sobresalientes de las figuras que analiza es su heterogeneidad. Ahora ninguno de los diversos «tipos ideales» que analiza la autora, que emergen desde Cambiemos, se reconocen como feministas, sino que se presentaron como mujeres tradicionales o conservadoras, perfil que se puso en tensión con el fuerte avance de la agenda de género y el movimiento de mujeres.

Contradictoriamente, con estas figuras fue peculiar el involucramiento de ciertas mujeres y disidencias del espacio de Cambiemos en la movilización y consolidación del «Ni una menos». Si bien el reclamo enunciado de «no nos maten» y la puesta en evidencia de la cantidad de feminicidios por día es una consigna de fácil acuerdo, puso en evidencia un síntoma del conflicto que subyace en el movimiento feminista: Hay un consenso de los diversos sectores feministas (y no feministas) que entienden que los feminicidios constituyen una de las expresiones más violentas del patriarcado. Lo que no es tan sencillo acordar es el porqué de tales sucesos, y allí radican las contradicciones de pensar feminismos de derecha.

Para reflexionar sobre el feminismo de derecha debemos recuperar históricamente el calificativo «derecha», tanto en América Latina como en nuestro país, ya que nos remite sensible e ineludiblemente a realizar intertexto con las experiencias dictatoriales atravesadas por el continente. Cabe resaltar, que las feministas que comienzan a militar en la década de 1980 en Argentina, que venían de experiencias de partidos de izquierda (algunas exiliadas

dentales y el deseo (…) de ingresar en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde). Al mismo tiempo, mantuvo bajo control público el sistema jubilatorio estatizado durante el gobierno anterior y no avanzó en la reprivatización de las empresas nacionalizadas (Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Aerolíneas Argentinas)» (2018:25).

3 Para ejemplificar, recuperamos el dictamen de la Corte Suprema que habilitaba beneficios a la hora de computar las penas de quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad (fallo que había sido apoyado por dos de los jueces que había designado Cambiemos). Este intento fue ahogado, por el gran despliegue de protestas masivas lo que obligó al Congreso a votar una ley que prohibía la aplicación del «2x1» (Vommaro, 2017).

en otros países durante la dictadura militar y que importaron experiencias del feminismo de otros países), abrazaron la causa de los derechos humanos y el acompañamiento a las Madres de la Plaza de Mayo. De esta manera, se obturaba la posibilidad de que exista una oposición de feministas «de izquierda» y feministas «derecha» (Masson, 2007). Como sostiene la autora, «una mujer que fuera acusada de ser de derecha (siendo que esta palabra es asociada al gobierno militar y al terrorismo de Estado en Argentina) difícilmente podría ser reconocida por otras militantes como parte del feminismo» (2007:137).

En la actualidad el escenario parece ser más complejo. La distancia y diferencia de los gobiernos dictatoriales institucionales de las Fuerzas Armadas —fundados en el terrorismo de Estado y la Doctrina de Seguridad Nacional— reside en que hoy estas «nuevas derechas» entrañan de forma llamativa consignas propias de la democracia social e incluso de cierto liberalismo cultural (Giordano, 2014). Es allí donde emergen otras posibilidades de los feminismos.

Esto no significa que las derechas contemporáneas sean democráticas por convicción, sino que las burguesías latinoamericanas, que encuentran en la derecha una de sus más connotadas formas de expresión política, tienen un vínculo contingente con la democracia. Y hoy estamos transitando una de esas contingencias históricas en las que las derechas y la democracia vienen asociadas (Giordano, 2014).

La contradicción fundante de la alianza se tradujo en esquivar públicamente un posicionamiento político sólido y coherente. Es decir, es una alianza que buscó sortear o evitó sincerar definiciones ideológicas como las que poseían ciertos partidos de derecha tradicionales (Vommaro, 2014). En los intersticios de estas objeciones emergen ciertas interpretaciones del feminismo vinculadas a mujeres que militan en Cambiemos, facilitadas por un escenario de un «partido que mira para adelante» (Vommaro, 2014) y que pretende sortear los encasillamientos de «izquierdas» y «derechas».

Esta pretensión tiene su limitación cuando observamos su incuestionable orientación en el arco de las derechas a partir de los posicionamientos socioeconómicos que se presentan compatibles con el neoliberalismo y sus posturas conservadoras en temas éticos, culturales y políticos (Berdondini, 2019). Allí radican las contradicciones del feminismo de derecha. Una derecha que busca desvincularse de las expresiones que tuvo en la década de 1980.

El feminismo es un espacio social complejo, heterogéneo y muchas veces fragmentado (Masson, 2007; Belucci, 2014), que desde la década del noventa se encuentra en una situación paradojal y particularmente compleja (Ciriza, 1997). Si a fines de los setenta y comienzos de los ochenta estaba claro que nadie de derecha podría formar parte del movimiento feminista, en la década del noventa

se comienzan a producir grietas dentro del feminismo. Al mismo tiempo, feministas y demandas del movimiento empiezan a ser canalizadas en el Estado.

Nos encontramos en un nuevo sitio para pensar la praxis política feminista. La nueva derecha en Argentina abrió paso a la agenda de valores familiares y la consolidación de la «doctrina Chocobar», al mismo tiempo que reafirma nuevas formas de entender la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Entonces, ¿puede el feminismo ser de derecha? La respuesta podría ser afirmativa, si entendemos que estamos ante una nueva derecha que se ha reconfigurado y en la que algunos sectores de mujeres y disidencias se adaptan a discursos de la «igualdad desigualdad» (Souroujon, 2018). De acuerdo con el autor, uno de los puntos en los que reside la relación funcional entre el liberalismo y el conservadurismo que coexisten en Cambiemos es aceptar la igualdad civil pero no el igualitarismo al estilo del estado de bienestar. Como sostiene Souroujon (2018):

> Para el liberalismo grados más altos de igualdad que el civil, ya implican una amenaza para la libertad, en este sentido la igualdad civil es comprendida como el derecho a ser desigual. Para la tradición liberal esta desigualdad está fundada en el mérito, la utopía liberal es una meritocracia en donde el bienestar general es consecuencia de la conjunción de méritos personales. Ahora bien, para que esto funcione el mérito debe ser realmente recompensado, el Estado de Bienestar desincentiva la carrera de los méritos. Los conservadores a su vez temen que el igualitarismo trastoque las jerarquías sociales que deben reinar en una sociedad, el respeto a estas relaciones jerárquicas (padre–hijo, hombre mujer, profesor alumno). En este sentido ambos son contrarios a la expansión de derechos sociales, los liberales porque aumentan el rol del gobierno y limita la libertad individual, los conservadores porque limitan las jerarquías tradicionales. (306–307)

Consideramos que el movimiento feminista debe trascender la mera consigna política de «igualdad» que reproduce el *status quo*, y luchar por una igualdad que cuestione los niveles de pobreza, de precarización laboral y de desprotección social. Una igualdad que necesariamente cuestione los privilegios. En este sentido, en este proceso de reconfiguración de la derecha, es pertinente que el movimiento feminista ponga en tela de juicio los modelos productivos excluyentes y haga énfasis en las demandas de redistribución económicas.

Cuando solo importa el reconocimiento

Tal y como señalamos anteriormente, el movimiento feminista se encuentra lejos de ser un espacio homogéneo. En su seno coexisten diferentes posturas y prácticas políticas que lo ponen en una situación compleja. El modo

en que determinados temas del movimiento feminista han ingresado al espacio público, y el hecho de que el Estado los haya materializado en políticas públicas concretas, nos lleva a preguntarnos sobre la capacidad del feminismo crítico para lograr una sociedad justa, así como también acerca de los límites que encuentra frente a las posturas liberales feministas.

Nancy Fraser, en *Escalas de la justicia* (2008), propone una interpretación tridimensional sobre la justicia que comprende redistribución, reconocimiento y representación. Esta distinción analítica anclada en una interpretación democrática radical, nos sugiere que la justicia requiere acuerdos sociales que permitan la participación de todxs como pares en la vida social y se propone la tarea de desmantelar los obstáculos que lo imposibilitan. Con redistribución la autora refiere a las reivindicaciones socioeconómicas y a un tipo de injusticia expresado en las estructuras económicas que les niegan a las personas los recursos necesarios para interactuar con los demás (Fraser, 2008). El reconocimiento, por su parte, comprende patrones socioculturales e injusticias producidas por jerarquías institucionalizadas del valor cultural (Fraser, 1997). A su vez, las luchas por la distribución y el reconocimiento se van a desarrollar en un escenario suministrado por lo político, tercera dimensión establecida por la autora, que va a especificar el alcance de las otras dos dimensiones: «nos dice no solo quién puede reivindicar redistribución y reconocimiento, sino también cómo han de plantearse esas reivindicaciones» (Fraser, 2008:42).

Según la autora, la redistribución y el reconocimiento constituyen componentes normativos a partir de los cuales se construyen las hegemonías, ya que «cada bloque hegemónico encarna supuestos determinados acerca de lo que es justo y bueno» (Fraser, 2019:25). Comprender el modo en que se expresan redistribución y reconocimiento en la nueva derecha Argentina, nos puede ayudar a echar luz sobre las contradicciones internas de este espacio político, pero también, acerca de los desafíos del feminismo crítico para construir contrahegemonía.

En el actual clima de época, el feminismo se encuentra surfeando una nueva ola que interpela instituciones, desafía imaginarios sociales y asume la responsabilidad histórica de un cambio profundo (Roveto, 2019). Los paros internacionales, las huelgas de mujeres, las marchas «Ni Una Menos», le imprimen al movimiento masividad y fuerza en el espacio público para disputar sentidos y reclamar vidas justas y buenas. Luego de junio de 2015, y con mayor fuerza durante los primeros años del gobierno de Cambiemos, el movimiento feminista argentino comienza a tener masividad en las calles, radicalidad y legitimidad en los debates públicos como nunca antes había tenido en la Argentina (Gago, 2019; Pacheco, 2019). Estamos en una coyuntura donde las luchas sostenidas históricamente acceden al mundo de lo público y son escuchadas y, algunas de ellas, canalizadas estatalmente. No obstante, al mismo tiempo que

las demandas del movimiento hacen eco en el Estado, se reestructuran tanto los partidos de derecha como el capitalismo neoliberal.

La nueva derecha Argentina se ha reconfigurado al comprender con claridad que, para ganar las elecciones no debe ir en contra de algunas políticas consideradas como conquistas populares (Giordano, 2014), entre las cuales encontramos algunas propias del movimiento feminista. Esto complejiza la comprensión de la posición de la derecha con el feminismo y nos incita a pensar críticamente su praxis política. Porque la nueva derecha neoliberal no es un sistema unitario, sino proyectos culturales y políticos complejos y contradictorios «creados dentro de instituciones específicas, con una agenda para moldear la vida cotidiana del capitalismo contemporáneo» (Duggan, 2004). Tal como sostiene Adamovsky (2017), Cambiemos sabía que para ganar las elecciones y legitimarse debía comprender las demandas de 2001,[4] y lidiar con una sociedad que no deseaba volver al neoliberalismo de los noventa, rechazaba el individualismo extremo, el Estado mínimo y la desigualdad. El macrismo expresó así un neoliberalismo nuevo para la Argentina, con lugar para consignas progresistas como la igualdad de género y los derechos de la diversidad sexual.[5]

En este contexto de cambios en el sistema de valores,[6] para usar la expresión de Adamovsky (2017), surgen con fuerza reivindicaciones culturales (Cobo y Kubissa, 2014) y la redistribución puede confundirse con reconocimiento. La nueva derecha «ha sabido tomar nota, identificando que las reivindicaciones de las mujeres y de la diversidad pueden ser útiles para mostrar sus adecuaciones morales y morigerar el impacto de sus políticas antipopulares» (Rovetto, 2019:90). Nos encontramos así frente a un dilema: mientras una parte del movimiento feminista se expresa en contra de las políticas neoliberales, otra «ya no lucha por la igualdad económica o redistribución, sino por el res-

4 Si bien necesita comprender las demandas de 2001 para ganar electoralmente, tal como sostienen Vommaro, Morresi y Belloti, el PRO mantiene una visión tradicional e inclusive conservadora sobre la protesta social. Esto concuerda con el clima de época: la mayoría de sus dirigentes así como una gran parte de la sociedad argentina creen necesario un mayor control de la protesta social. Las clases medias urbanas parecían no recordar «que alguna vez se habían unido al grito de piquetes, cacerolas, la lucha es una sola» (2015:235).

5 Aunque, claro está, en momentos de descuidos o cuando determinadas demandas no le sumaban electoralmente, el presidente Mauricio Macri, y también algunos de sus funcionarios/as, tenían expresiones públicas anti derechos.

6 Para el autor, «el macrismo es perfectamente consciente de que los valores actuales de la sociedad argentina significan un obstáculo a las políticas de largo plazo que busca imponer (...) El macrismo se planta desde una estrategia novedosa, diferente de las derechas del pasado. No ataca frontalmente ese sistema de valores para celebrar en cambio el libre mercado y el individualismo más cínico, como hizo el menemismo. Por el contrario, propone su propia visión de los colectivos» (Adamovsky, 2017:190).

peto a las características que les llevan a considerarse culturalmente unidas» (Honneth, 2006:90).

El contraste se vuelve legible entre, por un lado, las demandas del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales y no binaries[7] que reclaman, ponen voz y hacen pública la implementación de un modelo que vuelve más precaria la vida de lxs menos privilegiadxs y en los paros de mujeres que hizo posible impulsar un feminismo popular y antineoliberal desde abajo (Gago, 2019:18). Y por otro, demandas de reconocimiento legal o cultural, de la diferencia y de especificidad de solo un grupo, que cuestionan las jerarquías de status dentro de la misma clase. Mientras las primeras ponen de manifiesto la precariedad de la vida como condición común pero diferenciada por cuestiones clasistas, sexistas y racistas y expresan reivindicaciones de redistribución económica; las últimas promueven la igualdad de mujeres cis, blancas, de clases medias y altas con sus pares varones, cis, blancos de la misma clase social, sin considerar las diferencias de clase, raza, sexualidad y los problemas de redistribución.

Esta última expresión del feminismo es la que mejor confluye con la nueva derecha, en especial con sus postulados liberales, ya que tanto la teoría como la práctica política feminista liberal, si bien subvierten algunos principios del liberalismo no cuestionan sus fundamentos (Di Tullio Arias, 2017). El compromiso del feminismo neoliberal es, en última instancia, con respecto a elecciones individuales; y la categoría mujer es generalizada a partir de una subordinación compartida. Las mujeres constituyen un grupo de sentido, tal como lo entendía Young (1990): «el sentido de una conexión sentida de experiencia compartida o afinidad» y así, algunas de las demandas del movimiento feminista pueden ser fácilmente articulables al capitalismo neoliberal (Eisenstein, 2017; Power, 2009) y a las necesidades de la derecha en el contexto regional. En especial, aquellas demandas de igualdad de género en la estructura de clases existentes (bellhooks, 2017). En este sentido, «el feminismo liberal le brinda al neoliberalismo la coartada perfecta. Encubre políticas regresivas bajo un aura de emancipación, y hace posible que las fuerzas que apoyan al capital global se presenten así mismas como «progresistas» (Arruza, Bhattacharya y Fraser, 2019:26).

El reconocimiento de algunos derechos sexuales, de las mujeres, de las minorías y de las disidencias así como también algunas posturas a favor de derechos no reproductivos dentro de la nueva derecha Argentina, dan cuenta de sus

7 El denominarlo así es una posición política de las autoras. Aún hay fuertes debates y resistencias para que se siga denominando Encuentro Nacional de Mujeres. En adelante nos referiremos al mismo como el/los Encuentro/s.

posturas liberales. Este liberalismo presupone un planteo estatal, consumista y formas capitalistas de la modernidad (Arruza, Bhattacharya y Fraser, 2019), ya que defienden la ampliación de derechos bajo una apariencia afín al capital para promover el individualismo, el consumismo y desactivar el potencial radical de la participación social y popular[8] (Restrepo, 2003). Estas conquistas responden a largas luchas, sin embargo, el reconocimiento de derechos no lleva linealmente a una vida buena y justa ya que no supone necesariamente reconocimiento simbólico, disfrute de derechos adquiridos, ni igual redistribución.[9] Por el contrario, se evidencia el modo en que algunas políticas de liberación de las mujeres y de la diversidad sexual se promueven en un marco compatible con las «necesidades del capital y del desarrollo de la agenda neoliberal» (Federici, 2013:163).

A su vez, la nueva derecha Argentina tiene claros componentes conservadores en su centro compartiendo el espacio con las posturas liberales mencionadas. Las alianzas con grupos religiosos y conservadores seculares se expresan contra muchos de los compromisos de los feminismos y una lucha en común: contra la «ideología de género». Estos movimientos y estas posturas en expansión que llegaron con fuerza al espacio público luego del debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en el año 2018, se oponen a los valores liberales de la individualidad (Korolczuk y Graff, 2018). Siguiendo el estudio realizado por Vommaro, Morresi y Bellotti (2015), podemos decir que el PRO desde que gobierna la ciudad de Buenos Aires tiene estrechos lazos con las religiones organizadas. Esto se hace visible cuando determinados derechos civiles ingresan al espacio público y demandan una respuesta por parte del gobierno. Como casos paradigmáticos se encuentran los debates sobre la interrupción legal del embarazo a nivel nacional,[10] la reglamentación de abortos en casos no punibles[11] y casamiento de personas del mismo sexo antes de la sanción del

8 Basta ver el modo en que se reconfigura la Marcha del Orgullo en la Ciudad de Buenos Aires. Recomendamos para ello el trabajo de Fabre y Wisky (2019) «La apropiación higienizada del Orgullo: una narrativa progresista de la homonorma».

9 Para ver los alcances y límites del cambio desde una mirada epistémica recomendamos Radi y Perez (2018) De cambios, géneros y paradigmas *en* Barqui, Toloza, Genise *Manual Integrador. Hacia la despatologización de las identidades trans. recursos teóricos y clínicos para profesionales de la salud y la educación.*

10 En el año 2018 se realizaron debates en el Congreso de la Nación Argentina sobre la legalización del aborto. El mismo obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero fue rechazado por la Cámara de Senadores.

11 En el año 2012, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri veta el Protocolo de Abortos no Punibles por presiones de la derecha clerical del partido, aprobada por la Legislatura porteña a partir de la recomendación del fallo de la Corte Suprema

matrimonio igualitario[12] en ciudad de Buenos Aires. Es allí cuando afloran las contradicciones al interior del partido entre posturas liberales y conservadores.

A raíz de ello, el feminismo crítico se encuentra frente a dos tendencias en principio contradictorias pero confluyentes en la expresión de la nueva derecha argentina: por un lado, las posturas feministas y de diversidad sexual liberales compatibles con intereses empresariales, individualistas y consumistas y, por el otro, con expresiones conservadoras que entienden la denominación liberal de género «como constructo corrompido» (Gunnarsson Payne y Tornhill, 2019:48).

Estos modos de entender y poner en práctica el feminismo nos ponen en una encrucijada. El modo en que la resolvamos y el camino que tomemos nos llevará a prestar atención a nuestros adversarios: una nueva derecha argentina que afianzó tanto el feminismo neoliberal como los grupos conservadores antifeministas. Ante esto, en palabras de Arruza, Bhattacharya y Fraser, 2019:

> El tiempo para la neutralidad ha quedado en el pasado, y las feministas debemos tomar posición: ¿seguiremos buscando la igualdad de oportunidades en la dominación mientras el planeta arde? ¿O nos atrevemos a reimaginar la justicia de género con una forma anticapitalista, de modo que apunte más allá de la crisis actual, que nos guíe hacia una nueva sociedad? (15)

Como sostiene bellhooks (2017), no se trata solo de modificar el sistema existente para que las mujeres tengan más derechos, sino de transformarlo completamente. Una parte del movimiento feminista argentino ya comenzó a hacerlo. Es hora de seguir abriendo caminos, de buscar más allá de los límites del liberalismo, construir estrategias teóricas y praxis políticas transformadoras que reemplacen —en palabras de Arruza, Bhattacharya y Fraser (2019)— un feminismo de elite por un feminismo para el 99 %. Ya que, como lo expresa Angela Davis (2019) el feminismo que no es antirracista, anticapitalista y soli-

---

de implementar dicho protocolo. Luego en el año 2013 un fallo judicial declara inconstitucional el fallo de Macri (Vommaro, Morresi y Bellotti, 2015).

12 En el año 2009, saca un video anunciando que como Jefe de Gobierno no iba a apelar el fallo de la jueza porteña que permitía el casamiento de dos personas del mismo sexo sosteniendo que hay que aprender a vivir en libertad sin vulnerar los derechos de los otros porque de lo que se trata es de ser feliz en base a sus propias decisiones. Y da cuenta que dentro del propio partido había gente que le pedía que apele. Sin embargo, algunas fuentes sostenían que «Macri (quien años antes, cuando presidía Boca Juniors, había opinado que la homosexualidad era una enfermedad) se había convencido al estudiar las encuestas (...) casi el 70 % de los porteños favorecía el matrimonio entre personas del mismo sexo» (Vommaro, Morresi y Bellotti, 2015:384).

dario con aquellos que están atrapados en la pobreza por culpa del capitalismo global, es una contradicción de términos.

Más allá de la paradoja. El deseo de cambiarlo todo

Mientras la CGT tomaba el té con el gobierno, nosotrxs tomamos las calles.
No es amor. Es trabajo no pago.

Más allá de la paradoja señalada en el apartado anterior, el primer paro al gobierno de Macri lo hizo el movimiento feminista. La nueva marea llegó justo a tiempo: son las voces feministas quienes irrumpen en un contexto de avance de la nueva derecha en Argentina, anticipando «la posibilidad de una fase de la lucha de clases del todo nueva y sin precedentes: feminista, internacionalista, ambientalista y antirracista» (Arruza, Bhattacharya y Fraser, 2019:21) y reemplazando un feminismo de elite por un feminismo para las mayorías. Estas nuevas expresiones feministas materializadas en praxis políticas concretas tienen el potencial para superar el dilema y las paradojas señaladas en el apartado anterior sobre redistribución y reconocimiento.

Es así que en los paros nacionales de «mujeres» —que emergen como una estrategia del colectivo Ni Una Menos (NUM) para frenar la violencia machista—, las demandas se interseccionalizan y empiezan a cuestionar otras variables que tienen al género como principal clivaje. El paro va a convocar a mujeres, lesbianas, trans y travestis, y se proclama no solo desobediente al patriarcado sino también al capitalismo. Se convoca para denunciar las múltiples exclusiones que sufren las mujeres afro, rurales, indígenas, privadas de libertad, con discapacidad, migrantes, niñas, viejas, lesbianas, trabajadoras remuneradas y no remuneradas, trans y travestis. Excede con creces el «no nos maten» y pone en evidencias las desigualdades sociales, políticas, económicas.

De este modo, tal como lo expresa Di Marco (2019), «las demandas del NUM, que al principio estaban vinculadas a la violencia contra las mujeres, se transformaron y articularon luego con las demandas del pueblo feminista, y ampliaron así sus posibilidades contrahegemónicas» (72). La autora, a partir de una apropiación de la teoría de la hegemonía desarrollada por Ernesto Laclau (2000, 2005) y Chantal Mouffe (1999, 2003), sostiene que el pueblo feminista incluye a todos los feminismos y a todas las identidades feministas englobadas en una identidad política. Se trata de un grupo que comparte una lucha en común, construye discursivamente un adversario y tiene autonomía y capacidad política para elegir sus luchas, estrategias y momentos para llevarlas adelante (Di Marco, 2010, 2011).

Como sostiene Fraser (2018), el capitalismo depende de actividades de reproducción social externas a él, siendo una de las condiciones primordiales que posibilitan su existencia. Estas movilizaciones ponen en el espacio público la íntima relación existente entre el capitalismo y el patriarcado. Como se puede ver en el ya clásico libro de Heidi Hartmann (1975), el desarrollo capitalista da lugar a una jerarquía de trabajadores, y el patriarcado, a su vez, expresa cuales son las personas que van a ocupar determinados puestos.

El antecedente del Paro a nivel internacional fueron las revueltas de las mujeres de las décadas de 1960 y 1970 que rechazaron el trabajo reproductivo como destino natural y develaron la centralidad del trabajo doméstico no remunerado para la economía capitalista (Federici, 2013). Detrás de la consigna «eso que llaman amor, es trabajo no pago» se expresan demandas de reconocimiento del trabajo de reproducción social, sosteniendo que su desvalorización constituye un problema social, económico y político. Esta consigna, que a partir de los paros adquiere un enraizamiento en la práctica política, tiene un fundamento fuertemente teórico. No solo porque se trate de una frase de una reconocida intelectual marxista feminista,[13] sino fundamentalmente porque constituye una fuente de indagación —teórica y empírica— de los estudios feministas.

Tanto las críticas feministas al concepto de trabajo clásico,[14] como los estudios empíricos que han echado luz sobre la distribución desigual de las tareas, permitieron visibilizar y analizar el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (Logiodice y Enríquez, 2019) y su articulación con el trabajo remunerado. En Argentina, las encuestas del uso del tiempo han resultado de suma importancia en este sentido,[15] ya que han demostrado estadísticamente las diferencias de género y de clase en las actividades necesarias para la reproducción social y cotidiana de las personas.[16] Aunque con claros límites (Radi,

13 Silvia Federici.

14 Ligado a las relaciones asalariadas y a la producción material (Arango Gaviria, 2011).

15 Primero realizada en la ciudad de Buenos Aires en el año 2005 (Esquivel, 2010), luego en Rosario en el año 2010 (Ganem, Giustiniani, & Peinado, 2012) y finalmente a nivel nacional por el INDEC en el año 2013. Estas encuestas tienen claros problemas ya que realiza un análisis binario y cisexista.

16 Según los datos del INDEC (2013) las mujeres destinan más tiempo a las tareas de trabajo doméstico no remunerado cuanto menor es el nivel de ingresos del hogar en el que viven. Y, cuanto mayor es el nivel de ingreso del hogar, menor es el tiempo que le destinan a dichas tareas: mientras las mujeres que viven en hogares más pobres dedican 8,1 horas diarias al trabajo no remunerado, las que viven en hogares que pertenecen al 20 % más rico de la población dedican 3 horas diarias. Entre los varones las diferencias son imperceptibles: ni la situación ocupacional, ni el nivel de ingreso, ni el nivel educativo, ni la edad, producen modificación en la cantidad de tiempo que los varones destinan al trabajo no remunerado. La única razón por la cual incrementan su dedicación es cuando en los hogares hay menores de 6 años, pero siempre en proporciones menores que las mujeres (Rodríguez Enríquez, 2015).

2019),[17] puede residir allí parte del potencial contrahegemónico del movimiento feminista, ya que, tal como sostiene Federici (2018):

> El cambio debe empezar por una recuperación del trabajo de reproducción, de las actividades de reproducción, de su revalorización, desde la óptica de la construcción de una sociedad cuyo fin, en palabras de Marx, sea la reproducción de la vida, la felicidad de la sociedad misma, y no la explotación del trabajo. (22–23)

En el paro de mujeres hay una apropiación y rediseño de las estrategias de lucha del movimiento obrero, poniendo sobre la mesa no solo la precariedad del trabajo remunerado sino también el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como central para la reproducción social en el marco del capitalismo neoliberal. Así, una vez más, se cuestionan desde el feminismo los límites entre lo público y lo privado, se reclama que las relaciones de poder del ámbito «privado» fueran visibilizadas, es decir, politizadas; «que se sometan a la discusión pública y al control consciente de todos aquellos aspectos de la vida social, los cuales, bajo la sacrosanta etiqueta de «privados», epistemológicamente eran ciegos y, por la misma razón ética y políticamente inmunes» (Amorós, 2000:12).

El feminismo ha generado, en términos de Fraser (1999), un contra discurso para formular interpretaciones propias de sus identidades, intereses y necesidades. Crearon una esfera pública en la cual hicieron circular nuevos términos como trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y economía del cuidado; mostraron que el trabajo de reproducción es el sustento del sistema capitalista y pusieron en el centro la necesidad de promover vidas buenas en el marco de una sociedad justa. Así, a partir de los encuentros, de los paros nacionales e internacionales, y de elaboraciones académicas se logró que sea tratado como tema de interés y de preocupación común, que estas demandas sean atendidas como propias del espacio público y un tema legítimo de discurso público.

A su vez, podemos observar que lejos de ser un feminismo limitado a «cuestiones de las mujeres», las expresiones del movimiento contemplan al pueblo feminista en el sentido que se le otorgó anteriormente. No es menor que en el 33 encuentro en la ciudad de Trelew, se instale como necesidad que se mencione «plurinacional» al mismo. La idea de plurinacionalidad implica la

17 El principal límite se encuentra en que este tipo de encuestas —al igual que algunos trabajos teóricos— presentan datos desagregados por sexo de manera binaria. Y dejan otras identidades por fuera del análisis. Para ampliar este análisis recomendamos el trabajo de Blas Radi (2019) «Notas sobre estadística con "perspectiva de género": Recomendaciones para la investigación trans inclusiva en epidemiología» (en prensa).

posibilidad de reconocer y recuperar memorias y saberes ancestrales, además de las luchas de los pueblos originarios frente al genocidio colonial. Al año siguiente, en La Plata, se afianza la campaña #somosplurinacional[18] en la que se plantea que los principios transversales de los encuentros tienen que ser: el antirracismo, el antipatriarcado, la democracia, la independencia de los poderes de turno, la autonomía, la inclusión y el anticapitalismo.

Nos encontramos frente al desafío de consolidar un feminismo holístico, amplio e integrador, para usar las palabras de Angela Davis (2019), como estrategia para superar las múltiples opresiones y explotaciones (no solo la de género). Sin sentido de pertenencia a un colectivo con el cual compartir ideales y proyectos, no hay posibilidad de acción colectiva contrahegemónica. Los debates al interior de los encuentros así como también los paros internacionales expresan años de construcción de una identidad basada en una articulación de demandas e identidades antipatriarcales y antineoliberales con posibilidades contrahegemónicas (Di Marco, 2019).

Parte del movimiento feminista argentino expresa con creces la potencialidad de las acciones colectivas con pretensiones de construir «otro mundo». Refleja la posibilidad de emprender «la enorme tarea de «cambiar el mundo», para que en él quepan todos los mundos» (Thwaites Rey, 2004:72). Como sostiene Gago (2019), son «los feminismos populares, indígenas, comunitarios, suburbanos, villeros negros, que, desde América Latina desliberalizan las políticas de reconocimiento, los premios del cupo y los anzuelos identitarios, politizan la precariedad de las existencias como una secuencia inescindible de despojos y explotaciones» (24). Se entiende en estas expresiones que, para lograr una sociedad más justa, no basta con el reconocimiento si ello no va acompañado de redistribución. A su vez, se comprendió que el marco político de las luchas no solo debe tener alcances nacionales sino también internacionales porque en la fase actual el capitalismo, el racismo y el patriarcado se encuentran globalizados.

Reflexiones finales

A lo largo del capítulo tuvimos la pretensión de compartir un conjunto de reflexiones acerca de cómo en el marco de la consolidación de nuevas derechas en el país, hay una restructuración paradojal del movimiento feminista. En este proceso, somos testigos de la emergencia de una expresión del feminismo neoliberal. Seguidamente analizamos este fenómeno, mediante el concepto

18 https://somosplurinacional.wordpress.com/

tridimensional de justicia (entendiéndose como redistribución, reconocimiento y representación) de Nancy Fraser. Principalmente debatimos con el problema y las limitaciones que implica el «reconocimiento» sin «redistribución» en la praxis feminista.

La nueva derecha argentina en el gobierno adoptó algunas banderas feministas dentro de un marco compatible con las necesidades de su agenda neoliberal. Entendiendo los valores actuales de la sociedad argentina, plantea una estrategia diferente a las derechas del pasado para celebrar el mercado libre, el individualismo y el consumismo. Ello lejos de suponer una armonía de la alianza, expresa con claridad las contradicciones entre liberales y conservadores.

Esto supone un desafío al feminismo crítico, ya que debe reconocer entre un feminismo liberal y sus agendas de reconocimiento y grupos conservadores que se encuentran unidos por una lucha común: «contra la ideología de género». Si bien las luchas por el reconocimiento son importantes, por sí solas no alcanzan si no van acompañadas de políticas de redistribución.

Luego de realizar este análisis, recuperamos la idea de que nos parece sumamente relevante que en la lucha anticapitalista tenga lugar central la lucha feminista. Frente a un nuevo contexto, el feminismo debe potenciar y aportar a la transformación estructural de la sociedad. Por ello es necesario diseñar y aplicar políticas de reconocimiento que no tengan carácter esencialista. En un contexto de creciente desigualdad las demandas de redistribución deben tener un lugar central en la lucha feminista. Por ello como señala Fraser se debe reemplazar un feminismo de elite por un feminismo para el 99 %.

Referencias bibliográficas

Adamovsky, Ezequiel (2017). *El cambio y la impostura. La derrota del kirchnerismo, Macri y la ilusión PRO.* Planeta.

Amorós, Celia (2000). *Feminismo y filosofía.* Síntesis.

Arango Gaviria, Luz Gabriela (2011). El trabajo de cuidado: ¿servidumbre, profesión o ingeniería emocional? En: Arango Gaviria, L. G y Moliner, P. (comps.), *El trabajo y la ética del cuidado.* La Carreta Social.

Belloti, Alejandro, Morressi, Sergio, y Vommaro, Gabriel (2015). *Mundo Pro: Anatomía de un partido nacido para ganar.* Planeta.

Bellucci, Mabel (2014). *Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo.* Capital Intelectual.

Berdondini, Mariana (2019). Derechas y derechos en la era Macri. La irrupción del aborto en la agenda legislativa de Cambiemos. En Iglesias, Esteban y Luca, Juan Bautista (comp.) *La Argentina de Cambiemos.* UNR Editora.

Canelo, Paula (2019). *¿Cambiamos?* Siglo XXI.

Ciriza, Alejandra (1997). Desafíos y perspectivas. Qué feminismo hoy. *Anuario de Filosofía Argentina y Americana 14,* 153–168.

Cobo Rosa y Kubissa, Luisa Posada (2014). El regreso de la teoría crítica: las mujeres ante la globalización. En Levín, S. (coord.) *Injusticias de género en un mundo globalizado: conversaciones con la teoría de Nancy Fraser* (pp. 31–47). Homo Sapiens Ediciones.

Davis, Angela (2019). A Liberdade É umaLuta Constante. *Seminário Internacional Democracia em Colapso?* Organizado por editora Boitempo e pelo Sesc São Paulo.

Di Marco, Graciela (2010). Los movimientos de mujeres en la Argentina y la emergencia del pueblo feminista. *La aljaba 14,* 51–67.

——— (2011). *El pueblo feminista: Movimientos sociales y lucha de las mujeres en torno a la ciudadanía.* Biblos.

——— (2019). Nuevas identidades y construcciones políticas de los feminismos. En Di Marco, Graciela, Fiol, Ana, Shwarz, Patricia (2019). *Feminismos y populismos del siglo XXI. Frente al patriarcado y al orden liberal.* Teseo.

Di Tullio Arias, Anabella (2017). *Teoría Feminista y Liberalismo. El devenir de una relación problemática.* Uma Editorial.

Duggan, Lisa (2004). *The Twilight of Equality?: Neoliberalism, Cultural Politics, and the Attack on Democracy.* Beacon Press.

Eisenstein, Hester (2017). Hegemonic Feminism, Neoliberalism and Womenomics: Empowerment instead of Liberation? *New Formations 91,* 35–49.

Fabre J. F. y Wisky, L. (2019). *La apropiación higienizada del Orgullo: una narrativa progresista de la homonorma*. Artículo presentado en las *XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género.* Mar del Plata.

Federici, Silvia (2013). *Revolución en punto cero: trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas.* Traficantes de sueños.

Federici, Silvia, Guervós, Carlos Fernández, Ponz, Paula Martin (2018). *El patriarcado del salario: Críticas feministas al marxismo.* Traficante de Sueños.

Fraser, Nancy (1997). *Iustitia Interrupta: Reflexiones críticas desde la posición postsocialista.* Universidad de los Andes: Siglo del Hombre Editores.

——— (1999). Repensando la esfera pública: una contribución a la crítica de la democracia actualmente existente. *Ecuador Debate 46,* 139–174.

——— (2008). *Escalas de la justicia.* Herder.

——— (2018). Las contradicciones del capital y los cuidados, *Nueva revista socialista, 5,* 49–69.

——— (2019). *¡Contrahegemonía ya!* Siglo Veintiuno Editores.

Fraser, Nancy, Arruzza, C y Bhattacharya, T (2019). *Feminismo para el 99 %. Un manifiesto.* Rara Avis Editorial.

Gago, Verónica (2019). *La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo.* Tinta Limón Ediciones.

Ganem, Javier, Giustiniani, Patricia, Peinado, Guillermo (2012). *Los usos del tiempo en la ciudad de Rosario. Un análisis económico y social.* UNR.

Giordano, Verónica (2014). ¿Qué hay de nuevo en las «nuevas derechas»? *NUSO, 254.* Recuperado de: https://nuso.org/articulo/que–hay–de–nuevo–en–las–nuevas–derechas/

Gunnarsson Payne, J. y Tornhill, S. (2019). ¿Atrapadxs entre el neoliberalismo y el populismo autoritario? En Di Marco, G., Fiole, A. y Schwrz, P. (coomp.) *Feminismos y populismos del siglo XXI. Frente al patriarcado y al orden neoliberal.* Teseo.

Hartman, Heidi (1975). Un matrimonio mal avenido: hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo*. Zona Abierta 24,* 85–114.

Honneth, Axel y Fraser, Nancy (2006). *¿Redistribución o reconocimiento?: un debate político–filosófico.* Gilberto Pérez del Blanco.

Hooks, Bell (2017). *El feminismo es para todo el mundo.* Traficantes de Sueños.

Korolczuk, Elzbieta y Graff, Agnieszka (2018) Gender as «Ebola from Brussels»: The Anticolonial Frame and the Rise of Illiberal populism. *Sings: Journal Women in Culture and Society 43* (3), 797–821.

Laclau, Ernesto (2000). *Nuevas reflexiones sobre la realidad de nuestro tiempo.* Nueva Visión.

——— (2005). *La razón populista.* Fondo de Cultura Económica.

Logiódice, Luisina y Enríquez, Corina (2019). Articular trabajo y cuidado en cooperativas de trabajo en Argentina: desafíos normativos desde la perspectiva de género. *Sociedade e Cultura, Goiânia 22 (*1), 26–47.

Masson, Laura (2007). *Feministas en todas partes: una etnografía de espacios y narrativas feministas en Argentina.* Prometeo Libros.

Mouffe, Chantal (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical.* Paidós.

——— (2003). *La paradoja democrática.* Gedisa.

Natanson, José (2018). Mauricio Macri en su ratonera. El fin de la utopía gradualista. *NUSO, 276.* Recuperado de: https://www.nuso.org/articulo/mauricio–macri–en–su–ratonera/

——— (2018). *¿Por qué? La rápida agonía de la Argentina kirchnerista y la brutal eficacia de una nueva derecha.* Siglo XXI.

Pacheco, Mariano (2019). *Desde abajo y a la izquierda. Movimientos sociales, autonomía y militancias populares.* Cuarenta Ríos.

Power, Nina (2009). *One Dimensional Woman.* Hants: O Books.

Radi, Blas (2019). *Notas sobre la estadística con «perspectiva de género»: recomendaciones para la investigación trans inclusiva en epidemiología.* (en prensa)

Radi, Blas y Perez, Moira (2018). De cambios, géneros y paradigmas *en* Barqui, Toloza, Genise (coomp.) *Manual Integrador. Hacia la despatologización de las identidades trans. recursos teóricos y clínicos para profesionales de la salud y la educación.* Buenos Aires.

Restrepo, Darío (2003). Las prácticas participativas: entre la socialización y la privatización de las políticas públicas. En *Revista del CLAD, Reforma y Democracia 25.*

Rodriguez Enríquez, Corina (2015). Organización social del cuidado y desigualdad: déficit de políticas públicas de cuidado en Argentina. *Perspectivas de políticas públicas,* 103–134.

Rovetto, Florencia (2019). Cuando sube la marea feminista: resistencias y disputas de sentido en tiempos macristas. En Iglesias E. y Lucca J. (Org.) *La Argentina de Cambiemos.* UNR Editora.

Souroujon, Gastón (2018). ¿Qué hay de nuevo con la nueva derecha? En Alcántara, Sánchez López y García Montero (Comp.) *Memoria del 56º Congreso Internacional de Americanistas* (pp. 300–309). Salamanca: Usal.

Thwaites Rey, Mabel (2004). *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción.* Buenos Aires: Prometeo Libros.

Valcárcel, Amelia, y de Quirós, Berbaldo (1997). *La política de las mujeres.* Universitat de Valencia.

Vommaro, Gabriel (2014). «Meterse en política: la construcción de pro y la renovación de la centroderecha argentina». *En NUSO, 254.* Recuperado de: https://nuso.org/articulo/meter

——— (2017). *La larga marcha de Cambiemos: la construcción silenciosa de un proyecto de poder.* Siglo Veintiuno Editores.

——— (2017). La centroderecha y el «cambio cultural» argentino. *En NUSO, 270.* Recuperado de: https://www.nuso.org/articulo/la–centroderecha–y–el–cambio–cultural–argentino/

Young Iris Marion (1990). *Justice and the Politics of Difference.* Princeton University Press.

Sobre las autoras y los autores

Mariana Berdondini • Politóloga y Doctora en Ciencia Política, ha sido becaria doctoral y posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET Argentina). Se desempeña como docente investigadora (Universidad Nacional de Rosario). Es autora de libros y artículos de teoría política contemporánea, análisis político e historia reciente, entre ellos «Lo representable. Pujas públicas, actores, arena parlamentaria y leyes candentes en la política argentina».

Andrea Bolcatto • Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario). Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora (Universidad Nacional del Litoral). Profesora Asociada Regular de Teoría Política II y Sociología (UNL). Profesora Adjunta Regular de Problemática Política (Universidad Nacional de Entre Ríos). Ha publicado artículos de libros y revistas especializadas en torno a la teoría política, democracia, derechos y cine. Dirige el Proyecto de Investigación CAI+D 2016 «Problemas y desafíos contemporáneos para la Teoría Política». Se desempeña como directora del Departamento de Ciencia Política (FHUC–UNL).

Esteban Iglesias • Magister en Ciencia Política (FLACSO). Doctor en Ciencia Política e Investigador Adjunto de Conicet. Se desempeña como profesor Titular de Sociología Política y profesor Asociado de Teoría Política III (Universidad Nacional de Rosario). Es Director del Centro de Estudios Comparados.

Esteban Kaipl • Doctor en Filosofía (Universidad de la Sorbona / Paris IV, Universidad de Luxemburgo). Master en Filosofía y Racionalidades (Universidad de Luxemburgo, Universidad Paul Verlaine Metz y Universidad de Nancy 2, Francia). Profesor Adjunto de Teoría III y Sociología Política (Universidad Nacional de Rosario). Profesor auxiliar en Teoría I y Teoría III (Universidad Nacional del Litoral). Ha dirigido y participado de proyectos de investigación (UNL).

Bruno Konder Comparato • Doctor en Ciencia Política (Universidad de São Paulo). Profesor asociado (Universidad Federal de São Paulo). Es coordinador del curso de posgrado en ciencias sociales (Unifesp). Es secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Derechos Humanos Enseñanza y Pesquisa (ANDHEP). Sus intereses de investigación giran en torno a la temática de los

derechos humanos y de los mecanismos de control democráticos. Es miembro fundador del Centro de Antropología y Arqueología Forense de la Universidad Federal de São Paulo (CAAF). Es editor jefe del periódico Lua Nova, Revista de Cultura e Política.

Cecilia Lesgart • Doctora en Ciencia Política (FLACSO), Sede Académica de México. Posdoctorado CEA (Universidad Nacional de Córdoba). Investigadora Independiente CONICET–Argentina. Profesora Titular regular de Teoría Política III (Universidad Nacional de Rosario).

Sacha Lione • Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional del Litoral). Becaria doctoral del CONICET con lugar de trabajo en el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral (IHUCSO, UNL/CONICET). Doctoranda en Estudios Sociales (UNL).

Juan Bautista Lucca • Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO). Máster en Estudios Latinoamericanos (Universidad de Salamanca). Diploma Superior en Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño (CLACSO). Licenciado en Ciencia Política (Universidad Nacional de Rosario). Docente e Investigador en Política Latinoamericana Comparada en el Centro de Estudios Comparados de la Universidad Nacional de Rosario y el CONICET.

Marina Martínez • Licenciada en Ciencia Política (Universidad Nacional del Litoral). Es Becaria doctoral en el marco del programa de Becas de posgrado para docentes (UNL); su lugar de trabajo radica en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

Sergio Morresi • Doctor en Ciencia Política (Universidade de São Paulo). Profesor (Universidad Nacional del Litoral). Investigador del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas.

Alejandro Pelfini • Doctor en Sociología (Universität Freiburg). Licenciado en Sociología (Universidad del Salvador). Es director del Módulo Latinoamericano del Global Studies Programme (FLACSO–Argentina). Director de Posgrados (Universidad del Salvador, Buenos Aires). Fue académico del Departamento de Sociología (Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile), del que fue su director. Sus temas de investigación son el aprendizaje colectivo, las relaciones sociedad/medio ambiente y los estudios sobre élites y globalización.

Gastón Souroujon • Doctor en Ciencia Política, Magister en Ciencia Política y Sociología, Licenciado en Ciencia Política. Investigador Adjunto del Conicet. Docente de Teoría Política III de la carrera de Ciencia Política y RR.II. (Universidad Nacional de Rosario). Docente de Teoría Política I de la carrera de Ciencia Política (Universidad Nacional del Litoral).

Christiane Vieira Laidler • Graduada em História (Universidade Federal Fluminense), mestre em História (Universidade Federal Fluminense) e doutora em Ciência Política (Ciência Política e Sociologia, Sociedade Brasileira de Instrução, SBI/IUPERJ). É Professora Associada da disciplina de HistóriaContemporânea do Departamento de Ciências Humanas (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

